

Gustavo Gorriti

Sendero

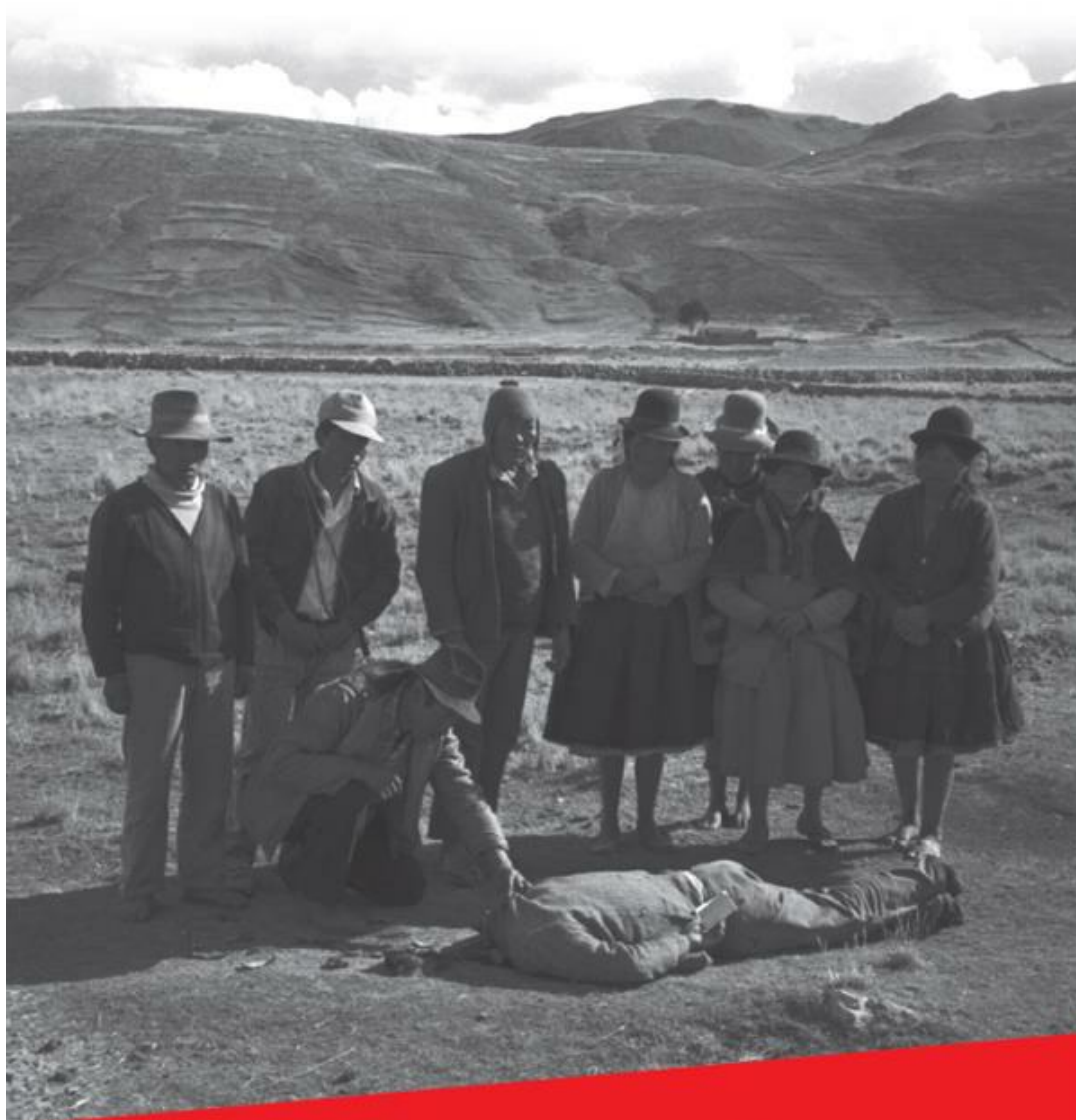


MEMORIA PERÚ

 Planeta

Gustavo Gorriti

Sendero



MEMORIA PERÚ

 Planeta

Gustavo Gorriti Ellenbogen

Sendero

Historia de la guerra milenaria en el Perú



Este libro no podrá ser reproducido, total ni parcialmente, sin el
previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.

Sendero

Historia de la guerra milenaria en el Perú

© Gustavo Gorriti Ellenbogen, 1990

© 2017, Editorial Planeta Perú S.A.

Av. Santa Cruz 244, San Isidro, Lima, Perú

Diseño de cubierta:

Corrección:

Diseño de interiores: B-MAD

Primera edición: abril del 2017

Tiraje: 0000 ejemplares

ISBN: 978-6-1231-9406-2

Registro de Proyecto Editorial: 0000000000000000

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 00000000000000

Impreso en:

dirección:

Lima, Perú.

A la memoria de Edith Gorriti Ellenbogen
(19.12.1944 - 19.09.1964)

Índice

Reconocimientos

Prefacio

EL ARRESTO

I. RETORNO A LA DEMOCRACIA

II. CHUSCHI

III. MAHOMA, MAO, MACBETH

La “Escuela Militar”

IV. TRANSFERENCIA Y EXPECTATIVAS

V. LOS ARCHIVOS DESAPARECIDOS

VI. LOS PERROS DE LA GUERRA

Cosecha de otoño

Hoxha y Guzmán

El caso Balaguer

Primera sangre

VII. GUERRILLAS

“Abrir zonas guerrilleras”

VIII. LA CUOTA

La cuota

IX. “CAPTURAR ARMAS Y MEDIOS”

Conspiraciones

X. “NUEVA DEMOCRACIA”

La Organización Internacional

XI. TAMBO

XII. LA EMERGENCIA

El Plan Vivanco

El “Pliego de instrucciones”

Submarinos en las montañas

La salida de De la Jara

XIII. ILUSIONES

Rasuhuilca

XIV. CIUDAD DOMINADA.

Golpe de mano en Ayacucho

XV. “¡DESARROLLEMOS LA GUERRA DE GUERRILLAS!”

La montaña y la Girona

“Para hacer la guerra hay que ser filósofos”

¡Batir!

XVI. LA OFERTA DE ASILO A GUZMÁN

Las enfermedades de Guzmán

XVII. COLOQUIO DE CIEGOS.

La guerra de la inteligencia

XVIII. LA CAÍDA DE VILCASHUAMÁN

El 22 de agosto cayó Vilcashuamán

XIX. EL PENSAMIENTO MILITAR DEL PARTIDO

Desarrollo de la guerra de guerrillas

XX. EL CERCO DE AYACUCHO

El Frontón

La plaza sitiada

“¡Les regalo mi puesto a Rommel y a Montgomery!”

Reconocimientos

Pese a ser siempre un proceso solitario, la obra escrita es raramente posible sin un conjunto múltiple de aportes que respaldan y complementan el del escritor. Quiero expresar aquí mi reconocimiento y agradecimiento a aquellas personas e instituciones que contribuyeron a lograr este libro.

El largo período de investigación y redacción fue posible gracias al apoyo generoso de una beca de investigación de la Fundación Harry Frank Guggenheim. A esta fundación, y en especial a su responsable de programas, Karen Colvard, cuyo admirable trabajo es la búsqueda de proyectos de investigación académica merecedores de apoyo, mi gratitud permanente.

En Boston, el escritor Douglas Bauer leyó con detenimiento algunas versiones tempranas que fueron luego parcialmente incorporadas a este libro. Sus observaciones me fueron de gran ayuda. Y, en etapa aún anterior, Felipe Mac Gregor, S.J., me instó a un estudio más profundo del tema, a través del examen de la ya entonces (1982-83) considerable masa documentaria. Quiero expresar mi reconocimiento a ese estímulo temprano, que fue a la postre decisivo para acometer la empresa del libro.

La mayor parte de la redacción de este libro fue hecha durante una prolongada permanencia en la Universidad de Harvard (Cambridge, Estados Unidos), como *fellow* del Centro de Asuntos Internacionales primero, y asociado del Comité De Estudios Latinoamericanos e Ibéricos después. El personal docente y administrativo de ambos programas me brindó aliento y comprensión invalorable durante la parte más difícil de este trabajo. Sin olvidar el agradecimiento que otros merecen, quiero expresarlo en forma particular a Leslie H. Brown, director del Fellows' Program del Centro de Asuntos Internacionales, y a John Womack Jr., director del Comité de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos. También a Samuel P. Huntington, entonces director del Centro de Asuntos Internacionales, quien instó y estimuló el progreso de este trabajo.

Diversas partes de este manuscrito fueron leídas y comentadas por las siguientes personas: David Scott Palmer, de la Universidad de Boston; Peter Johnson, de la Universidad de Princeton; Cynthia McClintock, de la Universidad George Washington; Jorge Domínguez, John Womack Jr., Jim Brennan, Ronald Berg y Robert Leiken, de la Universidad de Harvard; Susan Kaufman Purcell, del Council on Foreign Relations, New York. Los escritores Carlos Fuentes, Roberto Toscano y José Rodríguez Elizondo, compañero este último de años de trabajo en *Caretas*, y ahora con las Naciones Unidas en España, soportaron estoicamente la inflicción del manuscrito e hicieron observaciones tan perspicaces como valiosas. Lo mismo debo decir de las que hizo

Gabriel Ortiz de Zevallos. En tramos más avanzados, y sobre aspectos más puntuales de la redacción, los comentarios de Héctor López Martínez y Rafael Merino Bartet fueron de gran utilidad.

Este libro, y la visión de la vocación periodística que lo sustenta, deben mucho a la enseñanza y el ejemplo de Howard Simons. Howard, el legendario jefe de redacción del *Washington Post* durante la época de Nixon y Watergate —a cuya investigación él contribuyera en forma decisiva—, pasó luego a ser director del prestigioso programa Nieman de periodismo, en la Universidad de Harvard. Ahí consagró gran parte de su actividad —esa combinación de bravura, generosidad, ingenio punzante y despierta inteligencia, que lo identificaron a lo largo de su vida— a defender periodistas perseguidos por hacer lo que en las democracias consolidadas no es ya más un derecho sino una necesidad: la expresión libre, la crítica, la investigación. Merced a capacidad de movilizar a decenas de editores, jefes de redacción, directores y políticos, Howard logró salvar la libertad, y en más de un caso la vida, de periodistas de, entre otros lados, Sudáfrica, Panamá, China, Guatemala. En 1989, luego de habersele diagnosticado un mal incurable, Howard decidió no someterse a ninguna terapia, con el típico razonamiento que el prolongar su vida sería acrecentar el sufrimiento de los suyos y acortar su propia dignidad. A la memoria del periodista magistral, del caro amigo, mi gratitud, mi recuerdo.

Si bien tengo la impresión que el director de *Caretas*, Enrique Zileri, no estuvo enteramente de acuerdo con que yo dejara el periodismo semanal en la revista para dedicarme a este libro, le debo un reconocimiento especial. Fue en las semanas intensas, en los cierres insomnes de *Caretas* donde aprendí lo que sé sobre periodismo; y fue en *Caretas* donde empecé a cubrir el tema de este libro. De esos años de trabajo guardo memorias de admiración respecto a la calidad de Zileri como periodista, que se expresaba en la energía bohemia de los cierres, la intuición y el golpe de vista para la foto justa, el enfoque irreverente y preciso, los alaridos creativos y las excentricidades que hicieron de *Caretas* muchas cosas, pero nunca un lugar aburrido. Y de otro lado, para quienes hemos trabajado en el relativamente nuevo territorio del periodismo de investigación en el Perú, la exigencia de un editor como Zileri, respecto a la veracidad del dato, la imaginación para considerar nuevos enfoques, nuevas aproximaciones, fue sin duda invaluable.

He realizado decenas de entrevistas a otras tantas personas para este libro, en algunos casos en forma abierta, en forma reservada en otros. En ellas adquirí con frecuencia no solo datos sino una visión enriquecedora que añadió perspectiva y orientó mi trabajo. Quiero expresar mi reconocimiento a todos aquellos que me dieron su tiempo y su confianza, que compartieron sus memorias, sus apuntes y en algunos casos sus documentos, esperando que se escribiera una reseña real de los hechos de esta guerra.

Debo expresar un agradecimiento especial a aquellas personas cuya militancia, antigua o presente, en la izquierda ayacuchana les permitió experimentar, con cercanía e intensidad, las etapas tempranas del proceso; y que compartieron con generosidad y paciencia sus recuerdos. Mi agradecimiento, en especial, a Carlos Tapia, Juan Granda, Germán Medina, Manuel Granados, junto con otros, a quienes, por residir actualmente en Ayacucho, es prudente no nombrar.

Debo terminar con el necesario agregado que, pese a esta aún incompleta relación de deudas intelectuales, la responsabilidad por eventuales errores o limitaciones en este libro es solo mía.

Prefacio

Este libro fue escrito cuando la guerra interna iniciada por Sendero Luminoso había pasado de la marginalidad y las sombras a tornarse en el principal conflicto de nuestra historia. Pero el crecimiento no atenuó su oscuridad. Miles de peruanos morían y daban muerte sin saber qué había traído su desgracia.

Empecé a reportar y narrar desde 1981, en la revista *Caretas*, los hechos de una violencia que, salvo períodos cortos, no paró de crecer. En el proceso, traté de reunir los documentos y testimonios que me permitieran expresar en el relato el sentido de eventos que parecían no tenerlo.

En 1987 dejé *Caretas* para dedicarme por completo a terminar de investigar y escribir este libro. Los meses dedicados a buscar los documentos esquivos, los datos renuentes, los testimonios silenciados fueron absorbentes. Sin la presión de la revelación inmediata en el cierre semanal, pude unir grandes retazos y otros pequeños, vincular documentos y memorias y, sobre todo, descubrir hechos nuevos y conectar otros entre sí.

Luego, a fines de 1987, empecé a escribir el libro en la Universidad de Harvard. Alejarme de la entonces violenta y caótica cotidianeidad peruana fue muy positivo para la concentración y productividad. Tan importante como ello fue, además, poder estudiar las experiencias comparadas de insurrecciones guerrilleras, de contrainsurgencias y de los efectos de las diferentes estrategias y doctrinas en sus resultados.

Aunque el plan original de la obra fue diferente, el libro, de alguna manera, se hizo a sí mismo. Armé un esquema muy detallado, pero escribí los capítulos conforme la exigencia de la memoria, la fuerza del recuerdo. Después de un tiempo, solo me quedó ordenar los capítulos, levantar la vista y ver este libro virtualmente completo.

En el esquema original, este volumen debió ser el segundo de tres tomos. El primero iba a seguir la historia a partir de los orígenes, desde la fundación del Partido Comunista hasta el aprestamiento de Sendero Luminoso para la guerra, muchas escisiones después. Entrelazada iba la biografía de Abimael Guzmán, el actor central de esta tragedia. El tercer volumen iba a narrar los hechos de la guerra desde el ingreso de las Fuerzas Armadas, en 1983, hasta fines de la década. Luego de terminar *Sendero*, pensé en convertir el primero en el último tomo, y ese fue el plan de publicación que figura en el prefacio original.

Publicado el libro, en julio de 1990, me puse a trabajar en los otros dos tomos de la obra a la par de mi labor como periodista. En eso estaba cuando se produjo el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Esa noche fui capturado y brevemente desaparecido por un escuadrón de

inteligencia que actuó bajo las órdenes del presidente golpista Alberto Fujimori y su oscuro asesor Vladimiro Montesinos. Sabiendo lo que iba a suceder, pude poner a salvo los archivos sobre los que basaba mi investigación, en las pocas horas que mediaron entre el golpe y mi captura. El episodio resultó en la separación forzada con el material de consulta y en el cambio abrupto de mis condiciones de trabajo.

Logré sacar los archivos al extranjero y reunirme con ellos en Estados Unidos, en un ambiente académico seguro, varios meses después. Pero al poco tiempo Abimael Guzmán fue capturado mediante la magistral acción del GEIN y el curso de la guerra cambió radicalmente de un momento a otro. Sendero implosionó y el país se vio súbitamente liberado, sin saber cómo, de una guerra que solo sintió como la pesadilla que atenaza la garganta, pero que nunca comprendió. Así como la gente trata de olvidar los sueños desgarradores y torturantes, lo mismo hizo el país con Sendero: enterrarlo bajo una activa amnesia y mantener a raya las emanaciones residuales de la memoria bajo el asustado exorcismo de los epítetos.

Lo importante para mi proyecto de terminar los libros pendientes, fue que junto con la captura de Guzmán y de casi todo el liderazgo de Sendero Luminoso, cayeron también los numerosos y detallados archivos centrales de la organización. Cualquier investigación sería demandaba ahora estudiar e integrar esa masa documentaria de importancia decisiva. Junto con eso, los testimonios de los dirigentes senderistas eran también fundamentales para la historia de la guerra.

Pero no hubo posibilidad alguna de realizar esa parte pendiente de la investigación mientras Fujimori y Montesinos permanecieron en el poder. Luego de su caída, tampoco pude dedicarle el tiempo preferente, pues el trabajo periodístico no me lo permitió, pero intenté varias veces lograr los permisos necesarios para entrevistar a la fuente central: Abimael Guzmán. Para mi sorpresa y decepción, ninguna de las personas con la autoridad suficiente como para autorizar o gestionar esa entrevista lo permitió. Fue un desfile de excusas cobardes y formalismos burocráticos por parte de gobernantes y funcionarios de cola floja que hasta el día de hoy han impedido continuar y quizá terminar esta hoy tan larga investigación. Continuaré intentándolo, espero que con más eficacia que en el pasado.

Entonces, este libro quedó como un solo volumen. Fue su destino y quizá está bien que haya sido así. Es un libro terminado en su relato detallado y profundo de las etapas iniciales de un movimiento revolucionario que ataca a una democracia incipiente. La narración de un evento único tiene, sin embargo, muchos elementos de relevancia y de resonancia con situaciones parecidas en otros tiempos y lugares.

De otro lado, como sucede con los entierros imperfectos y las muertes a medias, el tema ha vuelto a moverse inquieto entre nosotros. Hoy, como antes, los exorcismos apresurados y las histerias ocasionales sirven de muy poco. Nada reemplaza el conocimiento para entender y eventualmente controlar lo aparentemente irracional.

Acceso y seguridad de las fuentes

Para escribir este libro he utilizado amplia e intensamente las experiencias, los métodos y las fuentes ganados a través de varios años de trabajo en el periodismo de investigación. Como se

verá, hay a lo largo del libro muchas citas y referencias a documentos, instituciones (y ocasionalmente, personas) que se suponen reservados o secretos. Los he utilizado solo cuando he estimado que el no hacerlo empobrecería la comprensión del relato.

Los documentos que sirvieron de base a este trabajo han sido donados a la biblioteca de la Universidad de Princeton. Una buena parte están a disposición de investigadores académicos y periodísticos desde 1991. Otro grupo de documentos —aquellos que pueden contener información potencialmente peligrosa para cualquier persona— han sido depositados en colección aparte dentro de la misma biblioteca y son accesibles desde el 2004. Hoy, el Instituto de Estudios Peruanos en Lima tiene una copia en microfilm de los documentos donados a la Universidad de Princeton.

Una preocupación fundamental en este libro ha sido el garantizar la seguridad de quienes me confiaron información en forma reservada; y asimismo el no escribir nada que pudiera causar por sí peligro a cualquier persona, sea cual fuere su posición en esta guerra. Por eso, representados bajo seudónimos, reconocibles por la tipografía diferente al texto que los rodea (así, por ejemplo, *Sergio Escalante* debe entenderse como seudónimo). He nombrado también con seudónimos a personas cuya filiación, presente o pasada, creo que es desconocida por uno, otro, o por ambos lados de la guerra; o también a quienes fueron meramente testigos inadvertidos de tal o cual hecho. En algunos casos, para mayor seguridad, he descompuesto a una persona en dos o más seudónimos, o añadido a dos personas en uno solo. Tengo que agregar que algunos de los así protegidos llevaron a cabo acciones repugnantes hasta para los más pragmáticos sistemas morales. Pero la consideración fundamental que he tenido para proteger incluso a ellos, es que el propósito de este trabajo es el servir de medio, o como agente de catálisis, para comprender, reflexionar y conocer, y no para la muerte, el miedo o la persecución de nadie. Por supuesto que aquellas personas cuyas acciones, filiaciones o funciones son del dominio público, aparecen con su nombre verdadero.

El arresto

Era enero de 1979. Los policías de Seguridad del Estado, reforzados con efectivos de otras unidades, estaban distribuidos por toda Lima, allanando casas y oficinas, arrestando a políticos de izquierda y sindicalistas de la CGTP. Aun así, esa central mantenía su convocatoria al paro general de setenta y dos horas, que debía empezar el martes 9 de enero. Tenso, crispado, el gobierno militar había puesto en juego casi todos sus medios para sofocar el paro. Un nuevo plan operativo para control de disturbios urbanos, inspirado en las lecciones de los paros anteriores, se ponía en práctica por primera vez. El plan enfatizaba la necesidad de asegurar los accesos a la ciudad en los conos sur y norte y en la Carretera Central, mediante el despliegue masivo de unidades militares y policiales, imponiendo a la vez la movilización del transporte público sobre el bloqueo de los huelguistas. Personal de tropa había sido asignado para proteger a las unidades de transporte, y choferes militares se preparaban para hacerse cargo de su manejo, en el caso que no se consiguiera suficiente número de conductores civiles.

La actitud militar intentaba ser terminante y mostrar en los hechos el alcance y la contundencia de su energía. Había en ella también un mensaje a la Asamblea Constituyente, advirtiéndole la precariedad de la apertura democrática y dejando en claro quién tenía la fuerza. El ministro y el viceministro militares del Interior, generales Fernando Velit y Jorge Lassús, habían recibido los nuevos planes operativos del Comando Conjunto, y se encargaban de ordenar a sus subordinados policiales, con aquel estilo de indisimulada prepotencia que caracterizó su gestión, la máxima energía represiva.

Varias revistas habían sido cerradas, y los otros “medios de difusión” fueron advertidos por los comandos militares de las zonas de seguridad del centro y del litoral de “abstenerse de propalar noticias” que pudieran provocar “la perturbación del orden”. Pero la advertencia más amenazadora era la determinación militar de poner a disposición de tribunales castrenses a quienes “participen o inciten a cometer actos de alteración del orden público”. Además, a través de comunicados que divulgaban incesantemente los medios periodísticos controlados por el gobierno militar, se prevenía a la población que las tropas estaban autorizadas a hacer uso de las armas para sofocar cualquier disturbio.

Las amenazas, sobre todo dentro de las circunstancias de ese mes, no eran vacías. Un caso de espionaje admitido por el gobierno chileno, y que culminaría en la declaratoria de *persona non grata* al embajador de Chile en el Perú, concitaba buena parte de la atención pública. Un suboficial de la Fuerza Aérea, Julio Vargas Garayar, era condenado a muerte y sería fusilado antes de fin del mes. Las relaciones con Chile tornaban al punto más bajo luego de la cuasiguerra

de 1975, y nuevamente empezaban a erizarse los primeros aprestos prebélicos. Se hablaba de postergar las elecciones generales, y algunos políticos, como Luis Bedoya Reyes, aceptaban en principio esa posibilidad. El APRA, en cambio, no; pero para desbrozar el camino, instruía a su central sindical, la CTP, que se opusiera en forma abierta al paro y tratara de hacerlo fracasar.

Todo ese conjunto de factores iba a hacer naufragar el paro. El 10 de enero, luego de hacerse evidente su derrota, la CGTP dispuso levantar la huelga general. Era el tercer paro en menos de treinta meses, y la primera derrota. Pero si los dos anteriores habían servido para espolear al gobierno militar en la decisión de la transferencia del poder, este último también tuvo, paradójicamente, el mismo resultado. El efecto de moderación que había tenido la existencia de la Asamblea Constituyente, en contraste con el enconamiento anterior, era sumamente claro para la mayoría de los militares. Y la ayuda decisiva que la colaboración de las organizaciones sindicales controladas por el partido aprista había significado para hacer abortar el paro fue aun más clara. Asimismo, que dicha ayuda estaba condicionada a la realización de elecciones generales.

Dentro de la Dirección de Seguridad del Estado un pequeño grupo de detectives quiso aprovechar la virtualmente total libertad de acción, que durante esos días les había sido otorgada, para actualizar investigaciones no relacionadas directamente con el paro, pero cuya importancia podía ser mayor. Por ejemplo, en lo que atañía a Sendero Luminoso. Las informaciones que llegaban de Ayacucho a Seguridad del Estado, a través de los canales de inteligencia, indicaban que Sendero se estaba preparando seriamente para iniciar la insurrección armada. Y si bien los militares no tomaban en serio esos informes persistentes, algunos de los detectives veteranos en el área, que habían seguido esporádicamente a Sendero durante los años anteriores, y que continuaban recibiendo informaciones desde el interior de la organización maoísta, consideraban que no tomar en cuenta sus planes era un error grave.

A instancias suyas, el jefe de la división, comandante Modesto Canchaya, ordenó que un grupo operativo cuya misión era detener a Ricardo Letts, dirigente de Vanguardia Revolucionaria, añadiera a su objetivo original el de tratar de ubicar y capturar al jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Se sabía que estaba en Lima, pero no se conocía dónde se encontraba alojado. En la madrugada del domingo 7 de enero, el grupo de detectives se subdividió en varios equipos para buscarlo simultáneamente en sus paraderos más probables: en la casa de su suegro Carlos La Torre (en la quinta cuadra de la avenida Pershing), en La Cantuta y en el programa que tenía esa universidad en Lima, y en la casa de una hermana suya.¹

Apenas oscurecía cuando, al salir una persona de la casa de la familia La Torre, los policías la empujaron a un lado, e irrumpieron adentro. Abimael Guzmán estaba ahí, trabajando frente a un escritorio. No hubo resistencia, pero tampoco manifestación alguna de sorpresa o ansiedad. Fue reconocido de inmediato por algún veterano de Seguridad del Estado. No obstante, se pronunció, inevitable, la pregunta de rigor. ¿Sus documentos? En realidad no los tenía, dijo Guzmán, “aduciendo haberlos perdido”.² Vestido con guayabera blanca, cortés y cooperativo, Guzmán se dispuso a acompañar a sus captores. A las 9:30 p. m., los policías y su preso se dirigieron a las oficinas de Seguridad del Estado.

El oficial de la Policía de Investigaciones que dirigió la incursión había sido destacado desde otra unidad, y apenas conocía quién era el capturado. Pese a que un subalterno de Seguridad del Estado sugirió que se llevaran todos los papeles con los que Guzmán había estado trabajando, y se hiciera un registro de la casa, el mayor decidió que una vez hecha la captura era innecesario fastidiar más a aquellas personas tan obviamente bien educadas.

El suboficial *Pablo Aguirre* se enteró por teléfono del arresto de Guzmán y se dispuso a recibirlo en Seguridad del Estado, cuando este llegara.³ *Aguirre*, un policía que había hecho toda su carrera en Seguridad del Estado, tenía un aspecto poco congruente con su experiencia. De apariencia más bien desgredada, y uñas extravagantemente largas en los pulgares, como las de un pagador de apuestas clandestinas, *Aguirre* era considerado por varios de sus jefes como uno de los mejores analistas de la izquierda radical y sobre todo un archivo viviente en la materia. Con el pelo azambado ya entrecano, fumando un cigarrillo tras otro, mostrando en su persona los signos varios de un difícil pasar económico, los rasgos de *Aguirre* se animaban apenas empezaba a discutir el tema de Sendero o el de la izquierda radical, y con entonación y ademán parecidos a los que usaría alguno de los viejos eruditos del barrio de La Victoria recordando con precisión los partidos memorables del Alianza Lima, el suboficial *Aguirre* mencionaría sin falta las conferencias, los plenos, los ampliados de Sendero, Bandera Roja, Patria Roja, Pukallacta. *Aguirre* había interrogado, y conversado luego largamente con Guzmán, cuando este fue arrestado en 1969 y 1970.

Calmo, siempre vestido con la guayabera blanca, Guzmán subió al segundo piso del edificio anexo a la prefectura, donde funcionaba Seguridad del Estado. Oficinas y pasadizos con pisos de losetas descoloridas, que dejaban ya entonces una sensación tal como si una pátina de deterioro, de ruina precoz se hubiera posado bruscamente sobre paredes y mobiliario.

Aguirre encontró a Guzmán en la oficina de un jefe de división, Julio Pantoja Cueva, donde se harían los primeros interrogatorios. Al entrar, el policía lo saludó con la respetuosa deferencia que ya empleaban todos hacia su detenido. Guzmán lo recordó de inmediato y lo saludó con afabilidad.

—Amigo *Aguirre*, ¿cómo me hace usted esto? —dijo Guzmán en fingido reproche.

—¿Por qué, doctor?

—Porque usted sabe bien que yo no estoy en estas cosas ¿Qué vamos a sacar nosotros con paros?⁴

Aguirre tuvo que admitir que lo que decía Guzmán era verdad.

Esperaba, empero, que pudieran conversar durante los días siguientes respecto a las cosas en las que sí estaba el doctor. Pero viéndolo, y apreciando la situación con un experto golpe de vista, empezó a dudar que fuera posible lograr algún progreso. Bastaba ver a Guzmán, “estaba tremendamente tranquilo”, recuerda *Aguirre*.

Pero en otras partes no había tranquilidad alguna. Mientras Guzmán aún se encontraba en camino hacia Seguridad del Estado, las gestiones para su liberación ya se habían iniciado.

Ese mismo día, Laura Caller, la tenaz y pundonorosa abogada de sindicatos obreros y organizaciones campesinas, recibió casi simultáneamente la visita de los familiares políticos de Guzmán, y de miembros de su organización, el Partido Comunista del Perú, ya entonces más conocido como Sendero Luminoso. El camarada estaba preso, le dijeron. “¿Abimael?”. Sí, el camarada. La relación de Laura Caller con Abimael Guzmán era de larga data. Caller había defendido con éxito a Guzmán y a buena parte de los arrestados y procesados por los sucesos de Ayacucho y Huanta en 1969; y también había defendido a varios otros dirigentes senderistas a lo largo de la década del 70 en los diversos litigios judiciales que resultaron de las acerbadas luchas entre Sendero y las otras organizaciones de izquierda por el control de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y otras organizaciones ayacuchanas. En la gran mayoría de los casos, Caller, abogada experta además de respetada en los medios judiciales, había tenido éxito. Y aunque sus puntos de vista políticos y los de Guzmán ya diferían considerablemente, la

relación de amistad, y la profesional, habían proseguido hasta entonces.

Caller percibió preocupaciones distintas en la familia de Guzmán y en los miembros de la organización senderista, pero intensas en ambos casos. No les faltaba razón. El solo arresto de Guzmán en la circunstancia de un paro que él había atacado era preocupante de por sí. Dentro de la crisis del gobierno militar, maniobras y aun acciones extremas eran posibles. Había que moverse cuanto antes, en forma bien planeada. Lo primero que les dijo es que había que conseguir otro abogado, “alguien insospechable, y que tuviera influencias”.⁵ Un “burgués progresista”, en suma. Les recomendó a *Horacio Alvarado*, que era todo lo anterior y, además, buen profesional.

Familia y senderistas accedieron, y Caller se puso en contacto con *Alvarado*. Este aceptó de inmediato encargarse de la defensa de Guzmán, y coincidió con Caller en la necesidad de poner en juego, lo antes posible, a personajes influyentes.

Alvarado había sido juez y profesor universitario. Su recurso de *hábeas corpus*, redactado entre el lunes 8 de enero y el martes 9, fue acogido sin demora por un juez deferente. En poco tiempo, la maquinaria legal se había puesto en funcionamiento pleno.

Otras cosas sucedían a la vez. Un familiar cercano de *Alvarado*, contralmirante en actividad de la armada peruana, fue persuadido para gestionar la libertad de Guzmán. Se le indicó que se trataba solo del líder máximo de una fracción mínima del marxismo provinciano, que no le hacía daño a nadie, y que, lo que es más, estaba en contra del paro. En realidad, era un profesor universitario con inocuas veleidades políticas. El contralmirante aceptó de buen grado hacer la gestión, y se apersonó en Seguridad del Estado para “interesarse por la situación” del doctor Abimael Guzmán, víctima aparente de una confusión y quizá de un exceso de celo policial, y para pedir que “se resuelva cuanto antes” dicha situación. Tal la fórmula, veladamente eufemística, con la que los militares pedían a sus servidores policiales que apuraran la libertad de tal o cual persona.

El contralmirante no fue el único alto oficial apersonado en Seguridad del Estado para interesarse por Guzmán. Otros tres oficiales con el rango de general —dos del Ejército y uno de la Policía de Investigaciones— se hicieron presentes con el mismo propósito. Ellos habían sido movilizadas independientemente por la familia o por la organización, y no por el abogado, pero sirvieron bien el propósito común. “Movieron todas las palancas”, recordó *Aguirre*. “¡Abimael tiene amigos en todas partes! ¿Por qué cree si no que nunca se le agarra?”.⁶

Desde el miércoles 10 había pocas dudas, entre los detectives de Seguridad del Estado, de que la detención no se iba a prolongar por mucho tiempo más. Frente al *hábeas corpus* y, sobre todo, a la avalancha de presiones por su liberación, no había ningún elemento incriminatorio inmediato y concreto en el cual basarse. Y así, mientras un alférez iniciaba el tipeo del corto formulario y el parte de libertad de Guzmán, *Aguirre* se resignó a convertir su proyectado interrogatorio en apenas una conversación.

Fue “un conversatorio amigable” solo interrumpido por una breve sesión fotográfica, y por la lectura del parte, menos de una hoja mecanografiada. *Aguirre* tratando de llevarlo, sin ninguna esperanza de conseguirlo, al terreno de admisiones concretas. “Vamos, doctor, todos sabemos que usted tiene una línea trazada, que no la va a romper”. Un asentimiento cortés. “Sabemos que se están preparando para la lucha armada”. “Efectivamente, estamos en ese camino”, respondió

Guzmán. “Ahora, depende de las masas cuándo vamos a comenzar”.

Sin embargo, al contestar las preguntas del policía que hacía el parte solo admitió “ser de ideología marxista-leninista, pero niega enfáticamente pertenecer y dirigir la facción denominada PCP - Por el Luminoso Sendero de Mariátegui, por lo cual, el deponente dice ignorar los Planteamientos de Lucha de la referida Facción”.⁷

No había nada que hacer. “Quizá, si se le hubieran encontrado indicios sobre la lucha armada, se hubiera podido continuar con la investigación”, dijo *Aguirre*. Y como seguían entre tanto los interrogatorios a detenidos que sí estaban relacionados con el paro, *Aguirre* dejó la oficina donde permanecía Guzmán. Cuando regresó, le dijeron que este acababa de salir en libertad. Era el 11 de enero de 1979.

Había salido acompañado por sus familiares políticos, por su abogado, hasta la verja de ingreso a la prefectura. Ahí lo esperaba más gente, que lo saludaron con apretones de manos efusivos, lo rodearon y lo condujeron fluidamente entre los peatones y los vehículos, hasta que se confundió entre ellos y desapareció en medio del tráfico, de la ciudad. Y por muchos años.

1 Parte N° 019-DSE-PE. 7 de enero de 1979. Ricardo Letts, de paso, logró eludir la captura.

2 *Ibidem*; en el capítulo “La caída de Vilcashuamán” hay información adicional sobre el caso de los documentos perdidos de Guzmán.

3 Entrevista con el suboficial *Pablo Aguirre*, el 29 de enero de 1987.

4 Entrevista con el suboficial *Pablo Aguirre*, el 15 de febrero de 1990.

5 Entrevista a Laura Caller, el 7 de setiembre de 1987.

6 Entrevista con el suboficial *Pablo Aguirre*, el 29 de enero de 1987.

7 Parte N° 022-DSE. 11 de enero de 1979.

I. Retorno a la democracia

En las primeras semanas de la nueva década, el cansancio y el rechazo ante el gobierno militar cedieron lugar a la esperanza de un nuevo comienzo. La anticipación de la democracia llegaba con todas las promesas de la adultez temprana después de un azaroso tutelaje. Durante la década anterior las estructuras sociales habían crujido, algunas se habían fracturado, todas habían cambiado; y al cabo, la nación parecía más robusta, más compleja, más capaz. El crecimiento de las exportaciones y la recuperación fiscal durante las gestiones de Javier Silva Ruete como ministro de Economía y de Manuel Moreyra como presidente del Banco Central de Reserva hicieron suponer a algunos observadores calificados que, bajo un gobierno democrático, el progreso económico sería virtualmente superlativo. El economista Roberto Abusada, por ejemplo, escribía que “no hay razón para que el Perú no pueda crecer al 10% o más por año”.¹ En pocos meses más, Abusada iba a convertirse en uno de los miembros más importantes del equipo económico del nuevo gobierno, y como tal en protagonista y testigo del triste contraste entre su diagnóstico esperanzado y la realidad de los años siguientes.²

El pensamiento y la actitud predominantes en las élites civiles eran los de considerar el tránsito inminente a la democracia como un proceso de crecimiento y no como una ruptura. Un artículo escrito por el excanciller Carlos García Bedoya,³ entonces uno de los civiles de mayor prestigio entre quienes habían servido al gobierno militar, precisaba ese punto de vista: la década del 70 había sido la de remoción de estructuras, descarte de taras históricas, incorporación de vastas mayorías previamente marginadas de la vida nacional. A partir de lo logrado por el gobierno militar, el futuro gobierno civil tenía la base sobre la cual construir una sociedad moderna y libre.

No puede negársele cierto mérito al argumento, pero debe repararse también en sus aspectos negativos: condonaba, cuando no estimulaba la pendularidad civil-militar, inhibía el razonamiento analítico ante el diplomático, persistía en el endémico aprendizaje distorsionado de la historia, cuyo precio se ha pagado generación tras generación.

Una de las fotos que ilustraba el artículo expresa ahora un mensaje muy diferente al de entonces. Aparecen algunos de los técnicos civiles que sirvieron a la segunda fase del gobierno militar. La leyenda, tomada del artículo, dice: “Con errores y experiencias, una nueva tecnocracia”. El personaje central en la foto es Álvaro Meneses, entonces presidente del Banco de la Nación, luego notorio fugitivo en el caso de la estafa del Banco Ambrosiano. Símbolo apenas exagerado de toda una nueva clase enriquecida a lo largo de la década gracias a la rapiña del Estado.

Fueron semanas, meses de optimismo respecto al destino histórico del país. Entre todos los candidatos, Fernando Belaunde fue quien intuyó mejor el estado de ánimo colectivo. La imagen blanda después de doce años de la severidad frecuentemente artificial de los militares, aparecía auténtica y cálida. Su slogan: “trabaja y deja trabajar”, expresaba, aun a través de sus interpretaciones más maliciosas, el estado de ánimo imperante. Entonces, y hasta el 82, era un lugar común escuchar las afirmaciones enfáticas que sostenían que Belaunde era “un señor” (en oposición a los otros palurdos) y un “presidente de lujo”, lo que en la sociedad limeña era quizá el mayor homenaje verbal posible.

El contrapunto a las optimistas expectativas políticas y sociales fue una paulatina e intensa aprensión ante las naturales. Un sismólogo estadounidense, Brian Brady, había previsto, en un artículo publicado la década anterior, un posible terremoto de proporciones cataclísmicas en 1980. Así, desde enero de ese año, se desbocó el temor frente a la sorda inminencia de una catástrofe; en febrero, la expectativa del apocalipsis telúrico se había generalizado. En marzo, con la tierra intacta y la reputación profética de Brady en desgracia, por lo menos en el Perú, la atención volvió a centrarse en los eventos humanos.

La campaña electoral arrancó desde principios de año. Acción Popular no tuvo obviamente problema alguno en cuanto a la elección de su candidato. Pero Fernando Belaunde tenía interés en presentarse a las elecciones unido al Partido Popular Cristiano (PPC). Las conversaciones con Luis Bedoya Reyes, el caudillo pepecista a quien se le había ofrecido la primera vicepresidencia, no fructificaron finalmente. Las primeras encuestas precisaban una ventaja leve a favor de Belaunde: 20% contra 18% de Bedoya. En esas condiciones, y sin tomar en cuenta a los grupos que en ambos partidos se oponían a la unión, era difícil definir subordinaciones y jerarquías.

Ambos partidos iban a la zaga del APRA, que tenía 24% de preferencias y era considerado a esas alturas el probable ganador de las elecciones. El gobierno militar se orientaba claramente a favor de los apristas. E incluso se suponía que la muerte de Haya de la Torre iba a redundar en un paradójico beneficio electoral para el APRA, adormeciendo viejos odios y liberando las energías de las generaciones intermedias.

En enero se definió la fórmula presidencial aprista. La encabezaba Armando Villanueva, el veterano militante y dirigente, con reputación de duro. Pero las disputas entre herederos remecían al partido. La elección de Villanueva sobre la de Andrés Townsend, quien se resignó solo a medias a ir como candidato a la primera vicepresidencia, no liquidó el enfrentamiento entre grupos antagónicos, que se disputaban, además del poder del partido, su orientación. Villanueva, proponente en aquella hora del retorno a “las fuentes aurales” del aprismo, según el decir partidario, utilizaba un lenguaje con figuras retóricas de izquierda, y parecía prometer una práctica socialdemócrata. Townsend expresaba una vertiente pronunciadamente anticomunista y más próxima a una política de tipo demócrata-cristiano.

Hasta el momento de la inscripción de la lista, llamada, con no poca arrogancia, “la plancha” (a la venezolana), ardió la pelea interna en el APRA. Como en una familia fieramente dividida, las hostilidades se enconaron por la larga relación partidaria que tenían entre sí las facciones. A comienzos de febrero, la bofetada que la pugnaz suegra de Townsend, Helena Távara, asestara a Alan García en la Casa del Pueblo, mantuvo titilados a los mentideros políticos por varias semanas, aunque no cambió en nada el ya definido predominio de la facción de Villanueva.

Finalmente, las luchas más explícitas se aquietaron después de la inscripción, pero fueron reemplazadas por el soslayamiento sistemático de la facción de Townsend, y por una guerra de rumores y pintas que concentró los ataques en lo personal. Pinturas en las paredes increpando la nacionalidad chilena de la esposa de Villanueva se añadieron a murmuraciones sobre un presunto veto militar a la candidatura aprista por esa razón.

Pese a todo, la candidatura de Villanueva parecía florecer en el conflicto, y a comienzos de año se pensaba que su ventaja en las encuestas se acrecentaría durante la campaña. Buena parte de los nuevos ricos, de aquella emergente plutocracia creada y nutrida por los empréstitos públicos y las comisiones ilícitas a lo largo del proceso militar, dejó calladamente atrás el antiaprisismo de los años de Velasco y contribuyó a la campaña electoral del APRA.

Ninguno alcanzó, empero, la importancia de Carlos Langberg, un peruano retornado de México pocos años atrás, con una fortuna de fábula según los rumores, estrechos contactos con el gobierno militar y una inquietante propensión a la violencia. Langberg pagó gran parte de los gastos de la campaña electoral, y supervisó la filmación de la propaganda televisada, hecha en buena medida por un equipo técnico que él trajo de México.

En 1982, cuando una investigación periodística reveló la vinculación protagónica de Langberg con el mayor caso singular de tráfico de cocaína conocido hasta entonces,⁴ aquel se había convertido en una figura de fuerza decisiva dentro del partido aprista, figura amenazadora, que apabullaba. Su caída subsecuente significó el quebrantamiento de la que fue posiblemente la organización de narcotráfico peruana más importante hasta entonces; y provocó dentro del APRA el movimiento de regeneración interna que proyectaría a Alan García al liderazgo del partido y a la Presidencia de la República poco después. Pero esa es otra historia.

La izquierda marxista se encontraba más disgregada, más inestable que en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Los varios frentes y conglomerados se agruparon, desagruparon y volvieron a asociar en pocos meses, dejando una estela de siglas y complejas geometrías de afiliaciones y desafilaciones tras de sí.

En enero, uno de los frentes, la Unidad de Izquierda lanzó la lista de Genaro Ledesma, Jorge del Prado y Antonio Meza Cuadra (del PSR). La alianza entre el FOCEP y el Partido Comunista prosoviético duró menos de un mes. Los trotskistas se agruparon tras la candidatura de Hugo Blanco, del PRT, que en determinado momento de la campaña tuvo como integrante de su lista a Alfonso Barrantes, en representación del ARI. Observamos también otros casos: varios de los grupos promaoístas se juntaron en el UNIR; las diversas escisiones de Vanguardia Revolucionaria y de otros movimientos de la izquierda heterodoxa se reunieron en la UDP; y, finalmente, Genaro Ledesma siguió siendo candidato del FOCEP a la presidencia después del rompimiento con la Unidad de Izquierda.

El crecimiento electoral, reflejo de un desarrollo sustancial aunque desordenado, había encandilado a la izquierda marxista y produjo en pocos años algunos de los cambios más importantes en su historia. Trotskistas y maoístas, terceristas y prosoviéticos entraron juntos al sistema democrático, y el proceso los unió, paulatina pero ineluctablemente. Los mutuos rechazos dogmáticos, irreductibles en la clandestinidad o semiclandestinidad, perdieron importancia ante la necesidad de coordinación parlamentaria. Las rivalidades y las diferencias doctrinarias cedieron paso, a veces imperceptible, a veces francamente, a las rivalidades personales, y la contraposición de grupos y partidos representó cada vez más los intereses electorales que los ideológicos.

El proceso fue solo en parte voluntario, y marcado por frecuentes renuencias. Pero resultó

determinante. Y si hubiera que escoger un momento simbólico de ese tránsito, yo pensaría en el mitin final de la coalición maoísta UNIR, en la campaña presidencial de 1980, cuando el veterano dirigente magisterial Horacio Zeballos blandió un fusil de palo desde el estrado, al dirigirse a sus partidarios.

Teniendo en cuenta el contexto de la campaña, pocas declaraciones de abandono de la violencia y abrazo de la legalidad podían ser más elocuentes. Sin embargo, la figura demacrada de Zeballos, enfermo quizá ya de muerte, agitando un fusil de juguete, abonó la permanente afirmación de los anticomunistas irreductibles en el sentido de que la presencia electoral de la izquierda marxista era parte de una estrategia común: utilizar todas las posibilidades legales y todas las ilegales a la vez.

Fue lo contrario. Queriéndolo o no, la izquierda ingresaba exitosamente al sistema. Y al entrar a formar parte de él, empezaba a tener un interés creado en su estabilidad y una responsabilidad práctica en la solución de sus problemas cotidianos. Como parte del gobierno, la izquierda iba a tener en sus manos una palanca importante para modificar la realidad, pero sería modificada a su vez, y en forma sustancial, por esta. Los años siguientes ratificaron ese proceso. Y así, el fusil de palo en vísperas de las elecciones fue la despedida de una era para ingresar a otra.

Si Sendero no hubiera existido, el proceso de incorporación al sistema hubiera sido mucho más marcado y completo, y hoy la izquierda marxista sería uno de los pilares fundamentales de la estabilidad democrática, en un proceso político vivo y vibrante, pero totalmente pacífico.

Pero existiendo, Sendero reservó sus ataques más estridentes a la participación electoral de la izquierda, denunciándola como abandono de la vía revolucionaria. Lo cual, claro está, era verdad. Y para el resto de la izquierda, en especial la de origen maoísta, las denuncias puritanas, que ellos antaño compartieran, eran por lo menos incómodas; y deformaron en algo su proceso de incorporación al sistema.

Si el acoso de Sendero era un irritante extremo para la izquierda marxista en proceso de evolución hacia la legalidad, para Sendero la necesidad de atacar a los otros grupos, mayoritarios al fin, para arrancarles o erosionar parte de su militancia, era muy importante. Por eso, la campaña electoral de los grupos de izquierda hubo de desarrollarse junto con otra paralela de gritos, insultos, pedradas y golpizas con los miembros de Sendero (y de grupos cercanos, como Pukallacta) que se mantenían en la semilegalidad.

Varios incidentes, especialmente en Ayacucho, ilustran la apasionada intensidad del enfrentamiento entre las izquierdas divergentes. En octubre de 1979, la UDP y otros grupos de izquierda organizaron una manifestación nocturna en la plaza de armas de Ayacucho. El mismo día, en la mañana, dirigentes y militantes de UDP desafiaron a Sendero a librar una polémica en el patio de Ingeniería de la Universidad San Cristóbal. Carlos Malpica retó a Julio Casanova. En lugar de este, que estaba presente en el patio, un estudiante senderista aceptó el desafío, pero Malpica indicó que él solo polemizaría con profesores. Casanova no se dio por aludido.

Cuando quedó claro que el torneo verbal no iba a producirse, Javier Diez Canseco tomó la palabra y, en su normalmente vehemente estilo, atacó a Sendero. Entonces, del grupo senderista voló una piedra que impactó a Diez Canseco en el rostro y le hizo una herida superficial, pero aparatosa, en la frente. Se armó de inmediato una trifulca, que terminó con los senderistas desalojados del patio y los udepistas marchando triunfantes con banderolas por las calles de Ayacucho, y preparándose para el mitin vespertino.

En la noche, la reunión fue accidentada desde el comienzo. Desde la tarde hubo disputas

entre los líderes udepistas sobre el rol y el orden de oradores. Al fin se acordó que Carlos Tapia hablaría brevemente, en representación de Ayacucho y después Alfonso Barrantes cerraría el mitin. Juan Granda presentó a los oradores. Al empezar la manifestación, arrancó a llover con fuerza y la gente se guareció en los portales. Cuando parecía que la reunión fracasaría antes de haber comenzado, el dirigente campesino Julio Orozco Huamaní (quien, pocos años después, al arreciar la guerra, sería arrestado y “desaparecido”) recurrió a un rito andino para parar la lluvia: “Quemó hojas de coca y paró de llover”.⁵

Pero apenas obedeció el cielo, un grupo senderista de veinte o treinta personas atacó la manifestación con petardos. Los udepistas quedaron sorprendidos por un momento (era la primera vez que se utilizaba petardos contra ellos en ataques abiertos),⁶ pero se reagruparon pronto, y su fuerza de choque, armada con palos y escudos de triplay, desalojó a los senderistas de la plaza y los correteó por las calles adyacentes.

La campaña electoral de la UDP se intensificó en los meses siguientes, tropezando a cada paso con la hostilidad incondicional de Sendero. En la ciudad de Ayacucho y en los pueblos, en el campo, las pintas vivando a la lucha armada estaban acompañadas por otras de insulto a la UDP (“APRA, UDP y CIA, la misma porquería”). Por eso, la campaña se hizo en una atmósfera de tensión, en donde la posibilidad de choque físico con Sendero, a golpes o a pedradas, era siempre inminente. “Con Tapia nos movíamos de un lado a otro en un Volkswagen. Si nos rompían una luna, terminaban con nuestra campaña”.⁷

En la ciudad de Ayacucho, Tapia y Granda se encargaban también de pintar paredes, compitiendo en tachaduras mutuas con los brocheros senderistas. Los acompañaba una pequeña fuerza de choque de veteranos del FUE,⁸ que resultó suficiente para las eventuales trifulcas callejeras, siempre con Sendero.

Pero salían solos al campo en el tenaz escarabajo, moviéndose mucho, sobre todo en la parte final de la campaña. “Si íbamos a Cangallo, Chuschi o Vischongo, regresábamos el mismo día para atender otros mítines”.⁹ Y aunque en muchos distritos la competencia contra Sendero era cuesta arriba, había otros en los que lograron tener una cierta presencia. En Chuschi, la UDP armó un grupo musical, en Vischongo establecieron relaciones amistosas con curanderos locales. En este último lugar, una profesora udepista había organizado a varios estudiantes de comunidades locales para hacer trabajo “de base”. En ambos pueblos, la UDP podía reunir mítines de de cien a doscientas personas, y tenía acceso amigable con las autoridades comunales.

Sin embargo, en ambos pueblos, y más aun en otros lados, la influencia de Sendero era perceptible. La mayor parte de los profesores trabajaba a su favor, y varias otras organizaciones del lugar acusaban su influencia. En las constantes pugnas locales los cuadros udepistas resistían todo lo posible, y cuando resultaban abrumados por los senderistas llamaban a Tapia y Granda para que insuflaran ardor a la prédica alternativa.

En uno de esos viajes, en Chuschi, un grupo de cinco muchachos, de dieciocho o diecinueve años se pararon alrededor del Volkswagen, con miradas y continente hostiles. Los udepistas locales les dijeron que eran senderistas. Granda y Tapia también los “miraron feo”, y después de un rato de echarse mutuamente mal de ojo, los senderistas se retiraron, pero sin salir del pueblo.

Por doquier, en paredes, pizarras y rumores cundían los anuncios de la inminente insurrección armada. Casi todos los días, a las 4 o 5 a. m., grupos de senderistas corrían por las calles de Ayacucho gritando acompasadas vivas a la lucha armada. Se hablaba de campamentos guerrilleros en Socos, por ejemplo, y en otros lugares. La pizarra del patio de la Higuera contenía convocatorias a miembros del Movimiento Juvenil Popular para discutir asuntos relacionados

con la insurrección, indicando fecha y lugar. A los de la UDP eso les parecía poco serio. “Pensamos que nunca iban a pasar de pintar paredes... evidentemente nos equivocamos”.¹⁰ Otro dirigente de la UDP recuerda haberles increpado a los senderistas, después de alguna golpiza victoriosa: “¿Cómo van a ir a la lucha armada, si nosotros les sacamos la mierda?... Hemos hecho mítines en Chuschi, en Tambo, en Huanta, y ellos no podían con nosotros”.¹¹

Y sin embargo, en medio de esos incidentes, toda la organización senderista se preparaba intensamente para la guerra. Y las células de la UDP en los pueblos y provincias de Ayacucho fueron luego barridas por la insurrección; a veces por Sendero, más frecuentemente por las fuerzas de seguridad. A nivel nacional, entre tanto, la campaña electoral proseguía con intensidad creciente; y los tenues rumores de insurrección que llegaron en algún momento a la atención pública fueron ignorados, o considerados del todo improbables.

Mientras la izquierda, dividida en varios frentes, disminuía sus posibilidades de lograr una votación mayor,¹² la disputa por la victoria se concretaba cada vez más entre las candidaturas de Villanueva y Belaunde.

Poco a poco, Belaunde empezó a ganar terreno en las encuestas y Villanueva a perderlo. En ese retorno ilusorio al pasado anterior al golpe militar de 1968, la actitud de Belaunde caló en el electorado con mucha mayor fuerza que la de Villanueva. En contraste con los años del gobierno militar, en los que la política se manejó con voz, gesto y tono de cuartel, Belaunde hablaba con la modulación y el continente de un abuelo aún vigoroso, pero ya sabio. Villanueva, en cambio, proyectaba una imagen de hosquedad y de dureza que no parecía muy diferente a la de los militares, quizá más peligrosa si acaso. Y la propaganda electoral ratificaba la percepción básica de los electores: la de Belaunde hablaba de lampas, de trabajo simple pero sano, de paisajes agrestes memoriosamente precisados y visitados por el arquitecto. La del APRA presentaba la figura de jóvenes más o menos rubios, con un inquietante brillo fanático en la mirada, empezando a cantar una marcha entre militar y mística en un parque, y agrupando tras ella poco a poco a parejas jóvenes, a parejas maduras, a paseantes, a vendedores; todos sorprendidos en aquel ambiente medio bucólico, que abandonaban para marchar en grupo hacia un futuro implícitamente feroz. Era una copia de la película *Cabaret*, con una intención diferente, pero que producía una reacción parecida a la versión original.

No era el momento para posturas marciales porque, pese a la recuperación fiscal, el gobierno militar terminaba severamente desprestigiado. El miedo que antes infundiera la sensación de poder y eficacia se había disuelto, por lo menos desde los paros generales. Una revista humorística, *Monos y Monadas*, encontró en Morales Bermúdez al sujeto ideal para algunos de los alfilerazos —o estocadas— más sangrientos y eficaces en la historia del humor político limeño.

Además, las revelaciones sobre corrupción perseguían al gobierno de Morales Bermúdez hasta la hora nona. Poco antes de las elecciones, en mayo, el ministro del Interior, general Fernando Velit, tuvo que renunciar, remecido por informaciones periodísticas (de la revista *X*) que lo vinculaban a un caso sórdido de contrabando, en el que un general de la Guardia Civil, hermano del director superior de esa institución, figuraba como inculpa principal. Dos años después, Velit sería nuevamente denunciado (por *Caretas*) respecto a un caso mucho más importante: la protección que brindara a la organización de narcotráfico dirigida por Carlos Langberg.

La ciudad apestaba, literalmente. Una larga huelga de obreros de limpieza pública había causado acumulaciones masivas de basura. En una ciudad de olores fuertes (muchos forasteros

consideran que el amoniaco es el olor característico del centro de Lima), el hedor de la basura terminó ahogando todos los demás. Y no solo fue un conflicto mefítico, sino también sangriento. En un enfrentamiento de la policía con los obreros en huelga, hubo cuatro muertos.

En mayo, la candidatura de Belaunde sobrepasaba visiblemente la de Villanueva. Los últimos esfuerzos del APRA y sus simpatizantes (una caminata por Lima, el apoyo de Alfredo Barnechea, animador de un programa de televisión) fueron contraproducentes y redundaron en votos adicionales para Belaunde. En la manifestación final de Acción Popular, el sentimiento de victoria era claro. Y ahí estaban, en el estrado, aclamadas por masas fervorosas, las mismas figuras que doce años atrás habían sido depuestas por los militares, y que fueron luego despreciadas y ridiculizadas por estos, sus funcionarios civiles y sus propias masas fervorosas, suponiendo entonces inconcebible la resurrección de belaundismo. Y, sin embargo, ahí ciertamente estaban, los mismos nombres de ayer, aclamados por un mar de rostros bajo el estrado.

Estaban, junto con Belaunde, recibiendo aplausos y rugientes entusiasmos, Manuel Ulloa, dueño del diario *Expreso*, financista, hombre de negocios, inteligente a la par que indisciplinado, quien iba a ser primer ministro y ministro de Economía del próximo gobierno. Javier Arias Stella, el médico que iba a ser canciller. Javier Alva Orlandini, el político cajamarquino que había hecho la resistencia más viva a los militares. Iba a volver a ser el *apparatchnik* consumado, el manejador de la mayoría parlamentaria y la calamidad provinciana para sus correligionarios cosmopolitas. José María de la Jara, el pequeño, regordete y combativo secretario general de Acción Popular a la caída del primer gobierno de Belaunde. Hijo de un orador parlamentario renombrado, pero casi tartamudo él mismo. Periodista combativo, aunque de estilo algo ampuloso, y persona de gran integridad, cuyo exilio había sido dolorosamente apretado por la estrechez y, en algún momento, la penuria. De la Jara había decidido no presentarse a la elección parlamentaria, prevenido quizás por su cortedad como orador; e iba a ser el incongruente ministro del Interior del nuevo gobierno, el defensor de la sociedad.

En las elecciones del 18 de mayo, Belaunde ganó fácilmente con el 45% de la votación. Villanueva fue un distante segundo, con el 27%, tercero fue Bedoya Reyes, con apenas el 9%. Las listas de la izquierda marxista sumaron el 14%. Individualmente, el grupo marxista que obtuvo la más alta votación fue el PRT de Hugo Blanco (3.9%), luego el UNIR (3.2%), la Unidad de Izquierda (2.84%) y la UDP (2.39%). El FOCEP recibió apenas el 1.47%, y tanto APS como el viejo Partido Socialista no llegaron al 1%.¹³

El entusiasmo popular y el claro mandato electoral recibido por Belaunde despejaron definitivamente los temores de que los militares die-ran marcha atrás en la transferencia; aprensiones reales que habían provocado ominosos rumores de una “tercera fase” a principios de año.

Los temores ahora se trasladaron a las Fuerzas Armadas, varios de cuyos más altos jefes, en especial el comandante general del Ejército, general Rafael Hoyos Rubio, habían participado en el golpe que depuso a Belaunde en 1968 y luego activamente en ambas fases del gobierno militar. Pero en las diversas reuniones promovidas para enterrar el hacha, Belaunde expresó enfáticamente que los agravios pasados quedaban olvidados y que Hoyos Rubio permanecería como comandante general. Las ansiedades, sin embargo, tardaron en aquietarse, pese a que

Belaunde cumplió escrupulosamente lo prometido.

Entre la noche del 18 de mayo, cuando las masas de acciopopulistas temporales festejaron la victoria de su candidato, y la tarde del 28 de julio, cuando Belaunde ingresó nuevamente a Palacio de Gobierno con la franja presidencial cruzada sobre el pecho, hubo un período de altas esperanzas. Fue miope, como casi todos los entusiasmos de esa naturaleza, pero tuvo también mucho de conmovedor: la gente esperando más de sus representantes de lo que estos pudieran darles aun en el mejor de los casos. En esa fe inexplicable se expresaba la intuición de que no es grande la distancia que separa los presentes tristes de un futuro mejor, si solo las técnicas apropiadas, los mecanismos precisos son utilizados.

En la noche de la victoria acciopopulista, en medio de un grupo apostado frente al edificio donde vivía Belaunde, repitiendo los cánticos de Acción Popular, una joven parecía haber ingresado a un éxtasis rítmico. El nombre del partido que ella coreaba mientras saltaba de un pie al otro, parecía una suerte de mantra que abriera el camino a contemplar horizontes luminosos.

Nadie en ese grupo de jóvenes entusiastas sabía que la guerra había comenzado un día antes, y que su futuro, como el del resto de la nación, estaba mucho más determinado por un oscuro incidente acaecido en la víspera en un pueblo remoto que por la impresionante victoria electoral, a lo largo de la nación, que ellos entonces festejaban.

La quema de las ánforas electorales en Chuschi, el 17 de mayo de 1980. El primer disparo, engañosamente asordinado, que rompía los fuegos de la guerra milenaria.

1 *Caretas*, 4 de enero de 1980.

2 En 1982, el último año de su gestión, el crecimiento fue de 0.9% y el año siguiente, 1983, hubo un decrecimiento de 12%.

3 *Caretas*, 4 de enero de 1980.

4 Sobre el caso Langberg, ver —entre las docenas de artículos que la revista *Caretas* dedicó al tema— los siguientes:

- “Esa vez en Acapulco”, *Caretas*, n. 684, 8 de febrero de 1982. Primer artículo sobre el caso.

- “Sí, Villa Mercedes es de Langberg”, *Caretas*, n. 685, 15 de febrero.

- “El caso se profundiza”. *Caretas*, n. 687, 1 de marzo de 1982. El arresto de Langberg. - “Entrevista en la Maison de Santé”, *Caretas*, n. 811, 6 de agosto de 1984.

5 Entrevista a Juan Granda, el 22 de agosto de 1987.

6 Antes, durante las luchas estudiantiles de 1972-76, se había intentado romper la puerta de la casa de Carlos Tapia con petardos.

7 Entrevista a Juan Granda, el 22 de agosto de 1987.

8 El FUE fue el principal frente estudiantil de la Universidad San Cristóbal (los otros fueron el CTR y el FER Antifascista) que logró terminar por un tiempo (en 1974) con el control hegemónico de Sendero Luminoso sobre el movimiento estudiantil en Ayacucho.

9 Entrevista a Juan Granda, el 22 de agosto de 1987.

10 *Ibídem*.

11 Entrevista con Víctor Suero, en 1987.

12 En febrero de 1980, Alfonso Barrantes, quien iba a ser en los años siguientes el mayor aglutinador de votos y partidos en la izquierda, se retiró de la lista de la UDP.

13 Ver: Tuesta Soldevilla, Fernando. *Perú político en cifras*. Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1987; Rojas Samanez, Álvaro. *Partidos políticos en el Perú*. Lima: Centro de Documentación e Información Andina, 1984,

pp. 217-236; Pareja Pflücker, Piedad. *Terrorismo y sindicalismo en Ayacucho*. Lima: Empresa Editora Ital Perú, 1981, pp. 23-25. Mis sumas porcentuales de la votación de la izquierda marxista difieren en algo de las de Rafael Roncagliolo (citado en el libro de Piedad Pareja) porque yo no incluyo al Frenatraca en lo que él denomina el “campo popular”, y él no menciona al Partido Socialista.

II. Chuschi

En la madrugada del 17 de mayo, un día antes de las elecciones generales, cinco encapuchados entraron a la oficina del registro electoral de Chuschi, dominaron y amarraron al registrador y luego quemaron el libro del registro y las ánforas preparadas para la votación del día siguiente. La acción empezó a las 2.00 a. m. y terminó en menos de media hora.

El registrador logró desamarrarse y a campana batiente lanzó la alarma. Los comuneros se organizaron después de una corta asamblea y peinaron los alrededores. Sabían a quién buscar, pues el registrador había reconocido a sus atacantes. Eran los mismos muchachos que lo habían amenazado con la operación desde el 15 de mayo, y que le habían advertido ese mismo día que violentarían su oficina en la noche. El registrador no les creyó la amenaza hasta cuando se encontró maniatado y amordazado.

Entre las 7 y las 8 a. m. cuatro muchachos fueron capturados en una choza abandonada cerca al pueblo.¹ Dos eran lugareños, de la comunidad vecina de Quispillacta.² Los jóvenes negaron haber realizado el asalto, pero a uno de ellos se le encontró un sello del registro electoral. El ataque había sido dirigido por un profesor afuerino,³ quien eludió la captura.

Las autoridades del pueblo notificaron a Cangallo, capital de la provincia, del suceso y un camión del Ejército llegó poco después a llevarse a los detenidos.⁴ Los cuatro jóvenes fueron conducidos a Cangallo, y ahí pareció terminar el incidente. La propia prensa ayacuchana lo mencionó cuatro días después, sin darle importancia.⁵

Así arrancó la guerra. Para Sendero la acción fue la primera chispa del fuego del destino. La génesis del incendio de las praderas simbólicas de la burguesía y las revoluciones traicionadas. Cuando, en los años siguientes, las brasas empezaron a arder a lo largo del país, la búsqueda de una explicación se remontó repetidamente a la chispa primordial. ¿Por qué Chuschi? ¿Qué contenido simbólico había en ese pueblo lejano que lo había señalado entre tantos otros para marcar el origen de la guerra? ¿Reunía las características básicas de la opresión semifeudal en el campo, la postergación secular de los pueblos andinos, o era cuna temprana de la penetración senderista en el campo?

En realidad, pocos pueblos en los Andes peruanos fueron tan estudiados en los años anteriores a la guerra como lo fue Chuschi. Desgraciadamente, como ocurre frecuentemente en el caso de investigaciones académicas, casi todos los estudios sólidos habían sido publicados en inglés, en Estados Unidos, y permanecieron relativamente desconocidos en el Perú.⁶

Chuschi era una comunidad relativamente próspera y estable.⁷ Nunca había estado sujeta al régimen de dependencia, explotación o patronazgo de una hacienda. Por lo contrario, sus

habitantes habían invadido una vez una pequeña hacienda colindante. Era esencialmente una comunidad independiente. Aunque solo desde 1966 estaba unida por carretera con Cangallo y Ayacucho, Chuschi había sido “un importante centro mercantil, administrativo y ceremonial por no menos de cuatrocientos años”.⁸ A la feria de los viernes llegaban personas de comunidades vecinas a comprar, vender y trocar, caminando a veces “uno o dos días” para participar en ella.⁹

Buena parte de la población de Ayacucho tiene origen mitimae, y ese es el caso en Chuschi. Producto de las conmociones demográficas que siguieron a la conquista inca, el área está poblada por descendientes de indígenas de Canas (Cusco), Aymaraes (Apurímac), Angares (Huancavelica), así como también de los moches, provenientes de la costa norte, junto con los taquiguas originarios. Chuschi y Canchacancha tienen origen en Aymaraes, en tanto que la vecina Quispillacta proviene de los mitimaes de Canas.

Las disputas por linderos entre Chuschi y Quispillacta se remontan documentalmente a 1593.¹⁰ En 1959, ambas comunidades libraron una batalla en las áreas de pastoreo en la puna, donde murieron tres comuneros de Quispillacta. Desde 1980, los años de la guerra agudizaron primero al máximo la rivalidad y luego trajeron, sobre la base de la común desgracia, una reconciliación aparente, la primera en cuatrocientos años.

A partir de la década del 40, una activa comunidad de migrantes en Lima había mantenido contacto estrecho con su pueblo de origen, haciéndose cargo de sus intereses en la capital. Una parte importante del grupo migratorio se mantuvo unido vecinalmente en Lima, en tugurios ciudadanos primero, en San Cosme luego y por último en un área del pueblo joven 7 de Octubre, tomada por invasión en 1963.

Algunos de los migrantes, que habían adquirido experiencia sindical y conocimiento de los procesos de decisión en Lima, intervenían activamente en los asuntos de la comunidad, acrecentaron sustancialmente su protagonismo desde el inicio del gobierno militar de Velasco Alvarado. Dos de ellos retornaron a la comunidad y dirigieron una agresiva campaña encaminada a la expropiación de las tierras y del ganado de la Iglesia en Chuschi (la Iglesia tenía cuarenta hectáreas de las mejores tierras y cerca de ochocientas cabezas de ganado, que eran atendidas por la comunidad). Siguió una lucha enconada, en la que el cura local logró en más de una oportunidad hacer encarcelar a los dirigentes comuneros, pero estos finalmente se impusieron. El cura fue transferido en 1972 (de hecho fue expulsado), y los bienes de la Iglesia pasaron al control de una cooperativa dentro de la comunidad. La cooperativa, empero, tuvo corta vida y la comunidad tradicional tomó poco después el control de las tierras y del ganado de la Iglesia.¹¹

El enfrentamiento de Chuschi con la Iglesia provocó, además de un pleito legal y sentimientos intensamente contenciosos en ambos lados, el virtual abandono eclesiástico de la comunidad. Ello ayudó al crecimiento de una secta protestante, la pentecostalista, que partiendo de inicios muy humildes a fines de los 60, creció hasta tener más de doscientos feligreses sobre una población que sobrepasa escasamente las mil personas.¹²

En Quispillacta, entre tanto, la conversión al protestantismo había sido más intensa y comprehensiva. A la vez, Sendero Luminoso logró mucho más influencia en Quispillacta que en Chuschi; lo que, de paso, pone en cuestión el estereotipo respecto al anticomunismo militante de las sectas protestantes en el tercer mundo.

La presencia de Sendero Luminoso en Chuschi empezó desde los primeros años de la década del 70, a través de los maestros transferidos a la localidad. Su número se había incrementado sustancialmente desde la inauguración de la escuela secundaria a fines de la década del 60. Anteriormente habían sido solo siete profesores primarios, pero en la década del 70 aumentaron

a diecinueve.¹³ Tres eran originarios de la comunidad, y el resto foráneos. La mayor parte de los maestros pertenecía al SUTEP; y de hecho algunos habían sido destacados ahí por el gobierno como castigo a su militancia gremial. Una minoría de los profesores sUTEPistas pertenecía a Sendero; pero, como en otros ámbitos e instancias, era una minoría mejor organizada que las otras fuerzas.

En 1975, la antropóloga norteamericana Isbell, quien había retornado a la comunidad para proseguir sus estudios e instalar un centro bilingüe financiado por la Universidad Católica, fue virtualmente expulsada de la comunidad, junto con su equipo de asistentes peruanos y norteamericanos. El movimiento contra su presencia en Chuschi fue llevado a cabo casi exclusivamente por los maestros. Como ella y su grupo intentaron resistir la expulsión, se desencadenó una sucesión de incidentes, enfrentamientos burocráticos y tensión local, que hicieron finalmente impracticable su permanencia.

Curiosamente, Isbell había rehuido en años anteriores del contacto con los maestros, a fin de tener una relación más profunda con los comuneros y no ser asociada por estos con aquellos: *qualas*, mestizos, foráneos, a quienes, según ella, la comunidad consideraba con suspicacia e incluso algún desdén, pues decían que “solo son sus empleados, a quienes pueden despedir cuando lo deseen. [...] Muy poca interacción ocurre entre los dos grupos”.¹⁴ Identificándose con el cerrado mundo comunero, refractario al cambio y suspicaz de los mestizos, Isbell había pensado que iba a estar protegida por los mismos mecanismos de defensa. “Pensé que yo también estaba protegida por la ideología campesina del mundo externo”.¹⁵ Lo cual es una frecuente fantasía rousseauiana entre antropólogos, ingenua pero siempre conmovedora.

Acusados de ser “agentes de la CIA” y explotadores por los profesores, uno de los cuales era alcalde del pueblo y empresario de ciertos medios, los antropólogos descubrieron que la capacidad de acción del sector no comunero era sumamente real, pese a su número relativamente escaso. Y la pasiva neutralidad de los comuneros resultó cualquier cosa menos una protección.

Aunque la expulsión fue sin duda orquestada por Sendero, no solo los profesores afiliados al Partido participaron en la campaña. De hecho, el maestro-alcalde, que emergió como la voz más estridente entre los enemigos de los antropólogos, los denunció ante las autoridades del gobierno de Velasco como “espías”, cosa que los senderistas, dada su incondicional oposición al gobierno, no hubieran hecho. El mismo alcalde fue, en los años de la guerra, obligado a huir del lugar por las amenazas senderistas.

Entre 1975 y 1980, la influencia de Sendero en Chuschi creció en forma apreciablemente menor a lo logrado en muchos otros pueblos y comunidades de Cangallo y Vilcashuamán. La relativa prosperidad de la comunidad, el intercambio comercial constante, su independencia tradicional y, sobre todo, la habilidad y experiencia políticas de los migrantes que habían retornado, dificultó su avance. Como se ha visto, la UDP logró una presencia competitiva en el lugar, y anteriormente uno de los dirigentes locales había ascendido a cargos directivos importantes en la Liga Agraria de Cangallo y la federación departamental, ambas organizaciones auspiciadas por el gobierno de Velasco.

¿Por qué, entonces, Sendero decidió distinguir a Chuschi como el escenario para romper el fuego? Creo que por razones de oportunidad: se había decidido atacar símbolos electorales en la zona, y las ánforas y el registro se encontraban en Chuschi, y el hecho de que Chuschi no fuera un bastión senderista era una ventaja antes que un problema. La acción, y la posible represión posterior, removería, polarizaría y obligaría a renunciar a la pasividad, que fue lo que sucedió en los años siguientes.

-
- 1 Entrevista con Víctor Suero.
 - 2 Entrevista de Elba Carrasco con autoridades de Quispillacta, 1985.
 - 3 *Ibídem*.
 - 4 De acuerdo a ley están a cargo de las Fuerzas Armadas la cautela y la seguridad de las elecciones.
 - 5 “Panorama” del 21 de mayo de 1980. En: Pareja, *op. cit.*, p. 91.
 - 6 El principal estudio sobre Chuschi es el libro de Isbell, Billie Jean. *To Defend Ourselves*. Austin: University of Texas Press, 1978. Isbell, luego directora del Programa de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cornell, vivió algunas temporadas más o menos largas en la comunidad entre 1967 y 1975. David Scott Palmer estudió los efectos de la Reforma Agraria en Chuschi, entre otras comarcas ayacuchanas en su disertación doctoral, *Revolution from Above: Military Government and Popular Participation in Peru, 1968-1972*. Desde la óptica protosenderista, el siguiente libro tiene algunos detalles de interés: Díaz Martínez, Antonio. *Ayacucho: hambre y esperanza*. Lima: Mosca Azul Editores, 1985, pp. 100-105. La primera edición del libro de Díaz Martínez fue en 1969.
 - 7 Palmer, *op. cit.*, p. 220.
 - 8 Isbell, *op. cit.*, p. 49.
 - 9 *Ibídem*.
 - 10 *Ibídem*, p. 65.
 - 11 Palmer, *op. cit.*, pp. 221-223. Isbell *op. cit.*, pp. 192-193 y 238.
 - 12 Entrevista de Elba Carrasco con el pastor evangélico de Chuschi, 1985.
 - 13 Isbell, *op. cit.*, p. 226.
 - 14 *Ibídem*, p. 226.
 - 15 *Ibídem*, p. 237.

III. Mahoma, Mao, Macbeth

Entre marzo y mayo de 1980, en la víspera de las armas, mientras tensaba fuerzas preparándose para la guerra, Sendero realizó una serie de reuniones, bajo la dirección de Abimael Guzmán. La más importante fue la inicial, el II Sesión Plenaria (o segundo Pleno) del Comité Central, que empezó el 17 de marzo de 1980 y se prolongó hasta fin de mes. Luego del inicio de la insurrección, hubo otros encuentros partidarios, para efectuar el “balance general de las primeras acciones” donde se desarrollaron también los principales acuerdos (y problemas) discutidos en la II Sesión Plenaria.

Ese conjunto de encuentros cubrió todos los debates, decisiones y reacciones de Sendero a lo largo de su primer año de existencia insurrecta. Y si bien el Partido seguía la ruta definida en la I Conferencia (“Definir y decidir”) de setiembre de 1979, la singular intensidad de estas reuniones proviene de su confrontación con la acción inminente, el cruce del umbral de lo irreversible.

Para describirlas me he guiado tanto por los documentos publicados por Sendero, como por diversos manuscritos y notas, y algunas entrevistas. Los manuscritos sobre estos encuentros partidarios están escritos de acuerdo al modelo esquemático senderista. La estructura temática y el desarrollo del debate están enunciados con precisión detallista, aunque ni el contenido mismo de las intervenciones, y menos aún la identidad (así fuere por seudónimos) de quienes intervinieron, quede precisada. Tal sistema permitía una difusión exacta de los acuerdos en los niveles inferiores de la organización sin comprometer la seguridad interna ni la uniformidad de la línea. El detalle y la organización de la información aseguraban que los cuadros que habían asistido a las reuniones diseminaran los informes sin olvidar punto alguno, dándoles el énfasis adecuado, y que la retransmisión a partir de ese nivel hacia abajo no sufriera distorsiones.¹

La sesión preparatoria de la I Sesión Plenaria del Comité Central empezó el 17 de marzo con un informe del Buró Político, presidido por las citas sacras de rigor. Solo que en este caso el tema y la circunstancia le otorgaban una importancia especial a cada gesto, cada palabra. Y, sin embargo, la primera cita no aludía a la victoria inevitable, sino a la eventual necesidad del sacrificio, un tema que sería remachado en los años siguientes. La cita era de Marx, sobre la derrota de la Comuna de París:

Hacer la historia sería evidentemente muy cómodo si no se emprendiese la lucha más que con probabilidades absolutamente seguras de victoria.

Los canallas burgueses de Versalles habían puesto a los parisienses ante la alternativa: o bien aceptar el desafío, o bien rendirse sin combate. La desmoralización de la clase obrera en este último caso hubiera sido una desgracia mucho más grande que la pérdida de cuantos líderes queráis.²

La segunda cita era de Lenin, y aludía también a la necesidad del Partido y de la clase obrera de estar preparados para enfrentar retrocesos y fracasos. “Sufrir una derrota, comenzar de nuevo, rehacerlo todo [...] debemos decirnos la verdad por amarga y dura que sea”. La tercera era la clásica cita maoísta, sobre la necesidad histórica de la “lucha de dos líneas” para lograr la línea “justa”.

La elección de las citas parece responder a un alto grado de desasosiego en la organización. Aunque los mayores descabezamientos de la oposición entre la guardia vieja de Sendero ya habían sido hechos, es indudable que aún crepitaba la duda en sectores sustanciales de la dirección senderista. La conciencia de que sus acciones inmediatas iban a firmar y sellar su futuro en forma irrevocable actuaba como un estímulo poderoso a la incertidumbre. Persistían las advertencias que en los comienzos de la tragedia intentan expresarse a través de órdenes y augurios, en el sueño y la vigilia. El camino del Partido había sido largo y accidentado hasta ese momento, las interminables “luchas de dos líneas” habían sido tristes y fatigosas. Amistades antiguas y viejas camaraderías se habían deshecho; se habían abandonado lugares y perspectivas de vida normal y, sin embargo, todo ese camino solo llevaba al comienzo que ahora se afrontaba.

Para Sendero, esa fue la reunión de la Isla del Gallo. Guzmán, a su turno, fue a ella consciente de que en ese evento la emoción y el entusiasmo eran más importantes que el razonamiento. Convencer a los suyos de que estaban en el umbral de una epopeya histórica gigantesca fue su manera de contrarrestar los llamados de la duda y la prudencia. La agenda de la reunión consagró, como de costumbre, una parte importante de tiempo a recapitular lo discutido y aprobado en eventos anteriores. Luego, la II Sesión Plenaria, propiamente dicha, del Comité Central se dedicó a discutir los siguientes puntos:³

- 1) Situación actual del Partido y su ligazón con las luchas de masas.
- 2) Desarrollar la militarización del Partido a través de acciones.
- 3) Reajuste general del Partido para centrar en lo militar.
- 4) Plan de acciones para ILA (Iniciar la Lucha Armada).
- 5) Campaña de Rectificación.
- 6) Acuerdos.

El objetivo general de la reunión era el segundo punto de la agenda: “Desarrollar la militarización del Partido a través de acciones”, y el reajuste general del Partido iba a servir para definir la forma del plan de acciones.

La II Sesión Plenaria empezó el 18 de marzo, con una larga reflexión metodológica de Mao. Al abordar el problema de ligar la reflexión teórica con la praxis, Mao no solo enfatizaba la afirmación marxista tradicional de que “el conocimiento teórico, adquirido a través de la práctica, debe volver a la práctica”, sino que “lo que es más importante, debe manifestarse en el salto del conocimiento racional a la práctica revolucionaria”. La forma de hacerlo suponía el camino largo y laborioso que Guzmán había predicado a través de los años anteriores, y que se hacía exigencia en la hora de concretar:

Al realizar una cosa, a menos que comprendamos sus circunstancias reales, su naturaleza y sus relaciones con otras cosas, [...] no podremos llevarla a feliz término. [...] Al tratar una cosa, debemos examinar su esencia y considerar su apariencia solo como guía que nos conduce a la entrada. [...] La filosofía materialista entiende que la ley de la unidad de los contrarios es la ley fundamental del universo. Esta ley tiene validez universal, tanto en la naturaleza y la sociedad como en el pensamiento del hombre, [...] lo cual impulsa el movimiento de las cosas y su cambio. [...] El método analítico es dialéctico. Por análisis entendemos analizar las

contradicciones en las cosas. [...] Muchos de nuestros camaradas, poco acostumbrados a pensar en forma analítica, no quieren analizar y estudiar repetida y profundamente las cosas complejas, sino que prefieren formular conclusiones simplistas, que son absolutamente afirmativas o absolutamente negativas. [...] Las cosas en el mundo son complejas, y las deciden diversos factores. Debemos examinar los problemas en sus diferentes aspectos y no en uno solo.

A punto de iniciar la guerra, la reunión decisiva no empezaba con una discusión militar convencional de misiones a ejecutarse y de medios con qué llevarlas a efecto, sino con las consideraciones más generales sobre la interrelación dinámica y el vigorizamiento mutuo de la teoría y la práctica. Sobre la necesidad de enfocar cada hecho y cada acción con relación a otros, y de llevar la misma aproximación múltiple y comprehensiva a la ejecución práctica, la clave metodológica era el maoísmo. Al remachar la cita en el momento decisivo para su organización, Guzmán buscó imprimirlo como principio rector en la práctica guerrera de Sendero, como lo había sido antes en la propia China y luego en Vietnam.

Luego, desplegados los lemas, se entró de lleno a la discusión.

¿Estaba preparado el Partido para iniciar la lucha armada? Un sector del Comité Central estaba menos que seguro, ateniéndose a la obvia debilidad e inexperiencia militar del Partido. “Esa es cuestión”, anotó Guzmán, “de disputa con la línea derechista en desarrollo”.

La posición “correcta” (la de Guzmán, se entiende) afirmaba que las condiciones revolucionarias estaban dadas, pero que era necesario catalizarlas a través de acciones armadas previas al inicio de las guerrillas en el campo, y los medios para hacerlo ya habían sido logrados: el Partido reconstituido “y avances desde el IX Plenario”.

En cuanto a la “elaboración del plan de acciones”, el punto fundamental de debate era si “las masas apoyarán acciones armadas [...] cómo se producirá la incorporación de las masas, su movilización, politización, organización y su armamento”. El diagnóstico y la preceptiva de Guzmán eran, en este aspecto, enfáticos. “La ligazón del Partido con las masas existe y se desarrolla, particularmente en el campo [...]. [La incorporación de las masas] se resuelve en proceso prolongado, desarrollando la lucha armada y formando un nuevo Estado”.

El proceso ya se había iniciado, dirigiéndose a la “militarización del Partido a través de acciones, [reajustando] para centrar en lo militar [...] es tarea inmediata y en el fondo ya está en marcha [...]. El Partido ha avanzado y está en condiciones para asumir el ILA.

En ese contexto, la “lucha de dos líneas” era necesaria para reajustar los mecanismos internos del Partido. Se procedió en consecuencia a desarrollar la “campana de rectificación” siguiendo “las siete unificaciones”.

En el debate siguiente emergieron varios asuntos concretos: se mencionó un incidente en Andahuaylas, relacionado con la Dirección del Partido, y se debatió sobre la ubicación de la dirigencia senderista. En otro momento, Guzmán emplazó al grupo opositor a definir si “están por la lucha armada o no están, o es que sí están pero no lo consideran pertinente hoy”. Las notas hacen mención a la intervención de algunos miembros del Buró Político, con un escueto comentario: “Replegamiento y persistencia”.

El 19 de marzo, antes de que Guzmán resumiera la discusión del día anterior, varios miembros del Comité Central hicieron las intervenciones de rigor, para expresar su “rechazo a las posiciones de derecha vertidas”. El resto del día se dedicó a “la lucha de dos líneas”, con una larga exposición de Guzmán al respecto, haciendo paralelos entre el debate presente y la “lucha contra el oportunismo” en China, emplazando a los miembros disidentes del Buró Político, y explicando a la vez que, en tanto el Partido se desarrolla en “lucha de dos líneas”, el Comité

Central meramente reflejaba esa realidad.

El 20 de marzo Guzmán enfrentó la respuesta de la oposición en el Buró Político, y el debate se centró en él, en la Dirección. A lo largo del día se discutieron, con una agenda obviamente controlada por Guzmán, “el derrotero de la dirección” y el “sistema de dirección”. Y en el primero de los gestos dramáticos que Guzmán iba a utilizar particularmente en esta serie de eventos, se leyeron partes de *Julio César* de Shakespeare para ilustrar las formas en las que la conspiración toma cuerpo. Luego se discutió sobre la posición del “llamado movimiento positivo”, aparentemente el grupo opuesto a Guzmán. Dicho “movimiento” sostenía, en forma ya explícita, que ni las organizaciones “de masas” ni el Partido estaban en condiciones de afrontar la insurrección.

El 21 de marzo arrancó con una intervención enérgica de Guzmán, donde enfatizó “nuestra decisión de seguir adelante y sacar las conclusiones llueve o truene”, y a continuación se refirió a un “documento enviado por el desertor”. El “desertor” era *Juan Enríquez*, uno de los antiguos tenientes de Guzmán que rompió con él poco antes, encabezando la oposición al “Plan de inicio”, tildándolo de “hoxhista” y reuniendo a un grupo del politburó y el Comité Central en torno a sí. El grupo pudo haber quizá logrado la mayoría, y cambiado entonces la historia del país, pero le faltó cohesión y lo aplastó el temor reverencial hacia Guzmán. El golpe de gracia fue cuando “el desertor” dejó la organización y salió del país, enviando antes una carta, escrita según los rumores en colaboración con uno de los patriarcas de la “Sagrada Familia”. Luego del debate, Guzmán volvió a intervenir, para describir lo que llamó “el develamiento de programa y táctica de la línea oportunista de derecha”, y advertir sobre la necesidad de “en la lucha, ubicar bien y diferenciar a las personas”.⁴

El 22 de marzo se produjo una confrontación decisiva en el proceso de lucha interna. El día había empezado con citas relativas a las virtudes del optimismo. Guzmán hizo leer las citas clásicas de Mao: “Changsha”, “Tres poemas breves”, “Montañas Ching kang”. Pero al lado de estas, también hizo leer trozos de las memorias del mariscal Andrés Bello, para mostrar “la necesidad de infundir en los mandos el más grande optimismo”.

Luego, Guzmán trazó paralelos entre el debate con el “movimiento positivo” y los que había enfrentado Mao al inicio de su ruta rural. Lo que estaba ahora en juego era por lo menos tan importante como entonces, “luchamos por el comunismo, no solo por la revolución democrática nacional”.

Por inalcanzable que pareciera el objetivo y por menguados los medios al inicio de la lucha, la ideología justa y la convicción intensa eran los medios a través de los cuales se concretaba la alquimia de los huracanes históricos. Esa era la fórmula repetida a lo largo de los siglos y como ejemplo dramático de ello, hizo leer partes de un pequeño libro olvidado, *La vida de Mahoma* de Washington Irving,⁵ para demostrar “cómo actúan los hombres unidos en torno a una causa y la llevan adelante con las armas en la mano, estableciendo un nuevo orden”.

Al creador de Rip van Winkle le hubiera seguramente fascinado ver aquel librito que él escribiera ciento cincuenta años atrás, utilizado en un rincón apartado de la tierra para inflamar el entusiasmo guerrero de un oscuro grupo rebelde en vísperas de encomendarse al destino.

El propio Irving consideraba *La vida de Mahoma* una obra menor, que no pretendía hacer aportes al conocimiento académico sobre Mahoma o el Islam, sino lograr un relato sencillo sobre la génesis de una de las más importantes gestas en la historia. Sin embargo, esa búsqueda autolimitación permitió que resaltaran sin esfuerzo algunas de las mejores cualidades del injustamente olvidado Irving: su excelente manejo del idioma, capacidad de descripción fina y

muy buen sentido del humor. En el pequeño libro se mezclan leyenda e historia en el relato con ironía y admiración en el estilo. La descripción de la grandeza de la epopeya musulmana está pincelada con burla fina respecto a los orígenes del dogma musulmán y manifestaciones del carácter de Mahoma, en especial su apasionamiento amoroso que Guzmán hubiera encontrado incómodo como paralelo, y algunos de sus antiguos camaradas por lo menos divertido. Pero lo más probable es que Guzmán haya hecho una lectura selectiva del texto, puesto que tuvo en cuenta solo la hipérbole romántica y no la ironía,⁶ aquella que describe la asombrosa epopeya musulmana como el equivalente histórico de “las tempestades que barren tierra y mar, hundiendo grandes barcos y abatiendo torres elevadas”.⁷ Esto tuvo el efecto de arrebatar la imaginación y el entusiasmo del auditorio senderista, haciéndolo sentir como el aún ignorado pero ya formidable nido de la tormenta.

Después de eso, el arrinconamiento del “movimiento positivo” no fue problema. No solamente obstaculizaban “la actitud, la cohesión y el optimismo que podemos desarrollar”, sino que al hacer “resistencia desde dentro” y “aplicar presión desde afuera” había colusión entre ellos y “el desertor”. La acusación fue contundente, y el acuerdo inmediato del Comité Central fue el de “no tener contacto con el desertor”. Otro senderista de la vieja guardia pasaba a convertirse en intocable.

La segunda parte de la reunión del Comité Central se realizó entre el 23 y el 26 de marzo. Durante los primeros días pareció que los problemas inter-nos habían quedado atrás, y que la discusión se iba a focalizar en la forma de “desarrollar la militarización del Partido a través de acciones”. Ese 23 se dedicó solo al análisis teórico y doctrinario. Los textos leídos y comentados fueron partes de las *Obras militares escogidas*, de Lenin y el discurso de Stalin del 3 de julio de 1941, poco después de iniciada la invasión nazi a la Unión Soviética. La razón de haber elegido ese texto fue para hacer comprender a los cuadros senderistas el carácter de la guerra que ellos iban a crear: total, de inédita violencia y destructividad. Solo de esa manera, enfatizó Guzmán, estando dispuesto a aceptar costos mucho mayores y sufrimientos mucho más intensos que los del enemigo, tanto en carne propia, pero también y sobre todo en la ajena, el Partido equilibraría la desventaja técnica y material frente a las fuerzas enemigas, se forjaría como una “máquina de combate” capaz de crecer y construirse alimentándose del colapso y la destrucción del viejo orden. La actitud de Stalin, dispuesto a arrasar su propia tierra, destruir toda su infraestructura y absorber las más pavorosas pérdidas humanas, a fin de derrotar al invasor nazi, era el ejemplo a tener en mente.

El 24 de marzo, la reunión se centró en analizar los antecedentes de insurrección armada en el Perú, en el pasado cercano. Luego de una “Visión general de las guerrillas de la década del 60. Perú: insurrección, revolución, guerrillas”, se pasó a estudiarlas en detalle. El movimiento de Hugo Blanco en La Convención fue analizado bajo el epígrafe: “El camino de nuestra revolución y tierra o muerte”. Las movilizaciones campesinas de 1963-64 fueron examinadas utilizando el libro de Hugo Neira: *Los Andes: tierra o muerte*. Y finalmente, la parte más importante de la discusión se dedicó a examinar las fallas de las “guerrillas del MIR”. En otro volumen de esta obra se examinarán las diferencias entre el modelo básicamente maoísta de insurrección que Sendero desarrolló, y las estrategias que se utilizaron en los movimientos mencionados arriba. En la circunstancia de esta reunión, el propósito que tuvo para los senderistas el análisis comparativo fue el de resaltar los defectos de esos otros movimientos, relacionarlos con taras ideológicas básicas, y explicar su derrota como consecuencia necesaria de estas, antes que de las virtudes de sus enemigos.

El 25 de marzo se dedicó a ver “la lucha campesina actual”. La primera parte fue diagnosticar “el fracaso de la ley agraria y sus resultados”. En ese aspecto, Guzmán afirmó que las tensiones y los desequilibrios creados por la aplicación de la ley de Reforma Agraria habían generado condiciones adecuadas para la remoción violenta del campo. El 26 de marzo se debía ingresar a tratar el tema de la convocatoria a la II Sesión Plenaria, el “desarrollar la militarización del Partido a través de acciones”. Sin embargo, ese fue el momento elegido por Guzmán para hacer reventar el conflicto interno. En una intervención aparentemente larga y agresiva, Guzmán demandó “resolver aquí” los problemas del Buró Político. Aquellos miembros del buró que persistían en su línea de oposición debían “definir su posición frente al desertor”, y frente al Partido, pues de lo contrario se enfrentaba un “peligro de escisión”. Con esa ominosa advertencia en tan grave momento, se suspendió la reunión hasta el día siguiente.

El 27 de marzo la confrontación llegó al punto de ruptura. En el caso que *Julio César* no hubiera sido suficiente para ilustrar a su audiencia cómo nacía y tomaba cuerpo una conspiración, Guzmán hizo leer trozos de *Macbeth*, donde se “describe cómo surge la traición y en su mente se va configurando. Ver cómo se gestan las acciones dañinas”.

Nadie debía sorprenderse, pues, de ver a algún dirigente de antaño, admirado y respetado, convertido objetivamente en un traidor. Eso estaba no solo dentro de lo posible sino que era históricamente probable. Y era obvio que el Partido debía ser por lo menos tan duro frente a ello como frente al enemigo.

Parece que aquí se quebró cualquier esfuerzo de resistencia coordinada. Durante el día no hubo más debates sobre “la lucha entre dos líneas”. Los clásicos literarios, empero, siguieron porfiando a favor de las tesis de Guzmán. Al enfocar el siguiente punto, el de la “ligazón” del Partido con las masas”, Guzmán hizo leer varios fragmentos largos de *Prometeo encadenado*, de Esquilo, para demostrar tanto el “ejemplo de capacidad de rebelión indoblegable”, como el papel necesario de “las masas”. “No se puede separar a las masas de los rebeldes”.

El día siguiente culminó la II Sesión Plenaria. La combinación de objetividad parcial, detallismo, organización temática, añadida al mensaje intenso y majestuoso de Shakespeare, Irving y Esquilo, había otra vez entregado jornadas victoriosas a Guzmán. Nunca habían sido para él más necesarias. Y su informe final remachó y anudó cuanto podía quedar aún confuso: había una “ligazón” entre “línea y lucha de dos líneas”; entre “desarrollar la militarización del Partido a través de acciones” y el grupo derechista. Lo peor, según dijo, fue que la “derecha” actuaba crecientemente como “mascarón de proa y con una base cuartel negro. Clan”.

La insinuación obviamente apunta a uno de los troncos de la “Sagrada Familia”,⁸ lo que fue acentuado, cuando Guzmán enfatizó la necesidad de “destrozar la línea del desertor y destruir, volar esa base-clan”. El Comité Central respaldó por entero a Guzmán.

Los acuerdos finales fueron siete: se aprobaron los informes, con los “aportes” del debate; se acordó “desarrollar la militarización del Partido a través de acciones” (es decir, pasar a la guerra); disponer, como consecuencia de lo anterior, “el reajuste general del Partido para centrar en lo militar”; “sancionar el plan de acciones para ILA según lo debatido”; “desarrollar la campaña de rectificación” (la promesa del cilicio autocrítico para los derrotados); se amplió, con una nueva incorporación, a seis el número de miembros del Buró Político senderista; se acordó realizar en fecha próxima la “Escuela Militar”; y, por último, celebrar otra reunión del Comité Central, “inmediatamente después de la escuela, a fin de completar los problemas pendientes”.

Las consignas a la militancia del Partido y los organismos generados, fueron cuatro: “Las masas claman organizar la rebelión”, “que las acciones hablen”, “comencemos el derrumbe de

los muros” (organizando grupos para la acción inmediata), “enarbolar el optimismo y desbordar el entusiasmo”. Las consignas se transmitieron y se machacaron, se repitieron en lemas, con cuidada liturgia, y se cantaron, sobre todo el último, en marchas compuestas poco después.

Banderas rojas se dibujaron en los cuadernos, cubrieron las paredes. Sobre ellas, la consigna general: “Comenzamos a derrumbar los muros y a desplegar la aurora”. De sangre, claro.

La “Escuela Militar”

El 2 de abril empezó la I Escuela Militar del Partido. Los futuros dirigentes militares de Sendero estaban ahí, y era ese el lugar donde iban a adquirir su formación básica; sin embargo, la escuela tenía muy poco en común con una academia o escuela militar convencional.

Esta escuela duró hasta el 19 de abril, a través de diecisiete días intensos y decisivos para Sendero. Una academia militar convencional o un campo de entrenamiento de grupos irregulares habría comprimido con seguridad al máximo el tiempo disponible para instruir a sus alumnos en habilidades militares puramente técnicas. Desde la preparación de explosivos hasta técnicas de demolición, preparación de emboscadas, combinación de armas a nivel táctico, manejo de armamento y puntería, armas silenciosas, técnica de comunicaciones clandestinas, formas de seguimiento, vigilancia y contravigilancia...

Como se verá en otra parte del libro, Sendero no dejó de prestar atención a este aspecto, pero tampoco dejó de considerarlo como necesariamente subordinado al factor ideológico. Y el propósito de la Escuela Militar, bajo la supervisión directa del Comité Central, no era el de empaparse en la tecnología tanática —puesto que ello se iba a aprender en la durísima escuela de la experiencia efectiva o, en todo caso, en cursos de nivel inferior—sino el de imbricar y relacionar a cada nivel el aspecto ideológico con la expresión militar. Ese era para Sendero el aspecto crítico, y merecía toda la atención, así fuera en vísperas de la guerra.

Que la línea ideológica era el factor decisivo fue machacado desde el inicio mismo de la escuela, a través de la selección de citas rituales. La primera fue aquella célebre de Mao, que había figurado en forma tan prominente en la década del 60 y a principios del 70, en las disputas con los partidarios de la línea cubana: “Cuando la línea del Partido es correcta, lo tenemos todo: si no tenemos fusiles los conseguiremos, y si no tenemos el poder lo conquistaremos. Si la línea es incorrecta, perderemos lo que hemos obtenido”. Las otras citas eran también de Mao, ataques al “oportunismo” y reconocimiento de su inevitabilidad. Eran las precisas para el propósito inicial de la escuela.

Luego del informe sobre el desarrollo y las conclusiones de la II Sesión Plenaria del Comité Central, se pasó a dos largas sesiones de “autocrítica” de los miembros del Comité Central “con problemas”, es decir, en el lado perdedor frente a Guzmán. Terminada la penitencia, el 3 de abril, intervinieron los asistentes a la escuela, para expresar su opinión de la situación del Partido, especialmente la “lucha de dos líneas y su expresión en el Comité Central”. A continuación, cada uno se lanzó al ejercicio agríndice de la autocrítica, “en cuanto esté relacionada a los problemas que estamos tratando”.

El día siguiente se dedicó por completo a “desarrollar luchas contra la derecha [...] dura lucha contra cascarones y los barreremos”. La mayor parte del programa de dicha lucha fue una

renovada autocrítica de los vencidos en el Comité Central, donde, bajo la mirada vigilante de los demás, continuaron descubriendo las fuentes inagotables del pecado propio.

El proceso continuó, inflexible, por varios días más, hasta el 9 de abril. Y casi cada día los “oportunistas de derecha” del Comité Central debieron, ante los jóvenes asistentes a la Escuela Militar, repetir y profundizar su autocrítica, descubrir nuevas faltas, volver a autocriticarse por no haberlas descubierto antes. Prisioneros del sistema, como lo estuvieron tantos otros dirigentes comunistas, en épocas no lejanas, en casi todos los partidos en el mundo, cualquier movimiento solo los enredaba más en las telarañas de la culpa. La cual no tenía necesariamente que ser real, pero no por ello dejaba de ser rigurosa. Veteranos dirigentes que agachaban la cabeza, mientras algún joven de gesto feroz, posiblemente un alumno no muy brillante en la escuela o la universidad, los señalaba acusatoriamente, imputándoles desviaciones potencialmente nefastas, ubicadas en el área gris entre lo involuntario y lo intencional, tomando después la palabra para agradecer a su acusador por guiarlo en ver y reconocer sus faltas, añadiendo luego con humildad que, no obstante, su camarada no había visto todos sus errores, puesto que en efecto...

Creadas como un método eficaz de análisis posfacto, diseñadas para anular mecanismos artificiosos de defensa del ego, la crítica y autocrítica habían devenido, desde los tiempos tempranos de la hegemonía staliniana, en una de las formas más eficientes que haya conocido la historia para control de grupos y de individuos, especialmente de individuos fuertes y motivados. Combatientes de valor otrora legendario que terminaron humillándose públicamente con autoinculpaciones extravagantes, pidiendo la pena de muerte con vehemencia, solo inseguros de si no era excesivo pedirle a una bala bolchevique contaminarse con su cerebro despreciable... De los procesos de Moscú en la década del 30 hasta la Revolución Cultural en los 60, las manifestaciones exacerbadas de autodestrucción personal dentro de la vida partidaria solo habían sido posibles gracias al ejercicio constante, sistemático, de los ritos de vigilancia, denuncia, defensa, reconocimiento de culpa, humillación y penitencia de la crítica y autocrítica.

A diferencia de la relación cristiana con el pecado, en la teología secular marxista, versión Stalin y Mao, se podía ser “objetivamente” culpable aunque “subjettivamente” se creyera estar procediendo correctamente. La honestidad del cuadro partidario se medía en la medida en que, señalada su responsabilidad “objetiva”, cooperara con el Partido en desmenuzar su conducta, en descubrir las raíces sutiles de su falta, o de su traición. Bajo la presión colectiva, el salto a la extravagancia y la histeria, el creer que se emergía a la superficie hundiéndose más, era frecuentemente inevitable. Y los cuadros honestos e íntegros resultaban sin duda más vulnerables a la destrucción autocrítica que los más fríos y cínicos.

Había otro motivo para zambullirse en los excesos de la autocrítica. La supuesta sinceridad y objetividad de esta eran el camino no solo al reconocimiento de errores sino a la afirmación ante los demás de la condición de comunista sincero. De hecho, todos los militantes pasaban por versiones más o menos rutinarias de crítica y autocrítica. En ese contexto, las desviaciones “objetivas”, aunque fueran mayores, eran teóricamente pasibles de redención.

Y, por último, el humillado penitente era, en alguna forma, consciente de desempeñar un rol históricamente útil y necesario. ¿No había dicho Mao que “si no hubiera en el Partido contradicciones y luchas políticas para resolver las contradicciones, la vida del Partido llegaría a su fin?”. El desviacionista de uno u otro momento era el abogado del diablo de la historia, y así, si le tocaba en suerte ocupar el poco deseado pero indispensable puesto, había que actuar como un buen comunista y hacerlo concienzudamente y a fondo.

En el Perú, todos los movimientos marxistas habían practicado con mayor o menor

intensidad el ritual obligatorio, pero ninguno con la consistencia sistemática y comprehensiva, amoldada a los objetivos partidarios, de Sendero. Pocos dentro de la organización habían dejado de pasar por ese callejón oscuro, excepto, claro, Guzmán, y esa era otra de las reglas tácitas heredadas del stalinismo y perfeccionadas por Mao. El único exceptuado de los efectos corrosivos de la crítica y la autocrítica, el único cuyas autocríticas ceremoniales eran emotivamente rechazadas, era el presidente, el jefe, el guía. Aquel, siguiendo a Orwell, “más igual que los demás”. En cuanto al resto, el tránsito crítico y autocrítico los acompañaría sin olvido por el resto de su existencia partidaria, los debilitaría y, dado el caso, los obligaría a cooperar en su propio aniquilamiento.

Caza de herejías y penitencia: tal fue la primera semana de la Escuela Militar. El nadir de la reunión se alcanzó el 6 de abril con lecturas de citas de Mao sobre los métodos péfidos de la oposición de derecha y de *Contra el trotskismo*, de Stalin, seguidas por intervenciones de los asistentes a la escuela. El 7 de abril, ya totalmente poseídos por el espíritu de la “lucha de dos líneas”, los asistentes escribieron y leyeron peticiones “de defensa de condición de comunista”, a lo que siguió otra hemorragia autocrítica. Luego de ello, y después de una lectura adicional de citas pertinentes de Mao “sobre sectarismo y subjetivismo”, Guzmán pudo resumir lo alcanzado como una “derrota aplastante para el derecho; rotundo éxito para la izquierda. La campaña de rectificación está en marcha”. El día siguiente, 8 de abril, fue solo de acciones de consolidación concienzuda. Hubo ahí, no obstante, un dato revelador. Un punto de la discusión fue el determinar la “situación de los cuatro compañeros. que presentaron ‘defensa’”. Asumiendo como lo más probable que ellos fueran el núcleo de la oposición en el Buró Político y en el Comité Central, resulta evidente que Guzmán enfrentó la oposición de un sector sustancial de la dirección partidaria. Si tal fue, y los datos disponibles así lo sugieren, Guzmán hizo frente en esa fecha decisiva a uno de los desafíos mayores a su control partidario; y su forma de combatirlo fue como Mao se lo hubiera aconsejado: apoyándose en los cuadros medios y en parte de las bases del Partido.

Desde el 9 de abril, la escuela empezó a examinar aspectos básicamente militares. Luego de la exposición y el debate sobre la filosofía militar maoísta (la guerra prolongada, el camino de cercar las ciudades desde el campo, las bases de apoyo), se pasó a discutir el inminente comienzo de la lucha armada a la luz del marxismo. Para explicar el punto de “cómo iniciar la lucha armada a partir de la nada”, se examinó la experiencia temprana de Mao (“Cosecha de otoño”, “investigación rural en Junán”) y las tesis de Lenin sobre las condiciones revolucionarias y el papel del Partido Comunista en ellas.

El 11 de abril, en un característico bandazo táctico, Guzmán focalizó de nuevo las energías de los asistentes en otro episodio de lucha intestina, al que denominó, “el segundo descabezamiento”. Si la abrumada, castigada y vencida oposición esperaba un mínimo de *fair play*, ello significaba que no conocían a Guzmán. Este leyó el párrafo célebre de Mariátegui:

Soy revolucionario. Pero creo que entre hombres de pensamiento neto y posición definida es fácil entenderse y apreciarse. Con el sector político con el que no me entenderé nunca es el otro: el del reformismo mediocre, el socialismo domesticado, el de la democracia farisea.⁹

Y luego de dejar que calara en su auditorio, Guzmán anunció que la tarea de ese momento era la limpieza del “montón colosal de basura”, que según la metáfora de Engels dejan las luchas ideológicas del movimiento obrero tras de sí. El proceso de baja policía ideológica duró todo el día y concluyó, inflexiblemente, con otra ronda más de autocríticas de los integrantes del

desventurado detritus histórico, y el triunfante resumen final de Guzmán: “Hemos mostrado una forma más de lucha contra el derechismo descabezado”.

En los últimos días, entre el 14 y el 19 de abril, se dedicaron ya solamente a temas militares. El primer aspecto abordado fue el de la forma de “la construcción del ejército revolucionario”, cuyo eje debía ser la “dirección absoluta del Partido en el Ejército”, mediante un permanente “trabajo político en el Ejército”.

A continuación se debatió el “Plan de inicio” de la insurrección. El plan combinaba una minoría de acciones armadas que catalizaban una mayoría de “medidas de fuerza”. Las principales eran: “levantar cosechas” (de dueño ajeno, se entiende), dirigir invasiones y “combatir al gobierno reaccionario apuntando al poder local” (a nivel de distrito), para pasar meses después a las acciones guerrilleras. En forma más inmediata, se discutieron acciones para reforzar el “boicot electoral”, que se concretarían un mes después en la primera acción de la guerra, aunque en conjunto tuvieran un impacto mínimo.

La lucha inicial debía ejecutarse y canalizarse a través de las “formas germinales” de acción revolucionaria. Las acciones armadas o de fuerza deberían ser dirigidas por destacamentos, embrión de la futura “Primera Compañía”; las acciones administrativas, a través de “comités de reparto”.

En los términos esquemáticos de Sendero, el plan comprendía:

Primero, las tareas políticas a cumplir, esto es iniciar la lucha armada, boicotear las elecciones, impulsar armadamente la lucha armada por la tierra y sentar las bases de lo nuevo, especialmente del poder; segundo, formas de lucha: guerrilla, sabotaje, propaganda y agitación armadas, aniquilamiento selectivo; tercero, formas orgánicas y militares: destacamentos militares, con o sin armas modernas; cuarto, cronograma, día del inicio y duración del plan, acciones simultáneas para fechas específicas; quinto, consignas: “¡lucha armada!”, “¡gobierno de obreros y campesinos!” y “¡abajo el nuevo gobierno reaccionario!”.¹⁰

Otra parte importante de la discusión fue prever la respuesta del Estado. Sendero sabía que la debilidad del gobierno militar y, sobre todo, el estado de transición hacia la democracia, hacían sumamente improbable una respuesta contundente. Se podía contar solo con una reacción policial limitada. Sobre la base de eso se concretó el plan de acciones, que abarcaba desde “el inicio hasta el quiebre de los primeros cercos”.

El 16 y el 17 de abril estuvieron dedicados a la inmersión en los postulados de la filosofía militar maoísta y su aplicación a la realidad peruana, en particular la relación dialéctica entre categorías estratégicas y tácticas. Si el Estado peruano, como el proverbial “tigre de papel” podía ser estratégicamente despreciado, en razón de sus debilidades estructurales, debía ser a la vez tenido muy en cuenta en el aspecto táctico, en cada caso concreto donde sus medios y poderío podían ser los de un tigre real.

El desdén estratégico y la cautela táctica significaban, en los hechos, la necesidad paradójica de mantener la iniciativa táctica en un contexto global de “defensa estratégica” que iba a durar varios años. El objetivo de la agresividad táctica era crear, “mediante nuestros esfuerzos, muchos casos de superioridad e iniciativa locales, privando así una y otra vez al enemigo de esta superioridad e iniciativa y empujándolo a la inferioridad y a la pasividad”.¹¹

Había otro factor vital: la calidad del conductor de la guerra, o en términos marxistas, la “dirección subjetiva”. De acuerdo a Mao, “además de las condiciones materiales objetivas, el vencedor debe necesariamente su triunfo a una dirección subjetiva correcta y el vencido debe su derrota a una dirección subjetiva errónea. [...] Armados de esta dirección correcta en línea

correcta, podemos lograr más victorias y transformar nuestra inferioridad en superioridad y nuestra pasividad en iniciativa”.¹² En cuanto a la “dirección subjetiva correcta”, ninguno de los participantes en la escuela, ni siquiera los decapitados, parecen haber albergado duda alguna sobre la capacidad del líder que había dirigido tan concienzudos “descabezamientos” en los días anteriores.

La parte final de la Escuela Militar versó sobre la forma de organizar guerrillas y los principios básicos de la guerra insurreccional, incluyendo las categorías maoístas de guerra prolongada en líneas interiores y ofensiva táctica en líneas exteriores.¹³ En este último aspecto se revisaron las formas de combate de la guerra de guerrillas (ataque sorpresivo y emboscada), y se terminó con una revisión de “los diez principios militares”, “normas generales y concretas” y la “gran generalización de estrategia y táctica”.

El 18 de abril se examinaron los antecedentes a la inminente lucha armada. Se volvieron a revisar, en orden: la “lucha en La Convención 1962-63”; el “movimiento campesino de 1963/64”; las “guerrillas del 65”; la “lucha popular en la actualidad”; y finalmente, “el sistema orgánico (del Partido) y el inicio de la lucha armada”.

Un día después, el 19 de abril, se clausuró la Escuela Militar. Temprano hubo un debate sobre el “significado” de la escuela, y después los militantes intervinieron para expresar los cambios que aquellos diecisiete intensos días habían operado en ellos. Todos, sin excepción, emocionados, penetrados por una sensación intensa de protagonismo universal, de destino.

En la clausura misma, Abimael Guzmán tomó la palabra y pronunció el discurso que adquiriría luego fama como su más acabada pieza oratoria: “Somos los iniciadores”. Hay varias versiones del mismo. Reproduzco los fragmentos más emotivos de una de las más confiables.

Camaradas: Ha concluido nuestra labor con las manos desarmadas, se inicia nuestra labor armada. [...] Un período ha terminado. Sellamos hasta aquí lo hecho; aperturamos [sic] el futuro, la clave son las acciones, objetivo el poder. Eso haremos nosotros, la historia lo demanda, lo exige la clase, lo ha previsto el pueblo y lo quiere; nosotros debemos cumplir y cumpliremos. Somos los iniciadores.

La revolución anidará en nuestra patria; de eso respondemos nosotros. [...] estamos entrando a la ofensiva estratégica de la revolución mundial, los próximos cincuenta años serán del barrimiento del dominio del imperialismo y todos los explotadores [...] la guerra popular crecerá más cada día hasta derrumbar el viejo orden, el mundo está entrando en una nueva situación: la ofensiva estratégica de la Revolución Mundial. Esto es de trascendental importancia.

El presidente Mao planteó: “La tormenta se acerca, el viento brama en la torre”. [...] el vértice está comenzando, crecerán las llamas invencibles de la revolución, convirtiéndose en plomo, en acero, y del fragor de las batallas con su fuego inextinguible saldrá la luz, de la negrura la luminosidad y habrá un nuevo mundo. [...] Sueños de sangre de hiena tiene la reacción; agitados sueños estremecen sus noches sombrías, su corazón maquina siniestras hecatombes; se artillan hasta los dientes, pero no podrán prevalecer, su destino está pesado y medido.

[...] Y el pueblo se encabrita, se arma y alzándose en rebelión pone dogales al cuello del imperialismo y los reaccionarios, los coge de la garganta, los atenaza y, necesariamente, los estrangulará. Las carnes reaccionarias las desflecará, las convertirá en hilachas y esas negras piltrafas las hundirá en el fango; lo que quede lo incendiará y sus cenizas las esparcerá a los confines de la tierra para que no quede sino el siniestro recuerdo de lo que nunca ha de volver, porque no puede ni debe volver.

[...] Las trompetas comienzan a sonar, el rumor de la masa crece y crecerá más, nos va a ensordecer, nos va a atraer a un poderoso vórtice [...] y así habrá la gran ruptura y seremos hacedores del amanecer definitivo. [...] El fuego negro lo convertiremos en rojo y lo rojo en luz. Eso somos nosotros, esa es la reconstitución. ¡Camaradas, estamos reconstituídos!

Hemos aprendido a manejar la historia, las leyes, las contradicciones. [...] Están compaginados el proceso

mundial, el proceso del país y el proceso del Partido. Por tanto, el futuro está asegurado.

[...] Somos los iniciadores. Comenzamos diciendo somos los iniciadores. Terminamos diciendo, somos los iniciadores [...]. Camaradas, la hora llegó, no hay nada que discutir, el debate se ha agotado. Es tiempo de actuar, es momento de la ruptura y no la haremos en lenta y tardía meditación, ni en pasillos ni en cuartos silenciosos, la haremos en el fragor de las acciones bélicas [...].

El marxismo-leninismo-pensamiento Mao-Tse-tung, el proletariado internacional y los pueblos del mundo, la clase obrera y el pueblo del país, el Partido con sus bases, cuadros y dirigentes, toda esta grandiosa acción conjunta de siglos se ha concretado aquí. La promesa se abre, el futuro se despliega. ILA 80.¹⁴

No había estado, después de todo, desencaminado Guzmán al hacer leer *La vida de Mahoma* de Irving. La estructura profética y milenarista del discurso es evidente; cambiando algunas palabras, pudo haberse pronunciado cientos de años atrás, llamando a la guerra divina, afirmando la protección de la providencia, el foco del destino, la bienaventuranza inminente al cabo de los necesarios trabajos y sacrificios. Era la rebelión de los comisarios místicos; ese día se iniciaba. En todo caso, los miembros del extático auditorio, sintiendo fervientemente ser los emisarios del milenio, firmaron a continuación el compromiso:

Los comunistas de la I Escuela Militar del Partido, sello de los tiempos de paz y apertura de la guerra popular, nos ponemos en pie de combate como sus iniciadores, asumiendo bajo la dirección del Partido y ligados al pueblo, la forja de las invencibles legiones de hierro del Ejército Rojo del Perú. ¡Gloria al marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-tung! ¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Por el camino del camarada Gonzalo, iniciemos la lucha armada!.

No es difícil imaginarse a los militantes de la I Escuela Militar en ese momento. Jóvenes, incluso muy jóvenes la mayoría, sintiendo la intensa emoción de quien está seguro que va a luchar por una causa trascendentemente noble, que conduciría en determinado momento a la humanidad entera hacia la felicidad. No eran muchos y no tenían medios, pero no había ningún grupo en el país y quizá en el hemisferio más motivado, convencido y decidido que aquel. En los años siguientes ese grupo ejecutaría o provocaría, muriendo gran parte de ellos en el empeño, las mayores violencias, las más calamitosas laceraciones en la historia del país. Dolor sin redención posible, sufrimiento inatenuable. En el proceso, muchos siguieron creyendo en la visión del bien final, que el 19 de abril de 1980 les pareciera certeza absoluta. Otros, con carnes y huesos destrozados, propios o ajenos, dejaron de creerlo, pero eso ya no tuvo consecuencias.

-
- 1 Entre las anotaciones disponibles, me he guiado por una versión mecanografiada en 1981 por la Jefatura Policial de Ayacucho (“¡Viva la lucha armada!”) con base en cuadernos y notas capturados.
 - 2 La cita con algunos cambios en la transcripción proviene de: Engels, F.; Marx, C. “Carta a Ludwig Kugelmann, 17 de abril de 1871”, *Obras escogidas*. Moscú: Editorial Progreso, 1974, pp. 705-706.
 - 3 Hago la transcripción exacta, incluyendo incorrecciones idiomáticas.
 - 4 Hay una versión breve y saneada del incidente, de acuerdo a la óptica senderista, en: “Bases de discusión” [línea militar], *El Diario*, 6 de enero de 1988, p. 6. Sobre la acusación de “hoxhismo” a Guzmán, ver, en el mismo documento, p. 7.
 - 5 Irving, [...]. Washington. *The Life of Mahomet*. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1850.
 - 6 Pero debe haber encontrado cierta satisfacción en leer las tribulaciones tempranas comunes a los profetas: “La mayor dificultad que hubo de enfrentar Mahoma al inicio de su carrera profética fue la burla de sus oponentes. Aquellos que lo conocieron desde su infancia, que lo vieran como niño en las calles de La Meca, y luego ocupado en los menesteres ordinarios de la existencia, se reían ante su pretensión de carácter apostólico. Y

aquellos que habían presenciado sus accesos de excitación mental lo consideraban insano”. Irving, *op. cit.*, pp. 57-58. La traducción es mía.

- 7 *Ibídem*, p. 49.
- 8 Durante la década del 60 y 70, los enemigos políticos de Sendero llamaban la “Sagrada Familia” a aquella parte considerable de la dirigencia senderista que se encontraba unida por diversos, y a veces complicados, lazos de parentesco entre sí.
- 9 Mariátegui, José Carlos. “Carta a Samuel Glusberg, 30 de abril de 1927”, *Correspondencia de Mariátegui*, tomo I, p. 273. La cita está transcrita tal cual aparece en el documento senderista.
- 10 “Bases de discusión” [línea militar], *El Diario*, 6 de enero de 1988, p. 6.
- 11 La cita, con pequeñas modificaciones en la transcripción senderista, proviene de: Mao Tse-tung. “Sobre la guerra popular prolongada [1938]”, *Selección de escritos militares*. Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1967, p. 263.
- 12 *Ibídem*, p. 264.
- 13 Sobre la posible influencia de Jomini en la concepción maoísta de “líneas interiores” y “líneas exteriores”, véase: Collier, Thomas; Shy, John. “Revolutionary War”. In Craig and Paret, eds., *Makers of Modern Strategy*. Princeton: Princeton University Press, 1986, pp. 843-844.
- 14 Versión en: Mercado, Rogger. *El APRA, el PCP y Sendero Luminoso*. Lima: Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 85-90.

IV. Transferencia y expectativas

Entre tanto, las diligencias para la transferencia de gobierno y de sistema proseguían entre los personeros de Acción Popular y miembros del gobierno militar. El Parlamento se preparaba, después de doce años, a reasumir sus antiguas funciones. Viejos burócratas, parcialmente reentrenados a través de las labores de la Asamblea Constituyente, retomaban los lentos y solemnes mandos administrativos del edificio de la plaza de la Inquisición. La mayoría eran personas que habían participado activamente en la política electoral desde la década del 50, o incluso antes. Con variaciones, la lista de senadores y diputados no difería grandemente de la que leyeran los relatores y secretarios en los tempestuosos días anteriores al golpe del general Velasco en 1968. El péndulo proverbial en la política peruana, a veces exagerado como figura, era esta vez una metáfora exacta. En conjunto, eran pocos quienes retornaban enriquecidos por las experiencias de los doce años anteriores; eran menos, en todo caso, que aquel otro grupo dentro del Partido que iba a gobernar, del que podía decirse lo mismo que de los emigrados borbones, que “nada habían olvidado y nada habían aprendido”. En verdad, para muchos de los acciopopulistas que entonces retornaban al gobierno, el año anterior a 1980 no había sido 1979 sino 1968.

Entre los que se quedaron, algunos de los ahora parlamentarios de Acción Popular habían colaborado con el gobierno militar en puestos menores o intermedios. Otros, el mayor porcentaje, habían sido simplemente testigos y sujetos pasivos de los tiempos de Velasco y Morales. Viendo, sin participar, los tiempos de entusiasmo y gran reforma, sin oponerse, salvo en la defensa de su pasado gobierno; y asistiendo luego, sin ayudar en ello tampoco, a la depresión y el desmadejamiento del gobierno militar.

Al retornar al poder, lo hacían con los conocimientos y métodos de política y gobierno anteriores al golpe de Velasco. Eso era lo que sabían hacer, y de cualquier forma, todo lo que recordara siquiera los sistemas alternativos de organización empleados por el gobierno militar, era visto como algo de mal tono.

Eran un conjunto heterogéneo que reflejaba la marcada diversidad de una parte importante de las élites peruanas. Una minoría procedía de las familias notables tradicionales, especialmente de Lima y Arequipa, o eran hijos o nietos de inmigrantes prestigiosos. Muchos tenían lazos de parentesco entre sí, especialmente con Belaunde, o podían remontar su relación con el presidente a la amistad entre padres o abuelos, que en más de un caso había arrancado bajo el común servicio al caudillo Nicolás de Piérola. Otros eran profesionales destacados y compañeros del arquitecto desde los primeros tiempos. Eran el cogollo de Acción Popular, una combinación de

aristocratizantes y meritócratas (frecuentemente combinados en la misma persona), que tenía una implícita diferencia de clase, una diferente relación con Belaunde que el resto.

La mayoría de parlamentarios y dirigentes populistas pertenecía a la clase media provinciana y urbana. No tenían la lumbre cosmopolita o genealógica de los otros “correligionarios” al decir acciopopulista pero, quizá por ello, tenían mayor experiencia en la política de comité partidario. Y estaban decididos a contar y a hacerse escuchar. Su caudillo natural fue, desde el inicio, Javier Alva Orlandini, epítome del *aparatchnik* populista y del cacique político provinciano.

Alva maniobró desde el momento de la victoria electoral para colocar a sus allegados, populistas ligados a él a través de las clásicas relaciones de favor y obligación, en posiciones de influencia. Tenía el respaldo de un grupo sustancial de parlamentarios de Acción Popular, y también mayoría en los comités partidarios; demostró (condición indispensable en cualquier manejador político) estar dispuesto a utilizar su poder. Apenas iniciadas las labores parlamentarias, humilló al candidato de su partido a la Presidencia del Senado, el neurólogo Óscar Trelles, negándole los votos necesarios para la elección. Solo después de negociaciones que equivalían a reconocer su rol decisorio en el manejo de la mayoría parlamentaria, dio la orden a sus allegados de votar a favor de Trelles. El mensaje fue muy claro, y buen número de parlamentarios provincianos indecisos se apuraron en acercarse a Alva.

El Ministerio del Interior era uno de los sectores que Alva estaba más interesado en controlar. Él había sido ministro del sector durante el primer gobierno de Belaunde y conocía bien las posibilidades de control e influencia que ofrecía el manejo del ministerio. El problema era que entre él y el ministro nombrado, José María de la Jara, no sobraba el afecto.

De la Jara había ofrecido el cargo de viceministro al historiador Héctor López Martínez, amigo de vieja data, y Belaunde había aceptado de inmediato. Sin embargo, al enterarse, Alva Orlandini invitó a De la Jara a un almuerzo en el hotel Crillón donde, rodeado por varios de sus senadores, le dijo al inminente ministro que López Martínez era inaceptable. Había colaborado con el gobierno militar, y aún se desempeñaba como director de *El Comercio*, todavía controlado por los militares.

De la Jara era la antítesis viva de Alva Orlandini, pero le sobraban vehemencia y pugnacidad. Sin dar explicaciones a Alva, le dijo que López Martínez “se quedaba”. Minutos después, el almuerzo terminó “a capazos”, al decir de un concurrente. De la Jara se comunicó con Belaunde e hizo cuestión de Estado la permanencia de López Martínez. El presidente, que conocía tanto el carácter de De la Jara, como que López Martínez permanecía en *El Comercio* en total acuerdo con la familia propietaria, los Miró Quesada, preparando el camino para la recuperación del diario (de hecho, López Martínez volvió a *El Comercio* al dejar el Ministerio del Interior), habló con Alva Orlandini e impuso la decisión de De la Jara.

La mala sangre entre ambos dirigentes de Acción Popular se espesó cuando De La Jara procedió a nombrar nuevos jefes en las fuerzas policiales. Alva quiso mantener al jefe de la Guardia Civil, general Humberto Passano, quien era su amigo. De la Jara se negó y mantuvo su decisión.

Semanas antes de asumir el Ministerio del Interior, De la Jara y López Martínez habían abordado la empresa crucial de nombrar nuevos jefes para las fuerzas policiales. El proceso fue cualquier cosa menos técnico. Las recomendaciones llovieron. Casi cada jerarca acciopopulista tenía candidatos y protegidos propios. Los policías elegibles maniobraron al límite de sus posibilidades, tratando de conseguir favor político y de impedir el progreso de sus rivales. Entre confusos y sorprendidos, De la Jara y López Martínez pidieron el escalafón y decidieron “en

parte guiados por las recomendaciones, en parte por instinto”,¹ nombrar a los generales Juan Balaguer como jefe de la Guardia Civil; Eduardo Ipinze, de la Policía de Investigaciones; y Julio Estrada, de la Guardia Republicana. Para todo efecto práctico, la paz de la República descansaría en esas personas.

Balaguer había servido en la última parte del gobierno de Morales Bermúdez como jefe de la autoridad encargada de la recuperación de la zona devastada por el terremoto y el aluvión de 1970. Como tal, había tenido rango de ministro, y si alguien vio en ese antecedente el presagio de un problema, acertó por completo. Balaguer confería una impresión de energía y dureza a través de la adopción del estereotipo del gesto adusto y la voz ronca, común a tantos militares y policías en Latinoamérica. Esa era, después de doce años de gobierno militar, una actitud devaluada, pero que a falta de alternativas, aún aparecía como genuina. Su período de gestión ministerial había consolidado uno de sus principales defectos, la vanidad. Los procesos intelectuales de la burocracia verticalizada habían hecho el resto, y para Balaguer y sus generales el progreso institucional se medía por los honores protocolares acordados a su comando y los fueros administrativos puestos bajo su control. Eso era lo principal, y lo otro —los medios efectivos con que contaba la Policía, la calidad de la instrucción, el bienestar de sus efectivos— secundario.

Ipinze provocó menos dudas. Era un general relativamente joven, con la apostura y la reputación de un Elliot Ness latino, que había ascendido rápidamente como jefe de una “brigada” especializada en la investigación criminal. Su disposición a dirigir personalmente intervenciones y arrestos le había significado muy buena prensa, y para un sector del público Ipinze aparecía como la encarnación del ideal de policía moderno, honesto y eficaz que el país necesitaba.

Había, empero, otro lado en la historia, entonces solo conocido por unos pocos en las instituciones policiales y en algunos servicios de inteligencia. Luego de dirigir la “brigada”, Ipinze había pasado a comandar la “división”,² de represión del tráfico de drogas en 1978, cuando el narcotráfico asumía proporciones mayores y varias organizaciones nacionales tomaban cuerpo. En esa época, de acuerdo a lo que se supo años después, Ipinze estrechó sus relaciones con el entonces oscuro contador público Reynaldo Rodríguez López, presumiblemente a través de otro policía, José Jorge Zárate.³ Rodríguez López ya estaba firmemente encaminado en montar lo que sería, a partir de 1982, y quizá desde antes, la más poderosa y mejor organizada red de narcotráfico en el Perú. Aunque es probable que el proceso de corrupción en Ipinze se haya iniciado antes, el salto al comportamiento delictivo tuvo lugar entonces.⁴

La corrupción contaminó inmediatamente a la “división” de narcóticos. Que eso sucediera era quizá inevitable, teniendo en cuenta la fuerza económica del narcotráfico, pero la iniciativa del jefe no solo aceleró tremendamente el proceso sino lo uniformó.

El núcleo de policías honrados que suele subsistir en los procesos espontáneos de corrupción fue puesto de lado o transferido. La calidad del trabajo policial sufrió un deterioro inmediato.

En 1978, la Drug Enforcement Administration (DEA), del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tenía ya destacado un equipo de agentes en Lima para coordinar investigaciones e intercambiar inteligencia sobre redes de narcotráfico con la Policía peruana. El jefe del equipo era un veterano policía, William Wetherington. Cuando se hizo evidente que la corrupción de la dirección de narcóticos tornaba imposible cualquier cooperación, Wetherington trató de empezar a desarrollar investigaciones sobre narcotráfico con la Dirección de Inteligencia de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), entonces bajo el comando del general PIP Edgar Luque Freyre.

Luque cooperó entusiastamente y logró la aprobación de su comando para emprender

investigaciones conjuntas con la DEA. En una de ellas, un agente novato, José Vásquez Vargas, que se encontraba siguiendo a uno de los narcotraficantes entonces más poderosos, Alfonso Rivera Llorente, fue emboscado por este y otros miembros de su banda, torturado y asesinado. Uno de los asesinos era un oficial en actividad de la Policía de Investigaciones, David Barrios Esponda.⁵

En el empeño por capturar a Rivera Llorente, quien fugó del país inmediatamente después del asesinato, Luque extremó el celo y arriesgó más de lo común en un policía. De hecho, una guerra tácita e inicialmente silenciosa quedó declarada entre las direcciones de narcos y de inteligencia, y sobre todo entre Luque e Ipinze. Luque capturó a varios policías sospechosos y, contra las reglas no escritas de su institución, los hizo “colgar”, es decir, los interrogó bajo una forma de tortura estandarizada en la labor policial peruana que consiste en suspender en el aire a la víctima, con los brazos amarrados atrás, sujeto a soga ligada a codos y muñecas. El dolor en los hombros, que frecuentemente se descoyuntan, es extremo, y la presión sobre el diafragma crea una sensación de asfixia acrecentada por golpes, jalones, insultos.

Luego, Luque obtuvo la cooperación de un importante narcotraficante colombiano, Franco Giraldo, quien había sido capturado poco antes al llegar a Lima. Giraldo estaba dispuesto a informar sobre el paradero de Rivera Llorente si se le dejaba en libertad y se le permitía retornar a Colombia. Luque aceptó; Giraldo viajó a Colombia, donde poco después de llegar fue asesinado.

El enfrentamiento personal entre Ipinze y Luque se hizo inevitable. Ipinze y su grupo, más numeroso y astuto que el de Luque, presentaron el fracaso de la operación como algo más que incompetencia policial. Según ellos, Luque había cometido un delito al dar libertad a un reo en cárcel sin autorización del juez; y técnicamente tenían razón. Para Luque y su personal, la información sobre la misión secreta de Franco Giraldo había sido revelada a narcos colombianos por miembros corruptos de la Policía de Investigaciones, probablemente por gente de la dirección de narcóticos. Confrontado con el brote de conflicto interno, el entonces jefe de la Policía de Investigaciones Manuel Lezama convocó, no queriendo arriesgarse a tomar una decisión por sí mismo, un “consejo de generales” para discutir el problema.

En la reunión, la discusión devino prontamente acalorada. Ipinze, de carácter agresivo y a quien además le convenía que predominara el apasionamiento, contestó a las acusaciones de Luque con una bofetada, que resonó en el folklore institucional por varios años. Luque, más pequeño que Ipinze y sobre todo menos agresivo, quedó demudado por el ataque y solo atinó a protestar ante Lezama. Este, hombre de carácter irresoluto, mandoneado a voluntad por sus jefes militares, intentó a medias sancionar a Ipinze, sin conseguir hacerlo. Con un solo gesto, Ipinze emergió triunfador del conflicto. La Dirección de Inteligencia dejó las investigaciones de drogas, y las pesquisas sobre el caso Rivera Llorente-Giraldo naufragaron.⁶ Quedó claro para todos los enterados, no obstante, que la historia de la institución en los próximos años iba a ser la de la rivalidad entre Luque e Ipinze.

Ignorando ese trasfondo, actuando con las mejores intenciones y la más reveladora ingenuidad, De la Jara y López Martínez nombraron a Ipinze como el primer jefe de la Policía de Investigaciones bajo el nuevo gobierno democrático.⁷

El jefe de la Guardia Republicana, Julio Estrada, era básicamente una persona inocua, que provenía como casi todos los altos oficiales de su generación de los mandos medios del Ejército. La Guardia Republicana era, pese a estar modelada para cumplir funciones de gendarmería, la más pequeña de las instituciones policiales. Dentro del perenne proceso de esgrima y

enfrentamientos intrainstitucionales, la Guardia Republicana había funcionado siempre como aliada del Ejército para el propósito de neutralizar a la Guardia Civil. Si en la relación frente a las Fuerzas Armadas, y sobre todo frente al Ejército, la Guardia Civil había tenido el papel de cenicienta, en su relación con las otras policías (por lo menos desde la perspectiva de sus integrantes) había actuado como madrastra. En la visión de los estados mayores de cada institución, los “objetivos institucionales” exigían tratar de abarcar el mayor número posible de funciones e impedir que las instituciones rivales lo hicieran, para justificar el crecimiento propio e impedir el ajeno. En ese aspecto, luego de los esfuerzos de “lobbying” en la Asamblea Constituyente, cada una de las policías se encontraba en efervescencia, preparada para tratar de extender al máximo posible sus prerrogativas a costa de las rivales. Ello iba a desembocar, entre otras cosas, en enfrentamientos constantes entre policías en la calle, algunos de ellos violentos, en los meses siguientes.

Entre tanto, nombrados ya los jefes policiales por su futuro ministro, la transferencia se abocó a traspasar información sobre cuestiones administrativas y sobre las prioridades en el trabajo policial. Debió también incluir el traspaso, con una explicación pormenorizada, de los archivos de inteligencia sobre grupos subversivos, pero eso no sucedió; y la forma en que se escamoteó la información existente al nuevo gobierno civil constituye un capítulo simultáneamente triste e incriminatorio, sobre la forma en que el gobierno militar entregó a la democracia el presente griego de una insurrección que no había sabido comprender ni detectar.

-
- 1 Entrevista con Héctor López Martínez, el 6 de mayo de 1987.
 - 2 Tanto la “brigada” como la “división” eran dependencias policiales relativamente pequeñas, con algunas decenas de detectives trabajando en ellas. La elección de la terminología militar revelaba simplemente el deseo compulsivo de la Policía de imitar el tono, las formas, la organización y hasta la estructura operativa de los militares, con resultados a veces patéticos.
 - 3 Sobre José Jorge Zarate, veremos su caso más adelante en “Coloquio de ciegos”.
 - 4 En 1978, la policía antinarcóticos a cargo de Ipinze arrestó a la esposa de Rodríguez López y a una colombiana en un laboratorio de cocaína en Lima. Rodríguez López no fue arrestado ni mencionado en el atestado policial y las dos mujeres salieron libres por orden de un juez que posteriormente recibió pasajes gratuitos de Rodríguez López. Tanto Ipinze como el capitán a cargo del caso figuraron documentalmente como beneficiarios de favores de Rodríguez López poco después. Sobre el caso, “Villa Coca” (el de la organización de Rodríguez López), ver los artículos de *Caretas* al respecto, sobre todo julio-agosto 1985 y junio-diciembre 1986. Sobre el detalle de la investigación policial, fiscal y judicial sobre Ipinze, ver el atestado policial del 28 de enero de 1986, firmado por los generales Alberto Suárez Caballero y Raúl Chávez Gonzales, páginas 37-40 principalmente, y los dictámenes posteriores del fiscal *ad hoc* Miguel Espinoza y del juez instructor Hugo Príncipe Trujillo.
 - 5 El episodio está narrado, aparte de los reportes de la prensa peruana, en el libro del periodista de investigación estadounidense, James Mills: *The Underground Empire*. Garden City, New York: Doubleday, 1986.
 - 6 Hasta el día de hoy Rivera Llorente permanece fugitivo. Para más detalles sobre su fuga y la pesquisa, ver el libro referido de James Mills.
 - 7 Ello no quiere decir, de paso, que los sectores más pragmáticos dentro de Acción Popular, que tengan experiencia en el manejo del portafolio, hubieran tomado una decisión diferente. De hecho, la mayoría parlamentaria, controlada por Alva Orlandini, impidió el ascenso de Luque y favoreció el de los miembros del grupo Ipinze. Y más adelante, cuando tomaron el control del Ministerio del Interior, la corrupción creció explosivamente, hasta controlar, para todo propósito práctico, el ministerio.

V. Los archivos desaparecidos

En la noche del 27 de julio de 1980, Héctor López Martínez dejó la dirección de *El Comercio* y pasó al Ministerio del Interior. El corto viaje entre el centro de Lima y el despacho de Córpac, ese antiguo aeropuerto acondicionado para servir de cuartel general a las policías y prefecturas del Perú, separó su antiguo empleo bajo el gobierno militar del nuevo bajo la emergente administración de Belaunde. Fue una transición personal rápida, pero no del todo sorprendente dentro de los términos en que se había efectuado la transferencia de gobierno: corta, casi exageradamente cortés, sin preguntas ni exigencias incómodas, con una fluidez que la hacía por momentos parecer más una transferencia de comando que la transmisión de gobierno entre una dictadura militar y una naciente democracia.

En la primera hora del 28 de julio y del gobierno democrático, López Martínez ya estaba sentado en el centro del aparato policial del país, pulsando los hilos visibles y ocultos de la maquinaria de control social: las tres policías, sus servicios de inteligencia; las prefecturas, subprefecturas, gobernaciones; cada uno de los cuales debía estar en condiciones de expresar las variaciones más sutiles en el pulso nacional, los signos primeros de borrascas sociales, de nacientes conspiraciones. Sin ninguna sorpresa, López Martínez empezó a recoger antenas ciegas, hilos cortados.

Dos meses antes del cambio formal de gobierno, desde el primero de junio, López Martínez había empezado a “recibir” el Ministerio del Interior del último ministro del gobierno militar, el general EP César Iglesias. En varias de las reuniones que tuvieron en las semanas siguientes, Iglesias le había expresado inquietud a López Martínez por lo que calificó como “avance de la subversión”.¹

Aun así, al llegar a su despacho, López Martínez sabía que entre las cosas que le tocaba heredar al nuevo gobierno no figuraban los archivos de inteligencia del Ministerio del Interior. Semanas antes, luego de terminar otra reunión con Iglesias, había sido conducido por las diversas oficinas del ministerio por el viceministro del Interior, el general de brigada EP Luis Sánchez Obregón. Al llegar al local de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIMIN) — un edificio de tres pisos anexo al principal, con una estrecha escalera externa—, López Martínez preguntó por los archivos de inteligencia del Ministerio. “Los han evacuado”, le contestó el viceministro. En efecto, en uno de los ambientes más amplios de la DIMIN había un espacio vacío, donde, según le informaron, habían estado los archivos.²

Esa misma noche, López Martínez planteó el asunto a Belaunde, en el departamento que este ocupaba en el edificio “Torre el Olivar” en San Isidro, que se había convertido en el cuartel

general de las negociaciones políticas de “alto nivel” previas a la toma oficial del gobierno. Belaunde, genuinamente preocupado por la posibilidad de que los militares dieran paso atrás en la transferencia democrática (temor que estos aprovecharon con habilidad entonces y en el futuro inmediato), le indicó que era mejor “no hacer olas”. Y así, no se volvió a mencionar el asunto de los archivos de inteligencia hasta 1983, cuando su existencia o inexistencia no tenía ya utilidad práctica.

El temor no fue la única razón por la que el nuevo gobierno decidió no hacer cuestión de Estado por la desaparición de los archivos de inteligencia. Había un elemento de forma también: parecía poco elegante que un gobierno democrático pusiera énfasis excesivo en la recuperación de archivos con información confidencial, obtenida clandestinamente en gran medida. Incluso algunos dirigentes del círculo más próximo a Belaunde hicieron las previsibles bromas inquietas, conjeturando que los informes dedicados a ellos pudieran explicar el traslado de los archivos. En esa época, en la que populistas y militares hacían un esfuerzo de amnesia usando elaboradas cortesías para comunicarse, la mención de los papeles donde podía residir una buena parte de la historia cruda del pasado reciente se percibía casi como un atentado contra el pudor.

El gran espacio continuó vacío. Luego de un tiempo, nuevos escritorios y sillas lo fueron llenando, con ocupantes inclinados sobre aquellos, leyendo periódicos, resumiéndolos en la jerga de “notas informativas” y poniéndoles sellos solemnes de “reservado” o “secreto” en los márgenes superiores.

Pese al entusiasmo y la efervescencia democrática de esos días, López Martínez y De la Jara tuvieron ocasión de lamentar la ausencia de esa información a las pocas horas de haber asumido oficialmente el Ministerio del Interior. En la noche del 28 de julio, durante un cóctel en la embajada de Venezuela, a donde habían concurrido los dos, el primer sabotaje importante de la red eléctrica dejó Lima a oscuras. Fue el inicio de lo que, poco tiempo después, se convertiría en una verdadera tradición dentro de la guerra: el juego violento de las luces y la noche.

Al producirse el apagón, De la Jara y López Martínez asumieron de inmediato su nueva función de policías supremos de la tranquilidad colectiva, y regresando al despacho de Córpac dictaron las primeras medidas para asegurar el patrullaje de la ciudad.

Al día siguiente, ministro y viceministro convocaron a los jefes policiales, especialmente a los de la Policía de Investigaciones, para coordinar la investigación del sabotaje y para inquirir respecto a la información de las policías sobre los dinamiteros. Para su sorpresa, encontraron que muy pocos detectives aventuraban opiniones al respecto, y que ninguno se presentó como especialista en el área de Seguridad del Estado.

Entre divertidos y consternados, De la Jara y López Martínez vieron que la Policía —sobre todo la Policía de Investigaciones— temía las represalias del nuevo gobierno populista, especialmente de De la Jara, el exiliado por antonomasia. Las declaraciones de este, en el sentido de haber olvidado a sus perseguidores, de entrar a su puesto con la memoria en blanco en ese respecto, parecían signos de temible astucia para algunos de los policías. “Nadie quería aparecer ligado a Seguridad del Estado”, recuerda López Martínez, “y solo varios meses después el general Luque enseñó sus cartas”.³ Pero Luque estaba enzarzado en medio de una guerra institucional ya casi perdida con el entonces jefe de la Policía de Investigaciones, el general Eduardo Ipinze —y con todo el grupo que este representaba—, en la que se jugaba mucho más que la preeminencia personal. En esas condiciones, Luque no tenía —pese a haber ofrecido sus servicios cuando ningún otro se atrevió a hacerlo— ninguna posibilidad de éxito.

Y así, además de sus inexperiencias en el cargo —acentuada por la falta de vocación de De la

Jara, a quien repugnaba la figura tradicional del ministro del Interior—, ministro y viceministro pasaron las primeras semanas cruciales de aprendizaje y ejercicio en el ministerio, moviéndose a tientas respecto a la naciente guerra subterránea; sintiendo con acrecentada intensidad sus primeros remezones, al no poder identificar su procedencia ni sus causantes con el detalle y la penetración que se hubiera esperado en su nivel. Los archivos habían desaparecido y los pocos policías que sabían algo callaban por temor. Así pasaron varias semanas.

¿Cuánto sabían los militares respecto a Sendero Luminoso? ¿Supieron o ignoraron que la insurrección era inminente? Cuando en 1983 el asunto de la desaparición de los archivos de inteligencia se hizo público, una de las numerosas teorías conspirativas que semanalmente se tejen y destejen en Lima sostenía que los militares conocían a la perfección lo que se venía, y que permitieron el estallido de la insurrección senderista para presionar y humillar indirectamente al gobierno civil; para tener la seguridad que en determinado momento volverían a ser llamados cuando el desprestigio civil hubiera hecho olvidar el propio.

No fue ese el caso. Hubo, en lo que respecta a la insurrección de Sendero, un desastre de los servicios de inteligencia que tuvo las características clásicas en ese tipo de eventos: la información básica existió y fue transmitida, pero no se le dio importancia.

Sendero tuvo una prioridad relativamente baja en las preocupaciones de seguridad interna del gobierno de Morales Bermúdez. Semioculto en el arbusto virulento de las otras organizaciones marxistas, menos visible —o del todo aparte— en los paros y huelgas de entonces, su ruta insurreccional, tan abiertamente trazada, parecía por lo menos de difícil cumplimiento.

Pese a ello, hubo reportes más o menos constantes sobre la organización. Incluso desde antes del rompimiento con Saturnino Paredes y la separación definitiva de Bandera Roja. Su actividad fue notificada por la policía local o por los confidentes civiles del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Pero todo indica que no se le dio importancia a la información recibida.

Desde comienzos de 1977 empezaron a llegar notas a los servicios de inteligencia advirtiéndole sobre la preparación para la lucha armada. El 16 de marzo de 1977, una nota de información del Servicio de Inteligencia de la Marina indicaba: “Estudiantes politizados del [...] Partido Comunista de José Carlos Mariátegui [sic] (Sendero Luminoso) que dirige el profesor Luis Kawata Kawata [sic] [...]. Con frecuencia realizan viajes continuos [sic] a la selva (Santa Rosa, Pichari, San Francisco) que colindan con el valle de La Convención y Quillabamba, donde realizan prácticas de tiro con armas ligeras con la cobertura de ser cazadores de animales silvestres”.⁴ La nota agregaba, en el típico estilo especulativo de los confidentes criollos: “Existe la posibilidad de que algunos estudiantes tengan vinculación con el tráfico de drogas, con el objeto de financiar la adquisición de armamento y realizar actividades de agitación y propaganda en zona de la sierra central, debido a que existe [sic] condiciones favorables en los pobladores”.⁵ La nota fue despachada al SIN con la clasificación de B/B/2.⁶

El 27 de junio de 1977, otra nota de inteligencia informaba sobre una reunión de militantes de Sendero en un pueblo joven en Lima, “Playa Rímac”, realizada el 20 de junio. Ahí, un delegado del Comité Regional de Lima indicó que “la única salida del pueblo es la guerra popular, para lo cual debe prepararse ideológica y militarmente. Que el final del actual gobierno será entregar el poder a uno de los partidos reaccionarios, o quizás a una coalición de los partidos de derecha”.⁷ La nota fue clasificada como B/B/3.

El 19 de julio de 1977, una nota de inteligencia del Ejército informaba sobre el sabotaje de dos puentes en Cangallo, entre el 6 y el 8 de julio, “teniéndose conocimiento que estas actitudes de fuerza se hacen contra la Reforma Agraria, contra el alza del costo de vida, contra el alza de la gasolina, pasajes y otros problemas internos”. Más adelante, luego de agregar que el “pueblo de Ayacucho, en estos momentos se encuentra agitado por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho”, añadía que “se tiene conocimiento que estudiantes universitarios vienen realizando viajes a las localidades de San Fernando y Pomacocha, posiblemente con fines de realizar entrenamientos de explosivos así como para realizar proselitismo”.⁸

El ambiguo estilo burocrático, la desconexión entre la información y las conclusiones eran típicas por lo demás en este tipo de documentos.

El 28 de diciembre de 1977, la nota de información 3219 del SIN, bajo el título de “Posible adoctrinamiento guerrillero en el Cusco”, indicaba la formación de escuelas populares en esa ciudad. La información era concreta. El cuadro senderista encargado de la clase indicó que en Lima funcionaban “alrededor de quinientas escuelas populares en forma clandestina, en vista de que los problemas no se pueden solucionar con paros, mítines, ni pintado de paredes, la situación obliga concientizar al pueblo para la guerra popular”. En el Cusco, según se informó entonces, funcionaban ya ocho escuelas populares.⁹

El 6 de diciembre de 1978, la nota de inteligencia 17-DPE de la Dirección de Inteligencia de la Guardia Civil mencionaba, al revisar el panorama de la izquierda marxista en Ayacucho, la reciente realización del VIII Pleno de Sendero Luminoso, puntualizando que su principal acuerdo “fue culminar y sentar las bases para el inicio de la lucha armada”. La nota describía la división zonal de la ciudad de Ayacucho hecha por Sendero, así como el funcionamiento de los organismos generados, calificando a Sendero como una organización “peligrosa y subversiva”, y añadía que no se podía descartar “una posible acción de guerrillas”. Pero más adelante la nota indicaba erróneamente que Bandera Roja habría “llegado a un acuerdo de iniciar la lucha armada en el sector rural, para lo cual estarían creando bases de apoyo en la selva del río Apurímac”,¹⁰ y responsabilizaba a esta organización por la agitación en el sector rural, así como por los ataques a los puestos de la Guardia Civil de Vischongo, el 20 de noviembre de 1978, y a la Jefatura de Línea de Cangallo, ese mismo mes.

El 30 de abril de 1979, una nota del Servicio de Inteligencia del Ejército informaba minuciosamente acerca de una reunión clandestina en Ayacucho, en casa del dirigente campesino senderista Manuel Llamojha Mitma, entre dirigentes de Sendero y comuneros y profesores de Pomacocha, Vilcashuamán y Vischongo. La información, que necesariamente hubo de provenir de un confidente presente en la reunión, refirió detalladamente los planes de Sendero para continuar expulsando a la Guardia Civil de sus puestos en las provincias de Ayacucho. Indicaba que próximamente viajaría una “comisión de tres personas” a Ocros, Chumbes y Concepción, “con la finalidad de planificar el desalojo de la Guardia Civil, en vista que es muy reducido el efectivo de Guardia Civil en estos puestos”. En la reunión también se discutió sobre el funcionamiento semiabierto de las escuelas populares en Vilcashuamán y Vischongo, de donde ya habían sido expulsados los policías; y un dirigente campesino indicó que se encontraban “listos y preparados para que juntos con el magisterio declarar la ‘guerra civil’”.¹¹

El 24 de mayo de 1979, la Dirección de Inteligencia de la Guardia Civil hizo un nuevo resumen del sustancial incremento de la agitación y los ataques a sus puestos en el departamento. El informe concluía afirmando que eran de esperar “actos de sabotaje, enfrentamientos con fuerzas del orden y probables atentados a locales de la Guardia Civil”, aunque insistía en que

esas acciones iban a ser producto de la coordinación entre Sendero y Bandera Roja.¹²

El conjunto de esas informaciones, evaluadas con una cautela burocrática aun mayor que la empleada en su redacción, llevó a que finalmente se considerara la evidente conmoción social en Ayacucho en una reunión de alto nivel del gobierno militar. Según informó *Caretas*: “El miércoles 15 de agosto, el presidente de la República presidió una reunión de frente interno dedicada especialmente a analizar un problema de extraños caracteres presentado en algunos distritos de Ayacucho y Huancavelica”. Añadía que “normalmente exacerbados informes de inteligencia se habían referido a un brote guerrillero en una zona de pobreza tradicional y heladas impías”. Pero, proseguía, “tras investigaciones más detenidas se ha compuesto un cuadro más real de la situación. [...] Se trata, más bien, de la pacífica destitución, por masiva decisión de los pobladores, de autoridades políticas y policiales de algunos distritos ubicados en una región indeterminada entre Ayacucho y Huancavelica”.¹³

Puesto que el artículo estaba obviamente basado en una fuente con acceso a información privilegiada en Palacio, resulta claro que el gobierno militar —fatigado y en retirada, abrumado además por la agitación sindical urbana— no quería escuchar los informes que le llegaban del campo. Los servicios de inteligencia, de otro lado, habitualmente sensibles a los cambios de humor en los gobernantes, inclinados a tratar de complacerlos en lo posible, trataron de no insistir con indeseadas informaciones sobre lo que sucedía en Ayacucho. Se advierte además que su conocimiento era aún fragmentario; y que ante el irritado desinterés de los gobernantes militares frente a los portadores de malas nuevas, no persistieron en profundizar la información, pese a la palpable gravedad de algunos de sus síntomas.

Pese a todo, alguna información prosiguió llegando a los servicios de inteligencia. El 6 de setiembre de 1979, una nota del SIN indicaba que “un grupo de estudiantes universitarios, militantes de la secta política Sendero Luminoso, vendría dictando charlas de guerra de guerrillas en un local ubicado en el cono norte de Lima”. Se añadía que “un grupo seleccionado practicaba con armas de fuego en los arenales del balneario de Ancón, donde efectúan las prácticas de ‘tiro al seco’ (sin municiones)”.¹⁴ La nota fue evaluada con un prudente B/B/2.

Desde esa perspectiva, era difícil no percatarse de que el aire estaba cargado de presagios, de augurios de tormenta. Que el “viejo topo” proverbial de la metáfora marxista, hozaba activamente, apenas debajo de la superficie. Pero el gobierno militar prefería no escuchar y no por las razones de la tragedia sino por las más prosaicas de la fatiga y la pérdida de reflejos producida por el apoltronamiento de doce años ininterrumpidos de poder, cuyos cuatro últimos se habían dedicado al retroceso y la retirada. Desencantados de su propia retórica, acosados por las protestas, disminuidos también por la creciente importancia de la corrupción entre sus filas, las energías del gobierno militar estaban fundamentalmente abocadas a la transición más tranquila posible al poder civil, garantizando la conservación de sus fueros y privilegios y reaccionando solo ante lo visiblemente urgente.

Pero los rumores y las marchas nocturnas, las declaraciones abiertas de líderes y militantes senderistas, tuvieron un impacto en Ayacucho. Aunque un porcentaje significativo de la población —y casi toda la otra izquierda marxista dentro de ella— no tomó en serio las proclamas de inminente “guerra popular”, hubo quienes no desestimaron los anuncios de revuelta. Así, en setiembre de 1979, el jefe militar de la zona —actuando a lo que parece por propia iniciativa— ordenó y llevó a cabo una “operación especial de inteligencia” para determinar la posibilidad de “actividades subversivas” en Vilcashuamán, Pomacocha y Vischongo.

El “informe de agente” fue redactado en octubre.¹⁵ La mayor parte del texto está dedicada a descripciones de geografía física y social, en el estilo y formato de un texto de educación secundaria. Pero en otros aspectos, el informe es interesante y revelador, tanto por lo que el agente vio como por lo que dejó de ver.

En Vilcashuamán, anotó que “no existe puesto de la Guardia Civil [...] actualmente reemplazado por la ‘ronda campesina’ [...] integrada por cuarenta personas o miembros”. Parte de las funciones de la ronda, además de cuidar el orden, reprimir el abigeato y vigilar que se llevaran a la práctica las decisiones de la comunidad, era la “protección de sus dirigentes comunales para impedir la ‘represión’ de las autoridades policiales, comunicándoles inmediatamente mediante [...] el sistema de cadena”. El agente encontró que las rondas habían sido extremadamente eficaces en sus funciones. Anotó asimismo que gran parte de las labores colectivas de la comunidad se hacían de acuerdo a la forma tradicional, indicando que en ella “participan todos los comuneros que usufructúan este servicio, y los profesores que son también propietarios de parcelas, quienes cumplen con todas las obligaciones de los comuneros”.

El agente observó que “los profesores del SUTEP son los principales educadores en el campo político por su propia relación con los padres de familia (comuneros) y estudiantes y por otro lado con el trabajo comunal que efectúan sin excepción”. Pudo notar asimismo otras manifestaciones de su influencia, aparte de la expulsión de los puestos policiales, indicando que “a raíz de la subrogación del SUTE - Vilcashuamán, ha sido expulsado y declarado persona no grata el director del NEC-10-35, por acuerdo de la asamblea comunal”.¹⁶ Dichas observaciones describían en buena medida la influencia y el control local de Sendero. Pero el agente tenía en mente otros indicadores de amenaza insurreccional.

Pese a anotar que las rondas “mantienen cierta vigilancia sobre las personas extrañas y/o sospechosas ajenas a sus actividades, por [...] el temor de que detengan a sus dirigentes requisitoriados”, no encontró evidencias “de la existencia de campos de entrenamiento paramilitar, ni tampoco la existencia de almacenes de armamento”.

Sus observaciones respecto a Pomacocha fueron similares a las de Vilcashuamán, anotando, empero, que si en esta Sendero Luminoso era el grupo político predominante, en aquella era “de mayor aceptación el PCP - Bandera Roja de Saturnino Paredes Macedo”. En Vischongo, además de anotar que el puesto de la Guardia Civil había sido cerrado desde noviembre de 1978, observó que el gobierno distrital estaba en manos del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo, integrado por la comunidad local, el SUTE - Vischongo, el comité femenino local y el Frente Único de Estudiantes Secundarios. Informó también que la influencia política estaba repartida entre Sendero y Bandera Roja. Por último, fue informado de la unificación reciente de las comunidades de la zona (Vilcashuamán, Pomacocha y Vischongo), pero no le dio importancia a ello. Su búsqueda de campos de entrenamiento y de guerrilleros uniformados había sido infructuosa.¹⁷

El 2 de octubre de 1979, basándose en gran parte en los informes del agente, uno de los jefes militares en la zona hizo una nota de inteligencia sobre la “instalación de una zona liberada” en Pomacocha. La nota recogía información fidedigna y alarmante, como la expulsión violenta de la policía de Vischongo y Pomacocha y el abandono luego de los puestos de la Guardia Civil de Vilcashuamán, Carhuanca y Huambalpa. Asimismo observaba correctamente que esas acciones habían sido “apoyadas directamente por el SUTEP y los estudiantes de la Universidad San Cristóbal”. Un factor inmediato de preocupación era el haber observado en la quebrada del río Apurímac a treinta soldados armados, que efectuaban batidas para capturar a “aproximadamente

cuarenta desertores pertenecientes al cuartel de Andahuaylas, que habían fugado con armamento y munición”.¹⁸

Agregaba que “las autoridades políticas y policiales de Ayacucho se encuentran incapacitadas para controlar el desarrollo de las acciones subversivas”. Pero no señalaba a Sendero Luminoso como la organización detrás de esas acciones, sino a Bandera Roja, cuyas preocupaciones estaban centradas entonces en el desempeño de su líder Saturnino Paredes Macedo, en la Asamblea Constituyente. Ceguera extraña, pero no del todo inexplicable.

La última parte de ese esfuerzo de investigación quedó expresada en un informe a la Comandancia General del Ejército. El papeleo generado hasta entonces exigía una identidad burocrática. Las notas de inteligencia aparecen en la última parte del trabajo traducidas como parte del Plan de Operaciones “Morochuco”. El informe final fue redactado el 12 de octubre de 1979, en Lima. Su diagnóstico inicial fue sorprendente: los movimientos en Vilcashuamán, Vischongo, Cangallo y Pomacocha eran, según el informe, “movimientos autónomos, espontáneos [sic] de rebeldía [...] persiguiendo como objetivo la de vivir dentro de un liberalismo comunitario de acuerdo a las leyes del Imperio incaico”.¹⁹ Cómo llegó a esa pintoresca interpretación el autor de la nota, permanece inexplicado.

Sin embargo, parte de la información era objetiva: se mencionaba la expulsión de la policía de Vischongo por una masa de campesinos, estudiantes y maestros. También se informaba de la expulsión de la Guardia Civil de Vilcashuamán, mediante una movilización conjunta de las comunidades de Vischongo, Pomacocha, Chito, Chanin y otras, las que también habían expulsado al director del núcleo educativo del lugar por “haber recesado a profesores que se habían plegado a la huelga del SUTEP”.²⁰

La nota añadía que todo desconocido era interrogado, y que “si es declarado sospechoso de pertenecer al gobierno, es vigilado en sus movimientos, negándoles toda clase de informaciones”.

Al referirse a las organizaciones políticas con influencia en la zona, la nota precisaba que Sendero Luminoso “ha copado todas las direcciones del SUTEP en la provincia de Cangallo y del departamento de Ayacucho, por el hecho de que la Federación Universitaria de la Universidad San Cristóbal y el programa de educación está controlado por Sendero. Los profesores que se reciben en dicha localidad y que son mayoritariamente de la zona, trabajan políticamente dentro del campo y la ciudad”.²¹ Añadía que “el SUTEP de Vilcas, Vischongo y Cangallo están dirigidos por la militancia de Sendero, no permitiendo que la dirección esté compartida con otras fuerzas izquierdistas”. Pero también puntualizaba que Bandera Roja, “que conduce y dirige Saturnino Paredes Macedo, tiene trabajo político específicamente dentro del sector campesino, logrando haber copado las direcciones de Pomacocha, Vischongo, Chito, Chanin”.

En cuanto a las actividades “reveladoras de la situación subversiva”, la nota concluía que “no se han detectado instructores, zonas ni lugares de adoctrinamiento y preparación paramilitar”, y que “no existe organización política que oriente y reclute para las acciones subversivas”. Respecto a la eventual presencia extranjera en la zona, solo mencionaba a una delegación de Albania, que asistió al congreso de la CCP-BR en Pomacocha. Agregaba que “no existen zonas controladas ni bases de apoyo” y que la vida de las comunidades transcurría “en armonía con lo establecido por las leyes de la nación”, que “no se ha detectado en la zona la presencia de bandas armadas ni elementos guerrilleros” y que “no existe armamento en manos de los comuneros ni lugares de almacenamiento”. Explicaba que los individuos uniformados y armados de FAL y

UZI ingresaron al fundo San Agustín el 15 de julio de 1979, a quienes se “sindicó como guerrilleros que estaban adoctrinando en comunismo a los campesinos e incitando a la toma de tierras”, eran miembros de una patrulla del Ejército, “quienes cumplían la misión de recuperar el FAL N° 76911 que le fue sustraído a un soldado, [...] el 5 de junio de 1979”.²² A la luz de lo que guardaba el futuro cercano para el fundo San Agustín y sus habitantes, esa parte de la información parece contener los primeros confusos augurios de una próxima tragedia.

Tales las conclusiones del trabajo de inteligencia más focalizado y específico que se realizó en ese tiempo, cuando todas las energías de Sendero Luminoso se encontraban en tensión, preparando el inicio de la guerra. Desde la perspectiva actual, la percepción del agente parece por momentos, a fuerza de deficiente, intencionada en sus fallas. Pero es improbable que haya sido así. En todo trabajo de inteligencia, y más aun en organizaciones verticales como el Ejército, uno de los criterios que frecuentemente preside la preparación de los informes es el de tratar que la información no exaspere a los superiores. Y el gobierno militar no quería saber nada sobre conspiraciones masivas, que revelaban un suelo minado más allá de todo pesimismo. A las razones ya expuestas se sumaba otra más importante: toda dictadura —y el gobierno de Morales Bermúdez no era una excepción en ese aspecto— esgrime como principal argumento de legitimación el control eficaz de la seguridad interna del país. En esas condiciones que los militares, profesionales al fin en las artes de la guerra grande y la pequeña, estuvieran por entregar a la nación el presente griego de una insurrección a punto de estallar, luego de haberse incubado durante su gobierno, socavaban toda pretensión de legitimidad histórica.

Existía además un problema de perspectiva. Los militares concebían un movimiento guerrillero en los términos de la guerrilla castrista clásica: los síntomas que buscaban eran la presencia en la zona de forasteros en uniforme verde olivo, campamentos de entrenamiento, depósitos de armas. No concebían otra forma de preparación de la insurrección guerrillera; y cuando tuvieron la realidad casi literalmente ante sus narices, no la supieron interpretar. No fue un caso de ceguera física —toda la información básica estaba ahí, había sido consignada— sino intelectual.

Desde los albores del arte de la guerra, una de las ambiciones mayores de todo estratega al preparar sus campañas ha sido el lograr que el enemigo se convenza de estar bien informado sobre él. Cegar los ojos y el entendimiento de los espías —y, a través de ellos, los del general enemigo—, sobre la base de formas elaboradas de camuflaje, ilusión y engaño, ha sido siempre una de las expresiones más altas del arte militar. A pocos meses del inicio formal de la guerra, con su aparato organizativo virtualmente listo para ello, Sendero había logrado —quizá sin saberlo— esa primera victoria sobre las fuerzas de seguridad y su gobierno.

Las informaciones siguieron llegando en los meses siguientes: el 18 de diciembre de 1979 una nota enviada al SIN indicaba que “existen versiones [...] de que en los distritos de Vilcashuamán, Vischongo, Carhuanca [...] Pomacocha y Chito, habría organizaciones subversivas y campos de entrenamiento guerrillero”. Pero, fiel a los estereotipos inculcados, el informante agregaba: “Los distritos de Vilcashuamán, Vischongo [...] son centros turísticos (ruinas arqueológicas), por lo que son frecuentados por gran cantidad de extranjeros, habiendo trascendido que entre estos, y tomando como cubierta la actividad turística, estarían visitando las zonas en referencia, elementos comunistas internacionales”.²³ Si Sendero se hubiera encargado de la desinformación, no lo habría hecho mejor. Pero solo sucedía que los informantes y sus jefes tenían la vista puesta en el horizonte, esperando una repetición literal de la empresa del Che Guevara en Bolivia. Y no miraban a su alrededor.

Las informaciones, fragmentarias pero insistentes, no llegaban solo de Ayacucho. El 17 de enero de 1980 una nota informativa del SIN, procedente de Puno, reseñaba un enfrentamiento en la Universidad Técnica del Altiplano entre dirigentes del UNIR, entre los cuales estaba Horacio Zeballos, y estudiantes de Pucallacta. Cuando los dirigentes del UNIR intentaron ingresar a la universidad, “fueron rechazados con palos y piedras por parte de los estudiantes de la FEUNTA” (la Federación Estudiantil de la Universidad Técnica del Altiplano). Los dirigentes del UNIR no tuvieron más remedio que hacer un mitin fuera de la universidad, donde los oradores “criticaron a los estudiantes universitarios de la FEUNTA, por haber voceado el slogan ‘guerra popular del campo a la ciudad’, calificándolos de infantiles soñadores”.²⁴ Con regularidad e insistencia, la información básica reaparecía, aún perdida en medio de detalles aparentemente triviales. El 18 de febrero de 1980, por ejemplo, una nota del SIN, luego de informar sobre un mitin de la robustecida facción de Víctor Quintanilla, del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, en la plaza de armas de Ayacucho, “en el que participaron aproximadamente mil personas”, añadía que “últimamente el Partido Comunista del Perú (PCP - SL) habría realizado una ‘Fiesta de Confraternidad Estudiantil’ con la participación del alumnado de la Universidad San Cristóbal y en el Comedor Estudiantil; la recaudación económica habría sido destinada para sufragar gastos políticos, como son viajes de comisiones a diferentes comunidades de la región, con el propósito de organizar las llamadas escuelas populares y efectuar los preparativos de incentivación para la ejecución de la lucha armada en un futuro no lejano”.²⁵

En otras circunstancias, la misma información venía mezclada con intentos aparentes de venganza personal o patentes errores de hecho. El 21 de febrero de 1980, por ejemplo, una nota informativa de una dirección vinculada al Ejército, sobre “acciones que viene desarrollando el movimiento Sendero Luminoso”, afirmaba enfáticamente que “las acciones subversivas son llevadas a cabo bajo la dirigencia de *Walter Tristán* [...] que trabaja [...] del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. La nota proseguía indicando que los senderistas “vienen realizando entrenamiento de campaña e invasiones de tierras en Ongoy, Acobamba y Miraflores (Andahuaylas). Igualmente vienen siendo apoyados por trabajadores mineros de la zona de la sierra central. En la ciudad de Lima, su fuerza de apoyo fundamental descansa [sic] en la Universidad San Marcos y en la Universidad Técnica del Callao”. Con el mismo énfasis usado para la primera afirmación, la nota añadía que “se proponen frustrar las elecciones e intentan constituirse en el brazo armado de Patria Roja”.²⁶ Pero aliado de ese sustantivo error, indicaba que “el PCP ‘Pucallacta’ estaría preparando unas guerrillas campesinas en apoyo al movimiento Sendero Luminoso”.²⁷

El mismo confidente —a juzgar por el tenor de la nota— redactó una información similar al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el 22 de febrero. Con mayor detalle y auxilio de mapas, la nota mezclaba datos reales con gruesos errores. Luego de anotar que “el Partido Comunista Peruano [sic] Sendero Luminoso, está preparando guerra de guerrillas dentro de la concepción maoísta ‘guerra del campo a la ciudad’ y ‘guerra desde la periferia urbana (pueblos jóvenes) al centro urbano (zonas residenciales)’”, repetía lo de la supuesta alianza con Patria Roja, y añadía que el propósito era impulsar un “frente político militar similar al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua”.²⁸

Luego de mencionar correctamente las áreas principales de reclutamiento (algunas de las universidades en las que Sendero tenía influencia) y las de entrenamiento y acción (por primera vez se menciona al Alto Huallaga, junto con Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas), el confidente acusaba nuevamente al funcionario *Walter Tristán*, ya no como el dirigente supremo

de la subversión sino como encargado de la compra y almacenamiento de armas. “Este funcionario [...] obtiene información sobre planes de vías, carreteras, instalaciones y servicios esenciales en complicidad con su secretaria. [...] Una de las acciones realizadas en Huancavelica ha sido la sustracción de cajones de dinamita”. Lo notable de esta nota, plagada de errores y contaminada por obvios odios personales, es que el mapa donde se señalan las zonas de operaciones describe con gran precisión las que iban a ser los escenarios bélicos principales y secundarios tres años después.²⁹

El 4 de abril de 1980, una nota de información del SIN daba, en sordina, la alarma. Según la información de un confidente, un integrante de Sendero habría anunciado que su grupo “boicoteará las elecciones de mayo 80; asimismo dijo que el 18 de mayo 80 comenzará la lucha armada en el país, contra el nuevo gobierno civil; que para ello las fuerzas bélicas [...] están equitativamente distribuidas en zonas estratégicas, esperando órdenes para el inicio de la guerra de guerrillas”.³⁰ Cinco días después, el 9 de abril, otra información, de fuente diferente, precisaba la anterior y añadía detalles decisivos. Una nota de inteligencia de la Guardia Republicana, remitida al SIN bajo el epígrafe de “Posible inicio de guerra popular del campo a la ciudad: Ayacucho”, luego de indicar que Sendero venía “propugnando el inicio de la llamada ‘guerra popular del campo a la ciudad’ como única vía para la toma del poder”, agregaba una precisión dramática: “Posible fecha del inicio de la guerra popular, sería la segunda quincena del presente mes, en forma simultánea en toda la República, con prioridad en la zona de Ayacucho (Paras, Chuschi, San Miguel). Últimamente vienen realizando las coordinaciones finales”.³¹

Dos notas de inteligencia de diversa procedencia, pero sobre el mismo tema, separadas entre sí por apenas cinco días, daban la fecha y el lugar del inminente estallido guerrillero con cuarenta días de anticipación. En términos de información, no se podía pedir mucho más. Sin embargo, no se tomó ninguna determinación al respecto, ni se efectuó acción alguna.³²

Cuando los militares decidieron “evacuar” el archivo de inteligencia de la DIMIN, se llevaron, entre otras cosas, toda la información mencionada. Entonces ya la insurrección había empezado, y los partes de atentados, los reportes de acciones, se amontonaban sobre las ayer descuidadas predicciones. Si se hubiera dejado esa inteligencia a disposición de las nuevas autoridades civiles, vehementes y ávidas de información, la negligencia del aparato de seguridad del gobierno militar hubiera sido evidente, y seguramente habría sido mencionada, si no denunciada, públicamente por De la Jara y ese bochorno institucional, esa “pérdida de cara”, fue lo que los militares, aparentemente, trataron de evitar al llevarse los archivos y dejar a oscuras al nuevo gobierno.

1 La preocupación del gobierno militar frente a la subversión provenía tanto del temor frente a un eventual estallido de guerrilla urbana, al estilo de los movimientos del Cono Sur del continente, como sobre todo de sus experiencias con el SUTEP, los paros generales y los enfrentamientos callejeros con masas amotinadas. Esa preocupación se alimentaba por el recuerdo del motín urbano del 5 de febrero de 1975, los exitosos paros generales del 19 de julio de 1977 y del 22 de mayo de 1978, y la acrecentada agresividad del SUTEP, pese a la dura represión ejercitada contra sus líderes.

2 Entrevista con Héctor López Martínez, exviceministro del Interior, el 20 de julio de 1987.

3 *Ibidem*.

4 Nota de información 008-GNC-77. Dirección de Inteligencia Naval, Ministerio de Marina, 16 de marzo de

1977.

- 5 *Ibídem.*
- 6 La más alta clasificación, en cuanto a la calidad de la información, confiabilidad del agente e importancia de aquella es A/A/I.
- 7 Nota de información 1379. Servicio de Inteligencia Nacional, 27 de junio de 1977.
- 8 Nota de información 863. Servicio de Inteligencia del Ejército, 19 de julio de 1977.
- 9 Nota de información 3219. Servicio de Inteligencia Nacional, 28 de diciembre de 1977.
- 10 Nota de inteligencia 17-DPE. Dirección de Inteligencia de la Guardia Civil, 6 de diciembre de 1978.
- 11 Nota de información 1343. Servicio de Inteligencia del Ejército, 30 de abril de 1979.
- 12 Nota de inteligencia 09-DPE. Dirección de Inteligencia de la Guardia Civil, 24 de mayo de 1979.
- 13 *Caretas*, n. 566, 20 de agosto de 1979.
- 14 Nota de información 3076. Servicio de Inteligencia Nacional, 6 de setiembre de 1979.
- 15 Informe de agente, octubre de 1979.
- 16 *Ibídem.*
- 17 *Ibídem.*
- 18 Nota de inteligencia. Ayacucho, 2 de octubre de 1979.
- 19 Informe: Plan de Operaciones “Morochuco”. Monterrico, 12 de octubre de 1979.
- 20 *Ibídem.*
- 21 *Ibídem.*
- 22 *Ibídem.*
- 23 Nota de información 4076. Servicio de Inteligencia Nacional, 18 de diciembre de 1979.
- 24 Nota de información 149. Servicio de Inteligencia Nacional, 17 de enero de 1980.
- 25 Nota de información 486. Servicio de Inteligencia Nacional, 18 de febrero de 1980.
- 26 Nota de información DIGIS. 21 de febrero de 1980.
- 27 *Ibídem.*
- 28 Nota de información 339-FI. DINSE-FAP, 22 de febrero de 1980.
- 29 *Ibídem.*
- 30 Nota de información 922. Servicio de Inteligencia Nacional, 4 de abril de 1980. Ver p. 100.
- 31 Nota de información 382. GRP/DINT, 9 de abril de 1980.
- 32 Parece, no obstante, haber existido un cierto grado de preocupación en sectores medios de las Fuerzas Armadas que finalmente no cuajó. Algo del debate interno trascendió a medios civiles, aunque (quizá por las fuentes de información) desde una perspectiva distorsionada. Así, *Caretas*, n. 588, del 2 de febrero de 1980, menciona que “un sector de las Fuerzas Armadas cocina informes de guerrillas fantasmales, con el objeto de avivar el caldero”. Hay que recordar que, en aquellos meses, el temor de que se saboteara el proceso de transferencia electoral era intenso y razonable. Ese temor de que fue utilizado para desactivar la alarma que, al parecer, algunos sí intentaron hacer sonar.

VI. Los perros de la guerra

La guerra ya había comenzado y en uno de los bandos nadie lo sabía. La atención estaba puesta en la transferencia de gobierno, las energías en adaptarse favorablemente al cambio, en seguir los episodios de las disputas dentro de los partidos políticos. Después de la deprimente derrota electoral del partido aprista, las hostilidades entre los grupos que seguían a Armando Villanueva y a Andrés Townsend se expresaron en forma cada vez más abierta y enconada. Finalmente, pese a la derrota, Villanueva logró prevalecer y controlar el partido, ayudado esencialmente por la tradición aprista de disciplina vertical. Andrés Townsend y un grupo de seguidores —que inicialmente pareció grande y después pequeño— salieron del partido e intentaron fundar un movimiento aprista paralelo, que en los meses y años siguientes sufrió una merma constante de afiliados, hasta disolverse de hecho poco después de la victoria electoral de Alan García en 1985. Villanueva triunfó solo parcialmente, cediendo el control de la directiva aprista a Fernando León de Vivero, un miembro de la vieja guardia del APRA. Pero de hecho, en los meses de depresión, dudas y deudas que siguieron al contraste electoral, la influencia de Carlos Langberg sobre el partido creció hasta convertirse en decisiva. Iba a seguir así hasta mediados de 1982.

El 16 de junio Sendero rompió literalmente los fuegos en Lima. Un grupo de “alrededor de doscientos jóvenes [...] gritando consignas del MOTC”¹ rodeó e incendió la Municipalidad de San Martín de Porres, arrojando una granizada breve pero suficiente de bombas molotov. Luego, mientras el edificio ardía, los incendiarios, “alrededor de doscientos jóvenes”,² desfilaron y se alejaron gritando los lemas de la insurrección. A los pocos minutos, antes que el alcalde Oscar Nagamine llegara a contemplar los destrozos del incendio, los senderistas se habían dispersado entre las calles sobrepobladas de ese distrito de crecimiento caótico y veloz.

San Martín de Porres fue uno de los puntos urbanos en los que Sendero alcanzó una cierta fuerza y presencia en Lima en los años anteriores al inicio de la guerra. Esa relación no cesó durante los años siguientes. Un alcalde elegido por voto popular, Willy Fernández Melo, iba a ser eventualmente detenido por la DIRCOTE, acusado de cooperar con Sendero. Un hermano suyo fue arrestado, con cargos más concretos, y estuvo entre los caídos en El Frontón el 19 de junio de 1986.

Aunque los atacantes habían coreado las consignas de Sendero, los volantes lanzados en el lugar llevaban la firma del MOTC (Movimiento de Obreros Trabajadores y Campesinos), y eso hizo que la mayoría de reportes se confundieran refiriéndose al MOTC como un partido independiente. Incluso alguna gente vinculada a la izquierda marxista legal no asoció inmediatamente al MOTC con Sendero Luminoso. Y, de otro lado, la propia dirección senderista

había escogido iniciar la insurrección en las ciudades bajo la bandera del MOTC para tratar de conferirle el sello de levantamiento popular, de movimiento masivo.

El primero de mayo de 1980, en la celebración del Día Internacional del Trabajo, el MOTC había lanzado un panfleto que fue el último documento público de Sendero antes del inicio de la insurrección. La selección de la fecha y del “organismo generado” fue hecha para inscribir el inminente levantamiento dentro de la tradición central del marxismo y no como una herejía periférica.

El documento *La celebración del Primero de Mayo por el proletariado revolucionario* era no solo el anuncio público y formal del próximo inicio de las hostilidades, sino también el retrato fiel de la organización en proceso acelerado de cambio y reacondicionamiento. José Carlos Mariátegui aún preside la portada del documento, pero es cada vez más un icono virtualmente silencioso. El proceso que terminaría subordinando Mariátegui a Gonzalo ya estaba en marcha.

La “presentación” del documento enfatiza que “el marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung³ es la ideología del proletariado internacional, y la Línea Política General de la Revolución⁴ es su aplicación a nuestra realidad concreta”, es decir “en toda su grandeza las tareas de la próxima revolución [...] EN INICIAR LA LUCHA ARMADA. Iniciar la guerra agraria dura y prolongada que siga el camino de cercar las ciudades desde el campo, creando bases de apoyo revolucionarias”.⁵ Como se ve, difícilmente se podían decir las cosas con mayor claridad. Pero, para despejar dudas, la presentación subraya el carácter contemporáneo, inmediato de sus prescripciones. Al atacar, como falsificaciones ideológicas, a los otros partidos marxistas (a quienes aún divide entre “revisionistas” y “revolucionaristas”) que buscan “crearnos ilusiones electoreras”, el documento del MOTC llamaba al boicot activo de las próximas elecciones, con “movilizaciones de las masas [...] desarrollar la creciente protesta popular para iniciar la lucha armada en el próximo desborde de las masas [...]. Le corresponde al proletariado a través de su Partido levantar en armas y dirigir la fuerza principal de la revolución, el campesinado pobre”. En la jerga escolástica leninista-maoísta, los hechos habían sido cabalmente anunciados. El “boicot” se concretó en la acción de Chuschi y otras menos conocidas el día de las elecciones, y los muebles carbonizados y paredes ennegrecidas que contemplaba el anonadado alcalde Nagamine, el 16 de junio, eran la primera versión “del desborde de las masas” por el “proletariado” en Lima.

El documento en sí contenía textos de Lenin y Guzmán, en una construcción escolástica pura: el panfleto de Lenin (escrito con motivo de la celebración del primero de mayo de 1913 en San Petersburgo) estaba intercalado, al pie de cada párrafo, con otro de glosa y desarrollo de ideas propias, obviamente escrito por Guzmán. El resultado no solo era revelador en cuanto a las intenciones bélicas inmediatas de Sendero, sino que arrojaba luz sobre importantes percepciones y preocupaciones de la organización.

Entre los problemas que enfrentaba la “revolución” en el Perú, uno de los principales, según el documento, “es la quiebra entre quienes combatieron en la década del 60 y los del 70, el margen intermedio tiene que ver con el oportunismo y el que se haya permitido la liquidación de los dirigentes”. La razón de la preocupación central, obsesiva de Sendero por cuidar y proteger a la dirección (en oposición a los militantes, que son irremplazables) se expresa explícitamente a continuación:

La reacción tiene dos formas de aplastar la guerrilla: 1) ganar a las masas, 2) liquidar la dirección, porque mientras haya dirección volverán, experiencia que sacan de la revolución argeliana [sic].⁶

Cuidar a la dirección era, entonces, vital; pero la dirección solo serviría a los intereses de la revolución si era capaz de diagnosticar con justeza el momento adecuado para lanzarse a la lucha armada, y si había sido capaz de formar una organización lo suficientemente fuerte y preparada para conducirla victoriosamente. En ese punto, el diagnóstico de Lenin sobre la situación revolucionaria en la Rusia de 1913, y la capacidad bolchevique de dirigirla cuando se transformara en crisis, fueron acomodados al diagnóstico del Perú en 1980 y la capacidad de Sendero de hacerlo arder.

En el panfleto de 1913, Lenin anotaba que la situación que vivía Rusia era revolucionaria, no solo por la “opresión agudizada, el hambre, la miseria, la ausencia de derechos y los ultrajes al pueblo”, sino básicamente porque estos se hallaban “en flagrante contradicción con el estado de las fuerzas productivas en Rusia, con el grado de conciencia y con el nivel de las reivindicaciones de las masas, despertadas por el año 1905. [...] La opresión”, proseguía Lenin, “por grande que sea, no siempre origina una situación revolucionaria en un país. Para que estalle la revolución no suele bastar con que los de abajo no quieran seguir viviendo como antes. Hace falta además que los de arriba no puedan seguir administrando, gobernando como hasta entonces. Eso es exactamente lo que hoy observamos en Rusia”.⁷

La observación de Lenin —indudablemente penetrante y expresada con economía y sencillez— era transpuesta por Guzmán a la realidad peruana en el párrafo de glosa, encontrando que, por supuesto, casaba perfectamente.

Lo principal es que los de abajo sufren de explotación, ligado a que los de arriba no pueden mandar. [...] Existen las dos condiciones en nuestro país, por tanto, hay situación revolucionaria. Más aun, vivimos una situación revolucionaria en desarrollo, lo que exige seguir nuestro propio camino: INICIAR LA LUCHA ARMADA. Las elecciones nunca han dado el poder a la clase obrera ni a nuestro pueblo y solo se lo conquista a través de la lucha armada dura y prolongada. [...] Hay fractura del Estado en sus bases. Los problemas sustantivos que aquejan al país tienen que ver con eso. [...] De ahí se deriva la crisis.⁸

A continuación, sin solución de continuidad, e inopinadamente, Guzmán escribía observaciones involuntariamente reveladoras sobre la estrategia senderista de largo plazo:

La perspectiva del Estado peruano está planificada hasta el 2005. La creciente poblacional, los dos momentos de la década del 80 (80-85 y 85-90), *década crítica que debe definir la solución de los problemas*. [...] Tener muy presente década del 80, fractura de la base del Estado, incapacidad de resolver los problemas del país.⁹

Es decir, para Guzmán, el gran escenario y los objetivos mayores dentro de él estaban claramente definidos en la víspera de la insurrección. Ello significaba que: 1) durante la década del 80, la incapacidad del Estado peruano de gobernar el país iba a ser no solo patente, sino crítica; 2) dentro de ese proceso se iba a desarrollar y crecer la insurrección dirigida por Sendero Luminoso; 3) en esa década iba a definirse “la solución del problema”, es decir, el crecimiento de la insurrección senderista hasta superar la curva de vulnerabilidad, a través del logro del equilibrio estratégico;¹⁰ 4) la primera gran etapa de “defensiva estratégica” iba a transcurrir a lo largo de la “década crítica”, dividida en dos momentos (los cuales, como se verá en otra parte del libro, estaban a la vez cuidadosamente planificados), que correspondían, *grosso modo*, con los períodos electorales constitucionales. Al escribir estas líneas, en julio de 1989, teniendo casi toda la década en perspectiva y prospectos sombríos para lo que resta de ella, es imposible evitar comparaciones entre las profecías ingenuamente optimistas de, por ejemplo, Roberto Abusada¹¹ (que eran compartidas por la mayoría de la élite dirigente o en proceso de convertirse en

dirigente) y las de Guzmán, enunciadas casi al mismo tiempo. Eran diametralmente opuestas y Guzmán acertó, aunque no totalmente. No porque nada estuviera predeterminado, que no lo estuvo. El relato de la guerra responderá paulatinamente por qué.

Si la situación social era revolucionaria, es decir si —utilizando el lenguaje marxista-leninista— las “condiciones objetivas” estaban dadas, ello no era suficiente por sí mismo para llevar adelante la revolución. “Ni la opresión de los de abajo ni la crisis de los de arriba”, había apuntado Lenin, “bastan para producir la revolución [...] si el país dado carece de la clase revolucionaria capaz de transformar el estado pasivo de opresión [en otro activo] de insurrección”. Para Lenin, la “clase revolucionaria” era el proletariado industrial, y su cerebro y motor, el partido clandestino. En el documento, la glosa de Guzmán se exploya en el rol del partido clandestino.

Las condiciones objetivas existen. [...] Entran en juego las condiciones subjetivas, los instrumentos de la revolución, particularmente el PARTIDO. [...] Los oportunistas no ven la necesidad del instrumento principal de la revolución: el Partido. [...] El Partido Comunista era pequeño, unos le decían “dos o tres centenares”, eso es lo que es un Partido Comunista; [...] nosotros no queremos un partido amplio, eso es un partido electorero. En nuestro país el Partido está compuesto por más campesinos que obreros. [...] No hablan de un partido legalizado [...] ni de otras formas por el estilo, que apoltronan. Los miembros del Partido Comunista hablan [...] de iniciar la lucha armada. [...] Nuestro problema es luchar por la revolución y en el próximo desborde, principalmente campesino, Iniciar la lucha armada.¹²

Así que el inicio inminente de la insurrección no había sido solamente detectado por algunos operativos y confidentes de los servicios de inteligencia. Había sido proclamado públicamente, y no como una mera consigna, sino en la forma de la exposición pautada de motivos, que aquellas personas conscientes de la historia suelen creer necesario al momento de definir su destino.

Cosecha de otoño

Había estado también escrito en la pared, pintarrajeado en casi cada superficie disponible en las plazas de armas y muros cercanos, de ciudades y pueblos en Ayacucho, especialmente en las provincias de Cangallo y Víctor Fajardo, que iban a ser el centro territorial de acciones durante los primeros meses de la insurrección. En julio, mientras en Lima finalizaban los preparativos para la transferencia de régimen, la autora Piedad Pareja viajó por tierra entre la capital de Ayacucho y el asiento minero de Canarias, propiedad de su familia, donde ella había asumido poco antes funciones empresariales.

Pareja, quien había estudiado y escrito sobre el movimiento sindical peruano, tenía una capacidad de observación doblemente aguzada por su formación académica y por su entonces asediada posición gerencial. El conflicto que remecía Canarias iba a hacer crisis poco después y a hacer imposible su permanencia en la mina, pero a proporcionarle a la vez valioso material de observación.

Las consignas en las paredes eran abrumadoramente las de Sendero, con algunas pintas solitarias de la UDP, el APRA y aun a favor de Hugo Blanco. En Huahua, Puquio, Mollobamba, Cangallo, Huancapi, Cayara, Huaylla, Tiquihua y Canaria, el graffiti que llamaba al “boicot de las elecciones”, a “iniciar la lucha armada”, “desarrollar la creciente protesta popular en función de la lucha armada”,¹³ dominaba los muros y su prédica era la que más obviamente resonaba en

aquellas comarcas provinciales; y ya resonaba con algo más que pintas y gritos exaltados. En Ayacucho, después de la acción en Chuschi, arreciaron varias otras. A medio camino todavía entre el desmán y la franca acción armada, pero orientándose cada vez más hacia esta. El 1 de junio, el local de la sanidad de la Guardia Civil había sido apedreado, y el 14 de junio también lo fue el Hotel de Turistas. Pero el 21 de junio, el local político de Acción Popular fue atacado a dinamitazos, y hubo un herido. El 6 de julio fue atacado un local escolar, también con dinamita, y el 8 la carretera que unía la planta con la mina en Canarias sufrió voladuras en varias partes a la vez. Igualmente, en las cuatro provincias centrales de su movimiento inicial: Huamanga, Cangallo, Huanta y Huancapi, los activistas de Sendero se esforzaban en realizar acciones que involucraran turbas, muchedumbres, así fueran ralas, para concretar, a través del “desborde”, la transición entre los métodos de protesta propios de los tiempos de paz, y las acciones violentas, irreversibles, que conducen a la guerra. El “desborde” era, en sus propias palabras:

Apuntar al desborde popular, esto es al desarrollo de la lucha de las masas que vaya más allá de lo que permite el ordenamiento estatal reaccionario, rebasando el orden legal del sistema imperante.¹⁴

En las ciudades, el “desborde” debería darse a través de manifestaciones y marchas violentas, o en saqueos “espontáneos”, combinados en dosis crecientes con acciones de terrorismo y sabotaje; y con propaganda tanto explícita como simbólica. En el campo, el eje inicial de acciones debería ser el “levantamiento de cosechas”. Es decir, la invasión de fundos o comunidades por grupos de campesinos dirigidos por un núcleo senderista; el saqueo de maquinarias, herramientas, aperos y todo lo que se pudieran mover —que sería luego distribuido por “comités de reparto” dirigidos por cuadros del Partido—; la humillación o la violencia física contra los propietarios o sus representantes y, lo más importante: cosechar los campos de la propiedad invadida y distribuir también el producto entre los invasores. Combinando así el llamado atávico del pillaje con la sanción de “justicia revolucionaria”, se colocaba fuera de la ley en forma irreversible a los grupos participantes.

Esa había sido una de las razones más importantes, junto con las elecciones y la transferencia de poder, para determinar la fecha del inicio de la insurrección: la estación de cosecha en la sierra. Por razones tanto simbólicas como dogmáticas (y por parecidas razones prácticas quizá), Guzmán copió casi literalmente los primeros pasos insurreccionales de Mao. En agosto y setiembre de 1927, mientras la insurrección comunista en Shangai y luego la comuna de Cantón eran sangrientamente sofocadas, Mao Tse-tung dirigió un levantamiento masivo de campesinos pobres en su provincia natal de Hunán, que fue luego conocido como “El levantamiento de la cosecha de otoño” (“levantamiento” significa, en su traducción castellana, tanto insurrección como confiscación de cosechas). El “levantamiento” fue derrotado, y Mao tuvo que huir, con algunos cuadros y tropas, a la frontera de su provincia, a las montañas de Ching-kan-shan, donde unió sus fuerzas con las del general comunista Chu-teh y estableció su primera “base de apoyo”. Cincuenta y tres años después, ya convertidos los experimentos de Mao en dogma canónico, en el otoño meridional de la sierra peruana se desencadenaba un “levantamiento” similar.

El 10 de julio, el fundo San Germán de Ayrabamba, en Cangallo, fue asaltado por alrededor de quince senderistas armados. El fundo, de ciento veinte hectáreas de cultivo, pertenecía a César Parodi Vasallo, un ingeniero agrónomo que no estaba cuando el asalto. Los senderistas dominaron al administrador, Carlos Parodi, a su esposa y a sus cuatro hijos, y saquearon el fundo; el botín incluyó dos armas de caza, radiotransmisores y dinero.¹⁵

Tres días después, la jefatura de línea de la Guardia Civil en Vilcashuamán recibía una llamada de auxilio. Benigno Medina, el propietario del fundo San Agustín de Ayzarca, cerca a la comunidad de Parcco, había sido informado que su fundo sería asaltado y arrasado. San Agustín era el lugar donde informaciones de inteligencia habían señalado la presencia de gente armada en 1979 que posteriormente fueron precisados como soldados en busca de un desertor, por el oficial a cargo del Plan Operativo “Morochuco”. Estaba, en todo caso, en la periferia de una zona donde Sendero había realizado el trabajo de campo más largo e ininterrumpido, y que en los años siguientes iba a estar una y otra vez —siempre en forma trágica— en el centro de la guerra.

El jefe de línea de Vilcashuamán envió tres policías a hacer “las constataciones del caso” a Ayzarca. Al pasar por Parcco, detuvieron a dos personas, aparentemente señaladas como participantes en el asalto al fundo de Ayrabamba. Cuando, horas después, los policías retornaban a Vilcashuamán, fueron emboscados en el paraje de Lachacpujas. No hubo heridos, pero los detenidos lograron escapar.¹⁶ La policía, de otro lado, no consideró necesario extender protección permanente a Benigno Medina; lo cual podía ser explicable a esas alturas, cuando la violencia era aún más rumor y amenaza que sangre. Sin embargo, para Sendero el destino de Medina ya estaba pesado y medido.

El 28 de julio, el día nacional del Perú, terminó el gobierno militar y empezó la era democrática. De acuerdo a la ley, el presidente saliente debe entregar la banda presidencial al presidente del Senado, quien se la impondría al presidente entrante. Pero eso no se hizo entonces. Morales Bermúdez no era un mandatario elegido, sino un dictador, y el protocolo subrayó la diferencia en legitimidad. El presidente del Senado tomó simbólicamente la banda de los electores e invistió con ella a Belaunde, mientras Morales Bermúdez y sus generales se retiraban calladamente de Palacio de Gobierno y los ministerios. En paz, pero sin gloria. Fue, otra vez, un momento de entusiasmo generalizado. El contraste entre la imagen madura y sonriente de Belaunde con la sombría y severa de los militares reflejó entonces la diferencia entre democracia y dictadura. Nunca más, se dijo, repitió y sintió, se volvería a trastocar el gobierno democrático.

En la noche, Belaunde juramentó a su gabinete en un balcón de Palacio de Gobierno, de cara a la plaza de armas, cubierta de gente. Los aplausos se repartieron con equidad mientras cada ministro prestaba juramento. De la Jara, símbolo vivo de la intención del gobierno de no apoyarse en la represión sino en la ley y el convencimiento, fue uno de los más aplaudidos. Los militantes de base de Acción Popular lo querían especialmente, por el valor moral demostrado luego del golpe de Velasco, por saber que él había sufrido el exilio más que los otros dirigentes, y por conocer que para él la hora de la victoria estaba empañada por el dolor de la viudez reciente. Había además mucho de conmovedor en la figura pequeña y rubicunda de De la Jara. Figura de querubín con corbata y sienes plateadas, en un rol que tradicionalmente se suponía reservado a civiles o militares duros, adustos, astutos, o todo a la vez. Era el sastrecillo valiente al comienzo de su jornada. Y de hecho, el que el gobierno democrático tuviera como ministro del Interior a De la Jara, hizo que buena parte de la nación, como en algunas otras breves ocasiones a lo largo de su historia, se sintiera en camino hacia la utopía democrática.

El entusiasmo no había logrado cuajar en Ayacucho ese día, como en el resto del país. En medio del desfile militar en la plaza de armas, ocupada por cerca de cinco mil personas, cuando el contingente de Los Cabitos pasaba frente al local de la universidad, alguien arrojó lo que parecieron cinco petardos, con la mecha encendida. Un sector del público arrancó en estampida. El pánico pudo haber sido mucho mayor, si el guardia civil Miguel Alcántara no hubiera arrancado la mecha rápidamente. Se vio luego que los “petardos” eran solo carrizos forrados

“con papel de dinamita”.¹⁷

Ese mismo día, la antena de la estación repetidora, situada en la cima de Yanaorcco, fue dinamitada. También lo fueron el local del Concejo Provincial de Cangallo y el del Concejo Provincial de Huancapi.

En otro lado del país, en Cerro de Pasco, un contingente senderista asaltó el mismo día la compañía minera Atacocha y se llevó más de trescientos cincuenta cartuchos de dinamita, además de mechas y guías. Fue el primer asalto a asientos o polvorines mineros desde el comienzo de la insurrección. Al día siguiente, en un campamento del Ministerio de Transportes, en Pomabamba (Ayacucho), otro grupo senderista dominó a los trabajadores y se llevó dos mil doscientos cartuchos de dinamita, fulminantes y mechas.

La policía había reaccionado en casi todos los casos. En Huancapi logró capturar a los presuntos autores de los atentados dinamiteros. Poco antes, en Ayacucho, Germán Medina, el médico que sería elegido diputado por Izquierda Unida en 1985, había recibido un telegrama del presidente de la Federación Médica Peruana, indicándole que en Huancapi se había detenido a un médico, e instruyéndole para que averiguara e hiciera gestiones para lograr su libertad. Medina no dio crédito inicialmente a la información. No había médico en Huancapi. No obstante, hizo gestiones ante el prefecto del departamento, Marciano Caveró. En la tarde, Caveró le informó que el detenido era el médico Eduardo Mata Mendoza, exdirector del Hospital de Cangallo.

La noticia fue una sorpresa para Medina y los demás médicos en Ayacucho, porque Mata había renunciado poco antes al cargo: “Había venido a Ayacucho en las navidades anteriores y nos había dicho que renunciaba al hospital de Cangallo, que se iba a Lima a hacer su residencia. Yo recordaba eso muy bien, porque había significado que Cangallo se quedaba sin médico”.¹⁸ Al partir de Cangallo, le habían ofrecido una fiesta de despedida a él y a su esposa.¹⁹

Su esposa era Yeny María Rodríguez Neyra, que también trabajaba en Cangallo como asistente social y estudiaba a la vez Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambos eran cuadros del primer grupo que Sendero lanzó a la lucha. En lugar de ir a Lima, los esposos se internaron en el campo en el área de Cangallo y Huancapi. Para evitar ser reconocido, Mata vistió la indumentaria andina: poncho, ojotas, sombrero. El tener rasgos costeños y color claro no era un problema en Cangallo, donde el asentamiento de los derrotados conquistadores almagristas ha dejado huella fisonómica hasta hoy. Identificándose como “Víctor Paniagua”, Mata había sido capturado con su esposa y otro estudiante.²⁰ Un cuarto capturado confesó actuar bajo las órdenes del médico.

La corta odisea de ambos esposos representa una buena ilustración sobre los métodos que utilizó Sendero para proteger a sus cuadros al inicio de la insurrección. Mata provenía, de acuerdo a varios testimonios, del MIR, pero ya estaba incorporado a Sendero, y su posición en la subzona de Cangallo era indudablemente la de un cuadro importante. Que el presidente de la Federación Médica Peruana se hubiera enterado en Lima de la prisión de Mata a las pocas horas indica la velocidad con que movilizó Sendero su estrategia de defensa. De la misma forma en que se habían utilizado las instituciones del Estado para crecer, se usaban, cuando era posible, organizaciones gremiales para defender a los suyos, ocultando su vinculación política o apelando a los sentimientos comunes de solidaridad en la izquierda peruana frente a cualquier arresto. En este caso, los reflejos de defensa gremial fueron eficazmente inducidos, y la Federación Médica pidió a sus afiliados ayacuchanos movilizarse para lograr la libertad de Mata. Los médicos hicieron una colecta entre sí, y con Medina a la cabeza viajaron a Huancapi a gestionar la libertad de su colega y organizar su defensa.²¹

El aspecto familiar era una historia por completo diferente. Los Mata tenían un hijo de pocos meses de edad, que estaba con la madre en el momento de su arresto. Hicieron llamar a un conocido y le “recomendaron” al niño, para que lo “criara”.²² Luego sucederían muchos casos parecidos: cuando parejas de esposos pasaban conjuntamente al trabajo clandestino, los hijos quedaban al cuidado de parientes cuando se podía o, si no, bajo el de amistades. De acuerdo a las evidencias, Sendero no invirtió mayores esfuerzos en cuidar o proveer a las necesidades de los hijos de sus cuadros; y parece que el abandonar a la prole propia por el proletariado, o la abstracción hipotética bajo tal nombre, fue una de las formas de dar el ejemplo de entrega a la causa.²³ Uno no puede menos de pensar, aunque sea una reflexión ociosa, si las cosas no hubieran sido diferentes en ese respecto si Guzmán y Augusta La Torre hubieran logrado tener hijos.

En Huancapi, Mata no hizo esfuerzo alguno por explicar a Medina y los otros médicos por qué estaba ahí y no en Lima. Solo cuando el fiscal les explicó que lo habían encontrado “emponchado, con dinamita cerca, pintando paredes”, Mata negó cualquier propósito explosivo “y dijo que había ido a visitar a unos compadres”.²⁴

Los médicos tuvieron que esforzarse en su defensa, pese al espíritu generalizado de amnistía que existía entonces, y a la poca o ninguna importancia que se les daba a los atentados senderistas. Finalmente, después de varias visitas, y de haber logrado trasladarlo a Cangallo, consiguieron liberarlo. Mata no perdió tiempo en desaparecer, y sus colegas ayacuchanos no lo volvieron a ver vivo. “Después lo vimos en la morgue”.²⁵ Pero eso fue en 1982, cuando Mata cayó en el asalto a la cárcel de Ayacucho. Su esposa sería apresada otras veces en el futuro inmediato.

Hoxha y Guzmán

La guerra había empezado, aunque nadie la tomara en serio. Durante la mayor parte de 1980, el solo nombre de Sendero Luminoso tendía a provocar chistes en Lima, aun dentro de la izquierda legal, que ensayaba la uni-dad y sentía abierta la promesa de crecimiento dentro del sistema. Hacia fines de año, la acumulación de acciones obligó a reconocer la existencia de un problema; pero todavía entonces fue visto básicamente como un esfuerzo rabioso de agitación, por un grupo histórico e histérico, colocado en la marginalidad política y sicológica, que sería fácilmente dominable cuando el gobierno se pusiera a actuar en serio. Algunas de las acciones más graves, como la toma y saqueo del fundo de Ayrabamba, fueron poco difundidas en Lima, o no fueron relacionadas con las otras acciones que ocurrían simultáneamente en Ayacucho y el resto del país. Sendero avanzaba, entre tanto, los primeros pasos allende el Rubicón, con cautela y cuidado extremos, coordinando casi cada acción individual y examinándolas de inmediato. La cautela exhibida durante esos meses aún preñados de inexperiencia y dudas fue muy superior a la que tendrían luego, cuando la violencia había crecido marcadamente. De hecho, la continuidad de las reuniones del Comité Central y la Comisión Política dan la impresión que la directiva senderista hubiera estado en virtual sesión permanente. Fueron reuniones, como de costumbre, muy conflictivas, pero esta vez de conflicto no provocado, sino espontáneo.

El 29 de mayo, a menos de dos semanas de iniciadas las acciones, empezó una reunión del

Buró Político Ampliado. Su objetivo era determinar “el balance de las acciones” emprendidas hasta entonces. De acuerdo a su contabilidad, habían realizado noventa y ocho acciones hasta entonces y formado los “primeros destacamentos [...] estos destacamentos fueron, como dijo Lenin, grupos armados sin armas, para conducir a la masa”.²⁶

La apreciación global fue que “el Partido, la dirección, cuadros y bases cumplen”, y, con exageración que se haría luego típica, creyeron distinguir una “gran acogida de las masas”. No obstante, pese al “gran éxito del inicio de las acciones”, determinaron que se pudo “hacer más y mejor”.²⁷

Los pasos siguientes fueron los de ajustar el plan para la intensificación de acciones durante los tres meses siguientes, hasta comienzos de febrero. Las acciones deberían ser “movilizaciones” armadas o semiarmadas, “cosechas” y la continuación del “boicot electoral”. La planificación táctica y la coordinación de los atentados individuales deberían hacerse al nivel de “subzonas”. A la vez, las acciones deberían realizarse teniendo sobre todo en cuenta la necesidad de entrenamiento de los nuevos destacamentos, y de afinar dinámicamente su “estructura, dirección y composición”. Sobre la dirección de los destacamentos, se enfatizó la estructura comunista clásica de mando doble: el político y el militar, sin olvidar que ambos estaban dentro del proceso de “militarización del Partido”.

En cuanto a la metodología de los atentados, la reunión definió los cinco pasos componentes de cada acción, que se convirtieron desde entonces en parte esencial de la doctrina táctica senderista: 1) determinación del plan o acción concreta; 2) fuerzas y medios humanos y materiales; 3) preparación (incluyendo reconocimientos); 4) ejecución de la acción (incluyendo un informe inmediato sobre la misma); y, 5) balance: el examen minucioso de cada parte de la acción, incluyendo el desempeño de la dirección. El balance culminaba en conclusiones, que simultáneamente se elevaban a la Dirección del Partido y servían como base para la siguiente operación.²⁸

El problema para Sendero, a fines de mayo, no era la escasez de voluntarios, sino su falta de entrenamiento y su inexperiencia: “Tenemos contingentes, [pero el] problema es la construcción de la fuerza armada: construcción ideológico-política y construcción organizativa [...] establecer doble mando, forjar disciplina y vigilancia militares”. Y si Guzmán repetía que la forja ideológica era siempre la fundamental, también se subrayó la necesidad de adiestrar a sus “destacamentos” en “tiro, emboscadas, asaltos”. En la ejecución de cada acción, los mandos deberían tener presente que “la audacia es el más hermoso cálculo del genio”.

La reunión terminó el 5 de junio, con una nueva consigna, junto con las familiares: “Contra el nuevo gobierno reaccionario”. Y el lema era apropiadamente hiperbólico: “Hemos llegado a la cumbre donde estaba plantada la nueva bandera, la hemos enarbolado y marchamos hacia la guerra de guerrillas”.

Inmediatamente después se realizó el incendio de la Municipalidad de San Martín de Porres y, poco después, el asalto al fundo de Ayrabamba, junto con decenas de otras acciones menores.

El 8 de agosto empezó una reunión del Comité Central Ampliado (es decir, acogiendo a varios militantes no titulares). El objetivo de la reunión era hacer un balance de la primera parte del “Plan de inicio” de la lucha armada, darla por concluida, y entrar a la segunda parte: “¡Hacia la guerra de guerrillas!”, que debería durar hasta fines de año.

Las citas de Lenin y Mao —cuidadosamente elegidas para la ocasión, como siempre— que Guzmán hizo leer al inicio de la reunión, enfatizaban la virtud revolucionaria del aprendizaje práctico: “Como es natural, muchísimas personas nos acusaban de haber puesto mano en estos

asuntos sin saber cómo llevarlos hasta el final”, recordaba Lenin, y Mao sentenciaba: “Luchar, fracasar, luchar de nuevo, fracasar de nuevo, volver a luchar, y así hasta la victoria: esta es la lógica del pueblo”.

Los informes sobre las acciones de la primera etapa del plan abarcaron un número considerable de comités regionales, locales y zonales, cuya mera enumeración como indicio de la fuerza y distribución operativa de Sendero en los meses tempranos de la insurrección, muestran una organización mucho más grande y repartida de lo que cualquiera hubiera supuesto entonces y aun después.

Informaron: la subzona Cangallo del Comité Zonal Andahuaylas —Cangallo, donde estaba el médico Eduardo Mata—, parte del Comité Regional Principal (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac), el Comité Metropolitano (Lima y extramuros), la subzona Andahuaylas, el Comité Zonal Ayacucho, el Comité Zonal Huancavelica, el Comité Regional Central (Junín, Huánuco, Cerro de Pasco), el Comité Regional Cusco-Puno, el Comité Regional Arequipa-Tacna, el Comité Local de Chiclayo y el Comité Local de Huancayo. Es cierto que algunos comités regionales y zonales eran muy débiles, pero todos tenían por lo menos una organización básica constituida y en funcionamiento. Y todos ya habían actuado de alguna forma. No era, en modo alguno, una organización pequeña y desdeñable la que acababa de romper los fuegos, sino una que hacía el tránsito hacia la guerra con gran cautela. Al terminar los informes y entrar al debate sobre el balance de las acciones, Guzmán enfrentó una requisitoria interna que escapó parcialmente a su control. Un grupo de cinco dirigentes, miembros algunos del Buró Político y otros del Comité Central, pusieron en cuestión la programación de las acciones sobre la base de consideraciones de pureza ideológica y doctrina. La discusión se había truncado en la reunión de mayo-junio, y Guzmán había logrado controlar la disensión calificándola como una forma de derechismo, de expresión de la “línea militar burguesa”. Pero ahora, los cinco dirigentes senderistas acusaron a Guzmán de una grave desviación de la pureza ideológica, de “hoxhismo”. Las acciones del Partido, indicaron, ponían no solo el mismo énfasis en la ciudad y en el campo, sino que parecían dirigirse a darle más importancia a aquella en perjuicio de este, y eso identificaba la herejía del renegado Enver Hoxha.²⁹

La acusación impactó a los asistentes y Guzmán se vio en la circunstancia de pasar a la defensiva. Fue un momento inesperadamente frágil en su consolidación como dirigente supremo, que ninguno de sus escritos retrospectivos deja de glosar, aunque en forma convenientemente maquillada.³⁰

Con el cuadro de acciones en la mano, Guzmán intentó explicar que la distribución en cantidad y calidad de los atentados no potenciaba a la ciudad a expensas del campo. La confusión provenía, añadió, debido a que “la propaganda reaccionaria daba grandes titulares a los sabotajes en las ciudades y minimizaba las acciones en el campo”.³¹ Los cinco inquisidores, pues, basaban sus acusaciones en la “propaganda burguesa” y no en el análisis marxista.

Pero, precisó Guzmán, la lucha armada en el Perú tenía características propias. “Es una especificación de la guerra popular en el Perú hacer del campo el teatro principal de las acciones y de las ciudades complemento necesario”.³² Ello representaba un distanciamiento de la visión ortodoxa (no necesariamente de la práctica histórica) del maoísmo, y se acercaba a la más pragmática doctrina insurreccional vietnamita. Mas eso era algo que los cuadros senderistas podían comprender como un “desarrollo” y no una herejía.

La importancia de esta discusión es evidente. Contrariamente a lo que poco informados intérpretes de Sendero sostuvieron en 1987 y 1988 (que esta organización empezaba recién

entonces a enfatizar la acción urbana a expensas de la rural), el hecho es que desde el inicio de la insurrección, las acciones en las ciudades, sobre todo en Lima, tuvieron la mayor importancia. Hubo trimestres y semestres, entre 1982 y 1987, en que el número de acciones sediciosas en Lima fue superior a las que hubo en Ayacucho. No obstante, el campo nunca dejó de ser considerado por Guzmán como el teatro de acumulación estratégica de fuerzas y de decisión final del conflicto. La ciudad no se hizo prioritaria respecto al campo. Lo que sí es cierto es que —quizá en parte por aquella acusación de “hoxhismo”— Sendero dejó de lado en gran medida las acciones semilegales en las ciudades, a partir de setiembre de 1980 y hasta 1986. El MOTC, que había figurado como portaestandarte urbano durante los primeros meses, fue calladamente puesto de lado.

Una vez encontrada la línea más eficaz de argumentación, Guzmán no tuvo mayores dificultades en superar la acusación de “hoxhismo”. Que el desarrollo de su metodología estratégica tenía elementos de heterodoxia respecto a la visión dogmática del maoísmo, era claro ya a esas alturas. Pero, como Mao, Ho y Tito en su momento, Guzmán presentaba la diferencia en métodos y estrategias como un desarrollo integral del dogma, y no como una ruptura con este.

Luego, hecha la revisión crítica de las principales acciones en cada zona durante los meses anteriores (“vivisección” en el lenguaje de esa reunión, aludiendo a la actitud de implacable objetividad que se pretendía instilar), se pasó a delinear el plan de acciones para la última parte del año, “Hacia el inicio de la guerra de guerrillas”, la etapa del salto desde el tumulto y el “desborde” hacia la insurrección franca.

El plan de acciones aprobado en esa sesión, y en una reunión inmediatamente posterior del Comité Central (que se realizó entre el 8 y 9 de setiembre de 1980), consideraba una intensificación radical de las acciones. Estas tenían seis formas posibles: agitación, movilización, sabotaje, asalto, levantamiento de cosechas, enfrentamientos.

Cada comité regional, y dentro de estos, cada zona y cada subzona, deberían aplicar parte o toda la clasificación; las regionales más débiles, por ejemplo, deberían necesariamente limitarse a acciones de agitación, movilización y sabotaje. Las más fuertes, como el Comité Regional Principal y el Comité Metropolitano (con la excepción de la confiscación de cosechas en el último caso), debían aplicar las seis formas de lucha, intensificando las de mayor entidad: asaltos, cosechas, enfrentamientos.

Las acciones estaban encuadradas dentro del plan de “Inicio de la guerra de guerrillas”, que se desarrollaría entre octubre y diciembre de 1980, aprovechando el momento de las acciones previas. Para preparar a los cuadros sobre los problemas estratégicos y tácticos específicos de esta etapa, se distribuyeron, leyeron y comentaron varios textos sobre guerra de guerrillas y técnicas contrainsurgentes: desde aquel clásico de la década del 60, *La guerra de la pulga*, de Robert Taber,³³ hasta textos doctrinarios del Ejército peruano sobre subversión y guerra contrarrevolucionaria.

Los puntos básicos que debían regir la aplicación del plan de “Inicio de la guerra de guerrillas” eran también seis: 1) acicatear la “lucha de clases” en el campo, agitar a través de acciones; 2) concentrarse en el campo como escenario principal, con las invasiones de propiedades como acción fundamental; 3) la ciudad como complemento, apoyando movilizaciones y huelgas con acciones armadas; 4) aplicar las seis formas de lucha y los cinco pasos en cada acción (ver más arriba sobre ambos); 5) “periodizar” el plan de octubre a diciembre; 6) mantener el plan centralizado y “objetivo” para que “lo subjetivo no lo pueda descentrar”, es decir, para evitar su distorsión en la práctica, pero a la vez estimular su

“aplicación con iniciativa”.

El plan se abocaba también a enfrentar uno de los puntos más difíciles en el tránsito a la guerra: la transformación parcial de un partido clandestino en una organización militar eficiente. No era una tarea fácil. La organización estrictamente celular, por ejemplo, no podía mantenerse en forma rígida si se intentaba constituir grupos relativamente numerosos, así fuera por tiempo breve. Cómo agruparse y dispersarse en forma eficaz, sin aumentar simultáneamente la vulnerabilidad de cuadros y militantes a la delación y la identificación, fue el problema que entonces empezaron a tratar de resolver. No había solución perfecta para ello y Sendero escogió el curso de acción propio del modelo de insurrección asiático: aceptar un alto número de bajas, en tanto se mantuvieran a un ritmo menor que el del ingreso de nuevos reclutas, y en tanto fueran esencialmente de militantes de base o cuadros medios. La dirección debía, en cambio, protegerse a toda costa. Pero además, era necesario que no se cortara la continuidad operativa, aunque cayera un número importante de militantes.

Las instrucciones del plan de “Inicio de la guerra de guerrillas” definían los métodos que Sendero iba a mantener y utilizar en los años siguientes. Los comités regionales —y sobre todo el Comité Regional Principal— debían abocarse al “desarrollo de la construcción de la fuerza armada”. Ello suponía formar simultáneamente pelotones, a partir de los destacamentos, y organizar “milicias” en las áreas ya ganadas.

En el modelo de insurrección asiático existen tres categorías fundamentales de fuerza militar, una vez que esta ha logrado ser organizada: la fuerza principal, la fuerza regional y las guerrillas locales. Las guerrillas locales son el primer escalón y la forma inicial de organización militar insurgente; es el típico guerrillero que permanece en su pueblo o aldea, llevando una vida aparentemente normal, y que de noche cambia herramientas por armas. El segundo escalón, el regional, está constituido por guerrilleros seleccionados de la base aldeana, mejor entrenados y armados, cuyo rango de acción cubre una o varias provincias. Por fin, los guerrilleros de la fuerza principal provienen de los grupos regionales, están formados por los militantes más experimentados, entrenados y su armamento es el mejor. Ellos son la estructura básica sobre la que se asienta el ejército insurgente, el cual en determinado momento de su crecimiento dejará de ser guerrillero y pasará a conducir operaciones de guerra convencional.

En casi todas las insurrecciones de corte asiático ni la fuerza regional ni la principal se encuentran en combate o en maniobra permanente. La mayor parte del tiempo suelen dedicarse a tareas de propaganda, de trabajo agrícola (basados en el *dictum* maoísta de que las fuerzas insurgentes no deben ser una carga para los campesinos) y de entrenamiento. La relación de estas tres fuerzas entre sí, y con las organizaciones partidarias de su nivel, es complementaria. La guerrilla local provee inteligencia precisa, conocimiento perfecto del terreno y, a través de los comités partidarios de gobierno, control sobre la población. La fuerza regional y la principal, por su lado, pueden concentrar la fuerza que la guerrilla local nunca tendrá a su disposición. El esquema no es excesivamente complejo, pero requiere, para poder funcionar adecuadamente, de una organización partidaria muy disciplinada y diligente.

Eso es lo que Sendero se lanzó a tratar de construir entonces. La materia prima eran los “destacamentos” ya organizados. Una de las disposiciones del plan era crear de inmediato los “destacamentos especiales”, que dependían directamente de los comités regionales y, en pocos casos, de la dirección de Sendero. Estos destacamentos no estaban anclados geográficamente, e iban a ser utilizados en el futuro sobre todo en los llamados “aniquilamientos”, es decir, en los asesinatos.

Otra disposición del plan buscaba asegurar la continuidad operativa, aun cuando una parte del aparato insurgente fuera barrida por la policía. Se ordenaba desarrollar una segunda red, paralela a la principal, que funcionaría como reserva de la que se encontraba en acción. En cuanto esta fuera desbaratada, la segunda red pasaría a actuar. Este tipo de organización iba también a tener otro resultado en el futuro, el de confundir a las fuerzas policiales y hacer pasar más de un bochorno a varios ministros del Interior de Belaunde, cuando se proclamaba, y con razón, haber capturado a todos los autores de una serie de atentados, cuyas declaraciones, sin embargo, eran seguidas de apagones, dinamitazos, ataques terroristas. Finalmente, junto con todas las medidas militares, destinadas a destruir el Estado y la sociedad, se dieron directivas para aprovecharlos. Sendero debía promover y estimular campañas por la “libertad de detenidos, contra la represión y por las libertades y derechos democráticos”. Lo cual, entre otras cosas, indica que si el cinismo se convirtiera en una virtud canonizable, Guzmán sería su primer santo.

Desde los primeros días de octubre, las acciones senderistas, que habían amainado durante agosto y setiembre, se intensificaron. En Ayacucho, el atentado que rompió los fuegos de la ofensiva fue un petardo de dinamita lanzado el 2 de octubre contra el local del puesto de la Guardia Civil en Huancasancos, al sur de Ayacucho, y ahora capital de la provincia del mismo nombre.

El 8 de octubre reventó un dinamitazo cerca a otra estación policial en Ayacucho; el 10, explosionaron petardos en la plaza de armas de Huancapi, y fue izada la bandera roja; el 13, la planta de energía eléctrica de Huanta fue sabotada; el 20, fue asaltado el estudio de la radio *La voz de Huamanga*, y durante cuatro minutos se difundió una arenga senderista. El día siguiente, el 21, hubo cinco atentados entre Ayacucho y Huanta, el más grave de los cuales fue el ataque, con piedras y bombas molotov, contra un auto patrullero de la Guardia Civil en Ayacucho. El 23, el auto en el que viajaba el comandante de la guarnición militar local fue atacado con petardos de dinamita. El 5, la plaza de armas de Vischongo fue tomada temporalmente por un grupo que izó la bandera roja y vivó la lucha armada haciendo disparos al aire. El 10, los locales de la subprefectura y del registro electoral de Cangallo fueron dinamitados; la jefatura de línea policial de Huancapi fue atacada con explosivos, y también lo fue el local de Acción Popular, en la misma ciudad, mientras reventaban petardos cerca de la cárcel provincial.³⁴

Las acciones no se confinaron a Ayacucho: en todo el país, el ruido del petardeo anunciaba la movilización de los contingentes senderistas. En Andahuaylas, la puerta del Concejo Provincial fue dinamitada el 20 de octubre, y la policía alcanzó a desactivar un paquete de dinamita arrojado junto a su puesto en Talavera. En diciembre los concejos municipales de Talavera, Ongoy y Chincheros sufrieron atentados.

En Arequipa, el 16 de octubre se dinamitó una torre de transmisión de energía eléctrica y hubo otro ataque mayor, que oscureció parte de la ciudad, el 18 de noviembre. En diciembre, una camioneta de la Policía de Investigaciones fue dinamitada.

En Huancavelica, el 16 de octubre fue dinamitado el local de la jefatura departamental de la Policía de Investigaciones. Los atentados, como en el resto del país, eran aún con cargas pequeñas de explosivos. El 20 de octubre, una torre para cables de alta tensión de la central hidroeléctrica del Mantaro fue también sabotada con explosivos. Y en diciembre hubo otros dos sabotajes, de creciente importancia, a la red de transmisión eléctrica. En Junín, los atentados fueron casi a diario, sobre todo cerca al asiento minero en La Oroya. Por primera vez fue dinamitada parte de la vía férrea del Ferrocarril Central, el 20 de octubre. El 9 de diciembre se produjo diversos sabotajes simultáneos a torres de alta tensión, y hasta cerca de la Navidad, hubo

varios ataques por día en el departamento. En Lambayeque, en la costa norte del país, se realizaron atentados constantes sobre todo con bombas molotov, igual que en la vecina La Libertad. y el 15 de octubre reventaron veintisiete bombas caseras en la plaza de armas. En Cerro de Pasco, los atentados fueron más serios, sobre todo el sabotaje con dinamita.

En Lima, entre tanto, una turba de alrededor de cien personas atacó, saqueó e incendió un supermercado en el Rímac. El 23 de octubre, el municipio de Comas fue incendiado bajo una verdadera granizada de bombas molotov, y en los días siguientes hubo atentados menores casi a diario. El 15 de diciembre reventaron bombas en agencias de siete bancos diferentes y una, más fuerte, en el entonces odiado local de la embajada de China Popular.

La dinamita, materia prima esencial para los atentados senderistas, fluía ya continuamente desde los centros mineros dispersos y desprotegidos y de los polvorines solitarios hasta los depósitos de la organización clandestina. Es evidente, examinando el tipo de atentados en las diversas regiones, que Sendero no había desarrollado aún los mecanismos para distribuir explosivos, de una parte a otra del Perú (en las ciudades y en las regiones no mineras, las bombas molotov eran generalmente empleadas, en tanto que la dinamita lo era casi exclusivamente en las demás).

Los robos de dinamita aún no alcanzaban la proporción exorbitante que tuvieron en años posteriores, pero ya eran considerables. El 5 de octubre, un asalto a la mina Chayapa, en la provincia limeña de Huarochirí significó, por ejemplo, cincuenta cartuchos de dinamita y treinta detonadores añadidos al arsenal explosivo de Sendero. El 27 de octubre fueron robados cerca de treinta y cinco mil fulminantes de una mina en Huaraz (habrían otros dos saqueos importantes de dinamita en el mismo departamento antes de fin de año). El 15 de noviembre, otro asalto a una mina en las cercanías de Lima culminó con el robo de veinte cartuchos de dinamita y quinientos fulminantes. Otros dos asaltos más en Lima, antes de fin de año, añadieron setenta cartuchos y cincuenta fulminantes a la suma anterior. En Puno, en cambio, la cosecha dinamitera era mayor: en una incursión, el 9 de diciembre al local del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los senderistas lograron robar tres cajones de dinamita y mil quinientos metros de mecha. Los fulminantes no eran problema: dos días antes habían robado veintinueve mil de la mina Pomperia.

Así, casi de cartucho en cartucho, Sendero fue apertrechando (con el arma que sería primordial por varios años, la dinamita) a sus hasta entonces básicamente desarmados destacamentos; mientras estos, en acciones de incremento gradual de la violencia, pasaban del desborde venial de la ley a la franca insurrección armada.

El caso Balaguer

El efecto de los atentados fue desigual. En el Parlamento, varios senadores de Acción Popular presentaron un proyecto de ley que imponía severas sanciones a los convictos de acciones terroristas. Pero el proyecto no logró siquiera unanimidad entre los representantes de Acción Popular y quedó eventualmente varado en las cámaras. El ministro De la Jara, guiándose en buena medida por las informaciones e interpretaciones que sus expertos policiales le hacían llegar, hizo declaraciones que intentaron ser tranquilizadoras pero que, contrapuestas a las

noticias de atentados, tuvieron el resultado opuesto.

Además, el problema principal que tenía De la Jara, desde que había asumido el cargo de ministro del Interior, no era el de Sendero —que parecía, desde su errónea perspectiva, esporádico y controlable— sino el de imponer su autoridad sobre los comandos policiales. Su aspecto y su imagen lo ayudaban poco ante gente acostumbrada a asociar el mando con el continente intimidatorio. La relación con el jefe de la Guardia Civil, el general Juan Balaguer, fue ríspida desde el primer día de gobierno. Balaguer, que había tenido rango de ministro en la última parte del gobierno militar, no parecía resignado a subordinarse a De la Jara, y menos a ponerse en pie de igualdad con los jefes de la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Cuando Héctor López Martínez le dirigió un oficio administrativo, Balaguer contestó indicando que el viceministro no debía dirigirse a él, “porque no tenía su rango”.³⁵ Posteriormente, luego de asistir a los primeros acuerdos semanales del ministro con Belaunde (el ministro asistía acompañado por el viceministro y los tres jefes de las policías), Balaguer ofició al ministro reclamando ir solo al acuerdo, sin los otros directores policiales y sin el ministro siquiera.

Copias de los oficios circularon entre los oficiales de la Guardia Civil y provocaron una fervorosa solidaridad con Balaguer, sobre todo entre el sector de oficiales “institucionalistas”. Este era un grupo de oficiales medios y altos que sentían, no sin razón, que su institución había sido maltratada y disminuida, y que buscaban convertirla en poderosa y respetada. Durante el gobierno de Morales Bermúdez habían logrado, a costa de sufrir en equipamiento y presupuesto, el equiparamiento de jerarquías con las militares; y luego durante la Constituyente habían conseguido redefinirse, ya no como las segundas fuerzas auxiliares, sino como fuerzas policiales. Una azarosamente buscada legitimidad se había conseguido. También habían logrado, pese a la resistencia de algunos irreductibles, ser admitidos en la asociación de oficiales generales, donde se juntaban generales en actividad y en retiro de las Fuerzas Armadas. La Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana, en cambio, no fueron admitidas, lo cual no disgustó a los guardias civiles, que consideraban y trataban como cenicientas a las otras policías.

Había algunos argumentos justificados entre los “institucionalistas”, sobre todo los que protestaban contra el debilitamiento funcional de la Guardia Civil a manos de los militares, pero otros reclamos eran expresiones de la mentalidad feudal en la concepción institucional, aquella insistencia en los fueros y privilegios exclusivos, en las prerrogativas soberanas que tanto daño había hecho a la maduración social y política del país.

De otro lado, los “institucionalistas” tampoco tenían un gran capitán en Balaguer. Vano, desproporcionadamente preocupado con los símbolos, rituales y trapíos de la autoridad, las razones de Balaguer en su confrontación con el ministro tenían antes que ver con preeminencias y dignidades protocolares que con los “objetivos institucionales” de sus oficiales.

El conflicto se desencadenó a fines de agosto. En las ceremonias de aniversario institucional, el 30 de agosto, Balaguer pronunció un discurso que era, según López Martínez, “insolente en el fondo y la forma, como una exigencia de la Guardia Civil”.³⁶ De la Jara no contestó, inhibido por su limitación para expresarse en público, y eso puso más audaz a Balaguer. En el clásico hípico “Guardia Civil” en el hipódromo de Monterrico, Balaguer desairó al ministro. De la Jara, quien se había retirado solo del hipódromo, decidió ese día “que él o yo”.³⁷

No hubo que esperar. Balaguer hizo declaraciones públicas, poco después, indicando que existía “un plan premeditado de la ultraizquierda para conmocionar al país y alterar la paz social con paros, huelgas y actos subversivos”.³⁸ No se refería a Sendero, sino, utilizando los términos

del gobierno militar, a la izquierda legal. Al leerlas, De la Jara ordenó a López Martínez que hiciera un comunicado público, desautorizando a Balaguer y retirándole su confianza.

El comunicado, difundido el 6 de setiembre, informaba, entre otras cosas, que Balaguer había “perdido la confianza del señor ministro del Interior”, pero se cuidaba de añadir que eso “de ninguna manera se puede interpretar como un cuestionamiento a la Guardia Civil, institución a la que, públicamente, una vez más, se le reitera la confianza y el respeto que merece como organismo tutelar del Estado”.

El 6 de setiembre en la mañana, ministro y viceministro se encontraron, literalmente, con una rebelión policial bajo sus pies. En el viejo edificio de Córpac, el despacho ministerial estaba en el cuarto piso, y el del director de la Guardia Civil en el tercero, sobre un gran patio que antaño, cuando era aeropuerto, sirviera para el ingreso y la salida de pasajeros. Desde temprano, el patio quedó colmado por una manifestación de oficiales de la Guardia Civil que apoyó a Balaguer. En Lima y parte del país la actividad policial había cesado, con los guardias civiles concentrados en sus comisarías. La manifestación no se había tornado violenta, pero los ánimos estaban muy agitados.

De la Jara y López Martínez pasaron algunas horas incómodas en la estrecha área del despacho ministerial, con la manifestación hirviendo debajo de ellos. Mientras la crisis tomaba cuerpo, el presidente Belaunde, tratando de encontrar una salida diplomática, le expresó, no obstante, su respaldo a De la Jara. El primer ministro Ulloa lo hizo también enfáticamente. Balaguer y su Estado Mayor permanecían en su despacho.

Entonces fue la hora de las otras policías. El jefe de la Policía de Investigaciones, Eduardo Ipinze, declaró que su instituto respaldaba al ministro; y el director de la escuela de oficiales de la Policía de Investigaciones, Alberto Suárez Caballero, ofreció hacer marchar a sus cadetes hacia el ministerio (que está a pocas cuadras de distancia) a proteger al ministro. Entre tanto, la Guardia Republicana se había adelantado, y en varios ómnibus llegaron armados al ministerio, a darle custodia a De la Jara. Durante los dos días que duró la crisis, De la Jara y López Martínez durmieron custodiados por contingentes de la Policía de Investigaciones y de la Guardia Republicana.

A las pocas horas, fue claro que la insubordinación de la Guardia Civil no tenía ninguna posibilidad de éxito. Había, empero, el peligro que la protesta masiva de los mandos pudiera degenerar en violencia armada. Belaunde, deseando evitar mayor conflicto, invitó a Balaguer y a un número de sus generales a Palacio de Gobierno. Cuando llegaron, el presidente respaldó a su ministro, pero le ofreció a Balaguer el puesto de agregado policial en la embajada del Perú en Washington. El puesto no existía, y Belaunde lo creó en ese momento.

Si las fervorosas huestes de Balaguer esperaban un gesto romano de su jefe, este los desengañó: aceptó de inmediato la oferta de Belaunde y la revuelta perdió un jefe mientras el país ganaba un diplomático.

Sin embargo, la tensión prosiguió por varios días. En las calles, las policías intercambiaron insultos, golpes, se demostraron mutuamente la parafernalia. En las comisarías, hasta entonces compartidas entre la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, los guardias civiles expulsaron a los investigadores de todas las dependencias, en forma que resultó definitiva. En la prefectura de Lima, compartida por las jefaturas de región de ambas policías, hubo un intercambio de granadas lacrimógenas y disparos al aire.

La Guardia Civil, entre tanto, estaba acéfala, y los rumores que llegaban desde sus agestados mandos era que ninguno de ellos aceptaría la dirección. Entonces, el senador Oscar Trelles

ofreció hablar con el general Humberto Catter, quien estaba en la línea de sucesión, y los preocupados ministro y viceministro estimularon la gestión. Catter aceptó de inmediato, y varios otros generales empezaron a hacer discretas ofertas de lealtad.

Pero había el problema de la juramentación, formalidad y rito indispensable para tomar la dirección del instituto. Algunos fatigados recalcitrantes aún seguían en los pasadizos, tratando de avergonzar, con miradas fulminantes y comentarios no caritativos, a los que se doblegaban. El general Adolfo Palao, uno de los primeros en haber ofrecido sus respetos al ministro, llevó a escondidas el crucifijo desde el tercer al cuarto piso, y Catter subió casi tan discretamente como la cruz. Pero ya en el despacho ministerial, cuando, acompañado por solo dos generales, se aprestaba a jurar el cargo, se comprobó que no había una Biblia sobre la que se pudiera hacerlo. Una búsqueda, primero ansiosa y después frenética por el cuarto piso, no logró encontrar ningún ejemplar.

López Martínez revisó una vez más los libros en su despacho, y entonces encontró la solución: el Diccionario de la Real Academia Española, edición de 1970. “Era un volumen con empaste español de cuero, con etiquetas rojas. Lucía impresionante”.³⁹ Catter juró sobre él. Nunca lo supo. Pocos días después, la disciplina había retornado a la Guardia Civil; solo unos pocos irreductibles terminaron en las siberias institucionales, encontrando escaso alivio en saber a su jefe en Washington. La Guardia Civil tuvo poca suerte con sus mandos (al igual que las otras dos policías). Catter fue un jefe inapelablemente incompetente, que dirigió a su institución hasta que esta fue virtualmente derrotada por Sendero en Ayacucho. La responsabilidad, es cierto, no fue exclusivamente suya, pero él contribuyó con mayúsculas decisiones erróneas (como el abandono de los puestos policiales en el campo ayacuchano) a hacer el proceso más rápido. Luego, dos años después de haber pasado al retiro, en 1985, Catter fue comprendido como acusado en el proceso contra la organización de narcotráfico dirigida por Reynaldo Rodríguez López. La colaboración con este, de acuerdo a la acusación fiscal, se dio durante el período en que Catter ejerció el comando de la Guardia Civil.

Primera sangre

El 22 de noviembre se realizaron las primeras elecciones municipales desde 1966, y los resultados demostraron que el gobierno de Belaunde aún tenía aprobación mayoritaria. Había algo de modesta justicia poética en ello. El gobierno municipal se había abierto a la competencia electoral durante el primer gobierno de Belaunde; y la intención original de estimular así la democracia de bases tornaba a rescatarse después del largo interinato del gobierno militar, y en medio de una apertura incondicional de la democracia política. Los diarios confiscados por el gobierno militar habían sido devueltos a sus propietarios, y nuevos diarios, nuevos programas periodísticos se abrían, con mayor cantidad de lo que el mercado limeño podía absorber; pero si el silencio o las monocordes voces regimentadas habían monopolizado los medios de comunicación masiva durante la mayor parte del régimen militar, una creciente cacofonía de toda suerte, índole y origen, indicaba que el péndulo proverbial tenía un largo trecho democrático que recorrer.

La victoria de Acción Popular en Lima, donde tuvo además un candidato muy sólido en

Eduardo Orrego, se repitió en casi todo el país, pese a una notoria disminución del número de electores respecto a las elecciones presidenciales. El segundo puesto, en cambio, varió. El partido aprista continuó su declive electoral, en tanto que la izquierda marxista, que había tomado el compromiso de unidad en agosto y se había presentado bajo el nuevo frente de Izquierda Unida, logró el segundo puesto, mostrando una neta tendencia al crecimiento.

En Ayacucho, el candidato de Acción Popular para el Concejo Provincial de Huamanga, Jorge Jáuregui, venció a Germán Medina, de Izquierda Unida, en una elección reñida. En las provincias donde se habían realizado el mayor número de atentados dinamiteros, Acción Popular venció también. Sin embargo, en muchos distritos, la suma de votos blancos y nulos fue virtualmente igual (en Cangallo) o superior (en Víctor Fajardo) al total de votos válidos.⁴⁰ Lo que indicaba que la fuerza de Sendero en Ayacucho era muy superior a lo que se suponía.

En diciembre, en medio de la intensificación de atentados dinamiteros,⁴¹ Sendero quemó las últimas naves, al matar a sus primeras víctimas, y se internó decididamente en la guerra. Casi simultáneamente, el 26 de diciembre, dejaron un mensaje singular al nuevo líder de China Popular.

Varios perros amanecieron colgados de postes de alumbrado en el centro de Lima. Pendiendo del cuello, casi sin bambolearse en el aire quieto de la madrugada limeña, sus cuerpos tristes aparecían envueltos por telas pintadas con caracteres estridentes.

A medida que las calles se llenaban de gente, corrió el rumor de que los envoltorios tenían dentro, además del perro, explosivos. Algunas horas después, varios guardias civiles treparon a los postes y bajaron a los perros. El envoltorio no tenía explosivos. Por fuera, las pintas dibujaban letras furiosas. Ellas decían solamente: “Teng Hsiao-ping, hijo de perra”.

El 24 de diciembre, un grupo de treinta o cuarenta personas, aparentemente dirigidas por Eucario Najarro, Víctor Auqui y el médico Eduardo Mata, atacaron el fundo de San Agustín de Ayzarca. No había, pese a las alarmas reiteradas de los propietarios del fundo, ningún tipo de presencia policial. Dueños y empleados del fundo fueron rápidamente dominados, mientras se izaba la bandera roja sobre la capilla. Habían sido golpeados y heridos, alguno en forma grave, pero estaban vivos. Entonces, adentro de la capilla, el propietario Benigno Medina fue primero torturado (le cortaron las orejas, según un hijo suyo que logró escapar), y después muerto a golpes. Medina tenía sesenta años. Y mientras lo mataban a él, mataron también a su empleado, Ricardo Lizarbe, quien tenía apenas diecinueve.⁴²

Esa fue la primera sangre de la guerra. Todos los signos tempranos habían apuntado a un futuro ataque, y se cumplieron. No fue la última tragedia que iba a caer sobre los habitantes de Ayzarca. Ya a su turno la mayoría de los atacantes iba a morir violentamente en los años siguientes —algunos combatiendo, los más asesinados cuando rendidos—, como acababan ellos de hacer con el viejo agricultor y con el joven que apenas empezaba a vivir; cuya sangre había sido exigida para sellar el plan “Hacia el inicio de la guerra de guerrillas”, y cuyos ojos muertos podían ver entonces el cementerio que ahora solo ellos habitaban, pero que pronto iba a rebalsar.

1 “La mano del MOTC”, *Caretas*, n. 603, 16 de junio de 1980. El MOTC (Movimiento de Obreros, Trabajadores y Campesinos) fue uno de los organismos generados (organizaciones de fachada) centrales de Sendero Luminoso.

- 2 *Ibídem.*
- 3 La elevación de “pensamiento Mao Tse-tung” a “maoísmo”, una decisión escolástica sin duda audaz y con objetivos políticos concretos, no fue hecha hasta 1982. Ver: “Desarrollemos la guerra de guerrillas”.
- 4 Sobre políticas generales y políticas estratégicas, ver: “El pensamiento militar del Partido”.
- 5 Énfasis en el texto original.
- 6 MOTC, *La celebración del Primero de Mayo por el proletariado revolucionario*, 1980 p. 2.
- 7 *Ibídem*, p. 4. El énfasis aparece en el documento del MOTC.
- 8 *Ibídem*, pp. 4-5. El énfasis en mayúsculas en el documento original.
- 9 *Ibídem*. El énfasis es mío.
- 10 Sobre los conceptos básicos de la guerra, ver: “El pensamiento militar del Partido”.
- 11 Ver: “Retorno a la democracia”.
- 12 MOTC, *op. cit.*, pp. 6-11.
- 13 Pareja Pflucker, Piedad. *Terrorismo y sindicalismo en Ayacucho*. Lima: Empresa Editora Ital Perú, 1981, pp. 82-83.
- 14 *¡Desarrollemos la creciente protesta popular!*, setiembre de 1979, p. 15.
- 15 Pareja, *op. cit.*, p. 91.
- 16 *Ibídem*.
- 17 Nota de inteligencia 001. Dirección de Inteligencia de la Guardia Civil, 13 de febrero de 1981.
- 18 Entrevista a Germán Medina, el 30 de julio de 1987.
- 19 Entrevista de *Elba Carrasco* a la Liga Agraria de Cangallo, 1986.
- 20 “Paladín” del 5 de agosto de 1980, en: Pareja, *op. cit.*, pp. 92-93.
- 21 Entrevista a Germán Medina, el 30 de julio de 1987.
- 22 Entrevista de *Elba Carrasco* a la Liga Agraria de Cangallo, 1986.
- 23 Los hijos de varios de los miembros de la “Sagrada Familia” vivieron en medio de descuido y abandono en Ayacucho a lo largo de los primeros ocho años de la guerra; a pesar de tener, en varios casos, parientes no comprometidos y muy empacados viviendo cerca. Esta dimensión dickensiana de la lucha no es fácil de comprender. Y los desdeñosos comentarios senderistas respecto a Andrés Vivanco Amorín, quien consagró sus últimos y mejores años a proteger a los huérfanos de la guerra, deben entenderse en ese contexto, donde quizá combine algo del tradicional desapego, de estirpe hispana y conquistadora, a los hijos casuales o segundones con el efecto simbólico de sacrificar la familia a la causa excluyente.
- 24 Entrevista a Germán Medina, el 30 de julio de 1987.
- 25 *Ibídem*.
- 26 *A World to Win*, 1986/6, p. 71.
- 27 Me guío por la misma versión mecanografiada por la jefatura policial de Ayacucho, en 1981, a partir de manuscritos capturados que he mencionado en “Mahoma, Mao, Macbeth”.
- 28 *A World to Win*, 1986/6, p. 71.
- 29 Lo cual era, considerando las tremendas diferencias en la circunstancia de la insurrección albanesa y la de Sendero, un cargo no muy atinado, aun desde el punto de vista exclusivamente militar. Para una corta reseña de la guerra insurgente en Albania, véase: Lacqueur, Walter.
- 30 Véase, por ejemplo: “Sendero y el ejército guerrillero popular”, *A World to Win*, 1986/6, p. 71; y partes del documento “Bases de discusión”, *El Diario*, 6 de enero de 1988, p. 7.
- 31 “Bases de discusión”, *El Diario*, 6 de enero de 1988, p. 7.
- 32 *Ibídem*.
- 33 Taber, Robert. *The War of the Flea*. London: Paladin, 1970.
- 34 Nota de inteligencia 001. Dirección de Inteligencia de la Guardia Civil, 13 de febrero de 1981.
- 35 Entrevista con Héctor López Martínez, el 6 de mayo de 1987.
- 36 *Ibídem*.
- 37 *Ibídem*.

38 Pareja, *op. cit.*, p. 48.

39 Entrevista con Héctor López Martínez, el 6 de mayo de 1987.

40 Pareja, *op. cit.*, pp. 52-63.

41 En cuanto a estadísticas: en 1980 hubo ciento setenta y siete atentados con dinamita y setenta y seis con bombas molotov, treinta y cinco casos registrados de robo de explosivos, tres de robo de armas, sesenta y siete de manifestaciones y propaganda llamando a la lucha armada y cuatro de asalto a radioemisoras para la transmisión de propaganda.

42 Pareja, *op. cit.*, p. 94; y nota de inteligencia 001. Dirección de Inteligencia de la Guardia Civil, 13 de febrero de 1981. Sendero se refiere al asesinato como “la primera aniquilación”, esto es, el ataque a las fuerzas vivas del enemigo. Por primera vez, elementos reaccionarios fueron ejecutados. *A World to Win*, 1986/6, p. 71.

VII. Guerrillas

La primera descripción fidedigna de la insurrección en la prensa peruana fue escrita, en los días iniciales de 1981, por el periodista Patricio Ricketts.¹ Este había viajado a Ayacucho poco antes, en diciembre, y entrevistado, después de complejas maniobras de acercamiento a uno de los principales dirigentes senderistas, quien vivía entonces en forma abierta en Ayacucho.

Fue una entrevista singular. La etiqueta de las apariencias requería que ni el dirigente senderista declarara directamente su afiliación, ni que Ricketts la diera por supuesta. Las respuestas tuvieron inicialmente un cierto matiz condicional (“según entiendo, el Partido Comunista considera que”), pero poco a poco la reserva fue puesta de lado y el diálogo prosiguió sin circunloquios.

Ante un oyente atento y fascinado, el dirigente senderista explicó que los dinamitazos eran “el simple anuncio de la guerra popular” o, como lo puso Ricketts, el “exordio de un largo discurso”.² Era un exordio sustantivo. Aunque centradas en Ayacucho, las acciones de Sendero ya cubrían virtualmente todo el territorio nacional.

Pero la identidad precisa y las intenciones de Sendero eran a esas alturas todavía un misterio para la mayoría de los peruanos, incluyendo a la izquierda marxista. Los vivos a los cuatro de Shangai y los perros muertos con maldiciones transoceánicas a Teng Hsiao-ping parecían no solo manifestaciones de anacronismo político, sino sobre todo de chifladura. En el folklore político peruano sobaban los casos de chiflados, casi siempre inocuos, cuyo ámbito de delirio era la acción política. Un personaje que desde la década del 40 hasta la del 60 fue familiar en Lima, Pedro Ángel Cordero y Velarde, autoproclamado “emperador del mundo” (y, de paso, presidente del país) y comandante en jefe de sus fuerzas de “tierra, mar, aire y profundidad”, era el epítome, aunque de ninguna manera el único caso. Para algunos, incluyendo a gente de la izquierda, hasta diciembre de 1980 los perros muertos y las lealtades furiosas a Chiang Ching convertían a Sendero en la versión marxista de Cordero y Velarde.

No obstante, como el número y la entidad de los atentados no permitía seguir describiendo a Sendero dentro de los límites de la picaresca política, la actitud de una parte de la izquierda fue atribuir la autoría de los atentados a grupos paramilitares o de comandos, dependientes de la Guardia Civil o del Ejército, de la Marina o de la CIA, según el gusto. En muchos casos la acusación fue simplemente una forma de desinformación y propaganda, pero en algunos se trató de una convicción sincera, aunque temporal. Su concepción de Sendero, del Sendero que habían visto en las luchas universitarias en Ayacucho y otros puntos del país, simplemente no concordaba con la disciplina, la habilidad y el número de gente necesaria para remecer el país a

dinamitazos.

El dirigente senderista en aquella entrevista nocturna no solo ratificó la autoría de todas las acciones, sino precisó otras más, entonces no vinculadas aún a Sendero, como la voladura de la tumba de Velasco. Ayacucho, prosiguió el dirigente, era ya la vanguardia de la revolución mundial, y “la jefatura” senderista era heredera directa de Marx, Lenin y Mao. En cuanto al resto de la izquierda, los ataques fueron entonces tan duros como lo serían en años posteriores. El senador de Izquierda Unida Enrique Bernal fue calificado de “jefe de los sinchis”, y el calificativo más benévolo dedicado a los otros parlamentarios de la izquierda fue el de “cuida escaños”.³

Era un diálogo extraño y, a primera vista, incongruente: Ricketts, corpulento, ceremonioso, con la voz engolada y la expresión formal que se encuentra entre arequipeños con corbata más que en cualquier otro grupo humano; su interlocutor, magro y de continente ascético, sin asomo de barroquismo, exponiendo su mensaje radical con una sonrisa entre irónica y condescendiente. Y, sin embargo, se entendieron perfectamente. Como herencia de una intensa juventud radical, Ricketts tenía la ventaja de entender sin necesidad de traducción las categorías del pensamiento marxista-leninista, y la capacidad de distinguir entre desarrollos sistemáticos coherentes y las más comunes repeticiones de paporreta. Sendero era, según lo percibió claramente, lo primero. Su interlocutor, a la vez, sintiendo a un escucha capaz de seguirle el paso, le explicó con sorprendente detalle cómo se habían organizado para la lucha, y lo que se dirigían a hacer en el futuro.

Poco después, el 26 de enero, Ricketts publicó un artículo corto⁴ en donde, con notable antelación al resto de las interpretaciones sobre la insurrección, describía sus características y sus proyecciones:

Por mucho que sorprenda decirlo, los jóvenes de la dinamita no son, rigurosamente hablando, terroristas. [...] El Perú, querámoslo o no, vive desde hace seis meses en estado de guerra abierta. De guerra maoísta, campesina, artesanal y homeopática. [...] Pero guerra al fin. [...] Se engañará quien responda con adjetivos denigrantes o quien tenga todo esto por un repentino delirio calenturiento. [...] [La preparación] ocurrió hace una década y aún quince años. Lo que hoy vemos es el fruto de una larga paciencia, no de una improvisación atolondrada. [...] Mucho antes de emprender el primer robo de cartuchos, ya habían establecido en Ayacucho un semillero nacional y en las alturas de Cangallo y Víctor Fajardo, la primera “zona liberada”. [...] Luego empezaron la dinamita y las sangrientas incursiones. Tal parece ser, en síntesis, el prólogo de la imaginada Guerra de los Cien Años.⁵

El artículo fue generalmente calificado, entre la izquierda marxista legal, como una expresión de macartismo. Meses después, el senador Javier Diez Canseco reiteró la acusación sobre el protagonismo de sectores derechistas en los actos de violencia. “La derecha, hay que estar ciego para no verlo, utiliza operativos mucho más complicados. La última oleada de acciones tiene un nítido sello de derecha”.⁶ En los sectores de centro y de derecha, de otro lado, nadie prestó atención. Belaunde, de quien Ricketts se convertiría en asesor primero y en ministro de Educación después, resultó particularmente impermeable a un análisis desapasionado del enemigo. Después de haberlos calificado, hacia fines de 1980, como “traidores a la patria”, el presidente empezó a modificar su discurso y a insinuar que el movimiento estaría dirigido desde el exterior, presumiblemente por Cuba, aunque nunca la nombró. Otros consideraron que la reticencia era innecesaria. El diputado y dirigente del Partido Popular Cristiano, Celso Sotomayor, afirmó que “el terrorismo tiene su origen en un portaaviones anclado en el Caribe”.⁷

Así como había sucedido anteriormente con los directivos de los servicios de inteligencia, los

métodos y la estrategia de Sendero, aun cuando fueran expresados con claridad, llegaban a puntos ciegos en la percepción del gobierno. Con la excepción de Ricketts y unas pocas personas más, nadie tenía sencillamente la preparación intelectual, la ausencia de prejuicios o el desapasionamiento necesarios para interpretar los datos de la realidad. En las entrevistas que tuve con cuadros senderistas en El Frontón en 1982 se me dijo que, dentro del campo “burgués”, Ricketts había sido el único hasta entonces en expresar fidedignamente los propósitos y métodos de su organización.

En la Nochebuena de 1980, pocas horas después de que Benigno Medina muriera asesinado en Ayzarca, una dirigente senderista cuyo prestigio ya trascendía sus filas fue capturada en Ayacucho. Se la acusaba de haber atentado, con cargas de dinamita, contra el local de la Municipalidad de Ayacucho, la casa del presidente del Jurado Electoral y varias instalaciones del Estado. Pero otras informaciones la señalaban además como una dirigente más importante que sus acciones. Fue llevada a Lima al día siguiente, y detenida allá por unos días, mientras su defensa legal se movilizaba exitosamente para forzar su retorno a Ayacucho.

Edith Lagos repitió lo que su organización había instruido a todos sus militantes capturados que dijeran: “Soy inocente y nada tengo que ver con las imputaciones que me hace la policía [...] todo aquello de que me acusan es falso [...] en una sociedad donde se respeta los derechos humanos, la libertad es un derecho y un deber el exigirla”.⁸ Pero había algo en ella, quizá su intensidad, el imperioso orgullo con que manejó su menuda figura en el tránsito por los pasadizos judiciales, que la señaló entre los suyos y empezó a crear el mito que la rodearía crecientemente en lo que le quedaba de vida.

A principios de 1981, Sendero aún no había desarrollado la eficaz maquinaria de defensa legal que fue, en años posteriores, la Asociación de Abogados Democráticos. Pero la atención dedicada a aprovechar al máximo los procedimientos judiciales era ya prioritaria, aunque en algunas ocasiones poco sofisticada.

Un caso ilustrativo de lo anterior había ocurrido en el Cusco entre fines de 1980 y comienzos de 1981. El 22 de diciembre, un destacamento senderista de una veintena de personas asaltó un fundo agrícola en la provincia de Urubamba. La líder aparente del grupo, Nora Chirinos, una psicóloga, exfuncionaria del SINAMOS, fue capturada poco después junto con otras diecisiete personas. A los pocos días, el juez instructor de la vecina provincia de Calca pidió que los detenidos le fueran transferidos. La policía no tuvo otro remedio que aceptar. Cuando llegaron los detenidos, el juez dispuso la libertad inmediata de todos. El caso suscitó un escándalo y el juez fue suspendido por la Corte Superior de Justicia del Cusco y sometido a proceso disciplinario.

Su nombre era Manuel Febres Flores, un abogado graduado en la Universidad San Marcos, que en los años siguientes reaparecería en Lima, como integrante del equipo de defensores legales de Sendero, y que, ya convertido en el más prominente entre ellos y teniendo a su cargo la defensa de Osmán Morote, luego de su captura en 1988, fuera secuestrado y asesinado por los miembros del escuadrón de la muerte paraoficial “Rodrigo Franco” el 28 de julio de 1988.

Las acciones senderistas en Ayacucho, entre tanto, se intensificaron desde los primeros días del año. El 13 de enero, quince senderistas asaltaron el puesto policial en el pueblo de San José de Secce (también conocido como San José de Santillana). La incursión encontró a los policías de la

guarnición completamente desprevenidos. Fueron dominados sin presentar resistencia. Los asaltantes robaron dos metralletas, dos revólveres, una carabina M-1 y varios cientos de cartuchos para esas armas.

Al día siguiente, gracias a la ayuda de los vecinos del pueblo, personal policial llegado de Ayacucho logró capturar a siete de los atacantes y recuperar el armamento robado. El resto fue identificado, y una mujer más fue capturada en Huanta en los días siguientes.⁹

La información que recibía la policía de pueblos y comunidades situados en la periferia del núcleo de Cangallo-Huancapi (y en ocasiones aun su colaboración activa) era todavía apreciable. Ello había llevado no solo a la detención de los autores de varios atentados, sino a la identificación de quienes habían organizado y dirigido la mayor parte de las acciones. Uno de los detenidos en San José de Secce informó que luego del arresto de Edith Lagos (quien había sido hasta entonces la responsable senderista en la ciudad de Ayacucho), un estudiante secundario, Carlos Alcántara, había tomado su puesto. Alcántara era secundado por los responsables de cada una de las zonas en las que Sendero había dividido Ayacucho. Su lugarteniente principal era una mujer también muy joven, que en los años siguientes iba a adquirir una reputación simultánea de valor y crueldad: Carlota Tello Cuti.¹⁰ No obstante, según la misma fuente, Alcántara era a su vez controlado por una dirigente más veterana de Sendero: Teresa Durand, cuya función era supervigilar las acciones en la ciudad de Ayacucho, transmitir (“subir” en la expresión senderista) los informes de las células a la dirección, y “bajar” la evaluación y las nuevas órdenes de esta.

Según lo que informó el detenido, la mayor parte de las acciones habían sido dirigidas y ejecutadas por un grupo relativamente pequeño de personas, a algunas de las cuales las conocía solo por sus seudónimos, mientras que a otras por nombre.

Varios de los catorce detenidos a raíz del asalto al puesto policial de San José de Secce habían participado en casi todas las acciones anteriores en Ayacucho y Huanta. Alberto Granados había acompañado a Carlos Alcántara y a tres más en el asalto a la radio *La voz de Huamanga*, el 21 de octubre de 1980, y contra el depósito de Ecasa (la empresa estatal de comercialización del arroz) el mismo día. También había participado en el atentado contra el local de la Policía de Investigaciones, el 3 de diciembre, y en el sabotaje a la estación repetidora de Entel Perú, el 7 de enero de 1981. En todos los otros atentados se repetían, en diversas combinaciones, los mismos nombres: Carlota Tello, Isidoro Choque, Miguel Higa, Willy Esquivel,¹¹ Gil Arango Huaranca, además de algunos otros seudónimos.¹² La policía se abocó a tratar de capturarlos.

La sensación de urgencia en la policía se reforzó desde comienzos de año por la percepción de que los puestos policiales estaban en camino de convertirse en el principal objetivo senderista. Un día antes del ataque al puesto de San José de Secce, la puerta del puesto policial en Canarias había sido volada, y cortados los cables del telégrafo. El 15 de enero, el puesto de La Quinoa fue atacado por alrededor de quince senderistas. El personal policial reaccionó y los atacantes huyeron. Al día siguiente, como anuncio de cosas por venir, varios senderistas lanzaron un par de petardos al puesto.

Lo mismo sucedía en el resto del Perú. Ataques que eran aún de poca envergadura, pero ya constantes; probando las fuerzas propias, remeciendo el tabú del respeto a la autoridad uniformada. En Apurímac hubo ataques menores contra puestos de la Guardia Civil el 5 y el 29 de enero; en Arequipa, explosivos arrojados a un local de la Guardia Civil destruyeron varias puertas y cuartearon paredes. En el departamento del Cusco, el destacamento de la Guardia

Republicana en Sicuani fue también atacado con petardos, como lo fue el cuartel 27 de noviembre del Ejército, en la ciudad de Cusco. En Puno, el local de la Policía de Investigaciones fue afectado por una explosión de mediano nivel, el 5 de enero. En todos los sitios se capturaron sospechosos, y en muchos casos a los autores de los atentados. En Ayacucho, por ejemplo, después de las capturas de San José de Secce, la mayor parte de los ejecutores de atentados anteriores fue arrestada. La identificación de Carlos Alcántara y Carlota Tello obligó a ambos a pasar a la clandestinidad profunda. Y, sin embargo, las capturas solo compraron una breve calma.

Poco después, los dinamitazos y asaltos prosiguieron. La segunda red entraba en acción y Sendero demostró, por primera vez en lo que iba de la insurrección, la capacidad del manejo de reservas y la dosificación de contingentes que reflejaban una organización no solo mayor y más compleja de lo supuesto, sino también una capacidad de planeamiento estratégico y táctico que entonces, salvo las escasas excepciones anotadas, nadie le acreditaba.

“Abrir zonas guerrilleras”

Desde el 4 de enero, el Comité Central de Sendero inició su III Sesión Plenaria.¹³ A diferencia de las anteriores, esta fue una reunión esencialmente centrada en el planeamiento estratégico de la insurrección, donde hubo muy poco de los remezones internos característicos de las conferencias senderistas. Fue una reunión sumamente importante dentro de su esquema de la guerra insurreccional. El “Plan de inicio”, que luego Guzmán reclamaría como una contribución original al marxismo, se consideró exitosamente terminado: el país estaba remecido, estaba en guerra. Un hito (el tercero en la visión senderista de la revolución) había sido superado, y se ingresaba al cuarto y más largo hito en los años de sangre que aguardaban al Perú: el del “Desarrollo de la guerra de guerrillas”.¹⁴

El objetivo del III Plenario fue planificar y disponer la estrategia que llevaría a Sendero de las primeras y esporádicas acciones de guerrilla al incremento sustancial de estas, hasta convertirlas en preponderantes. En la estrategia insurreccional maoísta (y en particular durante la primera gran etapa de “defensiva estratégica”) el propósito de todas las acciones (pero fundamentalmente de las guerrilleras) es la conquista gradual de territorio y el control de poblaciones. Las acciones guerrilleras eran la palanca que Sendero iba a utilizar organizadamente para disputar el control del gobierno en el nivel básico de organización política: el de la aldea, del distrito.

Los asistentes a la reunión conocían los pasos de la metodología guerrillera maoísta. Las primeras acciones habían abierto “zonas de operaciones”, es decir, aquellas en las que la guerrilla llega, golpea y se retira. El siguiente escalón consistía en abrir “zonas guerrilleras” en las que anteriormente habían sido solo zonas de operaciones. En la zona guerrillera, la organización insurgente disputa el poder político con el gobierno; no necesariamente el poder explícito, visible, pero sí el real. El paso próximo, una vez que la organización insurgente prevaleciera sobre el gobierno en las áreas en disputa, iba a ser convertir las zonas guerrilleras en bases de apoyo, donde el Partido gobernaba ya en forma efectiva, e iba edificando las bases de organización estatal propia. El proceso precisaba, no solo para crecer, sino aun para subsistir, de

energía y expansión permanentes. Por cada zona guerrillera lograda debían surgir varias nuevas zonas de operaciones. Cada base de apoyo debía generar nuevas zonas guerrilleras, preferible aunque no necesariamente en las áreas colindantes. El triunfo iba a llegar, tan brusco y vertiginoso en los momentos finales como lento y trabajoso en los comienzos, cuando el país todo se convirtiera en una sola base de apoyo, sin solución de continuidad.

La III Sesión Plenaria del Comité Central se abocó a determinar la estrategia para “abrir zonas guerrilleras en función de las bases de apoyo”. La agenda comprendía, además de los informes y evaluaciones sobre el “segundo momento del plan de inicio”, la definición del plan de “Desarrollo de la guerra de guerrillas”, la “línea política general y frente único”, los problemas de la “construcción del Partido [militarizado] en medio de la lucha armada”, y, en el aspecto internacional, “nuestra revolución dentro de la lucha de clases internacional”. El Comité Central recibió los informes del Comité Subzonal Andahuaylas y del Comité Subzonal Cangallo (ambos, como se recuerda, pertenecientes al mismo Comité Zonal de Cangallo), del Comité Regional del Centro, los de Jaén, Trujillo, Cajamarca, de los comités regionales de Cusco-Puno y de Arequipa-Tacna. También del Comité Local de Chiclayo, del Comité Metropolitano (Lima) y del Comité Zonal Ayacucho. Ello da una idea aproximada de la proporción territorial de fuerzas en Sendero, fuertemente acentuada en el área de Ayacucho y Apurímac, pero también indesdeñable en el centro y el sur del país.

Los puntos fundamentales tratados durante la III Sesión Plenaria (y en una reunión inmediatamente posterior de la Comisión Política, para aplicar los acuerdos de esa), fueron tres: cómo incrementar la cantidad y entidad de las acciones en la ciudad, cómo planificar el crecimiento de las acciones insurgentes en el campo, y cómo organizar políticamente las zonas convulsionadas para aprovechar el resultado de las acciones armadas y para construir los rudimentos de organización estatal rebelde en las áreas paulatinamente controladas por Sendero.¹⁵

¿Cómo incrementar la violencia en las ciudades, especialmente en Lima? Ello comprendía, según se vio en la reunión de la Comisión Política, dos problemas simultáneos: cómo desarrollar el trabajo militar y a la vez, la segunda red clandestina. Poco después, el Buró Político dio una serie de instrucciones a la responsable de su comité (que aparentemente ya era Laura Zambrano), sobre las líneas principales de trabajo del Comité Metropolitano en la siguiente etapa. Las acciones de petardeo, incendios, pintas, debían llevarse a cabo a través de “comités de acciones” organizados territorialmente. Las acciones “más altas”, es decir, sabotajes, disturbios, asesinatos, debían ser ejecutadas por “destacamentos especiales” que dependerían directamente del Comité Metropolitano. A la vez, la organización urbana debía realizar “labores concretas de apoyo a la guerrilla”, que incluían desde acciones que sirvieran de eco a las campesinas, hasta el reclutamiento de militantes para los destacamentos rurales.

Simultáneamente, el Comité Metropolitano debía focalizar esfuerzos en el área de inteligencia. Las instrucciones al respecto eran inevitablemente escuetas. El aspecto de “información”, indica el documento, “implica relación con elementos ‘especiales’ que requieren gran reserva y discreción”. En años posteriores se iba a descubrir algunos casos de infiltración senderista en diversos organismos de la burocracia civil, aunque aparentemente a juzgar por la información que maneja Sendero la mayor parte de sus colaboradores no fue detectada.

La parte más delicada del trabajo de espionaje e infiltración era, empero, dentro de “las Fuerzas Armadas y represivas”. El documento senderista solo indicaba que aquel debía ser: “externo, de propagandización, e interno, de organización de células y organismos con soldados,

etc.". El documento subraya que ese trabajo era "sumamente reservado" y, por supuesto, prioritario. Es difícil apreciar el grado de éxito que tuvo Sendero en ese aspecto durante los años siguientes. Ciertamente hay evidencias circunstanciales que sugieren un cierto grado de infiltración en los niveles subalternos de las fuerzas policiales, como se verá después. Los casos descubiertos o patentes fueron, sin embargo, pocos. En 1981, un cabo del cuartel Los Cabitos en Ayacucho fue arrestado por la policía cuando se le descubrió folletería senderista y algunos cartuchos de dinamita en su casa. El caso más importante ocurrió algunos meses después, en Lima. Un oficial de mar (rango equivalente al de suboficial) de la base aeronaval del Callao desertó llevándose varios fusiles consigo. El marino desertor reaparece en esta historia en la batalla de Sacsamarca, en 1983.

El Comité Metropolitano debía coordinar también con el politburó dos tareas especializadas: la "protección de aparatos y personas", es decir, del liderazgo senderista, y "ejecutar sanciones", lo cual no necesita mayor explicación. Definida ya la ciudad como el "complemento necesario" del campo, Sendero aún buscaba precisar las estrategias operativas básicas en el escenario urbano. Hasta entonces, luego de las acciones de algarada y saqueo, había otras de sabotaje y terrorismo, cuyo potencial de crecimiento era obviamente limitado. El objetivo de influenciar a sectores importantes de la población no podría conseguirse más que en forma muy limitada mientras esas fueran las acciones fundamentales. La III Sesión Plenaria empezó a tratar de esbozar las líneas fundamentales de un trabajo que combinara la acción política, sindical y gremial con las acciones propiamente militares.

Las deliberaciones en la conferencia sobre ese aspecto fueron apenas exploratorias, no prescriptivas. Se puntualizó la conveniencia de intentar la captura de las movilizaciones, huelgas, paros locales, regionales y otras formas de protesta legal, para tratar de convertirlos en conflictos violentos; o, en sus palabras: "Poner al Partido con acciones a la cabeza del pueblo [...] resistencia popular teniendo como núcleo al proletariado y dirección del Partido impuesta en los hechos". Ello, salvo algunos casos limitados, no fue concretado en los años siguientes; y solo en 1986 Sendero iba a empezar a enfatizar nuevamente las acciones semilegales y abiertas, dirigidas a incrementar su base de soporte popular.¹⁶

El eje fundamental de las acciones senderistas, en la etapa de "abrir zonas guerrilleras", estaba, empero, en el campo. El plan de acciones, si bien abarcaba todo el país, se focalizaba en el Comité Regional Principal, es decir, Ayacucho, Andahuaylas y Huancavelica. El plan específico para esa región fue diseñado como "un gran sistema de acciones llevadas a cabo con simultaneidad relativa, considerando las condiciones de cada zona". El resto de los comités partidarios en el país debería "desarrollar acciones según sus condiciones, también con simultaneidad, como campaña complementaria". El tipo de acciones, especialmente en Ayacucho, debía estar dirigido a socavar las formas vigentes de propiedad y, sobre todo, a "remecer las bases del Estado reaccionario", atacando a los representantes de la autoridad estatal en el nivel distrital. El conjunto orquestado de acciones (con sabotajes y ataques de guerrilla, o golpes de mano, como principales), permitiría convertir una parte importante de Ayacucho en "zonas guerrilleras".

La experiencia práctica de la mayor parte de los cuadros senderistas en acciones guerrilleras era muy pobre. El documento puntualizaba que "no se tiene ideas claras sobre [...] dos formas

fundamentales de lucha guerrillera”: emboscadas y ataques. Añadiendo que tal situación es “comprensible”, por no tener experiencia propia, enfatizaba la necesidad de analizar tanto la experiencia internacional cuanto la nacional al respecto. Sin embargo, agregaba que solo “en la práctica misma desarrollaremos manejo de emboscada y ataque, no de otra forma”.

Resulta interesante constatar que en el momento del inicio real de la insurrección guerrillera (la etapa anterior fue básicamente catalítica), Sendero tenía más fuerza de la supuesta y a la vez debilidades mayores a las sospechadas. En cuanto a lo primero, Sendero era una organización mucho más grande y disciplinada de lo que casi todos supusieron entonces, o después: estaba distribuido territorialmente, con un sistema básico pero funcional de comunicaciones y una dirección centralizada que garantizaba un control unificado del aparato partidario en todo momento.

En cuanto a lo segundo, la preparación de Sendero en técnicas militares era sumamente pobre. Su concepción estratégica era sólida pero, a nivel de aplicación táctica, su ignorancia era generalizada. Se trataba, a esas alturas, de una organización con competentes generales, reclutas comprometidos pero inexpertos y sin mandos intermedios preparados.

El plan de “abrir zonas guerrilleras” iba a servir en parte como entrenamiento en la práctica de los cuadros senderistas y, a la vez, para empezar a organizar las fuerzas armadas insurrectas. El plan indicaba que el problema consistía en “pasar de las masas campesinas desorganizadas a masas militarmente organizadas, como fuerzas armadas”.

La ejecución del plan a través de cuadros técnicamente impreparados era algo previsto por Guzmán y, en tanto problema común a varias insurrecciones marxistas en la fase inicial, era considerado una ventaja paradójica: la suma de experiencias y fracasos iba a endurecer a los sobrevivientes; y mientras la experiencia de cada acción fuera aprovechada por todo el Partido, el aprendizaje global sería rápido y comprehensivo. Simultáneamente, la planificación estratégica y el desarrollo de una metodología táctica nueva, que prescribía los mismos pasos para cada acción y cada campaña, articulando aquellas con estas, garantizaba que hasta acciones torpemente ejecutadas rindieran algún provecho.

Desde la III Sesión Plenaria, Sendero Luminoso incorporó al planeamiento de acciones y campañas la clasificación de cada una de estas en cinco pasos: ¹⁷ 1) preparación (o acciones preparatorias), 2) “respuesta contundente” (intensificación brusca de las acciones), 3) desarrollo de la guerra de guerrillas (la parte principal de la acción o la acción principal de la campaña), 4) golpe de gracia o “remate estremecedor”, 5) acciones complementarias. Después de completados los pasos, debía realizarse una disección cuidadosa de la acción o la campaña para determinar aciertos y errores. Luego el ciclo comenzaba de nuevo, aunque supuestamente en el nivel superior de la proverbial espiral dialéctica.

La dosificación de las acciones a lo largo de determinados lapsos fue vista en la III Conferencia como un elemento crucial para el éxito o fracaso de las mismas. En sus palabras, la “aplicación del plan” exigía: “a) definir las acciones según formas regionales, locales y zonales y tiempo de ejecución; b) tiempo para preparación y para impulso; c) cuestión clave es cuándo y hasta cuándo aplicar impulso, definiendo cómo enfrentar la respuesta de la reacción. [...] Remover para cohesionar, reajustar para rearmar y preparar para avanzar; todo en acciones graduadas y periodizadas, con iniciativa, flexibilidad y planificación, aplicando el principio de concentrar y dispersar”.

No obstante, la intensidad precisa de las acciones era algo sobre lo cual Sendero tenía aún dudas. Mantener la dosis adecuada de ataques que erosionaran la presencia y la autoridad del

Estado, sin provocar una reacción masiva del gobierno, era el equilibrio que la organización insurgente necesitaba, pero cuya realización era evidentemente difícil. “Planes de hostigamiento y zozobra con acciones de todo tipo para preparar condiciones de lucha de alta ola, ¿factible, conveniente?”, se planteaba en la agenda de la sesión. Pese a ello, el esquema de discusión del plan buscaba subrayar la necesidad de estar preparados para la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier momento. “Puede la Policía ponernos cercos y las Fuerzas Armadas postergar su acción directa, pero debemos estar preparados para enfrentar al Ejército en cualquier momento”. El eventual ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha tendría, empero, un efecto beneficioso para Sendero, en el caso de que este estuviera en condiciones de sobrevivir en ese momento a la arremetida bélica. “Esto lleva más a Fuerzas Armadas como poder decisorio mayor que socava más la democracia burguesa [...] al precio de negar su cacareada ‘reconquista democrática’ [...] implica mayor polarización y agudización de lucha con defensores de democracia burguesa; todo esto abonaría más a contienda con armas y desarrollo de la lucha popular”.

En tanto las acciones insurgentes estaban dirigidas a cercenar la autoridad del Estado en la raíz distrital o comarcal, la III Sesión Plenaria enfatizó la importancia de poner inmediatamente en su lugar los organismos embrionarios de gobierno senderista. Tenían en ese aspecto, además de la metodología maoísta tradicional, la experiencia acumulada desde los años anteriores al inicio de la guerra. Así, las organizaciones de gobierno local controladas por Sendero iban a recibir el nombre de “comités populares”, y los individuos y presuntas organizaciones que los integraban lo hacían bajo el esquema maoísta del “frente único” en la revolución de “nueva democracia”. El “frente único” era, en la trinidad de “instrumentos de la revolución” (los otros dos eran el Partido Comunista y la Fuerza Armada Rebelde), el equivalente del espíritu santo: el menos concreto de los miembros de la trinidad, vago en definición y alcances, pero indispensable para los otros dos.

Dentro de la ficción que el concepto de “nueva democracia” representaba, el “frente único” debía ser la unión de clases supuestamente comprometidas en el proceso insurreccional. Bajo la dirección presunta del proletariado (a su vez dirigido por el Partido Comunista), los campesinos y la pequeña burguesía se suponían entusiastamente agrupados en el frente, junto con elementos singulares de la burguesía nacional. En aquella circunstancia, empero, ni siquiera los documentos senderistas se atrevían a forzar la realidad hasta el extremo de afirmar que cualquiera de las burguesías, grande o pequeña, participaba en el “frente”. Pero, claro está, su ausencia no viciaba el esquema. Si no había burgueses en el “frente único”, el Partido cuidaba sus intereses.

No importaba que el guion histórico garantizara luego su liquidación. Cada grupo tenía que cumplir su rol en el auto sacramental histórico, y si no había nadie dispuesto a hacerlo, Sendero se autonombraba como albacea de su dudosa inversión histórica.

Pese a todo, aun las ficciones cumplían un rol. Encontrándose próximo el Partido a ejercer funciones de gobierno semiabierto y clandestino, la compleja trabazón de organizaciones reales y fantasmas, bajo el control central de Sendero, garantizaba el cumplimiento de uno de los aspectos centrales de las dictaduras eficaces: que la gran mayoría de los habitantes sujetos a su control estuvieran inmersos en un cúmulo de organizaciones diversas, que controlaban no solo cada aspecto de su actividad, sino que ese conjunto de afiliaciones exigiera a cada individuo el cumplimiento de deberes que estuvieran por encima de la capacidad aun de los senderistas más voluntariosos. Así, todo el mundo se encontraba potencialmente en falta, y era, en consecuencia, más fácil de controlar.

La III Sesión Plenaria terminó con la firma de todos los integrantes del Comité Central bajo el nuevo plan. También firmaron la proclama acordada entonces: “A nuestro heroico pueblo combatiente”. La proclama, escrita por Guzmán, tenía su característica prosa, frecuentemente vibrante, ocasionalmente hiperbólica. Se dirigía a un pueblo que desde el punto de vista de cualquier encuesta posible no quería otra cosa que paz, para convencerlo de que sus intereses trascendentales estarían bien servidos a través de la sangre, la destrucción, el padecimiento, el horror convertido en hecho cotidiano. Como otros dotados atizadores de la violencia a lo largo de la historia, el llamado al combate resonaba con las cadencias propias para ensordecir la razón.

¡Pueblo peruano! Hoy, después de doce años de falsa revolución y real reforzamiento de tus cadenas bajo un régimen militar fascista [...] manda hoy un nuevo gobierno a través del caduco armatoste reaccionario de la llamada “democracia representativa”, falsa democracia, de falsos derechos y libertades [...] y de real opresión. [...] Tu historia, pueblo, es de rebelión y combate sí; [...] En síntesis, pueblo nuestro, tu historia es la heroica e inmarcesible lucha de las masas populares [...] por la creación y forja con tus manos armadas de un nuevo mundo para tus hijos.

Era el lenguaje profético, abundante en taumaturgias conceptuales al proclamar inicio de la guerra, insinuando nuevos mitos de origen y concepción:

Y hoy, tus mejores hijos, carne de tu carne, acero de tu acero [...] hoy, pueblo nuestro, tus mejores y fieles hijos han desplegado al viento la roja y llameante bandera de la rebelión. [...] Así, hoy tus hijos surgidos de tus poderosas entrañas te ofrendan sus acciones armadas y sus vidas, saludando en este año nuevo tu heroica lucha y grandioso porvenir.

La proclama tuvo difusión limitada, y pocos peruanos supieron del considerado presente que les había sido adjudicado en Año Nuevo. Poco importaba para Sendero. Ese tipo de presentes, exponencialmente incrementados iba a sobrar en el futuro. Los derviches de ojos llameantes se habían puesto en marcha. La guerra de guerrillas senderista —no la “guerra de la pulga”, según la metáfora que Robert Taber hiciera célebre,¹⁸ sino la guerra de la hormiga, múltiple, subterránea, sencilla en los actos, compleja en la concepción— había comenzado.

1 *Caretas*, n. 630, 5 de enero de 1981.

2 *Ibídem*.

3 *Ibídem*.

4 “Zonas liberadas”, *Caretas*, n. 633, 26 de enero de 1981.

5 *Ibídem*.

6 *Caretas*, n. 668, 12 de octubre de 1981.

7 *Ibídem*.

8 *Caretas*, n. 631, 12 de enero de 1981.

9 Nota de información 228-DS-03.00. Anexo I. 7 de mayo de 1981.

10 Nota de inteligencia 001. DIRINGC, 13 de febrero de 1981.

11 Sobre Willy Esquivel, ver el capítulo “Ciudad dominada”.

12 Nota de inteligencia 001. DIRINGC, 13 de febrero de 1981.

13 Era la III Sesión Plenaria desde la primera conferencia de setiembre de 1979.

14 Para un análisis más detallado del criterio de clasificación senderista de la guerra, ver: “El pensamiento militar del Partido”.

- 15 Salvo cuando se indique lo contrario, las referencias a eventos, discusiones y acuerdos en la III Sesión Plenaria provienen de una versión mecanografiada en 1981 por la Jefatura Policial de Ayacucho: *¡Viva la lucha armada!*, sobre la base de cuadernos y notas capturadas.
- 16 Al respecto, ver: “Crack Secret Police Outfit to Combat the Shining Path’s Offensive”, *The Andean Report*, marzo de 1987.
- 17 *A World to Win*, 1986/6, p. 71.
- 18 Taber, Robert. *The War of the Flea*. London: Paladin, 1970.

VIII. La cuota

El 19 de abril la guarnición policial en Luricocha, un pueblo situado a corta distancia de Huanta, fue sorprendida y dominada por un grupo pequeño de senderistas. Los policías solo sufrieron un herido, el sargento Artemio Gamboa. No hubo disparos: los atacantes solo tenían revólveres de fogeo y fusiles de palo. Al salir, sin embargo, ya llevaban el armamento real que habían arrebatado en el asalto: dos metralletas, dos revólveres y munición.

Al día siguiente, en el mismo pueblo, fue detenido un sospechoso, “quien al ser interrogado aceptó haber participado en el asalto”.¹ Eso fue todo lo que la policía logró sacar de él. El detenido dijo no conocer a los otros asaltantes del puesto “por encontrarse encapuchados”, ni saber tampoco dónde habían sido escondidas las armas robadas. Poco después, fue puesto a disposición del juez.

Era una de las primeras personas juzgadas por la ley antiterrorista que el gobierno había promulgado un mes antes, en marzo. El Decreto Ley 046 había sido redactado y revisado por dos veteranos profesores de leyes de la Universidad San Marcos, Luis Roy Freyre y Luis Bramont Arias (quien solo hizo la revisión). Fue el primer esfuerzo del ya atribulado gobierno por proveerse de las herramientas legales para enfrentar a Sendero. La preocupación por encontrar un punto de equilibrio entre las demandas de la acción judicial y policial con el mantenimiento del espíritu democrático se revelaba en la ley. La policía estaba facultada de ahí en adelante para detener a sospechosos por quince días. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el juez instructor debían ser informados de la detención antes de veinticuatro horas. Los interrogatorios debían realizarse en presencia del fiscal de turno. Asimismo, la etapa de instrucción judicial no podía prolongarse más allá de seis meses.

Como tantas otras leyes en Iberoamérica, esta fue observada más a través de la transgresión que del cumplimiento. En los hechos, las instrucciones judiciales que duraron menos de seis meses fueron la minoría y los interrogatorios en presencia del fiscal fueron extremadamente raros. Pese a la juventud de la Constitución y del régimen democrático, la realidad formal y la real ya andaban divorciadas.

Pero, además, el Decreto Ley 046 tenía importantes defectos conceptuales. Era una ley que intentaba reprimir el terrorismo y definía su ámbito penal respecto de aquellos empeñados en “provocar o mantener estado de zozobra, alarma o terror en la población”,² lo cual no definía apropiadamente ni la intención ni las acciones de Sendero Luminoso, una organización insurreccional cuyo objetivo era la toma del poder a través de los medios múltiples de la guerra, siendo el terror apenas uno de ellos. Esta distinción fundamental no fue comprendida entonces y

estuvo en la raíz de distorsiones no solo de concepto sino, inevitablemente, de estrategia.

La falla más importante, quizá, fue el no haber tenido en cuenta que se enfrentaba a una organización con objetivos, fines y sistemas, antes que a individuos aislados. La ley, salvo los conceptos incompletos y restrictivos de autoría intelectual y de “asociación ilícita”, estaba solo diseñada para castigar al autor individual y no para enfrentar a la organización que lo utilizaba. Este, hay que reconocerlo, fue un defecto compartido por todas las medidas de defensa que el gobierno utilizó frente a Sendero.

Pese a todas sus limitaciones, las autoimpuestas y las inadvertidas, la ley provocó una inmediata y viva oposición de la izquierda en el Parlamento (Sendero iba a expresar la suya propia poco después, mediante una bomba de poca potencia en la puerta de la casa de Roy Freyre). Parte de la protesta fue hecha para las galerías, pero algunas sí eran justificadas.

La ley consideraba como acciones terroristas, por ejemplo, “la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados, vías de comunicación o transporte o de conducción de fluidos o fuerzas motrices”.³ En años siguientes, algunos dirigentes gremiales provincianos, cuyas acciones de protesta habían incluido el bloqueo de carreteras, por ejemplo, fueron detenidos y procesados mediante la aplicación, obviamente abusiva, de ese artículo.⁴

El artículo de la Ley 046 que suscitó inicialmente más alarma fue el que castigaba el uso de la prensa para hacer “apología” del terrorismo.⁵ La oposición a este artículo —en tanto se vio en él un instrumento potencial para coartar la libertad de expresión— fue generalizada. En los hechos, nunca se aplicó, ni siquiera años después, cuando *El Diario* pasó a encontrarse bajo el control real de Sendero.

El primero de abril, al inicio del año escolar, petardistas de Sendero reventaron cartuchos de dinamita en varias escuelas en Lima. Algunas sufrieron daños de envergadura suficiente como para obligar su cierre temporal. La impresión que dejaron esos atentados en Lima, estando aún presentes en la memoria los perros muertos colgados de los postes de alumbrado, fue que Sendero era no solo una organización claramente malévola, sino clínicamente demente. Parecía que el Estado Mayor de la organización operaba desde alguno de los manicomios limeños, y que el misterio pendiente radicaba en descubrir cómo habían logrado persuadir a alguien para que ejecutara esas acciones.

Hubo detenidos en los atentados contra escuelas. Pedro Chavarría y Eduardo Palomino Ladrón de Guevara habían sido capturados intentando dinamitar otra más. Su apariencia, empero, no era la de miembros del elenco de Marat-Sade. Ambos se ajustaban a la imagen que se iba a hacer común en el futuro, cuando las detenciones se incrementaran. Jóvenes, delgados, serios, introvertidos. Procedentes por lo general de familias pobres, algunas de las cuales se habían esforzado duramente por darles educación superior. Sin problemas aparentes de conducta, siendo lo opuesto un caso frecuente: hijos o hermanos obedientes, ordenados, silenciosos, aplicados. No de aquellos que originaban devociones carismáticas dentro de sus familias sino un callado aprecio. Verlos luego envueltos en el aura de explosiones, de ferocidades ininteligibles, fue al comienzo una sorpresa mayor de lo asimilable para muchos familiares. “Prefiero verlo muerto”, había dicho la madre de Eduardo Palomino, luego de su captura;⁶ pero luego añadió que “mi criatura es incapaz de hacer daño a nadie”. Palomino había estudiado Economía en la Universidad San Cristóbal, pero había retornado a Lima hacía más de un año, sin dar otra explicación que la de sufrir “cansancio mental”; lo cual no era, quizá, del todo incorrecto.

La izquierda marxista legal condenó en forma virtualmente unánime, aunque con diversos grados de energía, esos atentados. Sin embargo, el repudio de la violencia dinamitera ocupó un

porcentaje mínimo, y con frecuencia renuente, de sus energías. Lanzándose a la ofensiva política contra el gobierno, los partidos integrantes de Izquierda Unida, y sus parlamentarios, se empeñaron en atacar la Ley 046, promovieron o apoyaron marchas y huelgas agresivas en Lima, y alentaron con entusiasmo militante una ola de paros regionales organizados por frentes regionales que ignoraban la deuda implícita con el que había señalado el camino: el frente de defensa ayacuchano.

Utilizando todos los recursos tácticos de la agitación, la izquierda marxista afirmó, en forma crecientemente enfática, que la mayoría de los atentados habían sido llevados a cabo por miembros de las fuerzas policiales, para provocar una represión mayor y para justificar las ampliaciones presupuestales que ya entonces gestionaba De la Jara. Jugaba así a despertar la oposición de las Fuerzas Armadas, permanentemente recelosas de cualquier incremento en el poder policial, especialmente de la Guardia Civil.

Era, frente a un régimen aún dominado por el sector más liberal, un juego suicida. En una de sus numerosas entrevistas con parlamentarios de la izquierda durante esos meses, el finalmente exasperado De la Jara les espetó que “en la próxima semana santa militar, los primeros crucificados van a ser ustedes”. Y el otro miembro del ala liberal del gabinete, el ministro de Trabajo Alfonso Grados Bertorini, confrontando una suerte de alud de paros regionales, muchos sobre la base de reclamos de realización imposible, se quejó que debía enfrentarse no ya a un movimiento de descentralización, sino a uno de disolución.

En principio, no existía entonces ninguna de las condiciones que en los años siguientes, de deterioro del gobierno de Belaunde, hicieron explicables los paros y protestas. La vigencia de las libertades democráticas resaltaba en contraste con el régimen militar, y la economía daba la impresión de encontrarse en proceso de crecimiento sostenido. En esas circunstancias, la actitud de la izquierda parecía ser la de blandir la impaciencia como sistema, rebasar el progreso gradual, exigiendo el instantáneo, provocar la caída de los liberales y la emergencia de los duros. Objetivo que, aun sin convertirse en los agentes principales del proceso, contribuirían a lograr en plazo relativamente breve.

Viéndolo en perspectiva, era casi inevitable que ello sucediera. Emergiendo de la clandestinidad, luchas callejeras y febriles discusiones sobre la mejor manera de conducir el proceso insurreccional, la mayor parte de la izquierda marxista legal había accedido al Parlamento con la perspectiva declarada de utilizarlo como un instrumento más de lucha dentro de una panoplia de acciones que eventualmente debían conducir a desenlaces violentos. La mayor parte de sus dirigentes aún no habían desarrollado —lo que sí hicieron en los años siguientes— vínculos que los ligaran al proceso democrático, ni comprendían todavía que el Parlamento debía servir para algo más que para tribuna de discursos incendiarios. Si acaso muchos de ellos sentían que su primer deber como parlamentarios era ayudar, contribuir y estimular, en competencia a veces culposa, otras intencionadamente despectivas con Sendero, al “desborde popular”. Las metas y estrategias variaban de grupo en grupo —y no estaban particularmente claras en ninguno—, pero el impulso básico y las tácticas que resultaban de él apuntaban en esa dirección.

Como se ha afirmado en un capítulo anterior, el ingreso masivo de la izquierda marxista a la política electoral la modificó en forma mucho más profunda de lo que cualquiera de sus dirigentes hubiera supuesto en 1980 o 1981. Al cabo de algunos años, la izquierda se iba a convertir, quizá en forma renuente pero no por ello menos real, en un factor importante aunque ignorado de estabilidad democrática. No fue un proceso unánime, pero sí mucho más

generalizado de lo que incluso un observador optimista hubiera predicho a principios de 1980, al observar la repolarización política de la sociedad y el testimonio de luchas sangrientas que llegaba entonces de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

Los arraigados estereotipos, las profundas sospechas en ambos lados del espectro político, impidieron que el proceso de asimilación democrática de la izquierda fuera claramente percibido y evaluado cuando se produjo. La excepción, como es regla, fue Sendero. Su análisis, erizado de adjetivaciones, oscurecido por el uso de jerga dogmática, era sin embargo riguroso. Si las vías que los otros movimientos habían tomado, entre 1965 y 1980, daban la impresión ocasional de ser paralelas, desde 1980 habían tomado rumbos no solo opuestos, sino conflictivos. La izquierda marxista iba a terminar defendiendo la sociedad que Sendero quería dinamitar. Aquel fusil de palo que Horacio Zeballos blandiera en la manifestación del UNIR en 1980 quizá terminara finalmente disparando, pero disparando desde el lado opuesto de la barricada, contra los atacantes senderistas. Para Sendero, el proceso que llevaba a tal resolución era una traición mayor en sí. Para las fuerzas democráticas, esa sería una evolución sana, un crecimiento azaroso pero finalmente conducente a la madurez.

En 1981, sin embargo, ese proceso era aún sumamente incipiente, y la relación ambigua con Sendero, el conflicto constante con el gobierno, eran la regla. El caso de Puno (donde en los años siguientes la izquierda legal y Sendero se iban a enfrentar en una lucha sangrienta por el control de organizaciones de base y gobiernos locales) es revelador.

En las elecciones municipales de 1980, la Izquierda Unida había logrado uno de sus principales triunfos electorales en Puno, mediante la elección de Jaime Ardiles como alcalde provincial. La oposición más vociferante, como se recuerda, había provenido de los sectores cercanos a Sendero y Pukallacta, cuya presencia estaba básicamente centrada en la Universidad Técnica del Altiplano. Una vez elegidos, tanto el nuevo alcalde como los parlamentarios puneños hubieron de enfrentar —en mucho mayor grado que en el resto del país— el acoso constante de los grupos situados a su izquierda. Por eso, cuando empezó a tomar cuerpo la ola de paros regionales, el de Puno resultó particularmente activo.

El 25 de marzo se inició un paro departamental de veinticuatro horas, coordinado por el alcalde Ardiles y un “comité único de lucha” *ad hoc*. El pliego de reclamos, cuya solución era demandada por los huelguistas, comprendía desde medidas necesarias y de posible cumplimiento inmediato, hasta otras que bordeaban lo extravagante.

El 10 de abril, el alcalde Ardiles y varias personas, a las que luego se sumarían otras, se declararon en huelga de hambre, “en apoyo del pliego de reclamos”. Tres días después, el diputado puneño Emeterio Tacuri, un rollizo trotskista, se adhirió a la huelga de hambre en el local del Parlamento, en Lima, “exigiendo al gobierno la solución de los problemas de Puno”.

El 16 de abril hubo un atentado contra la estación microondas de Puno.⁷ Un guardia republicano, Wilmer Vásquez, perdió una mano al tratar de desactivar la carga de dinamita. Al día siguiente, en una redada policial fueron detenidos tres notorios radicales de la izquierda marxista: Ronald Bustamante, Jawar Orihuela y Jaime Nina.⁸ Los tres eran miembros del “comité unificado de lucha”, siendo Nina su presidente. En la casa de Bustamante, dentro de un escondite que este había construido, y donde intentó refugiarse, la policía encontró varios cartuchos de dinamita (Bustamante, miembro del UNIR, afirmaría posteriormente que los cartuchos fueron colocados por la policía).

Poco después, los detenidos fueron trasladados a Lima, mientras en Puno diversas instituciones y organizaciones se sumaban al “comité de lucha” reclamando su libertad. El 18 de

abril, el obispo de Puno, Jesús Calderón, respaldado entre otros por las monjas dominicas, declaró su solidaridad con la huelga y se incorporó a una comisión que viajó a Lima a tratar de conseguir la libertad de los detenidos. En Lima, los parlamentarios puneños, menos el ayunante Tacuri, se sumaron con vehemencia a la comisión.

El ministro De la Jara accedió a poner en libertad a Orihuela y a Nina, aunque quejándose amargamente (“cada vez que es detenido un sospechoso, aparece un parlamentario para exigir incondicionalmente su libertad”).⁹ Ronald Bustamante, en cambio, continuó detenido, y fue finalmente remitido al Poder Judicial. El ejemplo puneño se extendió. Mientras la comisión se reunía con De la Jara, se iniciaba en Cusco un paro de cuarenta y ocho horas demandando la libertad de cinco trabajadores de construcción civil, acusados de cometer acciones dinamiteras.¹⁰

Las acusaciones a la izquierda legal, de actuar con una doble medida frente a las acciones de Sendero Luminoso, eran parcialmente justificadas. Es necesario, empero, entenderlas en perspectiva. Históricamente, y pese a las acerbadas disputas anteriores, el origen de gran parte de esos movimientos era común, como también lo era —para la izquierda legal, pero no para Sendero— la percepción instintiva del enemigo: la Policía, los organismos represivos en general. Frescas aún las memorias de prisiones sufridas en común, los parlamentarios izquierdistas concebían, pese a sus violentas diferencias con Sendero, como un imperativo moral (y un mandato político, además) el prestar su concurso para lograr la libertad de gente a la que, aunque equivocada, sentían perteneciendo finalmente al mismo campo.

Sería en Puno donde, al cabo de varios años, la izquierda legal habría de ser paulatinamente llevada por los hechos a una posición completamente diferente. Fue un aprendizaje lento y torturado, donde emergió de a pocos la conciencia de que frente a Sendero no solo se jugaba su supervivencia política, sino la supervivencia física de sus cuadros locales. Después de velar y enterrar a varios de sus dirigentes y militantes asesinados por Sendero, la izquierda legal en Puno pasó a una actitud crecientemente combativa, que culminaría, como se verá en su momento, en un enfrentamiento irreversible.

A comienzos de mayo, el número de acciones dinamiteras había alcanzado un nivel —con relación a los meses anteriores— decididamente alarmante. La extravagancia clínica de algunos atentados (perros, tumbas, escuelas) no ocultaba ni el efecto acumulativo del resto ni la inevitable percepción de que detrás de las explosiones no había solo un grupo pequeño, consumido por biliosa esquizofrenia, sino una organización que cubría coordinadamente la mayor parte del país. Los atentados en Ayacucho sumaban ya ochenta y tres; en Lima, ochenta y uno; en Cusco, cuarenta y ocho; en Junín, cuarenta y seis; en Áncash, veinte.¹¹ Pese a ello, la izquierda marxista presentó una moción en el Parlamento que intentaba derogar la Ley Antiterrorista 046. El apoyo a la moción trascendió las líneas partidarias. El abogado aprista Javier Valle Riestra, un parlamentario frecuentemente arrebatado por arrestos de oratoria castelariana a expensas del contenido, afirmó en el debate que “la gran arma de los terroristas era la irresponsabilidad periodística en tratar de magnificar y sobredimensionar los hechos”.¹²

Pese al incremento de acciones senderistas, es necesario reconocer que había alguna tenue justificación en restarles importancia. Hasta ese momento, casi no había víctimas, y en todo caso la relación entre el número de atentados y el de bajas le daba una apariencia casi inocua a aquellos; sobre todo si el observador deseaba verlo así. La rusticidad de los atentados, en comparación, por ejemplo, a la sofisticación, entonces tan reciente en la memoria, de tupamaros o montoneros, no fue vista como una ventaja insurgente (porque ampliaba la base bélica, le quitaba carácter elitista, construía una experiencia propia desde los cimientos), sino como un

testimonio de primitivismo e impotencia.¹³

El gobierno, sin embargo, hubo de reaccionar. Los cuerpos especiales de las policías, los *sinchis* de la Guardia Civil y los *llapan atic* de la Guardia Republicana, fueron enviados a Ayacucho y a Andahuaylas, respectivamente, para buscar y trabar combate con las guerrillas senderistas. Ambos grupos, después de cumplir operaciones apropiadas al enfrentamiento de guerrillas de tipo castrista, realizaron, no obstante, algunas detenciones de militantes de calibre en ambos lugares. En Ayacucho hubo un campesino muerto y en Andahuaylas un oficial fue herido; pero ni en un caso ni en el otro se produjeron como resultado de combate. Pese a ser todavía relativamente tenue, la represión ya había incurrido en varios excesos, que inevitablemente distorsionaron y sabotearon sus propios esfuerzos. En Ayacucho una joven, Georgina Gamboa, denunció haber sido violada por guardias civiles. La policía negó el cargo, pero nunca en forma convincente. Por varios meses, la violación de Gamboa fue el símbolo que la izquierda parlamentaria utilizó para definir la situación de violencia en el país.

Casi al mismo tiempo, otro incidente de mayor importancia política había ocurrido en Cusco. El 26 de mayo, un contingente policial capturó en un barrio de Sicuani a dos lugareños y a un estudiante limeño: Edmundo Cox Beuzeville. De inmediato empezó un interrogatorio que se prolongó por cerca de dos días, durante los cuales los detenidos confesaron pertenecer a Sendero, y aparentemente señalaron un escondite donde se ubicó más de ochenta cartuchos de dinamita. Cubierto con un poncho, Cox fue filmado reconociendo su militancia y su participación en varios atentados. Semanas después, el video sería parcialmente transmitido en la televisión limeña.

El poncho, sin embargo, no había sido puesto para darle colorido folclórico a la escena, sino para ocultar el hombro fracturado de Cox. El interrogatorio había sido conducido bajo tortura y, aparte del hombro, el rostro demacrado de Cox en la filmación era el testimonio vivo de varios días de severo sufrimiento.

Cox era sobrino del obispo auxiliar de Lima, Augusto Beuzeville, quien no solo acudió al ministro del Interior en demanda de explicaciones sino que alistó el respaldo de la Iglesia. La Comisión Episcopal de Acción Social publicó un comunicado exigiendo se “garantice la integridad física y moral de las personas detenidas”.

Mientras De la Jara reaccionaba con cautela, haciendo investigar el incidente y gestionando el traslado de Cox a Lima, otros miembros prominentes del gobierno lo hicieron en forma vehemente. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados cuanto el del Senado, al igual que el propio presidente de la República, contestaron duramente el comunicado y acusaron a algunos de los firmantes —sobre todo al presidente de la comisión, el obispo jesuita Luis Bambarén— de haber apoyado en silencio o a viva voz los atropellos contra los derechos humanos del gobierno militar.¹⁴ En el amargo intercambio de acusaciones, la responsabilidad legal de Cox pasó a segundo plano.

En los años siguientes, ya casado con la militante senderista Miriam Lezcano, Cox fue arrestado varias veces más, en Puno y en Lima, con documentos falsificados y débiles coartadas; y en casi todos los casos fue liberado por el Poder Judicial, por “falta de pruebas”. Según la policía, su importancia dentro de Sendero creció considerablemente con el tiempo. En 1987, fuentes de la DIRCOTE lo consideraban el responsable del Comité Metropolitano.¹⁵ Pudo haber en la calificación algo del síndrome venerable de las uvas verdes, pero en todo caso los cargos contra Cox no solo terminaron siendo muy serios, sino que lo fueron desde el inicio. No obstante, el recurso a la tortura, en este caso y en tantos otros, puso a la policía bajo una luz moralmente repugnante, y sabotó insalvablemente su propio trabajo. Ante el horror de la

tortura, el asunto de culpabilidad o inocencia pasaba, a los ojos de la mayoría, a ser secundario. Pese a ello, como se verá a lo largo de este libro, las fuerzas policiales (y el Estado peruano con ella), no sacaron de esta experiencia, ni de las siguientes, las lecciones que una reflexión elemental hubiera hecho evidentes.

Mientras políticos y periodistas en Lima continuaban enzarzados en desorientadas polémicas y descripciones respecto a la violencia, Sendero redoblaba la frecuencia y la intensidad de sus acciones.

Durante el día, el pueblo de Quinua —plaza de suelo adoquinado, paredes enjalbegadas, claro silencio en el aire claro y la luz brillante de los Andes— parecía abstraído por entero de la expectativa de violencia, del sordo rumor conspirativo que era casi palpable en Ayacucho. A poca distancia de la capital del departamento, unida a ella por una carretera asfaltada construida por el gobierno de Venezuela en 1974 para celebrar los ciento cincuenta años de la batalla de Ayacucho, Quinua parecía un quieto remanso aliado de la historia. Al otro lado de la plaza, junto a la carretera, sombreadas por árboles, había vivanderas que preparaban y vendían, especialmente los domingos, papas horneadas, carnes chactadas con las salsas fuertes de la sierra. Visible desde las bancas de madera y las mesas rústicas, el obelisco de la pampa de la Quinua señalaba a la distancia el lugar donde peruanos comandados por españoles dirimieron contra un ejército de peruanos, colombianos y venezolanos el destino de América Latina en 1824.

El jefe del puesto policial, el sargento Ramiro Flores Sullca, era ayacuchano y sabía —sobre todo desde el intento de ataque al puesto en enero— que la noche traía peligros más concretos que los míticos. Los asaltos a los puestos de San José de Secce y Luricocha habían desgarrado el tejido de convenciones implícitas sobre las que descansaba la autoridad policial. El respeto al uniforme —que es la protección mayor de un policía en tiempos normales— había sido quebrantado por esos ataques. Y Flores Sullca sabía desde enero que ello había cambiado instantáneamente la posición de la Policía, del estar protegida por una semiinvulnerabilidad, asumida y aceptada por la sociedad, a convertirse de hecho en una de las instituciones más vulnerables.

El 15 de agosto en la noche, tres personas vistiendo uniformes de la Guardia Civil ingresaron al puesto. Flores Sullca, que había recibido informaciones previniéndolo de un ataque inminente, aflojó aliviado la vigilancia por un momento. Tras los uniformados, entraron otras quince o diecisiete personas. Algunas tenían armas de fuego. Flores Sullca no tuvo ninguna posibilidad de resistir, pero intentó hacerlo. Hubo un corto y furioso intercambio de fuego, al término del cual Flores Sullca estaba muerto y dos o tres asaltantes heridos, mientras el guardia Rodolfo Manrique, también herido, lograba huir.¹⁶ Con el puesto, y el pueblo, dominados, los guerrilleros sustrajeron sin apuros dos metralletas, dos revólveres, varios uniformes y abandonaron luego Quinua.

Flores Sullca fue el primer policía abatido por Sendero. Con el tiempo, el número de sus colegas muertos sumaría centenares, y la procesión de ataúdes cargados por graves policías en ruta al camposanto se convertiría en un evento virtualmente rutinario. Pero, entonces, la policía en Ayacucho reaccionó con vehemencia e indignación ante el tabú pisoteado, comprendiendo además la necesidad de reinstaurarlo mediante acciones ejemplarizadoras.

Casi un mes después del ataque, el 7 de setiembre, un grupo mixto de policías de Ayacucho y sinchis capturaron en la provincia de Huanta a dos de los dirigentes senderistas más buscados entonces: Carlota Tello Cuti, considerada lugarteniente del aún fugitivo Carlos Alcántara — quien según las declaraciones de algunos detenidos era el responsable senderista de la ciudad de Ayacucho—, y Jesús Luján González, quien había sido capturado en enero transportando dinamita, pero fue puesto en libertad poco después. En los días siguientes hubo varios otros arrestos, entre ellos el de Dante Cruzat Cárdenas, perteneciente a otra de las familias tradicionales ayacuchanas que habían unido parcialmente su suerte a la de Sendero.¹⁷ El revólver de Flores Sullca fue recuperado y los capturados remitidos al Poder Judicial. Los arrestos, elevando la mira, prosiguieron. El mismo mes fue detenido Maximiliano Durand, quien vivía en forma virtualmente abierta en Ayacucho. Semanas después Durand sería puesto a disposición del Poder Judicial, junto con los demás arrestados, como responsable del ataque a Quinua.

Sin embargo, pese al número de arrestados y a su presunta categoría dentro de la organización senderista, la violencia no aminoró. Los atentados se multiplicaron en Ayacucho y a lo largo del país, creciendo no solo en número e intensidad, sino también en ferocidad.

A comienzos de setiembre, un grupo de Sendero llegó a Túpac, un pequeño pueblo en el distrito de Goyllarisquizga, en Pasco, y sin exhibir armamento hicieron una reunión en la plaza de armas. Cuando el jefe del puesto policial, el cabo Segundo Paz, se acercó al grupo, uno de los presuntos asistentes lo abatió disparándole “dos tiros en el pecho”.¹⁸

Casi al mismo tiempo, el 16 de setiembre, una docena de personas parcialmente enmascaradas asaltó el bazar “La Pequeñita” en la ciudad de Ayacucho, y empezó a saquearlo. La propietaria, Antonia Carrión de De la Cruz intentó impedirlo y fue asesinada a balazos. Su hijo, que arremetió contra los atacantes tratando de salvarla, fue malamente herido.¹⁹

En forma brusca, el número de víctimas empezó a acumularse, y lo que hasta entonces se había visto como un alzamiento extravagante, se tornó sangriento. Lo que parecía más chocante en ese rostro nuevo de la violencia era la aparente falta de brújula con que se seleccionaba a las víctimas. Gente modesta, a la que solo con imposibles contorsiones ideológicas se podía considerar responsable de alguna culpa social. Parecía evidente que la dirigencia senderista había considerado necesario empezar a derramar sangre ajena.

Era cierto: la intensificación de la guerra, acordada desde enero, suponía trasladar el énfasis a las acciones cruentas. Algunas de ellas aparentemente gratuitas. Sin embargo, la decisión de ensangrentar la guerra había sido acompañada por otra, mucho más significativa, que iba a configurar indeleblemente el carácter de la guerra: la decisión del autosacrificio, la voluntad de morir... la cuota.

La cuota

Marx pues nos ha armado, así como Lenin, y principalmente el presidente Mao Tsetung. Nos enseña lo que es cuota y lo que es aniquilar para preservar [...] si se persiste, se mantiene la política al mando, se mantiene la estrategia política, se mantiene la estrategia militar, se tiene un plan claro, definido, entonces se avanza, y se es capaz de enfrentar cualquier baño de sangre (para el baño de sangre nos empezamos a preparar desde el año 81 porque tenía que venir).²⁰

Cuando Abimael Guzmán se refirió a la experiencia del “baño de sangre”, en 1988, la historia de

la insurrección ya estaba tinta en ella. La proverbial moledora de carne había procesado cantidades tales como para tornar el levantamiento senderista en uno de los más sangrientos de las dos últimas décadas en Latinoamérica, y con claras proyecciones de convertirse en una de las guerras más crueles en la historia del continente. En la primera parte de 1981, sin embargo, la idiosincrasia de la rebelión senderista no era la violencia sino la extravagancia. Había muy pocas víctimas todavía, y sobrevivía aún un cierto consenso en el sentido que, mientras la furia senderista se mantuviera transoceánica (es decir, matando perros y dirigiendo insultos a Teng Hsiao-ping y Enver Hoxha), sus manifestaciones en el Perú serían básicamente inocuas. Fue, por supuesto, un consenso tan erróneo como distorsionado, pero que reflejaba el hecho del bajo nivel de la violencia.

En mayo de 1981 se llevó a cabo la IV Sesión Plenaria del Comité Central de Sendero. Es una reunión poco documentada, pero en la cual, de acuerdo a lo que se sabe, además de analizar, refinar y precisar el plan para “desarrollar la guerra de guerrillas abriendo zonas guerrilleras en función a las bases de apoyo”, se abordó el tema de “la cuota”.

Este fue uno de los principales asuntos en la reunión, y quizá en los primeros años de la guerra; no solo objeto de un debate ardoroso, sino de un acuerdo solemne, efectuado con toda la ceremonia de un rito. Posteriormente, el acuerdo de “la cuota” y sus consecuencias prácticas fueron mitificados y recubiertos con símbolos y metáforas ardorosas tanto por comisarios senderistas como por algunos comentaristas. Sin embargo, el fondo del debate tuvo, en términos militares, consideraciones eminentemente prácticas: convertir la guerra en la preocupación central de los peruanos mediante el incremento radical de la violencia; elevar la apuesta de la guerra, haciendo que la sangre no goteara sino inundara. Para lograrlo, era indispensable convencer de dos cosas a los militantes senderistas: la necesidad de matar en forma sistemática y despersonalizada, para aplicar la estrategia acordada, y como premisa necesaria de lo anterior, la disposición, más aun, la expectativa de entregar la vida propia. Esto último es “la cuota”.

El concepto mismo de “la cuota” y la forma febril, el fulminado fervor con que fue expresado, le dieron en los años siguientes a Sendero la reputación (y en alguna medida la apariencia) de un culto tanatófilo antes que la de un partido marxista. Este fue un cargo repetido desde las filas de la izquierda legal, especialmente después de la masacre de los penales en 1986. La inspiración de las acciones senderistas, según las horrorizadas acusaciones, no se encontraban en Marx, Lenin o siquiera en Mao, sino en el reverendo Jones y la paila de cianuro en Guyana.

Sendero reaccionó con indignación atípica ante las acusaciones, pero sin entrar a debatir el fondo de la cuestión: la relación entre la guerra y su costo, especialmente su costo en sangre. Hasta qué punto, en su concepción, lo segundo no es solo consecuencia de lo primero, sino también causa recíproca, combustible del incendio. Ese era el asunto central, desde 1981, que el debate sobre “la cuota” se abocó a encarar.

De acuerdo a la escasa documentación disponible sobre el tema, el debate se condujo como un desarrollo riguroso, aunque fundamentalista, del marxismo-leninismo-maoísmo ortodoxo. El inminente costo social de la lucha se había discutido en Sendero desde 1979, en el momento de “definir y decidir”. La tensión esencial en los movimientos revolucionarios, entre la filantropía de las intenciones y los fines, frente a la dureza de los medios, se había resuelto de acuerdo a la tradición bolchevique y stalinista. Y se había ingresado a la guerra. Pero la tensión, ya iniciada la insurrección, no había terminado ni iba a terminar. Abimael Guzmán lo sabía bien, y conocía — como lo supo Stalin en su momento — que el conflicto solo iba a concluir cuando se remachara la paradoja y los filántropos terminaran sirviendo a los comisarios, ya convencidos de que el

matar daba vida, que la guerra traía la paz, que la más extrema tiranía llevaba a la gran libertad. Si esa alteración conceptual se había operado con éxito en algunas de las mentes más brillantes en Europa desde los años de entreguerra hasta la década del 60, ¿por qué no lograr algo similar o mayor en el Perú?

Veamos primero las raíces del tema. Dirigir la violencia con desapasionada energía y sin titubeos es una de las características centrales en el desarrollo ortodoxo del marxismo. Marx abordó el problema con característica intensidad en su *La guerra civil en Francia*,²¹ escrito inmediatamente después de la caída de la Comuna de París. La derrota comunera, sumada a las experiencias de 1848, demostraron a Marx que la moderación llevaba a la catástrofe. “El aparato del Estado y sus estructuras de apoyo en la sociedad no podían ser simplemente conquistados; deberían ser necesariamente destruidos para reconstruirlos luego sobre la base de principios revolucionarios”.²² En la introducción escrita para la edición de 1891, Engels se había lamentado de la “actitud reverente” con que los comuneros “permanecieron parados respetuosamente ante las puertas del Banco de Francia”,²³ mientras las tropas de Versalles se preparaban a retomar París. En sus comentarios sobre el texto, Lenin enfatizó aun más las conclusiones de Marx y Engels. No era solo necesario destruir al enemigo para no ser destruido por él; era preciso destruir el Estado que representaba sus intereses, y las organizaciones sociales que lo apuntalaban. La ingeniería social marxista, desarrollada por Lenin, el elenco soviético, y luego por Mao, empieza por una demanda de demolición general. El sentimentalismo, los sueños de armonía y justicia instantánea son, en esa escuela, debilidades peligrosas a las que hay que combatir constantemente. En la permanente discusión ética sobre medios válidos en la lucha revolucionaria, la vertiente ortodoxa del marxismo se presenta a sí misma como guiada por la filantropía endurecida de un cirujano, que no vacila en cortar a un paciente, cercenarlo si es preciso, bañarse en sangre, para salvarlo a largo plazo.

El mismo duro realismo sirvió al diseño de las diversas estrategias para la toma del poder y su mantenimiento durante los años de imperio del marxismo ortodoxo. La característica común en todas ellas (la leninista, la variante trotskista, el desarrollo del Comintern y el maoísta), reside tanto en el énfasis en la demolición del “Estado burgués”, como en la creación de la máquina demoledora: el Partido Comunista construido sobre la base del modelo leninista (de revolucionarios profesionales, clandestino o semiclandestino, relativamente pequeño). No hay que olvidar, empero, que en el fondo de casi cada integrante de esas promociones de gerentes y administradores de la destrucción social, empeñados en lograr la máxima eficiencia dialéctica y para quienes el sentimentalismo era casi pornografía, latía un romanticismo filantrópico, reprimido pero intenso. El fin era el logro de la utopía, la sociedad de justicia sin par, el comunismo. Los medios para llegar a ella eran supuestamente “científicos”, e incluían la destrucción previa, y justificaban eso o casi cualquier otra cosa.

La adopción de medios máximos para fines máximos, con un aparato organizado para llevarlos a cabo metódicamente, paso a paso, representó una ventaja considerable que los partidos comunistas tuvieron sobre sus oponentes o competidores a lo largo de los setenta años de luchas desde la revolución de 1905, en Rusia. En la mayoría de los casos los partidos comunistas iniciaron su lucha desde una posición de minoría y debilidad, enfatizando en consecuencia estrategias y tácticas de paciente acumulación de fuerzas y de cautelosa conservación de las mismas. Simultáneamente, sin embargo, los partidos comunistas en guerra estuvieron dispuestos a aceptar (o inducir) costos sociales pavorosos, ante los cuales otras fuerzas organizadas reulaban o capitulaban. Ello fue, por ejemplo, evidente en los movimientos

de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Tal como lo señalara Franz Borkenau,²⁴ los partisanos comunistas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron una ventaja incalculable sobre los movimientos de resistencia no comunista; puesto que aquellos, teniendo un interés creado en la fractura social, estaban preparados para enfrentar represalias drásticas, mientras que estos refrenaron constantemente sus acciones, tanto por consideraciones morales, como para evitar excesivas bajas civiles. La paradoja de esta situación en el contexto soviético reside en el hecho que un movimiento guerrillero que gozaba del apoyo del gobierno de su país, pudiera ser utilizado en acciones implacables, de costo ilimitado.²⁵

Fue asimismo una de las razones principales (las otras fueron mejor organización y estrategia) por las que, casi en cada caso en los que organizaciones comunistas compitieron o se enfrentaron con movimientos no comunistas, aquellas triunfaron sobre estos. Ello no solo sucedió en las áreas de Europa ocupadas por los nazis, sino también en China y posteriormente en las guerras sucesivas de Indochina y Vietnam. Las bien conocidas citas de Mao sobre “la omnipotencia de la guerra revolucionaria” y la necesidad de “oponer la guerra a la guerra”, surgieron de la experiencia de uno de los conflictos bélicos más costosos en sufrimiento y vidas humanas a lo largo del siglo. Si la aceptación de costos sociales extremos ha sido parte de la ingeniería revolucionaria del marxismo ortodoxo, ello se dio en permanente tensión y búsqueda de equilibrio con el principio de acumulación y conservación de fuerzas. En términos prácticos, ello significó que las mayores bajas en las diversas guerras fueron sufridas por la población no combatiente.

Sin embargo, la necesidad eventual del autosacrificio, de la inmolación en la lucha, fue recalcada desde los inicios mismos de la doctrina insurreccional marxista ortodoxa. Luego de criticar a los comuneros parisienses por no haber ido lo suficientemente lejos, Marx, como se ha visto, había aplaudido su decisión final de resistir contra toda esperanza.²⁶

Mantener o enardecer la moral combativa o fortalecer el compromiso de la base social con los partidos comunistas, al igual que el servir en forma clara a la causa del Partido, fue consagrada desde entonces como razón suficiente para estimular el comportamiento abnegado, incluyendo el autosacrificio, en los cuadros comunistas. Esto se conciliaba con el principio de conservación de fuerzas de rehuir combates desfavorables si eventualmente los sacrificios brindaban más fuerza al Partido que la que se perdía. Cálculo complejo y fuente permanente de fieras disputas internas, pero cuya utilidad raramente se puso en duda. Fue nuevamente Mao quien simplificó complejidades con retórica pedestre.

¿Es acaso contradictorio luchar heroicamente primero y abandonar luego un territorio? [...] Uno come primero y después evacúa. ¿Se ha comido en vano?²⁷

La disposición al autosacrificio no fue, ciertamente, monopolio de los comunistas a lo largo de las décadas de guerras y revoluciones. Pero en comparación con otros grupos, los partidos comunistas que emergieron victoriosos los superaron no solo en estrategia y organización, sino en otros tres aspectos: paciencia, disposición al autosacrificio y liderazgo.

Las luchas libradas por partidos comunistas a partir de la revolución bolchevique y la guerra civil subsecuente estuvieron entre las más feroces que haya vivido la humanidad. En la guerra civil de la Unión Soviética murieron tres millones de personas. Pocos años después, durante las convulsiones de la colectivización masiva y las purgas en la década del 30, hubo alrededor de diez millones de víctimas. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética sufrió treinta

millones de muertos. Yugoslavia tuvo dos millones de víctimas en los tres años y medio de lucha que tomó a Tito derrotar a los alemanes y conquistar el poder.²⁸ No hay contabilidad aproximada de los muertos en China durante la sucesión inacabable de batallas desde la década del 20 hasta 1949, pero fueron varios millones. En las guerras de Indochina y Vietnam murieron entre dos y cuatro millones de personas, antes de 1975.

Y sin embargo, de entre los escombros de un nivel de destrucción que hubiera asustado a Tamerlán, los partidos comunistas habían emergido —en cada uno de los casos reseñados en el párrafo anterior— más fuertes que al inicio del conflicto, habían sobrenadado y finalmente conducido la borrasca. Y todos esos partidos habían tenido las características comunes anotadas arriba. Stalin, Tito, Mao, Ho, cada uno dirigiendo una organización asombrosamente eficiente y a la vez devota; con lugartenientes capaces de conducir cuerpos de ejército con habilidad que hubieran aplaudido los grandes capitanes de la historia (Zhukov y Koniev, Lin Piao y Peng Tenhuai, Giap y Tran Van Tra, entre otros, han de figurar prominentemente en cualquier historia militar), y tener con su líder la relación de adolescentes cautivados por un maestro severo y sabio.

Ahora, cuando después de años de ejercicio de gobierno y de ablandamiento burocrático, las naciones comunistas se autoreforman y se lanzan al tránsito incierto hacia formas democráticas de organización política —alejándose definitivamente del marxismo ortodoxo— resulta difícil visualizar el ánimo y la convicción que movió a los cuadros comunistas a ejecutar y sobrellevar algunas de las empresas más tormentosas en la historia. Tanto los viejos bolcheviques mandados fusilar por Stalin, que morían viviendo su nombre, como los cuadros que acometieron trabajos clandestinos en áreas ocupadas, donde las posibilidades de sobrevivir eran mínimas, todos ellos actuaron movidos por la fe intensa en la utopía comunista, que sentían como posibilidad científica, pero miraban con emoción religiosa. Y ese fervor religioso secular hizo para sus creyentes no solo explicable sino deseable el autosacrificio, y no solo comprensibles sino permisibles los crímenes y excesos. El concepto y la práctica de “la cuota” fueron, pues, un elemento central en el marxismo ortodoxo durante su era de desarrollo y predominio.²⁹

La digresión anterior se dirige a comprender mejor la reunión del IV Pleno de Sendero, en mayo de 1981, y sus decididamente letales consecuencias para el Perú. Vistos aisladamente, la discusión y el acuerdo sobre “la cuota” parecen no tener otro sentido que la arbitraria emoción homicida. En perspectiva deben entenderse como toda la praxis de Sendero; es decir, como un riguroso desarrollo fundamentalista del marxismo ortodoxo, y no era un desarrollo meramente teórico sino una aplicación práctica. A contracorriente del consenso mundial formado desde la última parte de la década del 70 sobre los excesos del marxismo ortodoxo, especialmente durante el período de Stalin, Guzmán y su movimiento no solo no consideraban excesivos los costos, sino que tenían esa era como el momento más alto de la humanidad. Pensaban como pensó buena parte de la inteligencia europea y americana entre mediados de la década del 20 hasta los 60, pese a los testimonios que emergían de los muros, pese a la abundante y conmovedora literatura del desengaño. Las esperanzas y la fe en el bien trascendente, que movieron tantos brazos y lealtades, cegaron tantos ojos y acallaron tantas conciencias, ya no movían a nadie en Occidente ni movían a nadie tampoco en el mundo comunista, pero sí a Guzmán y su Partido. A diferencia de la gran mayoría de los marxistas de las décadas del 70 y 80, que miraban hacia atrás con un sentimiento creciente de vergüenza y alienación, y que por lo menos consideraban que se hizo demasiado, Guzmán y su Partido sostenían que lo que se hizo estuvo muy bien, pero que no fue suficiente.

Era en el Perú donde debía llevarse a cabo lo que dejó de hacerse en otros lados. Guzmán sabía, empero, que el contagio de la violencia fanática prende lentamente en sociedades pacíficas, y más lentamente aun si son democráticas. Perú era ambas cosas en 1981. Cuando se reunió la IV Sesión Plenaria, la insurrección ya duraba un año. Hasta entonces, solo había muerto una persona. Y la sociedad peruana, viviendo las posibilidades múltiples de expresión sin riesgos, de acción parcial en el gobierno, de ironía y humor exacerbados por los años de gobierno militar, era no solo relativamente impermeable sino refractaria a la violencia. El rostro casi dulce de De la Jara, el guardián titular del régimen, su obvia bondad, hacían difícil el odio necesario para el comportamiento fanático. Incluso dentro de las filas senderistas, pese al esfuerzo consciente de autoindignación, un porcentaje considerable de los militantes mantenía la renuencia a matar, a cruzar el umbral de la sangre.

Pero sin sangre, la estrategia insurreccional de Sendero no tenía contenido. Sin odio no se lograría la energía necesaria para el trabajo inmenso de destrucción material y moral, y de reconstrucción de un mundo alternativo que Sendero programaba.

La IV Sesión Plenaria acordó, al precisar los planes iniciales para el “desarrollo de la guerra de guerrillas”, intensificar radicalmente la violencia. La calistenia bélica ya había sido hecha durante el año anterior, el enardecimiento era más fácil. El aumento de la violencia debía lograr el juego complicado de acciones y reacciones, en el que se trataba de provocar reacciones ciegas y desmedidas del Estado. Cuanto mayor fuera el éxito en ese aspecto, tanto más fácil iba a ser transferir la carga de la culpa al Estado —objetivo central de la propaganda bélica— y tanto más difícil iba a ser mantener la imagen democrática del régimen. Los palos de ciego iban a provocar también intensos resentimientos contra el gobierno entre la gente injusta o excesivamente afectada. Lo más importante, empero, era que la respuesta desmesurada contribuiría a liquidar la paz y ayudar a que la nación se deslizará hacia la violencia.

El escalar la guerra iba a significar un costo para Sendero que podría ser muy alto. El Partido debía estar preparado para recibir golpes durísimos y no solo sobrevivir sino salir finalmente fortalecido. Desde el punto de vista organizativo y militar, las medidas ya habían sido estudiadas: doble o triple red clandestina en lugares decisivos; reportar, analizar y evaluar cada experiencia, para que la organización toda aprendiera de cada acción y hubiera así una memoria orgánica; concentrar o dispersar efectivos de acuerdo a las necesidades, etc. Quedaba por definir la actitud moral, en lo personal y organizativo, al disponerse a abrir la caja de Pandora de la violencia.

De acuerdo a lo que se sabe, en el IV Pleno Guzmán describió con trazos enfáticos las consecuencias personales de la guerra. Muchos de los asistentes al pleno, y muchos de los militantes del Partido, iban a morir, atrapados por los acontecimientos que ellos mismos ponían en movimiento. E iban a morir de las peores maneras posibles. Sus familias iban a ser destrozadas, gente cercana y querida iba a ser presa y torturada, otros iban a ser muertos por el hecho de ser parientes de ellos. Nada había de nuevo en ello, todo había ocurrido ya, en tiempos recientes, en otras latitudes, por la misma causa. Pero había muy poco en la historia del Perú que preparara para afrontar los niveles de violencia que eventualmente se desatarían. Decenas, centenares de miles de muertos. La sangre iba a correr en ríos, y la única manera de triunfar era “cruzando el río de sangre”. Guzmán los puso entonces ante la alternativa de decidir si estaban dispuestos a persistir en la lucha, sabiendo lo que el futuro guardaba. En la “guerra popular” había, desde su punto de vista, una larga travesía que cumplir. Un siná sangriento, tan inevitable como históricamente necesario. Al otro lado estaba la tierra prometida. No han quedado, a diferencia de otras reuniones, testimonios directos sobre el debate. Aparentemente la oposición

fue mínima, y Sendero tomó, con las solemnidades previsibles, el acuerdo de “la cuota”: la disposición y aun la expectativa de entregar la vida cuando el Partido lo dispusiera. En los términos en que se hizo, como un voto, una consagración, Sendero marchó más allá de lo que habían hecho otros partidos comunistas, donde se intentó siempre mantener la ficción que el autosacrificio era situacional.³⁰

Desde entonces, prepararse para la muerte se convirtió en un factor central en la preocupación personal y el adoctrinamiento de los cuadros. Desde el compromiso de “la cuota”, la vida ya no pertenecía más al militante. Manuscritos leídos y memorizados en reuniones, notas tomadas en ellas, empezaron a repetir y machacar el tema. Estar preparados para la muerte, renunciar a vivir. Un manuscrito, capturado en Luriganchó en 1985, critica, parafraseando a Gonzalo, a quienes “temen cometer errores”:

Otros se cuidan, temen cometer errores, entonces no son sinceros, no apelan a su condición, cuidan pellejo, ¿qué cuidan? Si nada tienen, si todo lo has dado al Partido, tu vida no te pertenece, le pertenece al Partido. Así qué tanta jeremiada, qué tanto cuidar pellejo.

El mismo manuscrito, difundiendo acuerdos tomados en lo más duro de la lucha en 1984, después de reafirmarse en su línea de acción, “no hay construcción sin destrucción, son dos aspectos de una misma contradicción”, acusa al gobierno de estar “actuando peor que los españoles que descuartizaron a Túpac Amaru”, y concluye:

Esa forma cruel que la guerra está tomando no es sino el baño de sangre que habíamos planteado, y la decisión es de pasarlo. Tenemos decisión incontrovertible de atravesarlo y conquistar otra orilla.

“La cuota”, el sacrificio último, adquiriría sentido mayor por no ser ofrendada solo a la revolución en el Perú, sino a la revolución mundial por la causa del comunismo, “cuyo milenio se abre”, al decir de Guzmán. Otro manuscrito senderista, de 1985, explica eso a los fieles:

Sobre la cuota: el sello de compromiso con nuestra revolución, con la Revolución Mundial, con esa sangre del pueblo que corre en nuestro país [...]. La cuota es una parte pequeña de la revolución peruana y de la R[evolución] M[undial] [...] la mayor parte [de muertes] son causadas por la reacción y la menor parte por nosotros. Ellos forman lagunas, nosotros empapamos solo pañuelos.

Otro manuscrito, copiado aparentemente por un dirigente de nivel medio en Ayacucho, hacia fines de 1984, parafrasea a Guzmán sobre el tema. Lo transcribo manteniendo su ortografía y puntuación:

La sangre nos fortalece y si es el ‘baño’ que nos a hecho la F[uerza] A[rmada] la sangre está corriendo, no nos esta haciendo daño si no mas bien nos esta fortaleciendo.

A medida que la guerra se hacía más despiadada, el voto de morir adquirió manifestaciones diversas. Para muchos senderistas, acosados y angustiados, la idea de morir “arrancándole lauro a la muerte” empezó a tener el atractivo intenso de una experiencia a la vez mística y sensual. La salida perfecta de ansiedades inaguantables, trabajos sin cuenta y la siempre inminente captura y sus horribles consecuencias.

La visión de la muerte como entrega ardiente, como sublimada posesión sensual, abrió horizontes inéditos en el *amor fati* individual de los senderistas y, combinada con la visión del milenio y el culto a la personalidad de Guzmán, creó formas más o menos efímeras, más o menos enfebrecidas, de mito. Manuel Granados, el antropólogo que había estudiado a Sendero

desde sus años universitarios, intentó una fórmula descriptiva:

Mao= una chispa puede *encender* la pradera.

Un senderista= estoy dispuesto a cruzar el *río de sangre*.

Declaración del PCP SL= La jefatura está con ustedes en el instante supremo de la entrega total al *fuego purificador* de la L[ucha] A[rmada].

Consigna del PCP SL= *morir* para inventar el gran mito subjetivo. Incendio-Fuego Invencible-Río Sangre-Muerte-Mito Subjetivo-Fuego Purificador.³¹

En términos generales, aunque arrebatados sus militantes con frecuencia por anticipados éxtasis tanáticos, frecuentes en órdenes guerreras y las metáforas de hogueras y zarzas ardientes, comunes a las visiones proféticas, Sendero intentó mantener encuadrada la disposición al autosacrificio dentro de la utilidad política y militar.

Su condición es cumplir, dispuesta a combatir en cualquier lugar. No hay ataduras y se forja un reto a la muerte y en arrancar lauros a la muerte, la G[uerra] es nuestra vida cotidiana, estar dispuestos a la muerte, no hay lamentaciones.³²

La tanatofilia podía ser paralizante, pero tenía el contrapeso de las demandas exhaustivas de trabajo, de cumplimiento de tareas concretas que Sendero imponía a sus militantes. Al final, de esa combinación de conspiradores agobiados de trabajo y acariciando fantasías de muerte, surgió la expresión que resumía su actitud. “Llevar la vida en la punta de los dedos”, listo a entregarla en la lucha. Expresión repetida por Guzmán en su entrevista de 1988 y antes de él por varios cuadros y dirigentes senderistas, entrevistados en diversas circunstancias.

En el fondo, inducir la disposición al sacrificio tuvo un motivo utilitario evidente: el comando óptimo de las tropas rebeldes. Poder disponer sin protesta de sus vidas para los fines de la guerra. Lograr lo que, por ejemplo, consiguió Napoleón “el supremo egoísta, que envió cientos de miles de personas, lanzando vivas, a la muerte”.³³ En las condiciones del Perú, se necesitó un egoísmo mucho mayor, que ciertamente no faltó en Guzmán.

Pero la muerte, y su atractivo extraño y fascinante, pesó más en la trayectoria de Sendero durante un número de años de lo que posiblemente Guzmán calculó. “La cuota” fue ensalzada en canciones, como este triste con fuga de tondero que un senderista anónimo compuso en el Alto Huallaga, en 1984:

En la salida de Aucayacu
hay un cadáver, de quién será,
seguramente de un campesino
que dio su vida por la lucha.
[...] Ahora la cuota hay que dar.
Si nuestra sangre tenemos que dar
por la revolución, qué bueno será.

Y su peso tornó decisiones, acomodó los hechos, creó las condiciones para convertirse una y otra vez en una profecía autocumplida. La actitud de enfrentamiento suicida previa a la masacre de los penales en junio de 1986 había empezado a definirse en mayo de 1981.

1 “Apreciación de la situación en la zona de emergencia del departamento de Ayacucho”. Jefatura de

Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia, Estado Mayor Conjunto.

- 2 Decreto Ley 046, artículo 1°.
- 3 *Ibídem.*
- 4 Tal fue el caso, por ejemplo, del dirigente agrario Segundo Centurión, detenido en el departamento de San Martín.
- 5 Decreto Ley 046, artículo 7°.
- 6 *Caretas*, n. 643, 13 de abril de 1981.
- 7 Curiosamente, uno de los puntos del pliego de reclamos exigía no solo la transmisión directa, desde Lima, de los programas de televisión, sino añadir otro canal de televisión a Puno.
- 8 Cronología de los hechos en Puno, Ministerio del Interior, 20 de abril de 1981.
- 9 *Caretas*, n. 645, 27 de abril de 1981.
- 10 *Ibídem.*
- 11 *Caretas*, n. 646, 4 de mayo de 1981.
- 12 *Ibídem.*
- 13 Hasta ese momento, sin embargo, Sendero había dinamitado siete torres de conducción eléctrica, lo cual en comparación a las decenas que serían rutinariamente dinamitadas posteriormente, no parece mucho. Pero, en términos de costo económico, el impacto era ya alto.
- 14 *Caretas*, n. 656, 13 de julio de 1981.
- 15 *El Comercio*, 15 de julio de 1987.
- 16 Sobre el ataque: “Apreciación de la situación en la zona de emergencia del departamento de Ayacucho”. Jefatura de Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia; y “Apreciación de operaciones”, Estado Mayor Conjunto de la Jefatura de Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia, 1 de noviembre de 1981.
- 17 *Ibídem.*
- 18 *Caretas*, n. 665, 21 de setiembre de 1981.
- 19 “Apreciación de la situación en la Zona de Emergencia del Departamento de Ayacucho”. Jefatura de Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia; y “Apreciación de operaciones”, Estado Mayor Conjunto de la Jefatura de Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia, 1 de noviembre de 1981.
- 20 Entrevista a Abimael Guzmán: “Presidente Gonzalo”, *El Diario*, 24 de julio de 1988, p. 20.
- 21 Marx, Karl. *La guerra civil en Francia*, con una introducción de Friedrich Engels. Las citadas ediciones soviéticas contienen comentarios adicionales de Lenin.
- 22 Collier, Thomas; Shy, John. “Revolutionary War.” In Craig and Paret, eds., *Makers of Modern Strategy*. Princeton: Princeton University Press, 1986, p. 826.
- 23 Marx, *op. cit.*; Collier y Shy, *op. cit.*, p. 827.
- 24 Borkenau, Franz. *European Communism*. New York: Harper Brothers, 1953.
- 25 John Armstrong (ed.), *Soviet Partisans in World War II*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1964. La traducción es mía.
- 26 Ver la cita correspondiente en el capítulo “Mahoma, Mao, Macbeth”.
- 27 Mao Tse-tung. *On Protracted War*. p. 235.
- 28 En su excelente libro, *Guerrilla* (Harper & Row, 1963), Charles W. Thayer hace una fascinante comparación entre las insurrecciones guerrilleras competitivas de los chetnik, dirigidos por Drakha Mikhailovich y los partisanos que actuaron bajo las órdenes de Tito (Thayer sirvió en el campo de Tito por un tiempo como oficial de enlace del comando aliado). Al inicio de la guerra, todos los criterios convencionales (apunta Thayer) conferían aparentemente una ventaja decisiva a Mikhailovich, un prestigioso militar profesional, rodeado por un Estado Mayor de altos oficiales del Ejército yugoslavo, contra Tito, un político sin experiencia militar convencional, cuyos oficiales tenían más entusiasmo que conocimiento profesional. Cuatro años después, sin embargo, los chetnik estaban destrozados y los partisanos perseguían a los alemanes a lo largo y ancho de Yugoslavia. ¿Qué sucedió? Como observación general, Thayer repite lo sostenido por muchos de los mejores teóricos y practicantes de la insurrección guerrillera: la formación militar convencional suele ser un obstáculo antes que una ventaja ante las extremas exigencias de flexibilidad, adaptabilidad y acciones

paradójicas que la práctica guerrillera demanda, sobre todo en sus fases iniciales.

Pero además, Thayer hace una observación específica que va al fondo del tema abordado en este capítulo. Ante la política de represalia salvaje e indiscriminada de los alemanes, Mikhailovich capituló tácitamente y virtualmente cesó sus operaciones. Como indica Thayer: “Los alemanes sabían que el talón de Aquiles del movimiento guerrillero no es el guerrillero elusivo en los bosques, sino la familia y propiedad que deja atrás”. Tito, por lo contrario, no fue intimidado en absoluto por la certeza de las represalias. Como se ha visto en otros casos, los comunistas yugoslavos no tenían interés alguno en la restauración del orden social previo; la destrucción comprehensiva llevada a cabo por los alemanes facilitaba hasta cierto punto su labor ulterior. Y además, como indica Thayer, de hecho, cuanto mayores fueran las represalias, tantos más reclutas podía él esperar de aquellos dejados sin techo y sin familia. El genio de Tito fue aprovechar al máximo cada incremento de fuerza representado por reclutas o armas adicionales, pero ello nada hubiera significado sin su disposición a aceptar abismales sacrificios, ante cuya perspectiva retrocedieron los profesionales de la guerra. Sobre el tema, ver en especial el capítulo “The Leadership”, en el libro de Thayer.

- 29 Hay que agregar otra vez que la necesidad de una cierta forma de autosacrificio fue comprendida también por líderes guerrilleros no comunistas. En su introducción al libro de Thayer, Fitzroy MacLean, uno de los sobresalientes oficiales británicos en guerra de guerrillas durante la Segunda Guerra Mundial cita a T. E. Lawrence: “Supimos que habíamos ganado una provincia, cuando logramos enseñar a sus habitantes civiles a morir por nuestra idea de libertad”.
- 30 Desde entonces, todo militante del Partido debió hacer, con eventuales variaciones en la letra, pero no en el contenido, la siguiente promesa que es, más bien, un voto:
 - Prometo ante el camarada Gonzalo, jefe del Partido Comunista del Perú y de la revolución mundial.
 - Prometo ante el Comité Central del Partido Comunista del Perú.
 - Prometo ante el marxismo-leninismo-maoísmo, “pensamiento-guía” del camarada Gonzalo, de asumir [sic] mi responsabilidad como militante del Partido Comunista del Perú y de no traicionar [sic] jamás al Partido ni al pueblo.
 - Prometo luchar con valentía, decisión y coraje contra el imperialismo y feudalismo, hasta alcanzar la liberación de los pueblos oprimidos del mundo.
 - Prometo luchar y entregar mi vida por la revolución mundial.
- 31 Granados, Manuel Jesús. “Ideología del PCP - Sendero Luminoso”, en *Socialismo y Participación*, marzo de 1987.
- 32 Manuscrito senderista. Escrito en Lurigancho en 1985.
- 33 Van Creveld, Martin. *Command in War*. Cambridge: Harvard University Press, 1985.

IX. “Capturar armas y medios”

La decisión personal del autosacrificio entre los militantes de Sendero fue acompañada por determinaciones estratégicas concretas. La IV Sesión Plenaria del Comité Central consideró que la etapa de “Abrir zonas guerrilleras en función a las bases de apoyo” había logrado su objetivo de preparar el camino para una generalización de las acciones armadas, especialmente en el Comité Regional Principal. Culminado el prólogo, se trataba ahora de expandir la violencia guerrillera. La nueva etapa en la insurrección fue definida por Sendero como la de “Desplegar la guerra de guerrillas”. Este nuevo escalón en el desarrollo insurreccional iba a durar hasta diciembre de 1982 abarcando vastas regiones del país, especialmente Ayacucho, y desarrollándose con rapidez e intensidad inéditas. La etapa de “Desplegar la guerra de guerrillas” fue considerada, en el esquema insurreccional senderista,¹ como una “política principal fundamental”, dividida en varias etapas complementarias, la primera de las cuales, “Conquistar armas y medios”, que iba a durar desde mayo hasta diciembre de 1981, es la que nos concierne ahora.

El “Desplegar” fue un salto cualitativo ciertamente más importante que el de la etapa inmediatamente anterior, la de “Abrir zonas guerrilleras”. esta fue fundamentalmente el prólogo de aquella, una etapa de transición entre la agitación semiarmada de los meses de inicio de la lucha y el escalamiento metódico de la violencia mediante acciones predominantemente guerrilleras.

Cuando se estudie en el futuro la técnica insurreccional senderista, estoy seguro de que uno de los aspectos centrales en el análisis será el de los primeros dos años de la guerra, la aplicación y luego la continuación del “Plan de inicio”, mediante el cual se injertó dosificadamente la insurrección en el cuerpo social peruano, hasta que prendió. Si en el discurso dogmático marxista el principio dialéctico de la transformación de cantidad en calidad es algo que se repite con frecuencia, como un axioma que no se intenta comprender, Guzmán en cambio no solo intentó comprenderlo, sino aplicarlo. Su indudablemente notable intelecto esquemático definió los objetivos intermedios en la ruta insurreccional, y luego trazó en detalle la ruta hacia cada uno. Segmento a segmento, paso a paso. En la historia de las insurrecciones guerrilleras, pocas hay, si acaso alguna, en las que el factor volitivo, respaldado por exhaustivo planeamiento, haya tenido tal preponderancia. esta es la insurrección inducida, injertada, nutrida luego a través de los vulnerables momentos iniciales, cuando los anticuerpos sociales la rechazaban, hasta superarlos y traspasar los primeros umbrales de debilidad.

El levantamiento senderista no es la primera insurrección en la que una organización

relativamente pequeña y militarmente inexperta se lanza a la vía armada y llega eventualmente a crecer, consolidarse y, en algunos casos, triunfar. Las etapas preliminares de las insurrecciones dirigidas por Mao, Ho y Enver Hoxha —todas las cuales habrían de triunfar ulteriormente— son similares en ese aspecto. Incluso el inicio del levantamiento de los comunistas yugoslavos comandados por Tito comparte muchas de las descripciones comunes a las otras: escasez de armamento, relativa inexperiencia militar.² Pero todas ellas tuvieron a su favor varios factores externos que ayudaron decisivamente a su desarrollo: la lucha anticolonial, la lucha contra la invasión extranjera, o un marco general de convulsiones sociales continuadas, profundas y violentas. Solo en el Perú el esquema insurreccional se desarrolló sin el concurso de ninguno de esos factores y cuando, por el contrario, las posibilidades múltiples de la apertura democrática se ofrecían incondicionalmente.

En mayo de 1981, las acciones de Sendero ya habían transpuesto la capacidad de respuesta rutinaria o aun de soslayamiento intencionado del régimen democrático. A su pesar y a ciegas, el gobierno empezaba a balbucear una reacción de emergencia, mientras Sendero, varios pasos adelante en el diagnóstico de la situación y en planeamiento estratégico, se lanzaba a cercenar la presencia del régimen democrático en la base distrital, provincial y regional, a imponer su control dictatorial en las áreas dominadas e imprimir las disyuntivas terminantes de la guerra.

El plan de “Desplegar” tenía proyecciones ambiciosas en sus etapas posteriores: eliminar la presencia del gobierno en las áreas rurales de Ayacucho y reemplazarla por el control senderista; lo cual, como se verá, fue eventualmente logrado. La primera parte del plan, no obstante, la de “Conquistar armas y medios”, buscaba tanto proveer a la organización del mínimo indispensable de armamento como entrenar y foguear a sus cuadros. Las acciones vistas en el capítulo anterior, del asalto a los puestos policiales de Luricocha y Quinua, como los saqueos y desmanes en Ayacucho y Huanta, fueron parte de la primera etapa.

A la vez, todos los comités regionales, zonales y locales de Sendero se abocaron a la tarea de aprovisionarse de dinamita y armamento. El 28 de abril fue asaltado en Cajamarca el puesto policial de La Ramada, en Cutervo. Varias armas y uniformes policiales fueron tomados por los sediciosos. En Tacna, la mina Carmen (segunda), fue asaltada el 10 de junio, y los atacantes robaron una cantidad importante de dinamita, fulminantes y mechas. La policía, entretanto, recuperó pequeñas cantidades de dinamita robada en Huancayo y Arequipa. Pero en contrapartida, se asaltaba asientos mineros en Cerro de Pasco (el 22 de junio), o en las provincias de Huarochirí (28 de junio) y Cajatambo (1 de agosto), del departamento de Lima, cuyos polvorines fueron vaciados.

Con disciplina de hormiguero, las huestes senderistas acumulaban en cuotas constantes el inventario explosivo de su organización. Y lo movían de un lado al otro del país en la misma forma paciente, ordinaria, pero incesante. Nada había de sofisticado o espectacular en las acciones individuales ni en el funcionamiento del aparato logístico, excepto la continuidad. Se supo que las empresas de transporte terrestre eran utilizadas para trasladar la dinamita cuando se produjeron, aleatoriamente, algunas incautaciones y capturas. A fines de agosto, por ejemplo, la Policía de Investigaciones presentó como detenida a María Espinoza, de cincuenta y cuatro años, cuya aparente encomienda interprovincial de un saco de papas contenía más bien trescientos cartuchos de dinamita.³ La acusada afirmó que los cartuchos no le pertenecían. Pequeñas cantidades de dinamita robada se incautaron en Áncash, Huánuco, Piura, Arequipa y en Ayacucho, generalmente entre las pertenencias de pasajeros en autobuses o camiones de carga. Pero solo se recuperaba un porcentaje mínimo de la dinamita sustraída o robada a punta de armas

en docenas de los centenares de polvorines mineros esparcidos por el país.

En Ayacucho, entre tanto, junto a las movilizaciones en las áreas controladas o influenciadas por ellos, pequeños grupos armados de senderistas empezaron a verse con frecuencia creciente. Eran los “destacamentos” de los “pelotones” de la “primera compañía”, todavía más metafóricos que reales, en el sentido militar convencional, pero definitivamente sustanciales en cuanto a su efecto político. Eran grupos que se juntaban y dispersaban con cierta rapidez y que por eso no parecían tener la consistencia ni siquiera la realidad de una formación militar permanente. Pero tampoco sus vulnerabilidades.

Germinales aún, esos grupos se preparaban para inminentes operaciones guerrilleras. Y, de hecho, ya habían realizado algunas. Anotaciones manuscritas capturadas posteriormente definen los lineamientos básicos de las operaciones previstas para esa etapa. Los destacamentos debían “dar vueltas” continuamente dentro del territorio afectado, entre operaciones militares.

El objetivo era no solo endurecer a los incipientes guerrilleros, sino además llevar a cabo continuas acciones de agitación, propaganda y movilización. El contacto con los habitantes de aldeas y villorrios, la residencia temporal entre ellos, era un aspecto fundamental de su accionar.

Eran el brazo del gobierno clandestino de Sendero (y recibían información y eventualmente instrucciones de los responsables clandestinos o semiabiertos de Sendero en la localidad), a quienes correspondía proyectar en consecuencia la imagen de un poder aparentemente frágil, pero de presencia constante y tenaz. A la vez, en la convivencia frecuente con comuneros y aldeanos, debían tratar que los paisanos desarrollaran con ellos los lazos íntimos que se siente hacia parientes o compoblanos. La autodisciplina más estricta fue enfatizada desde el comienzo, y ello no solo incluía las famosas “Tres reglas y ocho advertencias” de los revolucionarios chinos, sino también el mandato de colaborar con los lugareños en sus faenas de campo y de pueblo. Como se verá posteriormente, la aplicación de esas directivas fue marcadamente dispareja en áreas donde se disputaba el dominio, pero constante en aquellas ya influenciadas.⁴

El énfasis en mantener un contacto constante con la población fue reiterado permanentemente en las instrucciones del Partido a los cuadros guerrilleros. Se trataba, esencialmente, de romper con la tradición guerrillera latinoamericana de la “guerrilla errante”, el recuerdo de cuya acción en Ayacucho era aún cercano. En las instrucciones manuscritas de esa etapa, el Partido advertía repetidamente a sus cuadros que se evitara “pegarse a la selva para no aislarse”. El contraste con la guerrilla filocastrista de 1965 era terminante. Entre la protección geográfica de la jungla y el sobrenadar o zambullirse entre los grupos humanos de la sierra, la elección fue explícita. Ello iba a cambiar eventualmente, desde 1983, entre otras razones porque la selva ayacuchana en la década del 80 era cualquier cosa menos un lugar aislado. Pero hasta entonces, las acciones de Sendero se concentraron fundamentalmente en la serranía.

Conspiraciones

El presidente Belaunde, entre tanto, terminó de sucumbir a la tentación de definir la insurrección senderista como una elaborada conspiración dirigida desde el extranjero. Luego de un apagón masivo que afectó a Lima por dos días, durante el cual hubo atentados con dinamita en la ciudad, Belaunde buscó el escenario apropiado para formular su denuncia. Durante la celebración del

aniversario institucional de la Policía de Investigaciones Belaunde informó, utilizando como el papado o la realeza la primera persona en plural, que “hemos podido comprobar, en investigaciones llevadas a cabo en un país hermano, que las características del terrorismo son exactamente iguales a las que experimenta esa nación. De allí deducimos que se trata de un plan armado en el exterior, dirigido y financiado en el exterior”.⁵ A su lado, el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Ipinze asentía gravemente, con la aparente convicción de un sabueso veterano, con el olfato impregnado por los viejos e inconfundibles olores de la presa.

La referencia era, transparentemente, a Colombia, donde poco antes el presidente Julio César Turbay había denunciado la intervención extranjera, aludiendo a Cuba, en el incremento de la violencia guerrillera y delincuente.

Si la denuncia de Turbay contenía una media verdad —el apoyo de Cuba a algunos de los movimientos guerrilleros colombianos, sobre todo al M-19, no está fuera de duda, pero a la vez dicho apoyo no explicaba ni una fracción de la violencia insurrecta en Colombia—, en Belaunde la insinuación no tenía otra explicación que su propia e indignada confusión. Para Belaunde, el constructor por excelencia, el soñador en obras de infraestructura que domeñaran el territorio agreste, el que un peruano dinamitara las torres de conducción eléctrica o las vías férreas o las pocas carreteras que jineteaban el lomo andino, era una acción inconcebible, que ni la lógica extrema de la locura podía explicar. En los términos de un país dotado y a la vez afligido por una geografía insurrecta, el sabotaje era un acto desnaturalizado. Resultaba mucho más fácil interpretarlo como la acción de saboteadores extranjeros, interesados en debilitar al país para fines ulteriores de conquista.

Pese a la circunstancia y la solemne expresión del auditorio, había mucho de patético en la denuncia, que posteriormente sería repetida por el arquitecto-presidente a lo largo de su mandato, apenas se presentara la oportunidad. Si, de un lado, las razones que lo llevaron a refugiarse en esa interpretación son no solo comprensibles sino hasta conmovedoras, el hecho es que la obligación esencial de Belaunde como presidente era identificar adecuadamente los problemas fundamentales de la nación, para poder enfrentarlos apropiadamente. Y la denuncia de la conspiración internacional, que satisfacía su indignación moral, pero no la realidad, llevaría ineluctablemente a políticas nebulosas y estrategias distorsionadas.

Con el tiempo, y al poco tiempo más bien, la actitud de Belaunde derivó, como se verá más adelante, hacia el tratar de ignorar el problema, a soterrarlo mediante el silencio despectivo, la alusión indirecta. Causa de ello fue no solo la cólera impotente del constructor, sin otro elemento importante en la personalidad del presidente, que se intensificó en el segundo período de su gobierno: también los comportamientos señoriales, los lenguajes cortesanos, cuya genealogía, en el caso de Belaunde, pasaba a través de la influencia decisiva del por algo motejado “Califa”, Nicolás de Piérola, y, a través de él, a la cultura virreinal, cuyas pautas de conducta aún pesaban, con sonido de hojalata y un sólido peso muerto, sobre las clases dirigentes peruanas.

Junto al arquitecto, al constructor, al viajero infatigable, había también mucho en Belaunde de la pretensión hidalga. Sus discursos, preñados de arcaísmos cortesanos, eran con frecuencia la metáfora de un elaborado saludo de sombreros, o de las revueltas de capa de un torero barroco. Eso lo ayudó, sin duda, en la elección y la primera parte de su mandato, aunque después fuera una fuente permanente de humor a costa del ciertamente meritorio arquitecto.

Poco después de la ceremonia, algunos periodistas preguntaron a Ipinze sobre la posible conexión entre Sendero y el narcotráfico. Con expresión que un consumado jugador de póquer hubiera envidiado, Ipinze contestó que tal conexión le parecía muy probable. Ambos grupos,

dijo, actuaban en lugares próximos, o con frecuencia en los mismos; ambos grupos estaban interesados en la fractura de la autoridad estatal. No lejos, el asesor personal de Ipinze, Reynaldo Rodríguez López, aún a cuatro años de su caída, pero ya uno de los dos narcotraficantes más importantes del país, aprobó, sin duda, los comentarios.

Hubo mucha gente que creyó en la alianza estratégica entre Sendero y el narcotráfico. Belaunde fue, naturalmente, uno de ellos, aunque solo desde 1982 lo afirmaría enfáticamente, y lo sostendría sin más evidencia que la propia terquedad. No obstante, cuando en 1987 y 1988, Sendero reconquistó el Alto Huallaga e inició una coexistencia *de facto* con los narcotraficantes que no se le opusieron violentamente, Belaunde sintió que la realidad había vindicado sus acusaciones tempranas, y así lo declaró. Estaba aún equivocado, pero a esas alturas había ya problemas mayores que la corrección de los juicios del arquitecto.

Si algo queda de aquel episodio en la escuela de la Policía de Investigaciones, aparte de la errónea apreciación presidencial, cuyas consecuencias se sintieron y pagaron luego, fue el hecho entre irónico y curioso, que casi dos años antes de que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, empezara su campaña de supuesta identificación y denuncia del “narcoterrorismo”, un policía peruano, el general Ipinze entre todos los mortales, ya había lanzado la idea.

Los atentados continuaron. En la madrugada del 31 de agosto, la embajada de Estados Unidos y la residencia del embajador norteamericano fueron petardeadas. Los daños fueron menores, y el embajador de Estados Unidos, Edwin Corr, se esforzó sonrientemente en restarles importancia, pero no lo logró.

Los órganos de prensa conservadores y los parlamentarios acciopopulistas vinculados a Javier Alva Orlandini arreciaron los ataques al ministro del Interior, José María de la Jara. Las cualidades que habían distinguido su nombramiento como un ejemplo de conducta democrática y de ruptura con los hábitos de represión del pasado fueron ahora mencionadas como defecto. El rostro querubínico, la obvia bondad de De la Jara fueron ridiculizados inmisericordemente. El tabloide *Ojo* fue, entre los periódicos, el más enconado: “De la Jara es un bombón”, fue su titular de primera plana luego de los atentados del 31 de agosto; y a partir de entonces se refirió al ministro solo como “Bombón”. La inferencia de asociar a De la Jara con la dulzura muelle, medio burlada, medio cretina, fue que lo que la nación necesitaba no eran bombones, sino leche de tigre.

Por un momento, De la Jara perdió los papeles y culpó al narcotráfico de los atentados recientes. Eran, dijo, una represalia al reciente convenio de lucha antidrogas firmado con el gobierno de Estados Unidos. Fue, en perspectiva, el momento más triste de su gestión. Rodeado, sin saberlo, por intereses ligados al narcotráfico que habían infiltrado exitosamente los niveles más altos en su ministerio, y dependiendo cada vez más de la asesoría técnica de comandos policiales mayoritariamente corruptos, el culpabilizar a narcotraficantes por los atentados recientes fue una suerte de apoteosis de la miopía. Belaunde, vinculado con De la Jara por una estrecha amistad personal, recalcó enfáticamente el aprecio y la confianza que le tenía. Pero eso no detuvo la burla periodística ni los ataques del sector controlado por Alva Orlandini en el Parlamento. A partir de ese momento, los atentados de Sendero conllevaban el eco directo de ataques a “Bombón”. Y fue en esas semanas cuando, al decir de un funcionario del ministerio, se generalizó la convicción que De la Jara había recibido “el perdigón bajo el ala”. Su salida era solo cuestión de tiempo. El perdigón fue guiado por aquella ley inalterable de la política limeña: todo es perdonable o, más bien, olvidable (el haber derramado sangre inútilmente, el haber

robado, el haber sido nocivamente incompetente), menos el ridículo.

Los acuerdos semanales del sector Interior entre De la Jara y Belaunde dejaron de ser las reuniones despreocupadas en las que dos viejos amigos intercambiaban desde opiniones partidarias hasta “chismes sobre bodas”, al decir de un participante en los acuerdos. Desde agosto, acosado y confundido, De la Jara vivía bajo una tensión creciente, cuyas manifestaciones de ansiosa vehemencia no escaparon a Belaunde.

A esas alturas, casi todos los sectores de Acción Popular estaban convencidos que De la Jara era parte importante del problema, y que debía salir. El propio Belaunde, practicante y creyente en las propiedades sustantivas de la imagen en política, buscaba calladamente al sucesor de De la Jara. “José María está muy cansado, al borde del stress”, comentó el presidente a Héctor López Martínez durante esas semanas.⁶

En la medida que De la Jara se angustiaba crecientemente por lograr resultados sustantivos en la lucha contra Sendero, mediante operaciones policial y legalmente limpias, aumentó su dependencia respecto a Ipinze. Y este la utilizó para consolidar su control sobre la Policía de Investigaciones.

La pugna con Luque ya estaba virtualmente definida a favor de Ipinze. A fines del año anterior, Luque había hecho un esfuerzo para asegurarse una posición de fuerza dentro de la Policía de Investigaciones y había fracasado. Luego de haber rendido mejores resultados que los de su predecesor en la división de Seguridad del Estado, Luque había fallado en el intento de ascender al grado de teniente general; lo cual sí había sido logrado por otro miembro de su promoción: Rómulo Alayza. Alayza estaba estrechamente vinculado con Ipinze y, como se sabría años después, con Rodríguez López. Al ascender, Alayza relegó a Luque al tercer lugar en la jerarquía institucional, y limitó en forma virtualmente definitiva sus posibilidades de asumir el comando de la Policía; la cual, que no la lucha contra Sendero, era para ellos la pugna verdadera.

Luque realizó aun una última maniobra. Siendo ahora el tercero en jerarquía dentro de la Policía de Investigaciones, le correspondía asumir el cargo de inspector general; es decir, ser el encargado de controlar la legalidad y la moralidad de las medidas institucionales. Luque sabía que el ejercicio de su cargo lo colocaría probablemente en la posición de asestar un golpe quizá decisivo a Ipinze. Si apenas una fracción de las cosas que se murmuraban eran reales, Ipinze no resistiría el escrutinio rutinario de la Inspectoría General.

En diciembre de 1980, Luque consiguió que De la Jara lo nombrara inspector general de la Policía de Investigaciones, con retención de su cargo de director de Seguridad del Estado. De un momento al otro, había convertido la derrota en una victoria importante que podría ser decisiva.

Pero al final, volvió a perder. Enterado de la resolución ministerial, percatándose de inmediato del peligro que ello significaba, el grupo allegado a Ipinze reaccionó con gran celeridad y con toda su fuerza. No está del todo claro a cuántos parlamentarios movieron, ni exactamente cuáles mecanismos de presión emplearon, pero el hecho es que De la Jara retiró su resolución, dejó sin efecto el nombramiento de Luque como inspector general, y poco después lo “adscribió” a su despacho, lo cual era el eufemismo burocrático que describía el beso de la muerte institucional.

La presión sobre De la Jara no fue conminatoria ni mucho menos amenazadora. El pugnaz ministro hubiera reaccionado como lo hizo ante la insubordinación de Balaguer. La presión se

dirigió más bien hacia la lealtad partidaria del ministro. Según López Martínez, se “acusó a Luque de ser aprista”.⁷ Ese argumento, repetido por un número considerable de influyentes miembros del partido del gobierno, más la presión intensa de los mandos policiales que lo respaldaran durante el episodio de Balaguer, forzó la decisión de De la Jara. Aquel fue el nadir y la sombra en la gestión de un ministro por tantos conceptos meritorios. No porque Luque fuera un policía excepcional, que no lo fue,⁸ pero era por lo menos un profesional que trataba de cumplir su misión, en tanto que el grupo rival condujo a la Policía de Investigaciones a niveles tales de corrupción que no solo distorsionaron su función, sino que la desnaturalizaron por completo. En ese proceso, lo primero que sufrió fue la eficacia policial; lo cual, en la etapa más vulnerable de Sendero, cuando su inexperiencia les hacía aún cometer gruesos errores, y cuando una acción policial tenaz y diligente hubiera contribuido por lo menos a sofrenar su crecimiento, significó un daño mucho mayor para el país que el que la simple negligencia hubiera podido acarrear. Al dismantelar las pocas y menguadas defensas de la sociedad, la corrupción policial funcionó en los hechos en forma complementaria a la de Sendero, y facilitó tremendamente un crecimiento que de otra forma hubiera sido mucho más azaroso.

De la Jara, hay que reiterarlo, fue enteramente inocente respecto a la corrupción que campeaba en su sector. Acosado desde todos lados, con el suelo cediendo bajo sus pies, empeñado en no desnaturalizar en los hechos su posición de respeto a la ley y el espíritu democrático pero sin conocimiento ni capacidad de aprendizaje respecto a las mecánicas de poder y de función en su sector, terminó en una dependencia dolorosa respecto a sus jefes policiales, en especial Ipinze.

Resulta tentador culpar a la bondadosa ingenuidad de De la Jara el haber permitido el copamiento de su sector por grupos notoriamente corruptos. Sin embargo, ninguno de sus sucesores tuvo mejor desempeño en ese aspecto. De hecho, como veremos, De la Jara emerge, en comparación con sus pares, como uno de los ministros del Interior más eficaces durante el régimen de Belaunde. Lo cual, si bien no quiere decir mucho, pone por lo menos su gestión en perspectiva.

Pero “Lajarita” (como lo llamaban amigos y enemigos; estos últimos cuando se olvidaban de decirle “Bombón”) llevaba, en efecto, el perdigón bajo el ala... Y las críticas se acumulaban no solo por su impotencia en prevenir los atentados senderistas, sino por el comportamiento frecuentemente indecoroso, en ocasiones caótico, de la policía.

Después de los enfrentamientos ocurridos durante la insubordinación de Balaguer, los incidentes entre las diversas policías seguían produciéndose con frecuencia. El origen era generalmente casual: el intento de arresto a un chofer ebrio, o a un matón desbocado que resultaba siendo miembro de una institución rival. Docenas de policías armados de cada instituto confluían sobre el área. Insultos, empujones, disparos al aire, el frágil equilibrio armado bajo las cámaras de televisión y los periodistas acezantes. Poco después, derramada y exudada la adrenalina, algún coronel o general por cada lado, en incierto comando de los suyos, iniciaba las cautelosas maniobras de destrabamiento de miradas, posiciones y carros de patrulla. En los noticieros de la noche, luego de pasarse las escenas de enfrentamiento, casi obscenamente ridículas al paso de las horas, se leería un comunicado del Ministerio del Interior, generalmente redactado por López Martínez, en el que se anunciaban solemnes investigaciones de lo acaecido y se prometían terminantes sanciones en el caso de que un incidente similar tornara a acaecer. Y, por cierto, acaecía.

Dentro de cada instituto, quienes habían participado en los duelos de miradas y exhibiciones

de parafernalia, eran, entre tanto, considerados los adalides del honor institucional. Habían cerrado el paso a las maniobras de la institución enemiga, cuyos “objetivos institucionales”, en la jerga seudoestratégica que escuché a tantos oficiales, suponían la eliminación o por lo menos el dominio de su propia institución. Guardia Civil contra Guardia Republicana y Policía de Investigaciones, pero estas dos sin ninguna particular intimidad entre sí. Cada instituto con sus propias tradiciones, su folklore y la fiera aunque contradictoria lealtad de sus miembros.

Entre tanto, a menos de dos años de la transferencia del régimen militar, las Fuerzas Armadas habían logrado rehacer la imagen perdida durante sus últimos años en el gobierno. Ello se debía en parte al triste rendimiento de la policía, pero también a eventos que no tenían relación con la guerra senderista (apenas percibida como tal entonces), sino con otra más definida, convencional y sobre todo exitosa.

En las selvas montañosas y desoladas de la cordillera del Cóndor, tropas peruanas y ecuatorianas habían intercambiado fuego, primero en forma esporádica y, luego de un rápido escalamiento de hostilidades, el enfrentamiento había devenido abierto, a plena potencia de la maquinaria militar que ambas naciones pudieron poner en el lugar. Las fuerzas armadas peruanas y ecuatorianas se movilizaron a lo largo de la frontera entre ambas naciones, en el mar, la costa desértica, las montañas y la selva, y se prepararon para la inminente generalización de la guerra.

Sobre el filo del estallido total de hostilidades, prevaleció alguna prudencia y la guerra se confinó a su foco inicial, en la cordillera del Cóndor, mientras a lo largo del resto del frente se mantenía la vigilia de las armas.

Luego de una breve confusión inicial dentro del Comando de las Fuerzas Armadas del Perú, en el oriente amazónico, hubo una rápida reorganización tras la cual se pasó a la ofensiva. Coordinando eficientemente el uso de la Fuerza Aérea con el de los helicópteros artillados del Ejército y la Infantería, las tropas peruanas hicieron retroceder a las ecuatorianas al otro lado de la frontera y, una vez alcanzada la recuperación de su territorio, suspendieron el avance.

Fue una pequeña guerra singular,, victoriosa para el Perú y frustrante para el Ecuador, pero sin que ninguna de ambas naciones tuviera que pagar el precio de un conflicto generalizado. No tuvo razón inmediata que la justificara, más allá de las consecuencias de un viejo conflicto de límites, cuya guerra anterior había acaecido cuarenta años atrás. Fue también una guerra extraña en cuanto constituyó la excepción a la regla generalmente admitida en ciencias políticas, según la cual las democracias no guerrearán entre sí. No fue así en este caso, pero para lo que sí sirvió la existencia de regímenes democráticos en ambas naciones fue para contener el progreso de la guerra y pasar a negociar una vez que hubo concluido el torneo sangriento en las alturas boscosas del Cóndor.

Fue aquel quizá el punto más alto del régimen de Belaunde con relación al apoyo popular, entusiasmo ante la victoria y optimismo frente a las posibilidades implícitas que el triunfo abría a la nación, en cuanto había demostrado eficiencia, comportamiento heroico y finalmente victorioso; y también porque fue el momento en que parecieron haber cicatrizado en forma definitiva las heridas abiertas por el golpe militar de Velasco en 1968.

Ahí estaban, en efecto, como ejemplo vivo de ello, el presidente Belaunde, parado en un puesto tomado al enemigo en la reconquistada cordillera, solemne y a la vez radiante, rebautizando, a la luz de las precisiones cartográficas que él dominaba como pocos, las posiciones apresuradamente abandonadas por las tropas ecuatorianas. A su lado, el general Rafael Hoyos Rubio, quien trece años antes, el 3 de octubre de 1968, lo arrestara en Palacio de Gobierno, en la madrugada del golpe militar, y que ahora, como jefe de las Fuerzas Armadas,

había dirigido con eficaz energía las operaciones. Belaunde había consentido antes de asumir el poder que Hoyos Rubio accediera a la Comandancia General del Ejército, pero muchos habían interpretado esa decisión como una renuente concesión del presidente, movida por el deseo de no tomar medidas que perjudicaran la transferencia o la posterior estabilidad democrática, y sostenían que la alergia de Belaunde hacia los militares golpistas hacía casi imposible un diálogo funcional con Hoyos Rubio.

Sin embargo ahí estaba el presidente, rodeado por oficiales en uniforme de campaña, quienes habían peleado con valentía y éxito, dándoles una inevitable lección en geografía amazónica y luego saludándolos con algunas de las expresiones más logradas y felices en su oratoria, antes de estrechar la mano a un obviamente conmovido Hoyos Rubio. Ese apretón de manos parecía preñado de promesas de reconciliación y progreso para él, pero nadie esperaba que la euforia fuera eterna, pero sí que el optimismo durara y que la realidad se encargara de justificarlo. La economía crecía, se había ganado un conflicto en las mejores condiciones posibles, y la maduración institucional parecía evidente. Nada de eso ocurrió, sin embargo, y antes de que transcurrieran dos años, las esperanzas quedaban, una a una, doblegadas. Hoyos Rubio sobrevivió poco a la victoria. Meses después, el helicóptero que lo conducía, acompañado por varios de sus generales, en visita de inspección a las guarniciones del norte, se estrelló en un paraje desolado. No hubo sobrevivientes. El norte peruano y el sur ecuatoriano, divididos momentáneamente por la guerra, tornaron a hermanarse poco después a través de los sólidos vínculos de la desgracia. Una catastrófica inundación, que cubrió provincias y departamentos enteros, colapsó el crecimiento de la economía peruana y la precipitó, junto con otros factores, en un descenso que habría de durar hasta el final del régimen de Belaunde. Las expectativas de administración eficiente y de solidaridad nacional fueron también devastadas por la inundación; y ahí el gobierno de Belaunde perdió en forma decisiva el prestigio y la confianza de una parte sustantiva de la población. Desde entonces, en resumen, la mayoría de las cosas marcharon de mal hacia peor.

Solo las Fuerzas Armadas mantuvieron por un tiempo más largo el prestigio briosamente ganado en el Cóndor y cuando, poco tiempo después, durante el conflicto armado de Las Malvinas/Falkland, los militares peruanos hicieron esfuerzos extraordinarios, apenas ocultados por contribuir al esfuerzo bélico argentino, el patético desprestigio de la subsecuente derrota sin honor de la junta argentina no salpicó a los soldados peruanos, sino lo contrario. Se vio en su esfuerzo la generosidad de una ayuda sin cálculos ni dobleces, que había prestado apoyo decisivo allí donde los argentinos alcanzaron sus mejores logros, en la guerra aérea.

Es conveniente recordar lo anterior para tener presente cuál era la opinión que tenían de sí mismas y de las demás las instituciones fundamentales de la República, y la gente en general, durante el período del crecimiento inicial de Sendero.

El intenso y creciente desprestigio policial explicó a muchos los éxitos de Sendero, que crecía, de acuerdo a esta interpretación, merced a los defectos policiales y no a su capacidad. Con pocas excepciones, esa fue la opinión generalizada entre los políticos de casi todos los partidos, entre la mayoría de los militares e incluso entre algunos miembros de la policía. De ahí en adelante, conforme aumentaban las malas nuevas de descalabros policiales, crecerían a la vez los llamados al ingreso de las Fuerzas Armadas, para finalizar en forma rápida y concluyente el conflicto. Aquellos soldados que habían vencido a tropas entrenadas y bien apertrechadas, peleando en terrenos agrestes, bajo condiciones sumamente difíciles, habrían de dar cuenta sin dificultad alguna de un grupo mal armado y sin mayor preparación bélica, como era Sendero. El

jefe del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, expresó una opinión generalizada cuando afirmó que el problema tenía que ser afrontado por el Ejército, que estaba entrenado para ello. Los policías, dijo, son gordos, panzones, no pueden subir cerros. La guerra contra Sendero (que entonces, de paso, nadie consideraba como guerra) parecía ser básicamente un problema de condicionamiento atlético para algunos de los líderes más influyentes en la política nacional.

También los militares, y sobre todo el grupo de oficiales que ingresó al comando poco después de la muerte de Hoyos Rubio, parecían pensar lo mismo. Fascinados por la entonces reciente experiencia contrainsurgente argentina (y también por las anteriores en Brasil, Uruguay y Chile), a la vez que repelidos por la experiencia del gobierno militar bajo Velasco, ese grupo militar, cuya voz más influyente habría de ser el futuro ministro de Guerra, Luis Cisneros Vizquerra, visualizaron la insurrección senderista en términos puramente militares, la compararon en esos términos con los derrotados levantamientos de montoneros, ERP y tupamaros, y la encontraron incipiente y subdesarrollada. Compararon luego la capacidad de las Fuerzas Armadas que ellos dirigían con las de los países que habían derrotado las insurrecciones arriba mencionadas, y encontraron que en nada tenían que envidiarlas, en términos de preparación de la oficialidad, eficiencia organizativa, coraje. Y concluyeron que la supresión del levantamiento senderista iba a ser una misión en mucho subalterna, por debajo de su nivel, pero que ellos estarían en condiciones de lograr en plazo breve, invirtiendo apenas una parte secundaria de su imponente capacidad de destrucción.

A la luz de esa convicción, los militares contemplaron los crecientes descalabros policiales con indisimulado desprecio, y a la vez con la contenida satisfacción que el profesional o artesano auténtico experimentan ante el advenedizo que ha copiado su apariencia, pero que fracasa irremediabilmente a la hora de demostrar lo que sabe. Los viejos generales de la Asociación de Oficiales Generales (ADOGEN), que pasaban los años agrídulces del retiro enhiestos y vigilantes de sus fueros, rechazaron con determinación los intentos de los generales de la Policía de Investigaciones de formar parte de la institución. Ya, en lo que a muchos parecía una concesión excesiva, se había permitido el ingreso de los generales de la Guardia Civil. No se daría ni un paso más.

Más adelante veremos la doctrina y la actitud militares que subyacían esta actitud. Por el momento bastan las observaciones anteriores, las que, en cenas, reuniones sociales y otras más formales, alimentaron indirectamente los vehementes llamados de parlamentarios y dirigentes políticos clamando por el ingreso inmediato, con “mano dura”, de los militares como la cura purgativa, desagradable pero rápida, de una insurrección que solo la ineptitud policial permitía crecer.

1 Ver el capítulo: “El pensamiento militar del Partido”.

2 A esta altura resulta difícil resistirse a hacer la observación de que aquellas otras insurrecciones, que fueron dirigidas desde el inicio por militares profesionales, no tuvieron posteriormente ni un crecimiento más rápido, ni ciertamente un éxito mayor. Quizá el caso más notable entre militares profesionales que dirigieron organizaciones insurreccionales fue el del coronel Giorgios Grivas, jefe de la EOKA chipriota: un caso notable aunque comparativamente menor con relación a las insurrecciones guerrilleras arriba mencionadas.

3 *Caretas*, n. 663, 8 de setiembre de 1981.

- 4 Las “tres reglas” son las siguientes, en la traducción senderista:
 - . Obedecer las órdenes en todas las acciones.
 - . No tomar a las masas ni una sola aguja, ni una sola hebra de hilo.
 - . Entregar todas las cosas capturadas.Las “ocho advertencias” son:
 - . Hablar con cortesía.
 - . Pagar con honradez lo que se compre.
 - . Devolver todas las cosas solicitadas en préstamo.
 - . Indemnizar por todo objeto donado.
 - . No pegar ni injuriar a la gente.
 - . No estropear los cultivos.
 - . No tomarse libertades con las mujeres.
 - . No maltratar a los prisioneros.
- 5 *Caretas*, n. 665, 21 de setiembre de 1981.
- 6 Entrevista con Héctor López Martínez, el 20 de abril de 1987.
- 7 *Ibídem*.
- 8 Luque, en una verdadera resurrección institucional, retornó años después, en 1987, del retiro al servicio activo como jefe del Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior. Su rendimiento fue inferior a lo esperado. Lo cual, habida cuenta de que buena parte de su reputación en operativos antiterroristas se había hecho en la década del 70 en la colaboración, por ejemplo, con los servicios argentinos que arrestaron a activistas montoneros en Lima, no es de sorprender. Y no por la concomitancia moral o legal de esas acciones, sino porque dicha experiencia actuó como un prisma distorsionador en la percepción de la insurrección senderista.

X. “Nueva democracia”

En julio de 1981 apareció un número extraordinario de *Nueva Democracia*,¹ la revista teórica de Sendero. Fue el primero desde el inicio de la insurrección: las disquisiciones escolásticas ahora ya endosadas por la rúbrica de los hechos. Pero salvo los círculos de fieles, conversos y algunos escasos estudiosos, el documento mimeografiado en apretado texto fue poco leído.

Si lo hubiera sido, con el cuidado que la situación demandaba, es posible que algunas claves de la insurrección senderista hubieran sido comprendidas, o por lo menos percibidas, en el estadio entonces relativamente temprano del levantamiento. Con lo generalizado que era aún (y también después, aunque en menor grado) el menosprecio al senderismo, advertir oportunamente la ligazón entre los hechos individualmente humildes pero colectivamente importantes de la insurrección, con la elaborada y ambiciosa discusión teórica que Sendero difundió abiertamente, hubiera permitido ver por lo menos que no se enfrentaba a una organización fanática pero obtusa, sino a una con capacidad de concretar la ideología en política y esta en estrategia. En el mejor de los casos, se hubieran podido percibir las líneas de crecimiento que la organización insurgente proyectaba, y la forma en que se proponía llevarlas a cabo. Si la simple artesanía de las acciones individuales hubiera sido comprendida como parte programada de una estrategia dinámica, elaborada y ambiciosa, es posible que los arbustos no hubieran cegado la visión del bosque; y que aquel tapaojos, la suficiencia despectiva con que se consideró a Sendero hubiera sido reemplazado por una actitud más adecuada a la entidad del peligro que se enfrentaba.

El propósito de esa edición de *Nueva Democracia* fue el de respaldar los actos con la ideología (en los dos primeros artículos), y la ideología con los actos (en el último). De tres artículos propios (el cuarto es una reproducción de textos de *China Reconstruye* y *Pekín Informa*), dos concernían a la situación peruana (“Nuevo gobierno y la perspectiva económica, política y de la lucha de clases en general” y “¿‘Democratización’ o revolución de nueva democracia?”) y uno a la internacional (“Acerca de la unidad del movimiento comunista internacional y la declaración conjunta de las trece organizaciones y partidos marxista-leninistas”). El lenguaje, teniendo en consideración que la mayor parte de los artículos fue escrita cuando ya se había desencadenado la violencia, es sorprendentemente desapasionado, en contraste con los panfletos y proclamas contemporáneos. La razón está a la vista: Guzmán —el probable autor de todos los artículos— intentaba escribir para la historia antes que para el momento, tratando que los futuros exégetas interpretaran sus acciones como una adaptación a la vez creativa y rigurosa del marxismo.

En la estrecha concatenación entre concepción del mundo y decisiones concretas, el

marxismo ortodoxo terminó recuperando involuntariamente el ideal platónico del rey-filósofo. Si la legitimidad del gobernante (o del dirigente que se encaminaba a gobernante) descansaba en gran parte en su interpretación “correcta” de la filosofía marxista, sus credenciales filosóficas dependerían a la vez de la “corrección” de su praxis como dirigente y estratega. En tanto la correlación entre las leyes generales de la historia y las acciones de individuos y grupos humanos requería un conocimiento profundo de aquellas para sincronizar estas, la sabiduría filosófica no era un lujo abstracto sino una necesidad concreta. Saber leer las estrellas, e interpretar a partir de ellas tanto el destino como la ruta, había sido la condición final para ungir a los jefes supremos del Partido y la revolución. Y había en ello claras jerarquías. Los dirigentes nacionales deberían poder leer e interpretar correctamente las leyes históricas en su nación. Sus colaboradores cercanos debían a su turno poder leer a su jefe, y reparar en que su lectura, y no otra cualquiera, era la única correcta. Pero por encima de ellos reinaban los genios universales de la revolución, cuya sabiduría debería ser nacional, pero también internacional; histórica, pero también universal. Ellos, emperadores-filósofos antes que meros reyes, marcaban los grandes hitos que serían luego seguidos por los dirigentes nacionales. Lenin había sido el primero en el gobierno unificado de pueblos y filosofías. Su lugar fue luego ocupado con menos méritos pero con métodos de discusión sin duda terminantes por Stalin.² Mao lo había sucedido, pero en un reino ya dividido, donde las que habían sido antes satrapías menores (Kim Il Sung en Corea del Norte, Nicolae Ceausescu en Rumania, Enver Hoxha en Albania), empezaban a desarrollar pretensiones al gobierno de los cielos.

El gobierno de los reyes-filósofos es, por su propia naturaleza, no hereditario (salvo la excepción singular y escasamente respetable de Corea del Norte). En el marxismo ortodoxo, la herencia al gobierno de la nación y al trono escolástico había sido, en la práctica, abierta. ¿Quién sucedería ahora a Mao? El autor de aquel número extraordinario de *Nueva Democracia* parecía saberlo.

En el artículo “Nuevo gobierno y la perspectiva económica, política y de la lucha de clases en general”, Guzmán sostenía que el gobierno de Belaunde no era otra cosa que la continuación del régimen militar bajo la forma de “una burda falsificación de la democracia burguesa que imperó hasta 1968”. Ello había sido una respuesta desesperada del gobierno militar a la “situación revolucionaria que —tras mantenerse a raíz del golpe de Estado de 1968 como situación revolucionaria estacionaria— empezó a manifestarse abiertamente como situación revolucionaria en desarrollo desde 1975”.³ Aun después de varios años, Guzmán mantenía el homenaje renuente a Velasco: considerarlo el enemigo más peligroso para el desarrollo de la “situación revolucionaria”.

La “falsificación” de la democracia “burguesa” se expresaba, entre otras manifestaciones, a través del hecho que “el régimen fascista” no había logrado “resucitar” a los viejos partidos políticos, “íntimamente ligada a la bancarrota definitiva de la democracia burguesa formal en el país”. Las luchas entre Armando Villanueva y Andrés Townsend en el APRA, y las escisiones menores en el PPC, eran mencionadas como prueba de lo anterior.

El razonamiento —esencial para la justificación histórica de Sendero, de presentar el recurso a las armas como la única vía posible— se desarrollaba poco después. En la década del 60, “frente al gran desarrollo de las luchas de las masas populares y a la bancarrota definitiva de la democracia burguesa formal en el país, las clases dominantes recurrieron a la instauración del fascismo”,⁴ el cual, sin embargo, había “agudizado” la “situación revolucionaria”, frente a lo cual se había recurrido a la “falsificación” de la democracia formal como la vía de escape aparente a

una situación que se salía de control. En apoyo de sus afirmaciones, Guzmán citaba a la “revista reaccionaria” *Perú Económico* en su apreciación global de la nueva década, subrayando la afirmación de la revista en el sentido de que “el Perú no soportará por mucho tiempo la ausencia de un proyecto nacional definido [...]. El próximo lustro puede ser, por tanto, la etapa final de un proceso de frustración colectiva o el inicio de una nueva era de integración y síntesis”.⁵

En resumen, de acuerdo a Guzmán y en su lenguaje, la “fracción burocrática” de la burguesía no había perdido el control del Estado, sino por lo contrario, mantenía el poder real. Así, la posición real de los partidos gobernantes, AP y el PPC, era “la de estar bajo la dirección de la fracción burocrática que está representada por las Fuerzas Armadas”.⁶

En ese sentido, hasta las rupturas más vehementes de voceros de Acción Popular respecto a las medidas del gobierno militar eran interpretadas como discrepancias tácticas y no de fondo. E incluso medidas de divorcio manifiesto con la era de Velasco, como la Ley de Promoción y Desarrollo Agropecuario, eran de un lado atacadas por permitir “una mayor concentración de tierras en el latifundio feudal”, pero a la vez resultaban, “no otra cosa que la continuación y la profundización de las [medidas] dejadas por el régimen fascista”.⁷

Los argumentos siguientes eran más serios, aunque conocidos: el descenso contundente en el ingreso real para la mayoría de peruanos durante los años del gobierno militar, la persistencia, con solo el cambio de nombres, en la distribución sumamente desigual del ingreso. A continuación, Guzmán acusaba al hasta entonces cauto y extremadamente tolerante gobierno de Belaunde de “*pretender ahogar a sangre y fuego las justas luchas de las masas populares*”, en las que con no poca prosa incluía “la violencia revolucionaria”. Una acusación sin sentido, aun dentro del discurso dogmático, cuya única justificación en ese contexto era la identificación previa de Belaunde como subordinado al “régimen fascista”. En el fondo, además, cualquier represión era no solo deseada, sino provocada. Una cita de Engels, tomada de *Revolución y contrarrevolución en Alemania*, precisaba tanto el diagnóstico como la metodología senderistas: si bien toda revolución expresa una “necesidad social” insatisfecha bajo el orden vigente, precisa con frecuencia de la violencia represiva para definir su identidad, tomar cuerpo y desarrollarse.

El país vivía, según el resumen de Guzmán, una “situación revolucionaria en desarrollo”, en donde las condiciones “objetivas” estaban claramente presentes, operando a favor del progreso de la insurrección violenta. En apoyo de su tesis del desbarrancamiento del Estado y la paz, citaba al economista Guido Pennano, inevitablemente calificado como “reaccionario”, quien había escrito meses atrás que en las elecciones de mayo de 1980, “el pueblo [...] ha jugado su última carta no violenta [...] Belaunde tiene el compromiso histórico de no fracasar”.⁸

La invectiva más elaborada estaba, sin embargo, reservada a la izquierda parlamentaria marxista. Frente a una situación revolucionaria que, según Guzmán, era reconocida hasta por el “reaccionario pennano”, la izquierda parlamentaria optaba por la “defensa de la democracia”. Citando un discurso del senador Enrique Bernal, a quien Guzmán calificaba como “conocida *vedette* prosopopéyica del cretinismo parlamentario”, en el que aquel reclamaba la decisión de la izquierda legal de defender y perfeccionar la democracia, Guzmán concluía que la izquierda marxista se había puesto al servicio de “la gran burguesía”, no solamente negando que hubiera una situación revolucionaria, sino tratando de impedirla.

En este punto arrancaba el segundo artículo: “¿‘Democratización’ o revolución de nueva

democracia?”. Al hablar de defender la democracia, Guzmán afirmaba que la izquierda legal defendía en realidad la “estructuración definitiva del Estado corporativo”, y ayudaba a “ampliar la base social del fascismo para la mejor aplicación de sus planes”.⁹ Porque la democracia formal, repetía enfáticamente Guzmán, no existía más. La que había era “una burda falsificación” de la que había existido antaño, y los miembros de la izquierda marxista “no son otros que los oportunistas, los agentes de la burguesía infiltrados en el seno del movimiento obrero, los mejores defensores que la burguesía pueda conseguirse jamás”.¹⁰

El “camino democrático” escribía Guzmán, en lo que debe tenerse en parte como homenaje involuntario al poder de la palabra y el concepto mismo de democracia, no pasaba a través del Parlamento, sino a través de la “revolución democrático-nacional”, cruenta por necesidad, prolongada por naturaleza, campesina por ejecución.

A continuación, Guzmán emprendía la justificación, a guisa de “trazar una clara línea divisoria [...] con el revisionismo”, de la necesidad de la vía violenta. Como en otras circunstancias, *El Estado y la revolución* de Lenin, preñado de citas apropiadas, era el principal texto utilizado. El Estado, de acuerdo a Lenin, es una organización de fuerza que representa los intereses de la clase económica y políticamente dominante. Y sus instrumentos fundamentales de fuerza son el Ejército y la Policía.

La consecuencia de lo anterior, indicaba Guzmán, era que la única forma mediante la cual el “pueblo” podría tomar el poder era “destruir la vieja máquina estatal que utilizan los reaccionarios para oprimirlo”. A la vez, “para destruir el viejo Estado, es necesario romper su columna vertebral que son: las Fuerzas Armadas, y esto solo podrá hacerse construyendo, en el curso de la lucha armada, Fuerzas Armadas Populares”.¹¹

En esa cita, en forma sucinta quedaban expresados la política, el programa y el método de Sendero Luminoso.

En el artículo, Guzmán atacaba a continuación en forma incondicional a la izquierda electoral. Siguiendo las líneas básicas de las polémicas de Lenin contra el revisionismo marxista que cada generación de comunistas ortodoxos había intentado luego imitar y recrear, el jefe senderista acusaba a los marxistas legales precisamente de eso: de revisión del dogma en la línea trazada primero por Bernstein, Kautsky y todos los viejos enemigos de la ortodoxia. Imitando el estilo directo, pedestre, desprovisto de elegancia pero a la vez incisivo de Lenin, Guzmán repetía literalmente los epítetos de ayer a la circunstancia de hoy. Los “señores oportunistas” resucitaban, según Guzmán, “la vieja tesis revisionista de ir ganando la mayoría a través de las votaciones realizadas bajo el viejo poder, de ir conquistando la democracia y así marchar al socialismo”.¹²

En un lenguaje que intentaba ser sardónico, pero que —como sucede con buena parte de los escritos polémicos de Lenin— transpira más bien una exasperación mal contenida, Guzmán acusaba a los “cretinos parlamentarios” de hacer creer que es posible “democratizar el Estado de los grandes burgueses y terratenientes feudales”, olvidándose, añadía, “que el poder, como nos enseña Mariátegui, se conquista a través de la violencia y se mantiene a través de la dictadura”.¹³ El ataque en todos los frentes continuaba, haciéndose por momentos estridente en toscos intentos de ironía. Las invectivas no dejaban duda respecto a quiénes consideraba Guzmán los principales enemigos del Partido, “los oportunistas” que son “sirvientes de la reacción [...] estos miserables [...] ¡Qué grandes embaucadores! ¡Qué celosos guardianes del orden establecido contra el pueblo!”, que no hablan sino “cacarean”, y que habían unido su destino a la defensa del orden “burgués”. Por el momento, como en años anteriores, la virulencia polémica era solamente

verbal. No lo sería así en el futuro, lo cual, a la luz de la posición de Sendero, no debió haber sorprendido a nadie.

En la polémica con la izquierda marxista legal, Guzmán empleó un tiempo mínimo en utilizar argumentos recogidos de la realidad nacional contemporánea. Su argumentación, que intentaba demostrar la imposibilidad de “democratizar la sociedad”, “ganar espacios”, “acumular fuerzas”, o siquiera mejorar la suerte del “pueblo” mediante elecciones, estaba más bien basada casi íntegramente en las citas —textualmente correctas— de los textos sagrados y los apologetas principales: “como nos enseña Lenin”, “como Marx señala”, “Engels nos enseña”, “como dice el presidente Mao”.

El Estado “gran burgués y terrateniente”, proseguía Guzmán, jamás cedería mansamente su poder mediante “votos”. La distinción que la izquierda legal hacía entre el gobierno civil y militar era falsa, puesto que “ambos representan y defienden a las mismas clases que los oprimen”. La oposición “constructiva” desde el Parlamento equivalía a la defensa del orden establecido, que es precisamente de lo que Guzmán los acusaba, de haberse pasado al enemigo, de ser el enemigo.

El razonamiento no era nuevo. Había sido utilizado por Lenin en las fieras polémicas con los dirigentes y teóricos de la II Internacional, y había respaldado el amargo encono con que los partidos comunistas atacaron, a lo largo de Europa, a los socialdemócratas, considerándolos los “principales enemigos de la clase obrera” hasta la víspera misma de la toma del poder por el fascismo, que terminó barriendo a los dos. La discusión central era la misma, ayer y hoy: la vía pacífica o la vía violenta para la toma del poder, y cuanto ello implicaba en términos de elegir entre gradualidad y maximalismo, entre negociación e imposición, entre reforma y revolución. Lo había remarcado Lenin en su ataque a Kautsky: “Ahora se ha impuesto la verdad: se trata de la oposición entre revolución pacífica y revolución violenta”,¹⁴ y lo volvía a decir Guzmán casi un siglo después.

Y en efecto, si una característica singular identificara al marxismo ortodoxo, esta sería la certeza de la imposibilidad de acceder al poder para llevar a cabo la revolución socialista mediante otro medio que no fuera la insurrección armada. En ese sentido —y no es redundante recalcarlo—, toda la acción teórica y práctica de Guzmán y su partido deben entenderse como un desarrollo rigurosamente ortodoxo del marxismo-leninismo.

Es cierto que el concepto de ortodoxia es difícil de precisar en la ideología marxista, que se postula como un sistema “científico”, cuyo criterio de verificación, la praxis individual e histórica, provee la posibilidad de renovarse a sí misma en la medida que la realidad lo hace.

Pero la interpretación ortodoxa, en el marxismo o en cualquier otro sistema axiomático, “lee” la realidad a la luz de las herramientas de interpretación que el sistema determina. El sistema en sí está cimentado en un conjunto de axiomas, de verdades tenidas por absolutas, sin las cuales carece de sentido. El desarrollo a partir de esa base es necesariamente escolástico, lo cual no significa una necesaria entropía intelectual. Por lo contrario, los desarrollos escolásticos han sido y son, con frecuencia, notablemente dinámicos y complejos. Pero, en el mantenerse fieles a los fundamentos, en el forzar la realidad cuando esta no se adapta a aquellos, el razonamiento escolástico crea un lenguaje propio, una realidad conceptual que solo es comprensible dentro de sí misma. Hay una endogamia ideológica potencialmente infinita, frecuentemente

incomprensible desde el exterior, cuyo desarrollo toma con frecuencia vías divorciadas de la realidad no dogmática, pero manteniendo su propia consistencia interna. El carácter secular de la dogmática marxista (aun cuando a veces incierto), el suponerse “ciencia” y, por fin, la permanente acción sobre la realidad le confirieron un gran dinamismo. Su adaptabilidad a diversas realidades históricas y circunstancias sociales fue sin duda grande y muchas veces exitosa, aunque sucediera con frecuencia a repetidos y sangrientos fracasos. De hecho, la flexibilidad del marxismo ortodoxo para adaptarse a las demandas de diferentes tiempos y escenarios es tal que diera a veces, vista en perspectiva, la impresión de haberse alejado decisivamente de sus fuentes. La Revolución bolchevique tuvo poco que ver con las previsiones del marxismo original, como a su turno sucedió con la Revolución china respecto a la doctrina del Comintern.

Pero por grande que fuera la adaptabilidad del sistema, la unidad histórica del marxismo ortodoxo se mantuvo en torno a sus axiomas. Uno de los cuales fue defender la necesidad, la inevitabilidad histórica del carácter violento de la revolución socialista. Cuando, a partir de la era de Jruschov en la Unión Soviética, varios partidos comunistas renunciaron a la vía violenta para la toma del poder, no modificaron el marxismo ortodoxo sino que se salieron de él. Admitiéndolo o no, se desvincularon del leninismo y se injertaron en la corriente de la II Internacional. La evolución posterior hacia posiciones indistinguibles de las de la socialdemocracia, fue un proceso renuente, lento, pero inevitable, que ha de culminar eventualmente en la renuncia del marxismo como basamento doctrinario fundamental.

Ese proceso, natural y explicable para observadores desapasionados equivale, sin embargo, a apostasía para quienes permanecen dentro del desarrollo ortodoxo. Si la revisión de los fundamentos amenaza la existencia misma del sistema y si el sistema está basado en la idea de conflicto trascendente, en el choque entre ellos y nosotros, el razonamiento analítico se confunde con las exigencias de la lealtad. Quienes cuestionan los fundamentos del sistema, lo traiciona, se han pasado al enemigo y actúan, de hecho, como una quinta columna. ¿Que su cambio responde a los inmensos cambios sociales e históricos? ¿Que los axiomas surgidos de la experiencia y la reflexión de los siglos XVIII y XIX resultan clamorosamente insuficientes para interpretar o explicar el siglo XX y menos para predecir el XXI? ¿Cámbiese la realidad antes que el sistema! Además, haciendo crujir un tanto los hechos, discutiendo antes en tribunales que en seminarios, combinando propaganda y balas con argumentos, la realidad podrá aún conformarse al sistema.

Tal era la posición de Guzmán al atacar al resto de la izquierda marxista. Y así, cuando esta concentraba su oposición al gobierno de Belaunde en denunciar una supuesta “dictadura civil” y el consecuente “peligro para la democracia”, Guzmán contestaba negando que existiera democracia en el Perú, negando que existiera diferencia efectiva entre el gobierno militar y el civil, y preguntando con despectiva retórica: “¿De qué democracia nos habla? ¿De la democracia para qué clase?”, y continuaba:

Y qué significa el escándalo que arman contra la “nueva dictadura” [...] contra la “dictadura civil” [...]. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Que si existe Parlamento no hay dictadura! [...] ¿Qué nos enseña el marxismo respecto de esto último? Primero, que el Parlamento, que tiene vida real en una sociedad capitalista, lo cual no ocurre en nuestro país, ya que este es semifeudal y semicolonial, es un órgano del Estado burgués, es un órgano de la dictadura de la burguesía. [...] El problema, señores revisionistas, no es que los gobernantes usen uniforme y botas, o que vistan de cuello y corbata o, aun que usen barba y se amarren los pantalones con sogas,¹⁵ pues ello no les quita su posición reaccionaria ni los hace revolucionarios. No se trata de dictaduras civiles o de dictaduras militares. Se trata de dictadura de clase. [...] ¿Qué otra cosa significa el lloriqueo ante la dictadura en general? ¿No sabemos acaso que el poder se conquista a través de la violencia y se mantiene a

través de la dictadura, que “la revolución es un acto en el que una parte de la población impone su voluntad a la otra con los fusiles, bayonetas y cañones... y donde el partido vencedor está obligado necesariamente a mantener su dominio por el miedo que sus armas inspiren a los reaccionarios”, como enseña Engels?¹⁶

La democracia política, recalcaba Guzmán, se subordinaba a la necesidad de imposición violenta y manutención de la “dictadura del proletariado”. Una cita de Lenin en la polémica con Kautsky remachaba su posición: “El Estado de los explotados debe distinguirse por completo de él, debe ser la democracia de los explotados y el aplastamiento de los explotadores; y el aplastamiento de una clase significa la desigualdad en detrimento suyo, su exclusión de la democracia”. La lucha del marxismo auténtico no era en absoluto, insistía Guzmán, la lucha por la democracia, sino la lucha por la dictadura. Intentar que el “pueblo” defendiera la democracia equivalía a intentar que “el proletariado y el pueblo revolucionario renuncien a su dictadura sobre los explotadores [...] renuncien a excluir de la democracia a sus enemigos de clase y, por tanto, a utilizar su Estado para reprimirlos y aplastar su resistencia”.¹⁷ En verdad, Guzmán puede ser acusado de muchas cosas, menos de hablar claro.

La izquierda marxista legal tenía, empero, un argumento insoslayable aun dentro de los parámetros de la ortodoxia, y este era su innegable crecimiento como fuerza electoral. La legalidad, además, según afirmaba la izquierda, no había sido concedida sino conquistada. La palpable “acumulación de fuerzas” lograda señalaba el camino a seguir: que el voto popular elevara cada vez más claramente a la izquierda como alternativa de gobierno.

La réplica de Guzmán afirmaba agresivamente el dogma, a costa de la realidad. No se había conquistado legalidad alguna, puesto que la legalidad no existía. La que pasaba por tal era una falsificación. El Perú era, además, un país semifeudal y semicolonial, donde, como había escrito el presidente Mao: “No tenemos Parlamento que utilizar ni derecho legal para organizar a los obreros para realizar huelgas”. De manera que el Parlamento que funcionaba en la plaza Bolívar y el derecho de huelga reconocido en la legislación peruana, eran también sendas falsedades. ¿No había indicado Mariátegui acaso que “sobre una economía semifeudal no pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales”? Por lo tanto, concluía triunfalmente Guzmán, “al no existir en nuestro país democracia, sino opresión feudal, no tenemos Parlamento ni legalidad que utilizar”.¹⁸

Refutadas las tesis contrarias a satisfacción del dogma, solo quedaba el camino de “la lucha armada y la creación de bases de apoyo revolucionarias en el curso del desarrollo de esta”. Y ese era el razonamiento por el cual ya había muerto gente, y tanta más iba a morir en los días, en los años por venir.

La Organización Internacional

Desde 1980, Sendero Luminoso había retomado contacto con varias organizaciones ideológicamente afines; aunque abocado como estaba a la preparación final y el lanzamiento de la insurrección, no había tomado parte preponderante en los esfuerzos de las organizaciones maoístas sobrevivientes para aglutinarse entre sí. A comienzos de 1981, sin embargo, Sendero ya participaba en los debates en torno a la gestación de un nuevo Movimiento Comunista Internacional. Había muy poco en común entre la real vinculación internacional de Sendero y la

fantasiosa organización conspirativa que dirigía sus acciones desde “un portaaviones anclado en el Caribe”, como había sido afirmado por el dirigente pepecista Celso Sotomarino, y refrendado en forma menos específica poco después por el presidente Belaunde.

Luego de cortados, en forma brusca y terminante, los vínculos con China cuando el golpe de Estado de Deng Hsiao-ping¹⁹ y la caída de los “cuatro de Shanghai”, las organizaciones maoístas puras convergieron hacia Albania, la última base aparente de la ortodoxia. Sin embargo, los ataques de Hoxha contra Mao, y el intento de sustancial redefinición de la ortodoxia marxista que entrañaban, habían obligado a las organizaciones maoístas aún no del todo desmoralizadas o fragmentadas a romper también con Hoxha.

Así, desde 1978 o 1979, según el caso, organizaciones marxistas ortodoxas repartidas en diversos puntos de la Tierra quedaron desprovistas, por primera vez desde la revolución de octubre en 1917, de un centro geográfico y espiritual, de un país guía.²⁰ Barridas por las borrascas históricas, debilitadas hasta la agonía no solo por la caída de su Jerusalén roja, sino por el fracaso cruento de algunas insurrecciones, varias de las organizaciones maoístas supervivientes se buscaron entre sí y, apenas encontradas, rociaron esfuerzos de coordinación y eventual unificación internacional. En 1980, trece grupos maoístas de diverso calibre se reunieron en Londres, la fuente primera del marxismo. Representaban desde lo pequeño hasta lo minúsculo. Había grupos de Ceylán (Sri Lanka), la India, Chile, Nueva Zelanda, Italia, España, Francia, Dinamarca, Estados Unidos (el “Partido Comunista Revolucionario”), Senegal, República Dominicana. Luego de la conferencia, estos movimientos emitieron una primera “Declaración conjunta” que reafirmaba su adhesión al “pensamiento Mao Tse-tung” y llamaba a reorganizar sobre esa base el Movimiento Comunista Internacional.

Ayer en las puertas del cielo, hoy dispersos y derrotados. Harto había de patético en la persistencia de estos grupos débiles, marginales, aferrados a una ortodoxia que se abandonaba por doquier, convencidos sin embargo de que la fidelidad a ella sería compensada con la victoria final. Aunque no parecía haber luz que alumbrara el futuro inmediato. China se había perdido por la contrarrevolución de Deng; Albania por la megalomanía de Hoxha; Vietnam se había aliado ya resueltamente con el “social imperialismo” de la URSS; la insurrección en Malasia, derrotada; el levantamiento en Indonesia, aplastado; la insurrección naxalita en India, también sofocada; el EPL en Colombia, frenado, desconexo, en obvia involución. En Irán, donde Khomeini asestaba golpes brutales a la oposición secular, la Unión de Comunistas Iraníes (Sarbedarán), que no participó en la conferencia, se preparaba para la insurrección que habría de empezar en 1981 y ser del todo aniquilada en 1982. En el Perú, sin embargo, un grupo relativamente pequeño había empezado una insurrección modesta, apenas mencionada entonces, aun en los círculos radicales. Pero ese grupo se sentía con la fuerza como para hablar con autoridad.

Nueva Democracia traía un extenso artículo al respecto, con la patente rúbrica estilística de Guzmán, expresando la posición de Sendero en “Acerca de la unidad del Movimiento Comunista Internacional y la declaración conjunta de las trece organizaciones y partidos marxista-leninistas”.

El artículo había sido escrito para durar, para figurar en las “obras escogidas” del futuro. Empezaba con una nota de optimismo histórico: ninguna escisión en la historia del Movimiento Comunista Internacional había “podido detener su incontenible proceso de avance [...] unidad, lucha e incluso escisión y nueva unidad sobre una nueva base”. Si tal había sido desde las luchas de Marx y Engels contra Bakunin, Proudhon, Lasalle, hasta las de Mao contra Jruschov y

Brezhnev, “¿por qué los resultados de la actual lucha contra el revisionismo de Teng Hsiao-ping y Enver Hoxha habrían de ser diferentes?”.²¹ Sobre todo si el esfuerzo de nueva unificación juntaba “lo más hondo y puro de sus filas sobre la base del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-tung”.²²

La primera constatación que salta a la vista es el uso de la terminología. En 1981, Sendero seguía utilizando la denominación de “pensamiento Mao Tse-tung” para referirse a los aportes de este a lo que llamaba “el tesoro del marxismo-leninismo”. Este era un punto de suma importancia en la discusión escolástica y, como se verá después,²³ con importantes consecuencias prácticas. Incorporar el “pensamiento Mao Tse-tung” junto con el marxismo-leninismo, equivalía a afirmar enfáticamente su importancia trascendente a nivel global, aun cuando el utilizar la formulación de “pensamiento Mao Tse-tung” en lugar de “maoísmo” implicaba reconocer que los aportes del conductor de la Revolución china no eran aún algo acabado, no poseían el calibre ni la pétrea solidez de los de Marx y Lenin.

Este era un punto central de disputa en la incipiente Internacional maoísta, que se iba a agudizar en la medida que se consolidaran las opuestas posiciones. Y su importancia no era la de una disputa por palabras, como pudieran suponerlo las mentes simples de los no iniciados, sino de capital trascendencia para el futuro del comunismo, como no dejaría de comprenderlo cualquier escolástico.

La primera reserva de Guzmán respecto a la declaración de los trece partidos fue precisamente respecto a ese tema. De un lado reconocía que la “Declaración conjunta” evidenciaba un “gran avance al haber asumido la defensa del ‘pensamiento Mao Tse-tung’, no solo en lo que se refiere a su basamento marxista-leninista en sí, sino también en lo que concierne a que representa ‘una *nueva etapa* en el desarrollo del marxismo-leninismo’”.²⁴

Pero añadía a continuación que la declaración fallaba al no reconocer la dimensión de esa nueva etapa. En lugar de considerarla como una tercera etapa, inaugurando una nueva era en el desarrollo del marxismo, la declaración implicaba que si bien el “pensamiento Mao Tse-tung” representaba un desarrollo importante, este aún se mantenía dentro de los marcos del leninismo. Se continuaría entonces, de acuerdo a ella, viviendo la era del leninismo.

Para Guzmán, esa era una “importantísima cuestión de principios”. Al haber retrocedido en considerar el “pensamiento Mao Tse-tung” como la tercera etapa del marxismo, se había hecho concesiones, en forma “no casual”, a la “campaña antimarxista de Hoxha”. Eso significaba, de acuerdo a Guzmán, no comprender el concepto mismo del “desarrollo por etapas del marxismo”, expuesto por Stalin en 1924, al proclamar la “era del leninismo”. Y si el exseminarista georgiano había hecho de ese concepto una palanca central en la fiera lucha por el poder que entonces se desataba en la Unión Soviética, las consecuencias de la misma habían quedado profundamente impresas desde entonces en la conciencia de los comunistas.

Si el leninismo era el marxismo de la “época del imperialismo”, el “pensamiento Mao Tse-tung” había solucionado problemas “que no habían podido ser resueltos ni por Lenin ni por Stalin, como eran el de cómo llevar adelante la revolución en un país colonial o semicolonial y el de cómo continuar la revolución bajo la dictadura del proletariado”.²⁵ Mao no solo había desarrollado el marxismo, según Guzmán, en todas sus partes integrantes, sino que la aplicación de su análisis, “permitió establecer la línea política general para el Movimiento Comunista Mundial”.²⁶

El que no se comprendiera ello en la declaración de los trece partidos explicaba, para Guzmán, desviaciones subsecuentes del “pensamiento Mao Tse-tung” a lo largo de la

declaración. Una de las principales era la de la utilización o no de medios legales de lucha. La declaración había afirmado que debían aprovecharse “las posibilidades legales [...] sin caer ni promover ilusiones en la democracia burguesa”. Guzmán retrucaba que si bien la “democracia burguesa” podía ser utilizada en los países capitalistas (es decir, las naciones desarrolladas), “única y exclusivamente con fines de propaganda y agitación; en cambio, es incorrecto plantear que deba hacerse lo mismo en los países coloniales y semicoloniales ya que ahí, en vez de la existencia de la democracia burguesa, hay opresión feudal, aunque barnizada de mil maneras”.²⁷

De la misma manera, Guzmán, el maximalista inquebrantable, señalaba que la inexactitud en la valoración del “pensamiento Mao Tsetung” conducía a una débil e incompleta defensa de la Revolución Cultural en la declaración de los trece partidos. Guzmán añadía que el genio de Mao no había radicado solo en descubrir que la lucha de clases continuaba luego de instaurado el socialismo, sino que la burguesía, conspiradora, restauradora, sobrevivía y se ubicaba dentro de los partidos comunistas, entre sus dirigentes. En consecuencia, el proceso de descabezamiento debía ser continuo; las revoluciones culturales, sucesivas. El gran mérito de Mao al “descubrir” la metodología de la Revolución Cultural radicaba en que “con ella se resolvió en los hechos el problema de cómo conjurar la restauración capitalista y de cómo continuar la revolución bajo la dictadura del proletariado”.²⁸

Esta parte del argumento retrata nítidamente, por contraste, la concepción de Guzmán sobre el uso del poder (y lo que podría esperarse de él si alguna vez lo conquistara). Eventualmente se la encontrará, más refinada y sistematizada, como parte del “pensamiento-guía” en los años siguientes. Y debe entenderse como una de las partes fundamentales en la concepción política de Guzmán, que mantiene exhaustiva coherencia a lo largo de los años. La raíz stalinista en su formación, que empalmó con la era jacobina del maoísmo, se consolidó en la visión del poder como una periódica sucesión de purgas, de linchamientos, de inacabables “revoluciones culturales”. Si en algún momento Guzmán había leído la admonición de Quevedo sobre la tiranía: “O no empezar a ser tirano o no acabar de serlo nunca”, su elección había sido tomada, “no acabar de serlo nunca”.

Había un punto en el que Guzmán se encontraba ahora en acuerdo virtualmente completo con la declaración. Esto era en atacar a Enver Hoxha como una nueva fuente de revisionismo antimarxista. Guzmán creía, sin embargo, que debían intensificarse los ataques contra Hoxha, pues su peligrosidad radicaba en no ser “un revisionismo clarificado”. A diferencia de las otras dos fuentes del revisionismo (la Unión Soviética y Deng Hsiao-ping), Hoxha no había sido denunciado por Mao, pues había aguardado su muerte para empezar a atacarlo. Y, como se ha dicho, en el marxismo ortodoxo no importaba la insignificancia geopolítica de tal o cual liderzuelo. Las ideas, como en toda teología, tenían un poder propio; no en la concepción romántica del espíritu, sino en la medieval.

La crítica de Guzmán a la declaración se hacía mucho más enfática y dura al enjuiciar la situación mundial, el riesgo de guerra global, las probabilidades de revolución. Los trece partidos habían recogido su propia realidad al reconocer que las “filas marxista-leninistas” (es decir, ellos) atravesaban por una grave crisis. Y que, pese al desarrollo de la situación revolucionaria en el mundo, las condiciones subjetivas, entre las cuales ellos, estaban “seriamente atrasadas”. Para Guzmán, esto era un derrotismo inexcusable. En primer lugar, contestaba, el retroceso actual debía verse en contexto dialéctico. Se estaba entrando a la ofensiva estratégica de la revolución mundial, que en los próximos cincuenta o cien años (la fecha límite era el 2062, cien años después del anuncio de Mao) iba a culminar la “barredera” de burgueses y revisionistas en todo

el mundo. Y la forma de empezar a llevarlo a cabo, añadía, no era lamentándose por la disparidad entre la situación revolucionaria y la capacidad de los partidos, sino poner manos a la obra, “coger con decisión la nueva tarea que demanda la situación revolucionaria y, sobre la base de su cumplimiento, avanzar”.²⁹ No hacerlo llevaría, inevitablemente, a capitular.

Tal fue el primer diálogo a la distancia que tuvo Sendero Luminoso con la incipiente internacional maoísta. En los años siguientes el acercamiento se iba a hacer mayor, aunque sin ser nunca completo. Los diversos grupos y sus simpatizantes iban a llevar entusiastamente a cabo campañas de propaganda a favor de Sendero en latitudes y con lenguas diferentes, y cuando esas y otras agrupaciones se constituyeron en el Movimiento Revolucionario Internacionalista, en 1984, su nueva revista, *Un Mundo que Ganar* (editada, con buen nivel periodístico, en varios idiomas a la vez), iba a ser la tribuna permanente de Sendero en el exterior. Las distancias, empero, se mantuvieron, reflejando las diferencias que se expresaron desde el primer momento. Sendero pasó a formar parte del movimiento, aun cuando manteniéndose como “fracción” con línea propia dentro de él. Lo que ello significaba era algo que los viejos maoístas radicados en Londres no tenían necesidad de preguntar a Saturnino Paredes, para saber, o temer.

1 *Nueva Democracia*, A. 1, n. 34 [número extraordinario], julio de 1981.

2 En el *Diccionario de Filosofía* de la Academia de Ciencias de la URSS, escrito durante los años de más enconado stalinismo, cuya redacción fue dirigida por Yudin y Rosenthal, la evaluación de las contribuciones de Stalin a la filosofía ocupaba mayor extensión que la dedicada a Platón, Aristóteles, Kant y Hegel en conjunto.

3 *Nueva Democracia*, num. cit., p. 2.

4 *Ibidem*, p. 4.

5 *Perú Económico*, vol. 3, n. 6, junio de 1980. Tomado de *Nueva Democracia*.

6 *Nueva Democracia*, num. cit., p. 5.

7 *Ibidem*, p. 6.

8 *Debate*, n. 5, agosto de 1980. Tomado de *Nueva Democracia*.

9 *Nueva Democracia*, num. cit., p. 13.

10 *Ibidem*, p. 15.

11 *Ibidem*, p. 16.

12 *Ibidem*, pp. 17-18.

13 *Ibidem*, p. 18.

14 Lenin, *La revolución proletaria y el renegado Kautsky*. Tomado del número citado de *Nueva Democracia*, p. 20.

15 Una referencia no muy sutil al entonces diputado trotskista Hugo Blanco.

16 *Nueva Democracia*, num. cit., pp. 20-21.

17 *Ibidem*, p. 22.

18 *Ibidem*, p. 23.

19 Referido indistintamente a lo largo del texto como “Deng Hsiao-ping” o en la forma antigua como “Teng Hsiao-ping”.

20 Los trotskistas habían conocido la experiencia con mucha antelación, pero el trotskismo había una herejía que no se desarrolló con la experiencia plena y prolongada del poder como fue el caso del marxismo ortodoxo.

21 *Nueva Democracia*, num. cit., p. 25.

22 *Ibídem*.

23 Ver el capítulo: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”.

24 *Nueva Democracia*, num. cit., p. 26. El subrayado en el texto original.

25 *Ibídem*, pp. 28-29.

26 *Ibídem*, p. 29.

27 *Ibídem*, p. 31.

28 *Ibídem*, p. 34.

29 *Ibídem*, p. 38.

XI. Tambo

No hubo rumor que previniera el ataque al puesto de la ciudad de Tambo. Si alguien vio en el asalto de La Quinua un augurio de otros por venir, ninguna precaución especial fue acordada para los otros puestos. ¿Se pensó tal vez que la menor entidad de este, la escasa guarnición policial, había hecho posible el ataque? Una parte de los atacantes había sido capturada, y quizá se supuso que la capacidad operativa de Sendero quedaba comprometida. Es posible. Pero lo probable, considerando que en el futuro muchos otros puestos en áreas de gran peligro iban a ser sorprendidos, es que la negligencia haya sido el factor principal.

El domingo 11 de octubre de 1981 había solo tres policías de servicio en el puesto de Tambo. Hacia el atardecer, la feria dominguera, que cada semana llenaba la plaza de armas con los colores vivos, la animación de los concurrentes de distritos y aun provincias aledañas, concluía. Tambo era una ciudad relativamente pequeña, pero importante. Era la llave de ingreso vial a la provincia de La Mar y a la selva de San Francisco, y a la vez el centro de gravedad de varias comunidades, aldeas y villorrios dispersos en las alturas de Huanta.

A las 8:30 p. m., cuando el guardia Porfirio Díaz tomaba declaraciones a los denunciante y a la inculpada de un robo menor (una caja de zapatos que, según la denuncia, había sido robada por una niña de catorce años, Efigenia C. del puesto de venta de los jóvenes esposos Jesús Torres y Elena Vivanco, quienes habían ido al puesto llevando a su hijo, de un año de edad).¹

La marca de los zapatos era Siete Vidas, y eran siete personas las que había en ese momento en la sala principal del puesto. Sentadas en sillas duras alrededor de la mesa cubierta por paño verde, y sobre ella, el cuaderno de ocurrencias y denuncias forrado con papel azul. El mismo paño, el mismo papel que se repetía en los cientos de puestos policiales repartidos por el territorio peruano.

Un hombre y una mujer ingresaron primero; tras ellos, a la par de gritos y de slogans entrecortados y estridentes, muchas personas más, junto con los disparos secos de revólveres y ráfagas de metralleta. Pocos segundos después, el puesto estaba dominado.

Si dominar la oposición policial no demoró casi nada, una suerte de lucha espasmódica — rebalses de energía nerviosa de los atacantes antes que resistencia de los vencidos— se prolongó por casi quince minutos dentro del puesto y en la zona aledaña. Alrededor de veinte personas habían tomado parte en el asalto, y varias otras estaban en posiciones afuera. Algunos de los atacantes, con los rostros cubiertos por pasamontañas corrían por la plaza de armas, obligando a cerrar puertas, dando mueras a Belaunde y vivas a la lucha armada. El darse cuenta del ataque al puesto fue una percepción casi instantánea en la ciudad. Parecían llegar los ruidos de una

masacre, que el inmediato terror multiplicó. El guardia Pedro Villaverde —lugareño, como casi todos los otros policías del puesto—, quien estaba a alguna distancia del puesto visitando a su hermano, comprendió que solo el puro azar lo había salvado. Su nombre, junto con el del guardia Díaz y el del guardia Jorge Vivanco Vizcarra, había sido pronunciado a gritos por los atacantes, entre disparos y alguna explosión. Villaverde se parapetó silenciosamente, lejos del puesto.

Dentro de él, casi todas las siete personas que habían estado en la sala al comienzo del ataque yacían en el suelo. Elena Vivanco había sido apenas herida en la mano, pero su hijo, que recibió seis balazos, murió en el instante. También había muerto su esposo. El guardia Jorge Vivanco Vizcarra agonizaba cerca. La niña Efigenia C. respiraba con dificultad, con un balazo en el pecho, y el guardia Díaz, quien había rogado por su vida, tenía dos balazos en el hombro y un rafagazo en la pierna. Con la sangre chorreándole por el costado del cuello, el sargento Porfirio Páucar caminaba a ciegas tratando de lavarse el ácido sulfúrico que uno de los atacantes le había echado en la cara.

Solo hacia el final de los quince minutos que duró la ocupación del puesto, los atacantes lograron autocontrolarse. Recogieron entonces todas las armas y municiones del puesto (dos metralletas, dos carabinas, cientos de balas), liberaron a los cinco detenidos e improvisaron una corta manifestación en la plaza. Se retiraron luego por la parte trasera de la iglesia, algunos a pie, los más en dos camionetas. Minutos después, mientras el aterrorizado personal de la posta médica se negaba a atender al guardia Vivanco, según luego denunciaron sus familiares, atemorizados por el posible retorno de los atacantes para rematarlo, este falleció.

Al día siguiente, el ministro del Interior José María de la Jara y el viceministro, Héctor López Martínez, concurrieron al acuerdo semanal del sector con el presidente Belaunde. Llegaban con la información sobre el ataque de la noche anterior y, en el caso del ministro De la Jara, la exasperada convicción de que no quedaba otro recurso salvo la declaratoria del estado de emergencia.

En los días anteriores, los ataques a De la Jara se multiplicaron a medida que aumentaban las acciones senderistas. Aquella caricatura de blandura ineficaz, bobalicona y burlada, había prendido en Lima. A esas alturas, cada petardo senderista era directamente imputado a su supuesta inoperancia, su falta de energía, a su carácter de “bombón” hamletiano. Pocos días antes, a raíz del descubrimiento y desactivación de tres petardos en el canal 4 de televisión, en Lima, los dueños de la estación propalaron un editorial que clamaba: “El terrorismo avanza, en suma, y el gobierno no hace nada para detenerlo. ¡Basta ya de inoperancia! ¡Demandamos más acción!”. Y ello solo sería posible “cuando el ministro del Interior preste mayor atención sobre este cometido”.² Así resultaba que solo la distracción o la pereza de De la Jara permitía avanzar a Sendero, y que apenas un político adecuadamente duro se hiciera cargo de Ministerio del Interior, la subversión sería controlada.

La campaña para defenestrar a De la Jara ya operaba abiertamente, y resultaba obvio que algunos de los más empeñados en ella eran dirigentes de su propio partido, Acción Popular, y en especial Javier Alva Orlandini, quien, en forma progresivamente exitosa, consolidaba su control sobre el aparato partidario y el gobierno.

Alva Orlandini, entonces presidente del Senado, se pronunciaba en forma crecientemente enfática sobre los problemas de la nueva violencia. Además de su creciente reputación de

aparatchnik consumado, tenía la de haber sido ministro del Interior durante el primer gobierno de Belaunde, y de haber emergido con la imagen de un ministro duro pero eficaz. En declaraciones hechas la semana anterior al ataque en Tambo, Alva Orlandini había dicho que “ya no existe ninguna duda que hay extranjeros terroristas actuando en el Perú”.³ Solo así se explicaba lo que sucedía. De acuerdo al complejo nacional, entonces tan vigente, que lo importado es mejor, tenían que ser extranjeros aquellos que promovían la violencia con tan extraña eficacia.

Zarandeado, acosado, De la Jara hervía de indignación, pero no sabía cómo responder. El veterano periodista no podía, por las consideraciones de “propiedad” tan importantes en el régimen de Belaunde, sentarse a escribir sus apasionados panfletos en defensa de sí mismo. Y quedaba fuera de cuestión ir al Parlamento, a confrontar a la mayoría hostil de sus propios correligionarios, con la dolorosa limitación de su cortedad para la expresión verbal.

En el acuerdo con Belaunde, De la Jara y López Martínez convencieron sin mucha dificultad al presidente sobre la necesidad de tomar medidas de emergencia en Ayacucho. Restaba determinar la severidad del estado de excepción. La nueva Constitución preveía un rango diverso de opciones, de acuerdo a la gravedad de la situación. Belaunde escogió el camino intermedio: “La suspensión de ciertas garantías constitucionales, el toque de queda y la acción intensiva de las fuerzas policiales”.⁴ En la tarde del lunes, Belaunde presidió una reunión del Consejo Nacional de Defensa, y poco después un Consejo de Ministros de carácter extraordinario. No hubo ninguna voz contraria sino antes bien apoyo unánime a la decisión presidencial.

El Decreto Supremo⁵ había sido redactado apresuradamente por López Martínez esa mañana, por lo cual algunas incongruencias en la redacción no fueron corregidas. Aun así, esa primera declaratoria del estado de emergencia del régimen democrático, que había ingresado con el genuino propósito de instaurar y mantener, vibrantes y vigentes las libertades civiles, llevaba impreso el sello de la renuencia a adoptar medidas de fuerza. Los senderistas eran llamados “elementos extraviados”, y el recurso a las medidas extremas era fruto de la “obligación” del Estado de mantener el orden público. La declaración del estado de emergencia se extendía, por sesenta días, a cinco provincias del departamento de Ayacucho: Huanta, La Mar, Huamanga, Cangallo y Víctor Fajardo.⁶ Y la Policía, dirigida por el ministro del Interior, quedaba encargada de restablecer la paz.

El mismo lunes 12 en la mañana, dos periodistas de *Caretas*, Sonia Goldenberg y Óscar Medrano, llegaron a Tambo. Una pareja de miembros del Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil, que los interceptó, estaba ya en el lugar, tratando de reconstruir el ataque. El guardia Villaverde, parcialmente recuperado de las impresiones de la noche anterior, indicaba el lugar desde el cual afirmaba haber disparado contra los atacantes.⁷

En el puesto malogrado, con paredes ennegrecidas, manchas de sangre en el piso, muebles rotos y volteados, la escena inmóvil de devastación sucedía a la corta y frenética matanza.

Pero el dolor y el luto se concentraban ahora alrededor de la posta médica, en cuya puerta se apretujaba el silencioso coro andino, espectadores hoy, víctimas mañana. Dentro de la pequeña construcción, Elena Vivanco, apenas herida, estaba separada de los cadáveres de su esposo y su hijo por una delgada pared medianera. En la atmósfera sobrecargada por las ventanas cerradas, “el olor de autopsia flota en el ambiente [...] en el cuarto contiguo al que ella yace, las enfermeras le están haciendo la autopsia [al hijo de Elena Vivanco]. La criatura ha sido acribillada por seis balazos [...] un grupo de maestros del pueblo ingresa al cuarto y entrega a la señora Vivanco el producto de una colecta efectuada entre ellos. Le entregan el dinero casi con

apresuramiento y luego la confortan. ‘Ya, pues, señora. ¡Qué le vamos a hacer! ¡Tenga usted fuerzas!’”.⁸

Si hubieran podido ver a la distancia de los años, se hubieran dado cuenta de que lo que le decían a la señora Vivanco era lo que le hubieran podido decir a la nación, al Perú. La delgada, casi frágil señora Vivanco, viviendo el día siguiente a la catástrofe con admirable estoicismo, mientras en el cuarto de al lado, la rigurosamente estúpida burocracia, tan incapaz en el desempeño positivo de su función, como pegada a la letra en el cumplimiento de requisitos inútiles pero formales, llenaba el aire atormentado de la posta con los olores de la absolutamente innecesaria autopsia (“de ley”, empero) de su criatura. Y nada, ni nadie, afrontaba la desgracia presente ni empezaba a encarar las futuras, salvo el grupo de maestros poniendo una gasa sobre el corazón abierto, entregando su colecta apresurada: “Ya, pues, señora. ¡Qué le vamos a hacer!”. Así, por el camino de aquella víctima temprana hubo de seguir, dolorosa pero ineluctablemente, la nación. ¿Cómo organizó Sendero el ataque que sacudió al gobierno y decidió la adopción de medidas de emergencia? Días después, ya declarado el estado de emergencia, una menor, María Antonieta G., fue arrestada en Huanta. Luego siguieron varios arrestos y, finalmente, dos semanas después del asalto al puesto de Tambo, la policía había logrado, sobre la base de confesiones, identificar a casi todos los participantes en él. El ataque fue una muestra de la capacidad operativa a nivel táctico de Sendero en esa etapa. Según la descripción policial, los primeros movimientos del plan de ataque habían empezado dos días antes, el 9 de octubre. En la mañana de ese día, María Antonieta G. se había reunido, en el desvío de las carreteras hacia Huanta y La Quinua, con un grupo de ocho personas, entre las cuales estaban Johnny Cruzat Cárdenas y Marcelino Huamaní García. En la tarde, el grupo se había dirigido caminando hasta Tambo, cruzando las alturas de Quinua. Llegaron a su meta a las 10 p. m. del día 9, y se alojaron en una casa desocupada, cuya dueña les era, sin embargo, conocida.

Permanecieron en esa casa todo el día siguiente, y también durante el día 11, hasta el atardecer. Solo hacia el mediodía, uno de los dirigentes del grupo les explicó para qué habían sido movilizados. Según la versión policial,⁹ recién entonces se informó al grupo que iban a atacar el puesto policial de la ciudad en pocas horas más. Se repartieron dos metralletas y tres revólveres, que tomaron los senderistas de mayor rango en el grupo.

A las 6:30 p. m., las nueve personas salieron de la casa en donde habían permanecido ocultas y caminaron hacia los extramuros de la ciudad. En un cerro cercano se reunieron con otras veinte personas, la mayoría de las cuales había llegado desde la ciudad de San Miguel. Un pequeño grupo procedía del propio Tambo. Ese contingente tenía dos metralletas y unos pocos revólveres. Allí, en el lapso de pocos minutos se integraron ambos grupos y se subdividieron en tres destacamentos: de ataque, donde estaba la mayoría; de contención, para prevenir un improbable contraataque; y de retirada, donde se encontraban los miembros más jóvenes e inexpertos del contingente. De acuerdo a la versión mencionada, Johnny Cruzat y Elizabeth Cárdenas dirigían el grupo de ataque.

El asalto empezó a las 8:30 p. m., desde varias direcciones a la vez. Cruzat y Cárdenas fueron los primeros en entrar al puesto, y tras ellos el grupo de asalto. Toda la operación había durado un cuarto de hora, exceptuando la manifestación frente al puesto conquistado, donde hablaron, repitiendo las consignas del momento, Cruzat, Cárdenas y dos dirigentes senderistas más.

Luego, al retirarse del pueblo, uno de los senderistas comentó: “Creo que ha muerto Vizcarra”. Se refería al guardia Jorge Vivanco Vizcarra, quien había sido señalado poco antes del ataque como uno de los objetivos del mismo (los otros dos eran los guardias Díaz y Villaverde).

La respuesta de otro senderista al comentario anterior fue la que la línea partidaria haría típica en tales casos: “Mueran los miserables”.¹⁰

Los senderistas solo tuvieron un herido leve durante el ataque. La dispersión fue relativamente rápida, en dos camionetas pequeñas y una moto. Los atacantes fueron dejados en medio de la carretera, y regresaron a sus ciudades luego de caminar a lo largo de la noche.

Como se ve, la práctica senderista en esa etapa ponía mayor énfasis en la seguridad interna que en la preparación minuciosa de los atacantes y su entrenamiento táctico. El armamento apenas alcanzaba para equipar malamente a la mitad de los atacantes, pero la participación masiva, aun de personas obviamente impreparadas, se consideraba necesaria. En esas condiciones, sorprende que Sendero no tuviera más heridos, producto de su propio fuego encontrado, de su clara inexperiencia, que los que finalmente tuvo. Aun así, la toma del puesto y el aplastamiento de cualquier resistencia, eran inevitables. Tanto la abrumadora superioridad numérica (alrededor de veinte atacantes contra tres guardias), como la sorpresa, que fue total, hacían virtualmente imposible otro resultado que el que se produjo. Finalmente, la necesidad policial de mantener el puesto abierto y accesible a la gente fue aprovechada a fondo por los atacantes. Inferioridad numérica a nivel estratégico, superioridad numérica a nivel táctico: las pautas militares maoístas se acataban rigurosamente.

Sin embargo, antes que transcurriera un mes, dos de cada tres atacantes habían sido identificados, y un grupo importante estaba ya capturado. Pero ello ocurrió en el marco de la contraofensiva policial, brevemente exitosa, y que por pocas semanas permitió albergar la esperanza de victoria del gobierno democrático sobre la violencia.

1 *Caretas*, n. 699, 19 de octubre de 1981.

2 *Ibídem*.

3 *Ibídem*.

4 *Ibídem*.

5 Decreto Supremo 026-81-IN, del 12 de octubre de 1981.

6 Con base en los artículos 2º y 231º de la Constitución de 1979.

7 Su testimonio fue recibido con escepticismo, tanto en Ayacucho como en Lima. Pero eso fue, finalmente, lo menos grave. Villaverde, quien había logrado escapar la noche del 11 de los senderistas que lo buscaban para matarlo, fue finalmente alcanzado y abatido por Sendero varios meses después en Ayacucho, a escasa distancia de la Novena Comandancia.

8 Goldenberg, Sonia. “Tambo, el puesto acribillado”, *Caretas*, n. 669, 19 de octubre de 1981. Fotografías de Óscar Medrano.

9 Nota de información 01-EEI.-“Vivanco”. DIRINGC-EEI, 09 de noviembre de 1981.

10 *Ibídem*.

XII. La emergencia

A las 5 p. m. del lunes 12 de octubre, el general de la Guardia Civil Carlos Barreto Bretoneche, jefe de la subregión de Huancayo, recibió una llamada telefónica desde Lima del jefe de la Guardia Civil, general Humberto Catter. Debía trasladarse de inmediato a Lima, de acuerdo a la jerga militar, “en el término de la distancia”.

Barreto, un general relativamente joven (tenía cuarenta y nueve años, y había ascendido en enero de ese año), supuso de inmediato de qué se trataba. La orden no le había llegado en un buen momento. Se encontraba afligido por un cólico malero, el tipo de padecimiento, por desgracia, menos mencionable en la circunstancia que previsiblemente tenía por delante. Poco después de la llamada, no obstante, Barreto viajó a Lima con un médico de la policía y su director de Inteligencia. Llegó a las 4 a. m. y se dirigió a la segunda región policial, en el local de la prefectura de Lima. Ahí el jefe de la segunda región, el general Jorge Monge, le informó sobre la declaratoria del estado de emergencia. Y le informó, además, que en su condición de jefe de la subregión de Huancayo, le correspondía a él, Barreto, hacerse cargo del comando de la nueva zona en emergencia. Debía viajar a Ayacucho al cabo de tres horas, a las 7 a. m. Las órdenes por escrito le serían entregadas en el aeropuerto, al momento de embarcarse.¹

A las 7 a. m. se encontró en el Grupo Aéreo N° 8 con Monge y el subjefe de la región, el general Héctor Rivera Hurtado. Policías del “Batallón Sinchi” de operaciones especiales abordaban un avión “Hércules” de la Fuerza Aérea. Oficiales de logística vigilaban el embarque de equipos diversos. Pálido aún por la noche en vela y los inoportunos padecimientos, Barreto recibió las órdenes escritas. Las órdenes se agrupaban bajo el título general de “Pliego de instrucciones”, por orden del ministro De la Jara, para quitarles carácter militar, conferirles una orientación civil a sus operaciones.

Solo durante el breve vuelo a Ayacucho pudo Barreto leer por primera vez este pliego y empezar a familiarizarse con la misión que se le había asignado y los medios que le otorgaban para llevarla a cabo.

En el aeropuerto de Ayacucho, Barreto, recuperado ya de sus padecimientos en gran medida, sin duda por la gravedad de la responsabilidad puesta sobre sus hombros, fue recibido por las autoridades departamentales y los tres jefes de las fuerzas policiales de Ayacucho.

Poco después, en el local de la Novena Comandancia, Barreto presidió la primera reunión de emergencia, donde, además de los jefes policiales, asistieron el prefecto del departamento, Marciano Caveró; el alcalde del Concejo Provincial de Huamanga, Jorge Jáuregui Mejía; y el jefe del batallón Cabitos, acantonado en Ayacucho. Si bien las facultades de Barreto incluían

solamente el área de seguridad, el prefecto Caverro delegó para todo efecto práctico la autoridad política en aquel desde el inicio de la emergencia.

El “Pliego de instrucciones” indicaba que Barreto recibiría apoyo de las Fuerzas Armadas en armamento, transporte y comunicaciones. El Ejército proveería fusiles FAL y camiones del tipo Unimog para transporte de tropa; la Marina, equipos de radio; y la Fuerza Aérea, helicópteros. En la práctica, y con algún retardo, el Ejército entregó los camiones, pero no los fusiles; los camiones fueron entregados sin conductores, de manera que fue necesario entrenar a choferes policiales. Los aparatos de radio fueron prestados, en cambio, sin problema.² En cuanto a los helicópteros, dos fueron puestos a órdenes de Barreto durante los primeros días de su comando. El Ministerio del Interior, sin embargo, debió pagar alquiler por su uso desde el principio, al contado. Esa fue una regla que la Fuerza Aérea observó en forma inalterable, incluso, como se verá, cuando uno de sus antiguos jefes, el general José Gagliardi, fue nombrado ministro del Interior.

El Plan Vivanco

Pese a la forma apresurada en que se inició, el plan de operaciones para la zona en emergencia alcanzó varios logros. De hecho, representó el momento más alto de las fuerzas policiales en su lucha contra la insurrección senderista. La mejor capacidad de aquellas fue puesta entonces en ejercicio, con resultados que, aunque insuficientes, no fueron desdeñables. El primer acierto había sido el nombramiento del general Barreto para comandar la zona en emergencia. Es verdad que ello se debió en gran medida al azar: el que Barreto fuera jefe de la subregión de Huancayo, bajo cuya responsabilidad territorial se encontraba Ayacucho; y cierto que, en las enconadas rivalidades internas dentro de la Guardia Civil por el poder presente y futuro, más de uno de los no pocos rivales de Barreto vio en ese nombramiento el presente griego necesario para hacer naufragar la carrera de este.

Superficialmente, Barreto no parecía la persona más adecuada para la tarea. Era administrador antes que guerrero. Su experiencia en lucha contrainsurgente era escasa (además de seguir la asignatura de rigor sobre “guerra revolucionaria” en el curso de Estado Mayor, había sido jefe de operaciones en las acciones de persecución y captura de un pequeño brote guerrillero en la zona de Jaén y San Ignacio, en Cajamarca, en 1972). Durante los años de gobierno militar, había trabajado en el área de presupuesto en el Ministerio de Economía. Posteriormente, la Guardia Civil había utilizado su dominio del tema en las discusiones anuales sobre asignación presupuestal al sector y la institución.

Paradójicamente, tal formación representó su mayor ventaja. Si Barreto no cuadraba dentro del estereotipo de oficial contrainsurgente que la doctrina original, tal como fue enseñada y transmitida a los ejércitos y policías latinoamericanos, y la práctica distorsionada habían creado, su formación correspondía casi exactamente a la que los exponentes más ilustrados de la guerra revolucionaria consideraban deseable. Sir Robert Thompson,³ por ejemplo, para quien la guerra contrainsurgente se gana o se pierde en el campo administrativo, hubiera encontrado a Barreto singularmente calificado para su misión.

Intelectualmente flexible, acostumbrado a trabajar con civiles, buen administrador de

recursos y con ojo preciso para precaver necesidades logísticas, Barreto tenía, como policía, otra virtud importante: era un oficial con reputación de honestidad y de carácter altivo, dispuesto a defender fueros que consideraba justos, al margen de las consecuencias personales. Sin pertenecer exactamente al heterogéneo grupo de jóvenes turcos, los “institucionalistas”,⁴ cuyos integrantes habrían de seguir en los años siguientes, con grandes diferencias en la circunstancia personal, la ruta común de la frustración, Barreto se había mantenido, y se mantuvo posteriormente distanciado de las diferentes camarillas institucionales —agrupadas en torno a la promoción, una parte de ella, o alrededor de una figura del comando— empeñadas en disputarse el poder de la institución. No tenía, de otro lado, aquel especial carisma institucional, generalmente expresado a través de la voz ronca y la expresión cortante, que tantos jóvenes oficiales, movidos aún por anhelos vagos pero fervorosos de reivindicación institucional, buscaban como el promisorio indicio del líder oculto, aquel llamado, en la mejor tradición de la mitología feudal, a rescatar fueros pisoteados, enarbolar y dar lustre a pendones desvaídos, y conquistar la gloria y respeto negados. En su momento, no obstante, cuando llegó a posiciones de comando, Barreto habría de sorprenderlos.

El “Pliego de instrucciones”

La misión encomendada a Barreto era, habida cuenta de las circunstancias, ambiciosa en no poca medida. Debía, como se expresaba en el inevitable lenguaje burocrático del “Pliego de instrucciones”: “Viabilizar el restablecimiento y mantenimiento del orden público, frente a las graves alteraciones del mismo que han generado el estado de excepción decretado por el supremo gobierno”.⁵ El retorno de la paz debía lograrse en sesenta días, lo cual era testimonio del optimismo del Ministerio del Interior en la capacidad de acción de sus fuerzas especiales, y de la superioridad operativa de la Policía actuando con criterios militares, sobre los insurrectos senderistas. Barreto dirigía, coordinando a través de su Estado Mayor personal, compuesto por oficiales de rango intermedio, a los tres jefes operativos de la zona en emergencia: los coroneles al mando de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Un Estado Mayor Conjunto se estableció poco después en la Novena Comandancia y centralizó la planificación táctica y el control de las operaciones.

El área declarada en emergencia abarcaba cinco provincias del departamento de Ayacucho (Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo y Cangallo), cuya extensión territorial era de 17 914 km², y cuya población bordeaba el medio millón de personas.⁶ Debe recordarse que la superficie territorial era de geografía sumamente accidentada: montañas, quebradas, puna, altiplano, selva alta. Las carreteras asfaltadas no sumaban más de cincuenta kilómetros. El resto eran carreteras semiafirmadas, que permanecían en diversos grados de deterioro endémico. Las lluvias estacionales se iniciaban normalmente en el mes de noviembre, y en ocasiones se extendían hasta marzo-abril. Durante ese período los vuelos, especialmente en helicóptero, y sobre todo si debían cruzar la divisoria cordillerana, quedaban limitados en extremo. En las previsiones de Barreto debía figurar que, durante una parte sustancial de los sesenta días de emergencia, los dos helicópteros que le habían sido asignados permanecieran en tierra.⁷

Barreto llegó a Ayacucho con un refuerzo heterogéneo de policías de diversas áreas (o

comandancias) de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. El mayor contingente estaba constituido por guardias civiles de la región de Lima. El grupo de las fuerzas especiales de la Guardia Civil, los sinchis, era de cuarenta personas. El total inicial de refuerzos fue de ciento noventa y tres policías, de los cuales treinta y dos eran oficiales.⁸ Ellos se sumaron a una guarnición previa de seiscientos setenta y siete miembros de las tres policías (de los cuales cuatrocientos sesenta y seis eran de la Guardia Civil). Durante el mes de octubre algún personal adicional llegó a Ayacucho, con lo que el total de efectivos de refuerzo ascendió a trescientos noventa y dos.⁹ Es decir, un poco más de mil hombres debía cubrir el área extensa y abrupta de la zona en emergencia.

Los helicópteros se redujeron en la práctica a uno. El transporte de personal por tierra se hizo a través de un parque automotor heterogéneo que comprendía los diez camiones militares entregados en préstamo, tres camionetas del Ministerio de Transportes, una del Ministerio de Educación y ocho pequeñas unidades propias.

El armamento era también diverso, con predominancia de las pistolas ametralladoras y armas de puño, adecuadas ambas solo para combate a distancias cortas. En algunas comandancias, y entre las “escuadras” de sinchis, el mayor poder de fuego radicaba en las ametralladoras ZB-30, verdaderas reliquias de la primera posguerra (fueron discontinuadas en la mayor parte de ejércitos occidentales a inicios de la década del 30), que se encontraban, sin embargo, en buen estado de funcionamiento.¹⁰

Con esos medios, Barreto debía restablecer y mantener la paz. Las acciones más importantes que el “Pliego de instrucciones” le ordenaba eran: “Aplicar las medidas restrictivas en el ejercicio de las libertades [...] toque de queda [...] efectuar redadas e incursiones empleando al máximo el factor sorpresa [...] identificar y capturar a dirigentes [...] con los elementos probatorios necesarios”.¹¹ A plazo mediano, Barreto debía “detectar, neutralizar y/o destruir la organización de los elementos que preparen o ejecuten la subversión”.¹² Todo eso en sesenta días, con mil hombres, menos de veinte vehículos, inteligencia insuficiente y doctrina inadecuada.

El pliego ordenaba a Barreto “sujetarse a los dispositivos de la Constitución Política del Perú, en la parte pertinente”. Lo cual era de algún modo la forma eufemística de ordenar que no se cometieran excesos represivos, y revelaba la permanente preocupación de De la Jara por no contaminar su gestión ministerial con casos de tortura, ni con los “pijamas de madera y supositorios de dinamita” que le pedían aquellos críticos que abogaban por lo que ellos entendían como “mano dura”.¹³

Abocándose con energía a su trabajo, Barreto movilizó con rapidez los recursos puestos a su disposición. El 13 de octubre los refuerzos ya habían sido distribuidos en las cinco provincias en emergencia, y el Estado Mayor Conjunto, en funcionamiento desde el día anterior, había preparado la primera “Orden de operaciones”. Su nombre “Vivanco”, en homenaje al guardia muerto en el asalto al puesto de Tambo.

Planificando las operaciones a través de un Estado Mayor Conjunto, sintiendo que iban a poder contraatacar y eventualmente desbaratar a Sendero, la moral de las fuerzas policiales aumentó claramente desde el inicio del “Operativo Vivanco”. De hecho, ni antes ni después alcanzó la Policía el nivel de energía y entusiasmo que logró durante la última parte de 1981.

Ello fue cuidadosamente estimulado por Barreto, quien intentó transmitir a las tres fuerzas por igual un sentimiento de protagonismo y de misión, cuyos logros dependerían de la unidad que mantuvieran entre sí. Era el momento de demostrar, en especial a los militares, lo que las

policías, actuando bajo un solo comando, cooperando y no saboteándose mutuamente, eran capaces de hacer.

En su primera orden, Barreto denominó “Comando Conjunto de las Fuerzas Policiales”¹⁴ a la autoridad policial de la zona en emergencia. Que se utilizara el mismo nombre que el de la instancia militar más alta en el país fue, para muchos de sus oficiales, lo más cercano que se podía llegar a la bienaventuranza. Era salir de la triste rutina de imitar a los militares: sus insignias, sus gestos, la forma de llevar los galones, para situarse al mismo nivel, sin perder la identidad propia en el proceso. Los militares, como era de esperar, consideraron un atrevimiento la decisión de Barreto. Las inmediatas y apropiadamente roncadas protestas del comandante general del Ejército, el general Francisco Miranda Vargas, y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se tradujeron en apresuradas llamadas a Barreto del jefe de la Guardia Civil, el general Catter. Al final, se llegó a una solución de compromiso y el nombre que quedó fue el de Comando Operativo Conjunto de la Zona en Emergencia. El título de Barreto quedó como jefe de la zona en estado de emergencia. Por frívolo que parezca el episodio, no puede dejar de tenerse en cuenta la importancia que tuvo para sus protagonistas. En la concepción feudalizada de las instituciones, los nombres y las formas estaban ligados con jerarquías y fueros. Y si uno se definía en gran medida por su pertenencia institucional, el provenir de una condenada a un perpetuo rol segundón difícilmente conducía al aplomo y la confianza necesarios en esa circunstancia. Afirmando el vínculo común de la función entre las tres policías y replicando a nivel regional las categorías más altas en la organización militar nacional, Barreto solidificó la unión operativa de la Policía y levantó su moral. Desde entonces, y hasta el término de la declaratoria de emergencia, las policías cooperaron sin regateos entre sí en Ayacucho.

Con la “Orden de Operaciones Conjunto Vivanco”, las fuerzas policiales tomaron la iniciativa desde la noche del 13 de octubre. Poco antes, un destacamento policial había ingresado sorpresivamente a la Residencia Universitaria y capturado a las cincuenta personas allí alojadas; la mayoría, aunque no todos, estudiantes. Entre los presos figuraba la veterana dirigente Nelly Carhuas. El rector Enrique Moya protestó por la incursión policial, pero luego que Barreto se entrevistara con él y prometiera liberar a los estudiantes no comprometidos, la tensión decreció. Entre tanto, imperando ya el toque de queda en las zonas urbanas de Ayacucho¹⁵ y con Sendero en obvio repliegue, los atentados cesaron por completo.

El plan policial dividía la zona en emergencia en cinco sectores, correspondientes a las cinco provincias, salvo en un caso: el cuarto sector comprendía a la provincia de Víctor Fajardo y partes de Cangallo, mientras que el quinto sector incluía solo a Vilcashuamán, entonces aún perteneciente a Cangallo.

Las acciones estaban a cargo de grupos operativos, seis en total, respaldados por uno de reserva e informados por otro de inteligencia. Cada grupo se subdividía en patrullas delimitadas territorialmente. La provincia de Huamanga, por ejemplo, tenía seis;¹⁶ Huanta, diez; La Mar, siete; Vilcashuamán, seis; Cangallo - Víctor Fajardo, cinco.

El área que cubrían los grupos operativos era extensa y en casi todos los casos difícil y escabrosa. El grupo de La Mar, por ejemplo, debía cubrir con sus patrullas desde las alturas de Tambo hasta la selva de Llochehua. Cada patrulla debía peinar su zona, efectuando “incursiones, registros domiciliarios, incautaciones, arrestos de los responsables de acciones subversivas, de sabotaje y terrorismo en forma envolvente o de peine según las circunstancias”.¹⁷ Aparte de eso, debía llevar a cabo las funciones policiales regulares, entre las cuales una en especial saltaba a la vista. Cada patrulla debía efectuar “el control de extranjeros e indocumentados incidiendo en

chilenos, ecuatorianos, cubanos, rusos, colombianos y argentinos”.¹⁸

Aún a esas alturas proseguía la búsqueda de la conspiración internacional. Desde montoneros argentinos hasta supuestos agentes del mítico “portaaviones anclado en el Caribe”, que según el diputado Sotomarino dirigía las acciones senderistas. La orden parecía reflejar la apabullante falta de inteligencia sobre Sendero que sufrían las fuerzas de seguridad en general, pero había más que eso: era, de un lado, una concesión a los postulados básicos de la doctrina contrainsurgente prevaleciente en las fuerzas de seguridad peruanas. Del otro, era también una concesión a los políticos de los partidos en el poder. Ellos habían hecho saber que creían en una conspiración extranjera, y la inclinación tradicional de la policía tendía, dentro de lo posible, a acondicionar los hallazgos a sus opiniones.

Las primeras patrullas debían empezar a actuar desde el 13 de octubre hasta el 23 del mismo mes. En la relación de requisitorios que llevaba cada jefe de grupo había setenta nombres: todos de lugareños, ninguno de extranjeros.

Sorprendentemente, la lista de requisitorios estaba encabezada por el estudiante secundario Carlos Alcántara Chávez, considerado el responsable senderista de toda el área urbana de Ayacucho,¹⁹ con autoridad superior a la de gran número de dirigentes históricos de Sendero. Entre estos, muy pocos figuraban en la lista, siendo los principales Víctor Quintanilla Huamán y Nelly Carhuas, ya capturada.

Al término del mes de octubre los resultados parecían ser halagüeños para las fuerzas policiales. Los cuatrocientos policías que participaron en las diversas patrullas habían efectuado ciento trece incursiones en total, sin encontrar resistencia. Se había detenido a ciento ochenta y cinco personas, incautado cerca de doscientos cartuchos de dinamita, un centenar de metros de mecha, algunos fulminantes y folletería. No era un gran resultado, pero sí era notable, en cambio, el total cese de acciones senderistas en todo el ámbito de la zona en emergencia.²⁰

Más importante aun era el avance de las investigaciones sobre los atentados anteriores. Con la iniciativa táctica retomada, y Sendero replegado, las fuerzas policiales no tuvieron que preocuparse en resolver nuevos casos y pudieron concentrarse en investigar los pendientes.

Los asaltantes del puesto policial en San José de Secce, como se ha visto, habían sido capturados por los pobladores al día siguiente del atentado. Otras seis personas, cinco de las cuales solo identificadas por pseudónimos, eran aún buscadas.

El caso del asalto al puesto policial de Quinua estaba ya prácticamente cerrado con la captura de casi todos los atacantes, los más importantes de los cuales eran Carlota Tello Cuti, Jesús Luján González y Dante Cruzat Cárdenas. Apenas dos atacantes identificados permanecían aún fugitivos.

Casi todos los autores del asalto a la tienda “La Pequeñita” habían sido identificados, y muchos de ellos arrestados. Y, finalmente, la mayoría de los atacantes al puesto policial de Tambo habían sido ya capturados.

Patrullas policiales continuaron incursionando en pueblos y caseríos, buscando sobre todo a grupos armados, pero también a requisitorios o aun a sospechosos. El ritmo de operaciones, entre diez y doce incursiones por día, se mantuvo intenso. Ninguna de las patrullas logró lo que entonces era un deseo ferviente: encontrar a un grupo enemigo y obligarlo a trabar combate. Las capturas, en cambio, fueron constantes. En algunos casos se apresó a militantes o activistas veteranos, especialmente en Vilcashuamán. Pero en varios otros, los capturados tenían poco o nada que ver con la organización insurgente. La búsqueda de agentes extranjeros arrojó resultados más bien patéticos. En lugar de aquellos implausibles conspiradores “cubanos, rusos,

colombianos y argentinos”, la policía capturó el 19 de octubre a una joven turista francesa, Therese Jacqueline Marie. La embajada de Francia intervino prontamente y, luego de lograr su libertad, la sacó del país. Aun en el aeropuerto, su rostro reflejaba la angustia del arresto aparatoso y del maltrato posterior. Amenaza en su caso, hecho en el de otros detenidos.

Pese a las recomendaciones del “Pliego de instrucciones” y a las directivas dadas por Barreto, la actitud de las fuerzas policiales no solo respecto a los detenidos sino a la población en general, se había convertido en una fuente de severos problemas.

Los policías del “Batallón Sinchi” de la 48ª Comandancia de la Guardia Civil se encontraban en buena medida envueltos en la leyenda negra que en los próximos meses convertiría su nombre en sinónimo de brutalidad para buena parte de la población ayacuchana y del país en general. Pero a la vez, los sinchis eran la punta de lanza de las fuerzas policiales, la unidad con mayor capacidad de combate; y por eso, a la vez que eran considerados insustituibles en la planificación operativa policial, eran también parte importante del sentimiento de honor y fuerza institucional de la Guardia Civil.

En forma más patente que otras unidades, los sinchis encarnaban las limitaciones de la práctica contrainsurgente y de las doctrinas que la sustentaban. Si bien su razón de ser era la contrainsurgencia, a los pocos meses de haber sido parcialmente puesta en acción en el teatro de operaciones de Ayacucho aparecía ya lastrada por acusaciones de prepotencia rutinaria y eventuales excesos brutales, sin poder exhibir como contrapartida resultados importantes en la lucha contra Sendero.

En realidad, los defectos básicos de esta unidad radicaban en la propia estructura de su formación. Los sinchis habían sido creados a mediados de la década del 60, cuando aún no se abatía del todo la oleada insurgente que siguió a la Revolución cubana. Baste recordar, para los propósitos del presente volumen, que dentro de la borrasca guerrillera que recorrió Latinoamérica durante esa década, Perú fue considerado como uno de los escenarios potencialmente más importantes. Las tomas de tierras primero, la acción de Hugo Blanco en La Convención después, las intentonas espasmódicas de complementar la acción de Blanco con operaciones guerrilleras, y por fin la insurrección del MIR y del ELN en 1965, fueron entendidas a lo largo de casi todo el espectro político como síntomas inequívocos de una situación revolucionaria. Mientras el gobierno cubano empeñaba energías en tratar de acrecentar los brotes guerrilleros en Latinoamérica, los Estados Unidos — cuya política externa se orientaba entonces a combatir a través del mundo las “guerras pequeñas” de orientación izquierdista, en el comienzo de lo que se conocería eventualmente como la “era de la contrainsurgencia”— incrementaban sustancialmente su presencia antiguerrillera en Latinoamérica.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) tuvo a su cargo, además de sus labores usuales de inteligencia, la coordinación de los esfuerzos de contrainsurgencia del gobierno norteamericano en Latinoamérica. Entre 1960 y 1965, su División del Hemisferio Occidental creció en un 40%.²¹ Las demás agencias norteamericanas, especialmente la AID y el Departamento de Defensa “proporcionaron cobertura y recursos adicionales” a la CIA.²² Como en Vietnam, la cooperación de la CIA con las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos fue particularmente estrecha, y esta unidad proporcionó el personal que, bajo el control de la CIA, se concentró en organizar y adiestrar unidades especializadas en contrainsurgencia a lo largo de Latinoamérica. Según Marchetti y Marks, más de seiscientos “grupos móviles de entrenamiento” fueron despachados desde Fort Gulick al resto de Latinoamérica.²³

Fue en el Perú donde ese esfuerzo, “en la era posterior a la Bahía de Cochinos”,²⁴ alcanzó su

expresión mayor: la organización del batallón de contrainsurgencia de los sinchis en la entonces remota localidad selvática de Mazamari. Habiéndose previsto la intensificación de las guerrillas procastristas, los funcionarios de contrainsurgencia norteamericanos concentraron sus esfuerzos en montar y preparar un grupo de fuerzas especiales, bajo el modelo de las propias, para enfrentar y derrotar a los guerrilleros en su propio elemento. Mazamari fue construido como base autosuficiente para entrenamiento y guarnición de fuerzas especiales en la selva. El entrenamiento fue proporcionado por “boinas verdes y personal de la División de Operaciones Especiales de la CIA”.²⁵ El equipo, desde uniformes hasta paracaídas, fue también financiado por el gobierno de Estados Unidos.

Entre tanto, las guerrillas eran eliminadas por las Fuerzas Armadas, al tiempo que los sinchis lograban sus niveles más altos de entrenamiento y equipamiento. Su existencia a partir de ese momento provocó un claro recelo entre los mandos militares, en especial del Ejército. Se prohibió a los sinchis desfilar en Lima debido a la presión del Ejército,²⁶ y los rozamientos, sobre todo en la eterna lucha por determinar jerarquías y dependencias, se agudizaron hasta aproximarse al conflicto abierto. Finalmente, como era inevitable, el Ejército se impuso.²⁷

Después, cuando el gobierno militar de Velasco Alvarado cortó la cooperación militar con Estados Unidos, los sinchis entraron en una suerte de burbuja temporal. Idos sus entrenadores y sus proveedores estadounidenses de equipo, la base de Mazamari se mantuvo tal cual la habían dejado, excepto el paso del tiempo. Gran parte de los oficiales fundadores permaneció, envejeciendo ellos a la par que el equipo, pero manteniendo, al mismo tiempo que sus memorias, sus técnicas inalteradas, saltando cada año con los mismos crecientemente venerables paracaídas (en 1982, Gagliardi logró cambiarlos²⁸) y preparándose para pelear fieros combates de unidades pequeñas contra guerrilleros uniformados, como aquellos que se habían preparado para enfrentar en la década del 60.

Aislados, prosiguieron —en grado quizá mayor que en otras unidades militares y policiales latinoamericanas— el proceso de distorsión de una doctrina que les había llegado ya distorsionada. Aunque se conservaban algunas frases huecas sobre la importancia de lo político en la guerra contrainsurgente, y se consideraban de cuando en cuando algunas medidas de “acción cívica” (algo de corte de pelo o extracción gratuita de muelas, por ejemplo), su entrenamiento para acciones agresivas en lucha de formaciones pequeñas pasó a ser considerado como el factor central en la lucha contrainsurgente. Frente a la importancia que en ese tipo de acciones juegan la sorpresa, la emboscada, la rapidez de reflejos, agresividad y aun la ferocidad, estas cualidades pasaron a considerarse también primordiales en el marco general de la lucha contrainsurgente. Así, la guerra contrarrevolucionaria pasaba a ser, de conflicto esencialmente político, solo una suma de eventos tácticos; y la guerra se decidía por el buen estado físico, la hosca fiereza, la capacidad de pelear sucio.

Cuando los primeros contrastes policiales, los sinchis fueron presentados como la panacea por el comando de la Policía. “La propia Guardia Civil los presentó como el elemento salvador”, recuerda López Martínez, “pero el sinchi solo trae problemas”.²⁹

La mayor parte de los sinchis eran buenos combatientes; y las pocas veces que les tocó librar combate en circunstancias similares a aquellas para las que se los había entrenado, su desempeño fue adecuado, salvo escasas excepciones. Pero en una guerra diferente, donde esas habilidades normalmente servían de poco, y la mayor parte de sus golpes se perdían en el aire, la exasperación consecuente solo acentuaba su tendencia a la actitud prepotente, a tratar de despertar el temor de la población. Fueron temidos, pero también odiados a la par. Y ellos,

buscando con informaciones deficientes a un enemigo que no se emboscaba en parajes desolados sino en medio de la población, trataron con frecuencia a la población entera como sospechosa. Y lo hicieron a su manera, con el rechazo que era de esperarse y que Sendero aprovechó con eficacia.

El 23 de octubre acompañé a un contingente sinchi en lo que fue su operativo más ambicioso hasta entonces. Cuatro “escuadras” de sin-chis dirigidas por el mayor Javier Mariús se preparaban para cortar la retirada a una supuesta columna senderista que, según informaciones de inteligencia, se reuniría en las alturas de la provincia de La Mar, para refugiarse luego en la selva del río Apurímac. Los preparativos iniciales, y la ejecución de la primera parte del operativo, se hicieron con perceptible eficiencia, pese a que se disponía de un solo helicóptero para movilizar a las escuadras. Sin embargo, a media mañana, ya concentrados en la silenciosa capital provincial de San Miguel, fue evidente un nivel de confusión de los sinchis. La información que había dado pie a la operación no era, evidentemente, correcta. Viéndolo en perspectiva, parece probable que se haya tratado de un operativo más o menos ilusorio, diseñado para aprovechar las habilidades específicas de los sinchis, con la esperanza de que el enemigo fuera lo suficientemente cooperativo como para amoldar su acción en consecuencia. Ello, al igual que en otras circunstancias, no sucedió. El operativo prosiguió, gracias a la capacidad de improvisación de Mariús, pero convertido ya en una simple operación de patrullaje.³⁰

La noche anterior traté de entrevistar a Maximiliano Durand en la jefatura departamental de la Policía de Investigaciones en Ayacucho. Dos días antes, el dirigente senderista había sido llevado desde Lima para ser juzgado en Ayacucho. Se trataba de uno de los dirigentes históricos de más alto nivel, y aunque su posición en el esquema organizativo senderista era el más cercano a la superficie, su detención ciertamente anulaba esa función. Vi a Durand “pálido y fatigado” y poco dispuesto a una entrevista, lo cual, habida cuenta de las circunstancias y de su visible estrategia de defensa, era explicable. Lo poco que dijo era parte de ello. Afirmó “ser ajeno a la política partidaria y achacó a rivalidades académicas e intrigas provincianas las acusaciones en su contra”.³¹ Fue, como se verá, una estrategia eficaz.

Ese fue mi viaje primero a Ayacucho. También la ciudad vivía sus primeras semanas de emergencia, y ya se había iniciado la transición hacia la realidad de violencia primordial que habría luego de dominar sus días, aunque pocos lo percibieran todavía. En la noche profunda de la sierra, las calles permanecían desiertas. Solo algunas patrullas policiales circulaban por el centro, mientras otras se preparaban para las incursiones nocturnas, para patear puertas y efectuar arrestos.

Durante el día, la ciudad sembrada de iglesias y capillas, aún impresiones encontradas. Por momentos ominosa, y en otros encantada. Mestiza e india, barroca y triste. Expresión de gente habituada a la luz intensa y pura del claro cielo andino, a montañas altas y yermas, suelo pobre, vida pobre, genio artístico, sufrimiento endémico. La gente caminaba sin que la violencia pesara todavía en forma asfixiante sobre sus horas de sueño y de vigilia. Aún era la etapa de la alarma mezclada con una cierta titilación, y se podía ver en muchos casos una suerte de orgullo local, paradójico y perverso ante los hechos primeros de la guerra de sombras senderista.

Había tenido ya un par de entrevistas con el general Barreto. En aquellos días de la primera emergencia, Barreto se alojaba en el Hotel de Turistas. Después de las horas de trabajo, quedaba tiempo amplio para conversar. Pasada la primera semana de acciones, Barreto se encontraba optimista. Las capturas habían penetrado en la estructura senderista. Los terroristas estaban en retirada. La policía se encontraba a punto de dejar solucionados todos los ataques previos y de

capturar a todos sus perpetradores. Desde el punto de vista de eficiencia combativa, los senderistas no eran, dijo, gran cosa. Atacar puestos aislados era cosa muy diferente a enfrentar a los sinchis.

Como estos ya habían sido acusados de cometer excesos, le hice a Barreto una pregunta que me iba a tocar repetir numerosas veces en el futuro: “¿Cree usted que es posible llevar esta campaña a una conclusión victoriosa, respetando a la vez los derechos humanos básicos?”. Su respuesta fue inmediata: “Tengo instrucciones muy claras”, me dijo, “si yo agarro a alguien maltratando o torturando algún preso, lo pongo inmediatamente bajo proceso. Yo no contemporizo, y mi gente lo sabe. Pero de otro lado”, añadió, “yo no puedo estar en todas partes. Los sinchis son recios. Y en cuanto a la Policía de Investigaciones, ya sabe cómo son”.

Submarinos en las montañas

Submarinos en las montañas. Al día siguiente, fui con el fotógrafo Óscar Medrano a la jefatura departamental de la Policía de Investigaciones. Era un edificio sobrepoblado de policías vestidos de civil, con armamento heteróclito y expresiones poco amistosas. Se nos dijo que el coronel José Salas Cornejo, el jefe departamental estaba ocupado, pero que nos recibiría dentro de un rato.

La gente entraba y salía, así que —luego de las preguntas de rigor— dejaron de fijarse en nosotros. Ambulamos hacia una escalera que llevaba a un nivel inferior, donde se encontraban los calabozos y los prisioneros. Vimos entonces que un joven con las manos esposadas subía las escaleras, acompañado por dos policías apenas mayores. No parecía tener más de diecisiete o dieciocho años. Tenía aquella complexión blanca común en varias zonas de Huamanga y Cangallo. Su rostro se veía terriblemente hinchado y golpes recientes daban la impresión de haber sido asestados sobre hematomas más antiguos. Parecía encontrarse poseído por sentimientos abrumadores de miedo y ansiedad, pero haciendo a la vez un esfuerzo supremo para no ser totalmente sobrepujado por ellos. Sus custodios, en cambio, tenían un continente apacible.

Me acerqué a él, le pregunté su nombre y por qué había sido tan duramente maltratado. El murmuró alguna respuesta, mirando fijamente, con intensidad casi salvaje a lo que parecía ser un punto dentro de sí mismo, y no agregó más. Era claro que todas sus energías, toda su fuerza estaban concentradas en no quebrarse, y que era el horror anticipatorio y no sus memorias aquello que centralmente lo afligía.

Era Dante Johny Cruzat,³² nos dijo uno de sus custodios. Pero apenas Óscar Medrano intentó tomar fotos, un policía adulto se acercó gritando que no se podía tomar fotografías, y se llevó al prisionero.

En medio del confuso movimiento de gente, Medrano y yo aprovechamos para bajar las escaleras y dirigimos hacia la zona de los calabozos. Ahí, en el patio que los enfrentaba, se encontraba un grupo de policías, en una interpretación muy libre del servicio de centinela. La mayor parte era aún muy joven, con los rostros casi imberbes de los recién egresados de la academia. En el centro del patio, sentada sobre una silla solitaria, una mujer comía de una lonchera de metal.

Medrano se le acercó y empezó a tomar fotos. Ella se sobresaltó y trató luego de ocultar su

rostro. Para los jóvenes policías, la escena resultó súbitamente divertida y varios se acercaron a la silla. “Es Nélide Laura, la terruquita”, me dijo uno de ellos.

Los otros la instaban a levantar el rostro, “tu carita, tu linda carita”, y ella parecía más avergonzada que asustada. Los policías le hablaban con una ternura irónica, como si tuvieran algunos secretos en común. La escena fue muy corta, pero la insinuación sexual que subyacía las bromas juveniles le dio un matiz particularmente obsceno, sobre todo por cuanto el ánimo festivo de unos parecía nutrirse de la desesperanza de la otra. Estaba vestida con un buzo y calzaba mocasines marrones, sin pasadores. Por un momento más no levantó la cara, y cuando le pregunté por qué no hablaba con nosotros, me contestó, medio ocultándose, medio mirando, “porque los periodistas son unos mentirosos”. No era el momento de discutir el grado de verdad o falsedad en esa afirmación, así que le pregunté si había sufrido algún maltrato.

Levantó el rostro y me miró. Era un rostro atractivo, el de una guapa ayacuchana. Pero los ojos parecían mirar desde un pozo de tristeza, lejano, profundo, ella misma ahogada en él.

Y quizá el hecho de que no mostrara ningún signo de violencia explícita sobre ella, le daba una fuerza trágica a su expresión. Dolor en el alma, juventud desgarrada, todo a la vez.

“Me detuvieron por participar en una reunión”,³³ dijo, “ellos dicen que fue una reunión terrorista, pero no es verdad... Yo salí de ahí temprano”.

“¿Ha sido maltratada?”, le repetí la pregunta.

Ella contempló brevemente ambos lados, donde los muchachos aún miraban, con ojos chispeantes y proximidad indecorosa. Luego me miró y dijo despacio, pero con tanta angustia como pocas veces me había sido dado ver hasta entonces.

“Todo lo que puedo decirle es que hasta mi arresto yo creía que el infierno era cosa del más allá”.

La miré en silencio, y no pregunté más. Medrano, un reportero veterano, que había visto mucho, bajó la cámara y no tomó más fotos.

“¿Qué hacen ahí?”, gritó un oficial mayor, aproximándose rápidamente desde la escalera, “¿no saben que está prohibido el ingreso aquí?”. Era un comandante que acababa de ser informado de nuestra presencia.

“¿Qué si torturamos?”, dijo el oficial de la Policía de Investigaciones con gesto amargo y fatigado, pero haciendo un esfuerzo visible por contener su enojo. “No. No torturamos”.

¿Cómo explicar entonces el rostro hinchado de Cruzat, cómo explicar las declaraciones de la mujer?

“Escuche”, dijo, arrastrando las palabras, cada vez más enojado. “Eso no es tortura. Eso es interrogatorio. Nosotros no malogramos. No mutilamos. Tenemos que interrogar”.

“¿Eso es interrogatorio para usted? Eso no es legal, y usted lo sabe”.

“Yo le voy a decir lo que yo sé”, estaba definitivamente exasperado ahora. “¡Yo sé que esa gente mata, que esa gente tortura! ¿Por qué no se preocupa de lo que esos terroristas hacen? ¡Y tenemos que agarrarlos antes que crezcan! ¿Me entiende?”.

“¿Y para eso usan la tortura?”.

“¡No torturamos! Le voy a decir lo que hacemos. Les podemos dar algunos golpes, o darles una colgada, o hacerles el submarino, pero eso no es tortura”.

“Eso es tortura, señor”.

“Escuche. Nosotros no les hacemos daño. Todos pasan por un examen médico. Cuando los examina el médico legista todos están bien. Y nos dicen lo que debemos saber. Y así podemos trabajar, para salvar vidas. Esa gente mata, ¿sabe? ¿De qué lado estamos, ah?”.

¿Es necesario decir que el mar era superfluo para aquel submarino bajo techo? Generalmente, una tina pequeña era suficiente. Con las manos amarradas a la espalda, la víctima era sumergida una y otra vez, hasta bordear la asfixia en cada ocasión. Era uno de los métodos preferidos, puesto que no dejaba marcas y quebraba rápidamente al interrogado. Según se me dijo, la Policía de Investigaciones tenía algunos especialistas en el submarino. Se me habló particularmente de un teniente coronel como de un verdadero virtuoso en la materia. Él determinaba con un solo golpe de vista cuánto tiempo podía aguantar cada interrogado. Aparentemente, nadie había muerto en sus manos en el curso de su húmeda y fatigosa carrera.

Esa tarde, comentamos algo de lo sucedido con periodistas locales. Uno de ellos, *Óscar Mendoza*, nos preguntó si queríamos entrevistar a una mujer que había sido torturada. Cuando le dijimos que sí, quedó en venir a recogerlos en la noche.

Pasadas algunas horas, *Mendoza* llegó a buscarnos. En el camino nos indicó quién era la persona que íbamos a ver. Su nombre era Yori Luz Sáenz Huamán, una estudiante secundaria de Huamanga que había sido arrestada dos semanas atrás con relación al ataque en “La Pequeñita”. Después del interrogatorio subsecuente, ella había confesado aparentemente no solo su participación en el saqueo, sino también en la muerte de la dueña de la tienda. Pero al ser llevada ante el juez, este había decretado su libertad. Ella tenía dieciséis años, y no había lugar para la detención de menores en Ayacucho.

“¿Es una simpatizante senderista conocida?”, preguntamos. Ni *Mendoza*, ni otro periodista ayacuchano que nos acompañó parte del camino, estaban del todo seguros. Conocían mejor al hermano mayor de ella, un adolescente robusto a quien llamaban “Greco”, aparentemente debido a su desarrollo muscular, el cual —dentro de los límites que la pobreza y la mala nutrición permitían en Ayacucho— había sido cultivado a través de la práctica entusiasta de fisicoculturismo. Él se había perdido de vista tiempo atrás y se suponía que estaba en la clandestinidad profunda o en el campo, junto con los primeros grupos guerrilleros de Sendero.

Tomamos un taxi en la plaza de armas, un viejo Ford que nos condujo cerro arriba a una de las barriadas que rodean Ayacucho. Después de un ascenso penoso para el motor venerable, subiendo a través de calles solitarias y sin iluminación, donde las luces de los faros del auto parecían perforar un túnel precario y cambiante en la oscuridad masiva, llegamos a un pequeño altiplano, donde el vehículo se detuvo. No podía seguir más allá. Pagamos, bajamos, y empezamos a caminar. *Mendoza* encendió una linterna de mano y guio al pequeño grupo. Solo caminando era posible ver detrás de algunas ventanas cubiertas con tela basta las luces débiles de velas o de lámparas de kerosene. El silencio —ahora que el ruido del motor, como de alegría embragada, se alejaba en bajada— era más profundo y más claro. Apenas se sentían los sonidos inciertos e inseguros de nuestros pasos sobre las piedras pequeñas, el eventual cascajo. A nuestra izquierda, muy abajo, las luces del centro de Ayacucho aparecían distantes y deseables.

Empezó a llover. Apuramos el paso, volteamos a una pequeña calle cuesta abajo, y poco después estábamos ante una puerta parcialmente desgoznada. Era la casa.

Nos abrió una mujer entrada en años, delgada y nerviosa, pero no frágil. *Mendoza* habló con ella en las cadencias suaves del quechua regional. Era la madre de Yori Luz, y hablaba poco español, así que Medrano y *Mendoza* conversaron con ella en quechua. Su pelo estaba arreglado en la forma tradicional andina: las dos largas trenzas, el sombrero. Tenía el cabello casi totalmente blanco y la cara, delgada, demacrada, se encontraba cubierta de arrugas.

La casa era humilde, pero no desvencijada. Dos, o quizá tres, cuartos estaban techados. Una parte tenía piso de cemento; el resto era de tierra apisonada. Un corredor entre los cuartos, y un

pequeño patio atrás, no tenían techo.

Nos sentamos en un cuarto con tres paredes, una terraza involuntaria, alrededor de una mesa pequeña. El techo era de calamina. La lluvia creció en intensidad, y la grabadora recogió el ruido de fondo de la lluvia contra la calamina, ahogando a veces nuestras voces.

Dos niñas, agarradas de la mano, entraron al cuarto. Tenían, probablemente, entre seis y ocho años, vestían ropa en estado verdaderamente andrajoso, estaban descalzas y poco limpias. Pero ambas poseían el encanto instantáneo que tiene la mayoría de los chicos. Se mantenían muy juntas, con los movimientos que niños simultáneamente tímidos y curiosos suelen hacer, listos para salir corriendo o quedarse paralizados en el sitio, ya habituados a la parte desaventajada de la vida; forzada ya a esconderse, bajo capas tempranas de miedo y dolor, la sensibilidad innata hacia el descubrimiento, la luz; pero aún viva y ardiente en la sombra, no derrotada aún, tratando tímidamente de ascender a la superficie.

“¿Son sus nietas?”, le pregunté a la mujer. “No”, respondió en quechua, como pidiendo disculpas —Medrano traduciendo—; eran sus hijas, las últimas. Era, pues, menor de lo que parecía. ¡Los ciclos de la vida tienden a ser tan diferentes de acuerdo a la fortuna!

Entonces empezó a contar cómo eran continuamente acosados por la policía, sobre todo después de que su hija había sido puesta en libertad. Los sinchis habían ingresado a su casa, dos, tres veces, dijo, trepando sobre la pared del patio, gritando, disparando. No siempre al aire. Y arrimó una lámpara cerca al punto donde, un poco más arriba de la altura de la cabeza, había quedado claramente impresa la trayectoria tangencial de una bala.

No solo eso, la última vez que habían llegado, siguió diciendo en quechua, señalando el patio oscuro, su perra, la madre de este cachorro —y puso la mano sobre un perro chusco pequeño y nervioso— había ladrado, y ellos la habían matado a balazos. Los ojos de las niñas estaban muy abiertos, escuchando y recordando. Y la madre evocaba entre tanto las palabras con las que, según ella, se habían despedido los sin-chis. “Ahora esta, la próxima vez la otra perra”. Yori Luz entró al cuarto, caminando con dificultad. Tenía la expresión ligeramente abotagada y el olor, aquel olor común en los Andes, de lana cruda y de sudor, de alguien recién despierto. Era más bien gorda, con pelo negro, largo y espeso, que se veía descuidado, algo grasoso. Hablaba mostrando en parte las encías cuando enfatizaba su relato, pero no cuando sonreía. Llevaba una falda sucia, con un par de huecos pequeños en la parte inferior, y ningún esfuerzo de la imaginación podía ayudar a describir su apariencia como arreglada o limpia. Tampoco daba la impresión de ser una persona particularmente agradable. Había un ángulo en ella, difícil de precisar pero que no era nada bueno; una impresión de potencial malevolencia, de crueldad. Pero ahora hablaba de las memorias de dolor y sufrimiento, tal como habían sido sentidas por alguien de dieciséis años, y ello no solo le confería un aire de sinceridad sino también expresaba algunas de aquellas verdades esenciales que solo el sufrimiento y, en menor grado, la intensidad juvenil, hacen emerger.

Contó sobre su arresto y el interrogatorio posterior. Había sido una injusticia desde el comienzo, dijo: ella había estado cerca del lugar del asesinato solo por curiosidad, y por eso había sido arrestada. El relato sonaba, en verdad, poco convincente, y la información posterior tendía a confirmar su participación en el ataque terrorista.

Pero entonces, el asunto era sobre cómo había sido el interrogatorio. La habían colgado, nos dijo, con los brazos amarrados a la espalda, hasta que quedó meciéndose en el aire, gritando o gimiendo cuando la golpeaban con toallas mojadas, o cuando la agarraban por las piernas y le daban un jalón brusco hacia abajo. Y luego el submarino, la agonía silenciosa, los más

atormetados alaridos convertidos en apenas una tempestad de burbujas.

Aún ahora, ella no podía juntar las manos en la espalda, y era obvio que el movimiento de los hombros le era muy doloroso.

Estábamos todos escuchando, nosotros tres, la madre, las niñas. La grabadora absorbía su voz y el impacto metálico de la lluvia. Medrano trabajaba con el flash, y las explosiones de luz, blancas, cortas, hacían las sombras aun más reales. El sonido del motor eléctrico de la cámara de Medrano quedó impreso en la cinta, con la voz, la lluvia, pero sin la oscuridad circundante, los ojos de las niñas, la lámpara ennegrecida, nuestro silencio.

Dejamos la casa después de hablar con Yori Luz por, quizá, otra media hora. Al día siguiente retornamos a Lima e ingresamos al frenesí del cierre de edición. El director, Enrique Zileri, no dudó un momento sobre la necesidad de publicar ese reportaje. El artículo fue publicado con una foto a página entera de Nélida Laura sentada, rodeada por los jóvenes policías, hablando sobre el infierno. Había otra foto, más pequeña, de Yori Luz recontando su versión del abismo, y ciertamente, información sobre la emergencia.

En algún momento del cierre, el director me relató que otro periodista, que había estado en Ayacucho una semana antes, había traído una cinta obtenida de una fuente policial amiga. Era corta, y parecía haber sido grabada clandestinamente. Se escuchaban dos voces, aunque se sentían otras presencias. Una era la de un hombre maduro, juguetona, con un leve falsete, pretendiendo ser el viejo maestro que reprende a un alumno malcriado. La otra voz era espasmódica, angustiada, respirando rápida, ruidosa, desesperadamente. La primera voz decía: “Ah, no, no. ¡No estás diciendo la verdad, estás diciendo mentiritas!”. Murmullos, respiración entrecortada. La primera voz de nuevo: “Ah, no, no. Eso no es cierto. ¡Patos al agua, al agua patos!”.

Ruidos acuáticos y, después de un rato, un sonido que era en parte el de una inhalación explosiva, en parte la expresión gutural de sufrimiento puro. Y luego, sollozos, una voz que implora.

No se pudo utilizar la cinta. El otro periodista afirmó que de hacerlo expondría a su fuente y se mantuvo firme en la negativa.

Publicado el reportaje, Barreto sentó la mano sobre su personal. Uno de los afectados fue el coronel Salas, jefe departamental de la Policía de Investigaciones, quien se sintió injustamente sancionado, y me lo hizo saber cuando nos encontramos tiempo después. En 1989, Salas, ya ascendido a general, era el jefe de la DIRCOTE, en Lima.

Nélida Laura fue enviada a la prisión en Lima, su filiación senderista aparentemente confirmada.

De Yori Luz supe de nuevo un año después. Fue a través de un despacho de nuestro corresponsal en Huamanga. Venía acompañado con fotos. En dos de ellas estaban las pequeñas hermanas de Yori Luz, juntas, agarradas de la mano, ojos abiertos y asustados, con la grave expresión de los niños que han visto cuanto hay por ver, y aun más. En la otra estaba Yori Luz, yaciendo sobre la mesa de concreto de la morgue, descalza, con la misma falda ajada, el gesto de énfasis congelado en el rostro.

Habían llegado al fin por ella, trepando por las paredes del patio, pero no eran policías sino senderistas. De acuerdo a la información concurrente que recibimos, Sendero había terminado por concluir que Yori Luz se había quebrado en los interrogatorios y que había empezado a denunciar a otros militantes. Los incursores llevaron a las hermanitas a otro cuarto, mientras ordenaban arrodillarse a Yori Luz y mirar al piso. Uno de ellos se acercó luego y le descerrajó un

par de disparos en la nuca. Cuando nos llegó la información, el cadáver no había sido reclamado, no se sabía nada de la madre, y las niñas estaban solas. Yori Luz tenía diecisiete años.

Pero ya entonces, en octubre de 1981, en los inicios de la guerra, cuando todo lo sucedido era apenas una muestra pálida de las calamidades por venir, la callada desesperanza de Nélida Laura, el dolor impregnado en Yori Luz, representaban la tragedia de la juventud burlada. Enardecida por las palabras de los fanáticos, los vendedores de aceite de culebra de la filosofía, y lanzada luego al fuego, que no era la esperada epifanía de lucha, amanecer y luz, sino el sótano del torturador. Una tina a medio llenar, donde la agonía y la desesperación flotaban, esperando.

La salida de De la Jara

El 23 de octubre, en Cusco, el estudiante aprista Antonio Ayerbe murió como resultado de una golpiza policial luego de su detención, ocurrida cuando Ayerbe participaba en una manifestación de protesta por el alza de los pasajes. No había atenuante alguno para el delito cometido por los policías que detuvieron a Ayerbe, y el Ministerio del Interior tomó de inmediato las predecibles medidas de separación de la institución y procesamiento judicial.

A la vez, el hecho resolvió el conflicto en torno a la permanencia de De la Jara en el Ministerio del Interior. Pese a la declaratoria de emergencia en Ayacucho, y el cese virtual de acciones senderistas, la campaña de ataques contra De la Jara no disminuyó en intensidad. “Bombón” seguía siendo una golosina para el tabloide *Ojo*, y el mayoritario grupo alvista entre los diputados de Acción Popular se aprestaba a obligar su presencia en la Cámara de Diputados. Dagoberto Lainez, uno de los colaboradores cercanos de Javier Alva, juntaba abiertamente firmas entre los parlamentarios para imponerle su concurrencia a la Cámara. La cortedad de De la Jara para el debate oral en público era ya un hecho manejado por los grupos en pugna. Los unos querían humillarlo, y De la Jara estaba decidido a no concederles la satisfacción. De otro lado, el grupo opuesto a la hegemonía de Alva Orlandini encontraba indefendible a De la Jara, y el propio Belaunde no tenía ya dudas sobre la necesidad de reemplazarlo.

De la Jara no estaba del todo seguro, empero, de que fuera ese el momento de salir, dando la apariencia que cedía ante la presión alvista. Pero también en ese aspecto estaba ya solo. Dos días después de la muerte de Ayerbe, a lo largo de una cena en el restaurante La Pizzeria, Manuel Ulloa y Javier Arias Stella persuadieron a De la Jara a renunciar.³⁴

Abatido, y sin ánimos de hacerlo él mismo, De la Jara pidió a López Martínez que le redactara la carta de renuncia. Esta aludía a la muerte de Ayerbe como un hecho “que repugna mi conciencia democrática”, y le hacía imposible permanecer en el despacho. El propio López Martínez la llevó a Belaunde, quien le subrayó la necesidad de “cambiar la imagen” del ministro del Interior.³⁵

Al hacerse pública su salida, varios parlamentarios de la oposición, y algunos acciopopulistas, elogiaron sus intenciones, su valor moral y el gesto final de la renuncia.

Con el alejamiento de De la Jara terminó aquel período inicial del régimen de Belaunde que el pequeño y rubicundo ministro encarnara: la reforma democrática de los mecanismos de seguridad del Estado. La fuerza centrada en la legitimidad y la tolerancia.

Poca duda cabe que De la Jara no estaba equipado ni con la experiencia necesaria para el

cargo, ni con la capacidad para dirigir instituciones conflictivas y complejas, ni con el conocimiento de las formas en que podía existir y camuflarse la corrupción. Al añadirse la insurrección a esas carencias, los contrastes y finalmente el fracaso quedaban predeterminados. Sin embargo, al hacerse el balance de su gestión, De la Jara emerge como uno de los mejores ministros del Interior que tuvo Belaunde. Y no es esta una afirmación caprichosa: pocas veces sufrió Sendero el arresto de tantos dirigentes altos como entonces. Nunca después volvió Ayacucho a vivir dos meses de tranquilidad como los que hubo entre octubre y diciembre de 1981. Ningún otro ministro impuso los fueros de la autoridad civil como él lo hizo, por ejemplo, frente a la insubordinación de Balaguer. Ningún otro tuvo la preocupación en afirmar la legitimidad democrática, la protección de las leyes y los derechos humanos a los gobernados, como De la Jara y en esto último, entonces interpretado como un síntoma adicional de ilusa debilidad, residió su fuerza. Cuando hoy,³⁶ después de diez años de lucha y del fracaso consistente de las medidas de “mano dura”, hasta los más miopes empiezan a ver que la legitimidad democrática no es un obstáculo, sino el arma principal en la lucha contrainsurgente —en tanto esté respaldada por una estrategia realista y por gente capaz de aplicarla— la gestión de “Lajarita” aparece, en perspectiva, dotada de una consistencia básica que no alcanzaron sus sucesores. Con el tiempo, tanto los políticos supuestamente recios como los militares supuestamente duros terminaron más derretidos que aquel conmovedor, honesto y corajudo “Bombón”.

-
- 1 Entrevista con el general Carlos Barreto Bretoneche, el 1 de agosto de 1987.
 - 2 Pero fue el Ejército el que proporcionó finalmente alrededor de quince equipos de radio Thompson.
 - 3 “Si la acción del gobierno aspira a ser eficaz [...] el factor esencial es establecer una competente estructura administrativa. Los mejores planes, programas y políticas serán apenas algo más que buenas intenciones a menos que exista la maquinaria para ejecutarlas a través de la nación”. En: Thompson, Robert [Sir]. *Defeating Communist Insurgency*. New York: Praeger, 1966.
 - 4 Sobre los “institucionalistas”, ver el capítulo: “Los perros de la guerra”.
 - 5 Pliego de instrucciones operativas N° 01-GC-PIP-GR. Estado Mayor de la II Región Guardia Civil, 12 de octubre de 1981.
 - 6 Apreciación de situaciones de operaciones. Jefatura Operativa Policial de la Zona de Emergencia, Estado Mayor Conjunto, 10 de noviembre de 1981.
 - 7 Ese habría de ser un problema constante en los años siguientes. Debe tenerse también en cuenta que los modelos capaces de sobrevolar las alturas superiores a cuatro mil metros, comunes en Ayacucho, eran pocos. El modelo utilizado por la Fuerza Aérea fue el Bell 212, con capacidad limitada de transporte. Los helicópteros soviéticos no hacían la altura.
 - 8 Pliego de instrucciones, 12 de octubre de 1981, p. 6.
 - 9 Apreciación de la Situación en la Zona de Emergencia del Departamento de Ayacucho. Jefatura de Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia, Estado Mayor Conjunto, 27 de noviembre de 1981.
 - 10 La modernidad o sofisticación del armamento individual dentro de una guerra contrainsurgente, es un factor secundario. Sin embargo, el armamento debe ser adecuado a la naturaleza de las misiones tácticas y las características del terreno; y ciertos productos de relativa alta tecnología, como visores nocturnos, sensores electrónicos, pueden ser necesarios en una guerra que es, no obstante, predominantemente rústica o de tecnología intermedia. Pero no hay que olvidar que la doctrina operativa sobre la que actuaran tanto las fuerzas policiales como las Fuerzas Armadas establecía la necesidad de una abrumadora superioridad de fuego de las

fuerzas de seguridad sobre las guerrillas. Al no haberla, las tropas entrenadas —sobre la base de ese supuesto—debían resentir necesariamente su carencia.

- 11 Pliego de instrucciones operativas N° 01-GC-PIP-GR. Estado Mayor de la II Región Guardia Civil, 12 de octubre de 1981.
- 12 *Ibídem.*
- 13 Sobre “pijamas de madera y supositorios de dinamita”, ver la entrevista que hice al ministro De la Jara en *Caretas* n. 663, 8 de setiembre de 1981. En ella, De la Jara (quien de otro lado reveló estar mal informado respecto a la dimensión y las proyecciones de la insurrección senderista) afirma su convicción en los medios democráticos para enfrentar estados de excepción, con palabras que no han perdido validez: “Pero al aplicar el máximo rigor [...] no hemos cedido a la tentación de la represión indiscriminada, ni hemos abdicado de nuestro credo democrático [...] la democracia puede defenderse sin recurrir a medidas que a la postre pudieran hacerla zozobrar”.
- 14 Orden de Operaciones Conjunto N°2- “Vivanco”, 13 de octubre de 1981.
- 15 Entre las 10 p. m. y las 5 a. m.
- 16 Zonas rural y urbana de Huamanga, de Quinua, Tambillo, Acos Vinchos, Socos Vinchos, San Pedro de Cachi y Chiara.
- 17 Orden de Operaciones Conjunto N°2- “Vivanco”.
- 18 *Ibídem.*
- 19 Sobre Alcántara, ver el capítulo “Guerrillas”-
- 20 Apreciación de situaciones de operaciones. Jefatura Operativa de la Zona de Emergencia, Estado Mayor Conjunto, 10 de noviembre de 1981.
- 21 Ranelagh, John. *The Agency: The Rise and Decline of the CIA*. New York: Simon & Schuster, 1987, p. 424.
- 22 Marchetti, Victor; Marks, John. *The CIA and the Cult of Intelligence*. New York: Dell Publishing, 1980, p. 109.
- 23 *Ibídem.*
- 24 *Ibídem*, p. 110.
- 25 *Ibídem.*
- 26 *Ibídem.*
- 27 Sobre eso, ver también: Fernández Salvatecci, José [Mayor EP (r)]. *Guerrillas y contraguerrillas en el Perú*. Folleto autoeditado. Sin fecha (aprox. 1985), pp. 4-14.
- 28 Entrevista con José Gagliardi Schiaffino, el 1 de julio de 1987.
- 29 Entrevista con Héctor López Martínez, el 6 de mayo de 1987.
- 30 *Caretas*, n. 670, 26 de octubre de 1981.
- 31 *Ibídem.*
- 32 Ver los capítulos “La cuota” y “Tambo”.
- 33 La reunión se había realizado en un lugar llamado Piscotambo. Según la policía, ahí se había planificado una serie de atentados terroristas, entre los cuales el asalto y saqueo de la tienda “La Pequeñita”.
- 34 Entrevista con Héctor López Martínez, el 20 de abril de 1987.
- 35 *Ibídem.*
- 36 Este libro se publicó en julio de 1990.

XIII. Ilusiones

Contrariamente a lo que algunos esperaban, la salida de De la Jara no dio el control del Ministerio del Interior al sector de Alva Orlandini. El presidente ya había decidido a quién encargaría la tranquilidad pública.

El teniente general de la Fuerza Aérea, José Gagliardi Schiaffino, era un veterano aviador retirado cuando Belaunde le ofreció el Ministerio de Aeronáutica en 1980. Anteriormente había sido ministro de Trabajo durante el gobierno de la Junta Militar, en 1962; comandante general de la Fuerza Aérea, en 1966; y ministro de Aeronáutica a través de los cuatro últimos gabinetes de Belaunde, desde 1967 hasta el golpe militar de 1968. Cuando este se produjo, Gagliardi solicitó su pase al retiro y dio por terminada en forma definitiva su amistad con el general Juan Velasco Alvarado. Así, en el agrí dulce retiro, pasó los doce años del gobierno militar. Al retornar Belaunde al poder, este le ofreció el Ministerio de Aeronáutica. Inicialmente, Gagliardi había trepidado en aceptar el cargo. “Ha pasado mucho tiempo, estoy desactualizado”, le dijo a Belaunde cuando este le ofreció el puesto, después de la victoria electoral. “Actualícese al 28 de julio”, le contestó Belaunde.¹ Y así lo había hecho.

Al producirse la renuncia de De la Jara, Gagliardi fue convocado a Palacio de Gobierno. Allí lo esperaba, junto con Belaunde, el premier Ulloa. Sin mayores preámbulos le ofrecieron la cartera del Interior. “¿Qué mal les he hecho yo a ustedes para que me lleven al Interior?”, les preguntó en broma Gagliardi.²

Pidió tiempo para pensarlo. Se lo dieron. De inmediato reunió a sus familiares, que estuvieron de acuerdo en el cambio de cartera. Él, sin embargo, no terminaba de decidirse, cuando vio que en los noticieros de la televisión se anunciaba su nombramiento. De inmediato llamó a Ulloa para inquirir qué había pasado. “Ve, mira”, le dijo Ulloa “No podíamos esperar más... si quieres crear una crisis ministerial, presenta tu renuncia”.³ Gagliardi aceptó.

La decisión del nombramiento había sido tomada exclusivamente por Belaunde, persona alerta como pocas al valor de la imagen, y convencido de que en este caso “la imagen iba a lograr el éxito”.⁴ Ahora se necesitaba alguien que pusiera el énfasis —a partir de su sola presencia— en la severidad, la energía de la fuerza organizada. Un militar pundonoroso que llenara a la vez los requisitos de caballería, honradez y elegancia en los actos que Belaunde estimaba en los militares. Para el presidente, era Gagliardi quien encarnaba a plenitud estas cualidades.

En alguna medida, la impresión de Belaunde era acertada. Gagliardi era un hombre formado sobre la base de una disciplina estricta que —a diferencia de tantos otros militares— lo había

acompañado a lo largo de su vida y no solo en los años de formación.

Era un cañetano cuya biografía lo hacía parecer a veces casi tan antiguo como la historia. Se había educado en un internado riguroso donde aprendió carpintería y ebanistería, oficios a los que —junto con el más azaroso, el de la pesca— dedicaría su tiempo libre en el futuro. Había sido cadete en la escuela de aviación de Caserta, durante los años culminantes de la Italia fascista, cuando Abimael Guzmán apenas aprendía a caminar. Logró salir del entrevero inicial de la Segunda Guerra Mundial con suerte y por mar. Luego fue piloto de caza, volando los Curtiss Hawk de motor radial. No alcanzó a volar los primeros aviones “a chorro” porque cuando llegaron, por los tiempos de la guerra de Corea, ya había pasado la edad de vuelo.

Y, sin embargo, Gagliardi se conservaba vigoroso, lúcido, e ingresaba al Ministerio del Interior con el encomiable optimismo de creer que, con la debida dedicación y disciplina, se podrían lograr a corto plazo resultados consistentes, quizá definitivos, en la lucha contra el terrorismo.

Había otros aspectos en los cuales este aviador daba —y esto debe anotarse en su crédito— una cierta sensación de anacronismo. Era una persona de honestidad intachable (al entrevistarlos en 1987, Gagliardi se seguía movilizándolo en un auto del año 67. Y era claro que, aunque decorosamente, vivía con un presupuesto ajustado, y que tal como lo practicaba lo suponía en los demás. Y ahora le tocaba ingresar a un sector donde ello era, definitivamente, la excepción. Era un hombre totalmente carente de malicia, en un medio donde esta campeaba. Creía que la disciplina, la verticalidad, y otras cualidades militares se aplicarían a la sola fuerza de la orden, en un medio acostumbrado a moverse en varios planos y con varios discursos y lenguajes a su vez. Su concepto de la severidad era paternal y protector, en el ambiente de apariencias mal sostenidas, de policías con comandos medularmente corruptos. Era, en suma, un hombre integérrimo pero ingenuo. Había sido un buen ministro de Aeronáutica, porque en ese sector la industriosisidad sin malicia podía aplicarse útilmente, con un mínimo de distorsión. Pero no había ninguna esperanza de que lo mismo sucediera en el portafolio del Interior.

Su llegada fue precedida por algún temor en Córpac, especialmente cuando, apenas al ingresar, le pidió la renuncia a Ipinze. Muchos pensaron que Gagliardi traía información sobre quién hacía qué en el ministerio y temieron una purga dentro de él. La salida de Ipinze fue decidida en parte por información que recibió Gagliardi, pero sobre todo a instancias del contralor Miguel Ángel Cussianovich: “Entonces lo llamé a Ipinze a mi despacho y le dije que le transmitía una disposición del contralor, que exprese su renuncia, y que yo daba como aprobada”.⁵ El general PIP Rómulo Alayza fue nombrado sucesor de Ipinze. Prontamente, la oficialidad de la burocracia policial y civil del Ministerio del Interior captó la bonhomía integral de Gagliardi y desarrolló las astucias correspondientes para neutralizarla con eficacia. Extremando las manifestaciones externas de acatamiento de disposiciones y de disciplina, lograron que Gagliardi creyera que sus órdenes se cumplían en la letra y el espíritu, lo que por cierto no sucedió.

Con el tiempo, Gagliardi empezó a percatarse de la realidad, en buena medida merced al asesoramiento de Héctor López Martínez, quien continuó como viceministro del Interior hasta la salida de aquel. Pero entonces no supo exactamente qué hacer (“pensé que podría haber una mejor infraestructura; y eso lo entiendo también como de capacidad”)⁶ y focalizó su dedicación a hacer aquello que conocía mejor: tratar de mejorar el equipamiento de las fuerzas policiales, su organización y eficacia como cuerpo. Luego, temiendo el costo social que podría acarrear el ingreso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero, trató de mejorar la capacidad de

acción policial en la lucha contrainsurgente, pese a notar, junto con la pobre disciplina, la proclividad a los excesos, las demasías: “[Los sinchis] no tienen el concepto de protección de la población en términos de hacerse amigos, sino de arrasar con todo, de creerse todopoderosos [...] Parece que hubo demasiados abusos y atropellos en Ayacucho”.⁷

A fin de cuentas, y pese a las diferencias en apariencia, formación y estilo, había mucho de común entre Gagliardi y De la Jara. Si bien ningún órgano de prensa asestó a Gagliardi alguno de los ensacarinados apodos que regalaron a De la Jara, en los pasadizos del Ministerio del Interior empezó a ser conocido con el mote cariñoso de “Nono”, o, según el caso, “el Nonino”, el abuelito. Y me apresuro a añadir que esa similitud en la percepción de bondad, honestidad y hasta ingenuidad en ambos, antes que ser un detrimento, enaltece a los dos, y aun ennoblece el fracaso de sus gestiones —sobre todo comparados con los pícaros que entonces y ahora pululan, parasitando a la vez el país y el poder.

Rasuhuilca

Durante el mes de noviembre, las fuerzas policiales mantuvieron la iniciativa indisputada en todo el ámbito de la zona en emergencia. Complementando el peso local de las guarniciones policiales (puestos y jefaturas de línea interconectados) con el movimiento incesante de las patrullas de sinchis, la policía dominó el espacio en todo el teatro de operaciones. La falta de oposición fue aprovechada para actuar sobre los distritos donde, de acuerdo a las informaciones, Sendero tenía montada una organización relativamente importante. Llevando listas de requisitorios, la policía peinó, en su búsqueda, las capitales provinciales, pueblos y caseríos. A inicios de noviembre, el comando policial de la zona en emergencia difundió en todos los puestos y garitas de control una lista de cincuenta y dos requisitorios que aún se encontraban prófugos.⁸ A lo largo del mes, se capturó un alto porcentaje de los buscados. Aunque hubo equivocaciones entre los nombres incluidos en las requisitorias, la mayor parte de quienes integraban la lista eran miembros de Sendero. Algunos de ellos de nivel alto.

Considerando la escasa validez de informaciones operativas con que contaban la policía al inicio de la emergencia, la situación de inteligencia había mejorado de modo patente un mes después. Ello fue resultado tanto de la unidad de esfuerzos entre las tres policías que había logrado Barreto, como del hecho de que estas —en especial la Guardia Civil— enviaron algunos de sus mejores especialistas de inteligencia a Ayacucho. Así, fue posible integrar y trabajar la información resultante de operativos, denuncias y archivos, para hacerle producir a su vez más información.

Para todo efecto práctico, no cabe duda de que la actividad policial infligió pérdidas relativamente altas a Sendero. De hecho, más importantes de lo calculado. Buena parte de los cuadros dirigentes que serían liberados en el asalto a la cárcel de Huamanga, en marzo de 1982, fueron apresados entonces.

Sendero se vio forzado, en consecuencia, a un repliegue más prolongado de lo que esperaba, y a poner en acción a la segunda red. Organizarla les tomó, no obstante, algún tiempo. Y la policía, entre tanto, aprovechó el ímpetu de su iniciativa y actividad. Aun así, el comando policial no ignoró que sus progresos eran relativos, especialmente cuando se incrementó el

número y la calidad de sus informaciones. Empezaron a ver que hasta entonces solo habían lidiado con la punta del iceberg de la insurrección, y aunque no llegaron a percibir la entidad de la organización enemiga, no ignoraron por lo menos que se encontraban lejos de haberla neutralizado. Así, el 1 de noviembre, el Estado Mayor Conjunto indicaba que, “si bien es cierto que las acciones operativas conjuntas han permitido neutralizar momentáneamente las acciones terroristas en la zona en emergencia, es notorio que de no lograrse la captura de la totalidad de los implicados, así como de los autores intelectuales y de los dirigentes principales del PCP - SL continuarán las acciones subversivas, toda vez que obedeciendo a su estrategia de lucha, estarían en repliegue, para luego continuar con mayor agresividad”.⁹

Al acercarse el vencimiento del plazo del estado de emergencia, al tiempo que el comando policial se ratificaba en su percepción de que Sendero no había sido afectado sustancialmente, empezó a recibir informaciones sobre una pronta reacción de la organización sediciosa. Por ello, en su “Apreciación” del 27 de noviembre, el Estado Mayor Conjunto recomendó que “continúe por treinta días más el estado de emergencia y la suspensión de las garantías constitucionales en las cinco provincias del departamento de Ayacucho”.¹⁰ El propio Barreto pidió el 3 de diciembre a Belaunde que prolongara por otros treinta días el estado de emergencia, pese a que tanto el jefe de la Guardia Civil, teniente general Humberto Catter, como el jefe de la II Región de la Guardia Civil, teniente general Jorge Monge, le habían pedido que sugiriera el levantamiento de la emergencia. Belaunde contestó el pedido de Barreto indicando que no era conveniente prolongar la declaratoria de emergencia “por razones políticas”.¹¹

Faltando pocos días para la conclusión del estado de emergencia, Barreto y su Estado Mayor se dejaron seducir por la ilusión de todo militar contrainsurgente: ubicar al enemigo, rodearlo, cortarle toda vía de escape y obligarlo a combatir o rendirse.

El 8 de diciembre, actuando sobre la información incierta que “en las alturas y/o alrededores de Rasuñilca - Huanta se encontraría un centro de operaciones del denominado “Grupo Especial del PCP - SL”,¹² el comando policial organizó la operación más importante desde el inicio de la insurrección. Cinco grupos operativos (Alfa, Beta, Gama, Delta y Omega) convergerían a la vez, desde otras tantas direcciones, sobre el nevado de Rasuñilca, saliendo desde Ayacucho y San Miguel. Cada una de las cinco patrullas estaba integrada por trece efectivos (el oficial al mando, nueve guardias civiles, tres miembros de la Policía de Investigaciones), y todas apoyadas por el único helicóptero que operaba en Ayacucho. La acción se llevó a cabo de acuerdo al plan, pero sin encontrar ni un centro de operaciones, ni tampoco a ningún miembro del “Grupo Especial de Sendero Luminoso”.

Y así, el 12 de diciembre, al levantarse el estado de emergencia, Barreto dejó Ayacucho. Sin duda, el balance inmediato fue positivo. Contando con medios limitados en hombres, equipos y, sobre todo, informaciones, había logrado apaciguar la zona. Durante los dos meses que estuvo al frente de las operaciones contrainsurgentes, no ocurrió ningún atentado. Solo el 10 de diciembre, luego de un almuerzo que le dieron en el Hotel de Turistas para festejar su cumpleaños, una bomba explotó en las afueras del hotel, causando daños menores.

Pero un logro ciertamente impresionante fue haber controlado la situación sin que en esos dos meses muriera nadie. El costo social había sido, en consecuencia, bajísimo. Ese fue otro logro que no se repitió antes ni después. Parte importante del mérito fue del ya entonces

exministro De la Jara, cuya pertinaz insistencia en el respeto a los derechos humanos de los detenidos y de las poblaciones sujetas a acción policial se había trasladado —como no había sucedido antes ni sucedió después tampoco— a las órdenes de operaciones. En forma por lo menos defendible, el comando policial pudo proclamar que contaba con el “reconocimiento y apoyo de la población, en razón que las operaciones policiales están desarrollándose de conformidad a la Constitución, disposiciones en vigencia y a la Declaración de los Derechos Humanos”.¹³ Si De la Jara tuvo el mérito de haber impreso la línea política en el manejo de la emergencia, el de Barreto fue el de haberla aplicado en la práctica, y de haber logrado aun así resultados mucho más eficaces que los de cualquier otro comandante policial o militar de la zona en emergencia. Fue una tarea compleja y no del todo exitosa, como se pudo ver ya entonces, con las denuncias que publicó *Caretas* sobre casos de tortura. Pero, a diferencia de lo que hubiera hecho casi cualquier otro jefe policial o militar en su caso, Barreto sancionó a los oficiales que permitieron los casos de tortura, y al hacerlo dio un mensaje inequívoco a sus tropas, que estas — pese a las distorsiones de su formación y práctica profesionales— no dejaron de comprender. Para López Martínez, Barreto “fue de lo mejor que hubo”.¹⁴

Creo que fue así. No obstante, como he escrito líneas arriba, sus logros deben apreciarse con relación a la limitación de sus medios y el fracaso de sus antecesores y sucesores. Porque, al concluir el estado de emergencia, terminaron también las ilusiones de pacificación. El día que aquel terminaba, el 12 de diciembre, un contingente de veinte senderistas tomó el puesto de la Guardia Civil de Totos, en Cangallo, y se apoderó de armamento (incluyendo metralletas) y uniformes.¹⁵

La guerra no había terminado, en verdad apenas comenzaba. Y ahora despegaba el contraataque.

1 Entrevista con el exministro del Interior, José Gagliardi Schiaffino, el 1 de julio de 1987.

2 *Ibídem*.

3 *Ibídem*.

4 Entrevista a Héctor López Martínez, el 20 de abril de 1987.

5 Entrevista con el exministro del Interior, José Gagliardi Schiaffino, el 1 de julio de 1987.

6 *Ibídem*.

7 *Ibídem*.

8 La primera lista de requisitoriados, del 13 de octubre, había tenido setenta nombres. Varios habían sido capturados desde entonces, y nuevos nombres se habían añadido.

9 Apreciación de la situación en la zona de emergencia del departamento de Ayacucho. Jefatura de Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia, Estado Mayor Conjunto, 1 de noviembre, 1981.

10 Apreciación de la situación en la zona de emergencia del departamento de Ayacucho. Jefatura de Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia, Estado Mayor Conjunto, 27 de noviembre de 1981.

11 Entrevista con el general Carlos Barreto, el 1 de agosto de 1987.

12 Orden de operaciones conjunto “Rasuhuilca”. Jefatura de Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia, Estado Mayor Conjunto, 7 de diciembre de 1981.

13 Apreciación de la situación en la zona de emergencia del departamento de Ayacucho. Jefatura de Operaciones Policiales de la Zona de Emergencia, Estado Mayor Conjunto, 27 de noviembre de 1981.

14 Entrevista a Héctor López Martínez, el 6 de mayo de 1987.

15 *Violencia política en el Perú: 1980-1988*. Lima: Desco, 1989.

XIV. Ciudad dominada

GOLPE DE MANO EN AYACUCHO

A partir de enero de 1982, las fuerzas policiales perdieron la iniciativa frente a Sendero en el ámbito de la zona en emergencia. Fue un proceso con algunas contramarchas y respiros, acentuado en el campo y gradual en la ciudad. Pero antes que el año terminara, la inescapable realidad fue que Sendero emergía victorioso en Ayacucho.

El 6 de enero, Sendero tomó el pueblo de San José de Secce por tercera vez. Las dos veces anteriores, la dotación de la Guardia Civil había sido dominada, y también lo fue en la tercera. El grupo de ataque llegó a caballo al caer la noche. Mientras el contingente mayor rodeaba el puesto de la Guardia Civil, otro destacamento buscó al gobernador del pueblo, Alberto La Rosa Quintanilla, para matarlo. Un año antes, luego del ataque del 11 de enero de 1981, La Rosa había encabezado un grupo de vecinos que salió en persecución de los senderistas, capturó a algunos, y los entregó a la policía.

Entre la oscuridad densa, la lluvia y la confusión que creaban los disparos y las explosiones sobre el puesto cercano, La Rosa logró escapar. La resistencia en el puesto policial, entre tanto, se conformó a la más exigente concepción de brevedad. Minutos después de rodeado el puesto, los policías se rendían. Despojados de uniformes, calzado y armamento (dos metralletas, una carabina, dos revólveres y cuatro cajas de dinamita recientemente confiscadas), los policías fueron mantenidos prisioneros mientras duró la incursión senderista. El puesto fue completamente demolido con cargas de dinamita.

Días después, una patrulla policial llegó a San José para evaluar los daños. Casi todas las autoridades locales, y buena parte de los vecinos, ofrecieron reconstruir el puesto destrozado, y pidieron que la guarnición se incrementara.

El comando de la Guardia Civil en Lima había decidido, empero, retirarse del pueblo y también de otras zonas amagadas. La decisión de “replegar los puestos” (como se llamó a la medida), fue de hecho un abandono del campo, la concesión del territorio a Sendero.

El significado de esa primera derrota implícita fue percibido en los caseríos, pueblos y comarcas del campo ayacuchano. Las autoridades civiles aprendieron pronto que la única forma de sobrevivir era escapando o sometién dose a Sendero. Los otros pobladores, aquellos que en poblaciones tan diferentes como Chuschi o San José se habían agrupado para perseguir a los primeros grupos senderistas, comprendieron lo mismo que sus autoridades. En el campo se hacía

claro el mensaje: oponerse a Sendero era llamar a la muerte. Los puestos abandonados, los escudos de la Guardia Civil descolgados, y las vagas promesas de retorno de los policías que partían, reforzaron el mensaje con la misma elocuencia que las cartas anónimas deslizadas bajo la puerta en la noche, y las incursiones sorpresivas, perentorias, cada vez más frecuentes de Sendero.

Los ataques no se confinaban al campo. El mismo día de la incursión a San José de Secce hubo dos atentados en la ciudad de Ayacucho. En el primero, un guardia civil fue herido y despojado de su metralleta y revólver. En el segundo, el guardia republicano Adrián Ramos Flores fue muerto —y su armamento también arrebatado— en el cerro Acuchimay. Cuando escolar, Ramos Flores había sido tambor en la banda de música de la Gran Unidad Escolar “Mariscal Cáceres”. No era improbable que alguno de sus asesinos hubiera sido su compañero de aula o de colegio.

A la vez, Sendero confrontaba varios problemas. Un número importante de sus cuadros operativos había sido arrestado. Gente como Hildebrando Pérez Huarancca, Edith Lagos, Carlos Alcántara, Eucario Najarro, Amílcar Urbay. De otro lado, Maximiliano Durand seguía preso, y Sendero abocó considerables energías para lograr su libertad. Inteligentemente efectuado, el esfuerzo por liberar a Durand utilizó un perfil bajo. Proclamó, a través de una campaña internacional de cartas al gobierno peruano, que Durand era solamente un científico empeñado en la investigación de formas alternativas de energía y su aplicación en el Perú. Su mundo, se sugería, no iba más allá de los hornos de biogás, los molinos de viento, los calentadores solares. Una carta, por ejemplo, publicada en *Caretas* el 18 de enero, enviada desde París y firmada por cerca de seiscientas personas encabezadas por el escritor Julio Cortázar, sostenía que:

La carrera universitaria del doctor Duran [sic] es conocida en el Perú y en el extranjero [...]. Su constante preocupación por poner sus conocimientos científicos al servicio del desarrollo de una alternativa tecnológica independiente en el Perú, lo ha convertido en el mundo científico [...] en un especialista de fama internacional.

La carta exigía, de otro lado, la liberación de más de ochenta y seis campesinos encarcelados “como consecuencia de la aplicación del DL 046, que viola los derechos más fundamentales del pueblo peruano”.

Pocos días después, Durand fue liberado por el Segundo Tribunal Correccional de Ayacucho. Luego de un corto lapso en el Perú, salió del país hacia Francia, donde “su constante preocupación” en los años siguientes iba a ser la organización de la red de apoyo internacional a Sendero.

Mientras otros dirigentes pugnaban también por lograr su libertad por la vía legal, Sendero puso en efecto la consigna de impulsar y ejecutar acciones de fuga donde fuera posible. Todos eran necesarios para la radical intensificación insurreccional que se planteaba en los meses siguientes.

En por lo menos una circunstancia, gestiones para lograr la libertad dentro de la vía legal continuaron, por descoordinación o error de buena fe, paralelamente a los intentos de fuga. Así, a principios de marzo, *Caretas* recibió una carta de la madre de Isabel Sánchez Cobarrubias, detenida por presunto terrorismo en Arequipa. La carta solicitaba su libertad por “no habersele demostrado participación alguna en actos fuera de la ley”. Y terminaba en forma intensa.

Ruégole escuchar el pedido angustioso de una madre desesperada y de una inocente criatura de apenas cinco años de edad, mi nieta, que necesita a su madre, a quien le hacen la vida imposible en ese lugar que dice ser Centro de Readaptación Femenina y que de tal no tiene nada.¹

La carta fue escrita el 23 de febrero. El 1 de marzo, Isabel Sánchez Cobarrubias y otra detenida por presunto terrorismo, Nelly Chávez Díaz,² fugaron de la cárcel con ayuda externa, matando a balazos al cabo de la Guardia Republicana, Luciano Puma Sierra.

El 28 de febrero, un intento masivo de fuga fue abortado cruentamente en la cárcel de Ayacucho. Cuatro presos senderistas murieron en el intento,³ y otros dos, Eucario Najarro y Amílcar Urbay, fueron heridos gravemente y enviados al hospital regional de Huamanga.

Había otros senderistas internos en el hospital, entre ellos Carlos Alcántara, a quien se le había diagnosticado osteomielitis, y Russel Wensjoe, un joven limeño de familia relativamente acomodada, que había unido su suerte a la de Sendero. Wensjoe, no obstante, había sido exculpado por un tribunal y se encontraba con orden judicial de libertad.

Rumores insistentes, afirmando que aquel había sido solo un sangriento ensayo de orquesta, circularon con insistencia en las horas siguientes. El 1 de marzo, el servicio de inteligencia de la Guardia Republicana, en Lima, tuvo información sobre un inminente ataque armado a la prisión en Huamanga, y la comunicó a Gagliardi.

Este actuó en consecuencia. “Yo le di crédito a la información. No solo que advertí a la policía, sino que mandé veinte hombres de refuerzo”. También ordenó que se previniera por radio al jefe departamental de la Guardia Republicana, comandante Víctor De la Cruz. A la vez, personal de la Dirección de Inteligencia de la Guardia Republicana en Lima se comunicó por teléfono con el jefe del destacamento de la cárcel de Huamanga, el subteniente Herbert Rosenberg, y remachó la advertencia.

Cuando llegaron los refuerzos, sin embargo, el comandante De la Cruz decidió que no valía la pena fatigarlos, considerando que la información que le había llegado no tenía fecha precisa. En la cárcel, entre tanto, no se había tomado ninguna precaución especial. Solo siete guardias se encontraban en servicio, apenas un tercio de los veinte efectivos que debían hacer guardia en circunstancias normales. Así, al caer la noche del 2 de marzo, los veinte efectivos de refuerzo de la Guardia Republicana descansaban o dormían en su incongruente cuartel general, un local que había funcionado por algunos años como restaurante especializado en pescado, y que aún retenía su nombre: “Las Agallas de Oro”.

Los otros jefes policiales, el coronel de la Guardia Civil Carlos Delgado Matallana y el coronel de la Policía de Investigaciones Andrés Morales Vega, no habían recibido en forma clara la información sobre el posible ataque. No había ninguna alerta especial. En el Hotel de Turistas empezaba una fiesta, que se prolongaría hasta cerca de la medianoche.

En Lima, Gagliardi salió con su familia a una reunión, y apagó la radio en su auto. López Martínez mantenía la suya encendida.

A las 7 p. m., en Ayacucho, tres personas, con uniformes de oficiales de la Guardia Civil, llamaron a la puerta de la casa del camionero Melquiades Acosta y le pidieron su camión para transportar personal. Acosta se negó, con toda razón, puesto que estaba borracho, y les recordó que la policía tenía sus propios vehículos, “a lo que respondieron los pseudooficiales que en efecto disponían de vehículos para el transporte de poca capacidad de pasajeros, por lo que reiteraban su petición, optando el propietario por obedecer y conducir su camión hacia el reservorio ubicado en la urbanización Mariscal Cáceres, llevando consigo a su ayudante Medardo Acosta Vásquez, de veinticinco años”.⁵

Al llegar al reservorio, los Acosta fueron encañonados, reducidos, amarrados y amenazados. De puntos cercanos donde habían estado escondidos, emergieron algunas decenas de personas, “los cuales se dividieron estratégica y ofensivamente la ciudad en un auténtico Plan de Operaciones Tipo Comando [sic] con misiones específicas de atacar los locales GC, GR, PIP y los domicilios del prefecto del departamento y presidente de la Corte Superior de Ayacucho [...] con la finalidad de impedir que las fuerzas del orden frustren la fuga masiva que habían planeado para el CRAS de Ayacucho [...] que iba a ser atacado como objetivo principal”.⁶

En las tres horas siguientes, los grupos senderistas de ataque se distribuyeron calladamente hacia los objetivos asignados. El camión había sido aparcado cerca a la parte trasera de la cárcel. A las 11:45 p. m. empezó el operativo. El guardia republicano Florencio Aronés, el único policía que se encontraba en un torreón situado en la parte de atrás del penal, fue abatido por francotiradores. De inmediato, guerrilleros senderistas bajaron al penal con escaleras de cuerda, y se abrieron camino con explosivos entre las verjas y muros que separaban un ambiente del otro. Los senderistas presos se habían agrupado ya y se sumaron organizadamente al grupo atacante.

El ataque más intenso, entre tanto, se hacía contra el ingreso principal de la cárcel, donde se encontraba la mayoría de los guardias republicanos. Una nutrida concentración de disparos y dinamitazos destruyó un techo, un muro, varias puertas y ventanas. En los primeros momentos cayó muerto el guardia republicano José Rea Conde, y desde entonces los guardias republicanos restantes abandonaron todo propósito de lucha, “protegiéndose y escondiéndose en los diferentes compartimientos de la oficina del indicado centro penal, por la mayoría de elementos subversivos en armas, potencia de fuego y efectivos”.⁷

A la vez, pequeños grupos de francotiradores habían abierto fuego sobre el local de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Los balazos iniciales habían sido secundados por dinamitazos. Cuando algunos policías fueron heridos, el resto se parapetó como mejor pudo dentro de sus cuarteles y, en cada caso, quedaron encajonados.

En las calles de Ayacucho, grupos volantes de senderistas se dedicaron a cazar a los policías aislados que se encontraban haciendo servicio de centinelas. Luego de que el guardia que vigilaba la casa del prefecto Marciano Caveró fuera herido y el local de la Corte Superior ametrallado, las calles quedaron vacías de policías. En menos de media hora, Sendero había logrado el control efectivo de Ayacucho.

En Lima, López Martínez fue ubicado en su casa e informado sobre un ataque senderista generalizado sobre la capital de Ayacucho. Bastaron algunas preguntas para comprender que la policía apenas controlaba sus locales. Cuando el viceministro estableció contacto radial personal con Ayacucho, pudo escuchar los sonidos de la desesperación en las comunicaciones que le llegaban de los cuarteles asediados. Gritos e insultos histéricos se mezclaban con el tableteo descontrolado de metralletas y el sonido rotundo de las explosiones. López Martínez se comunicó con el presidente Belaunde y le informó sobre lo que parecía un descalabro inminente. Belaunde se puso de inmediato en contacto con el ministro de Guerra, general del Ejército Luis Cisneros Vizquerra, y le pidió una apreciación inmediata de la situación. ¿Debían salir los soldados del cuartel Los Cabitos a salvar a los policías y retomar la ciudad?

Mientras, las comunicaciones que López Martínez recibía eran de angustia creciente. El coronel PIP Andrés Morales Vega pedía, en términos desesperados, el socorro de la tropa de Los Cabitos. De otro modo, decía, los senderistas iban a hacer una carnicería de policías.⁸ Tanto en la voz de Morales Vega como en los ruidos de fondo se percibía la desmoralización, la sorpresa total del ataque. En la Novena Comandancia de la Guardia Civil la situación era apenas mejor.

Una mayor cantidad de efectivos senderistas la había rodeado, y el fuego de hostigamiento era más serio que en otras partes. Durante más de media hora toda la guarnición policial no atinó a efectuar ningún contraataque coordinado, y permanecieron inmovilizados dentro de su local. Solo entonces el coronel Delgado Matallana logró controlar el perímetro de su cuartel y organizó un grupo de sinchis, al mando del capitán Guillermo Linares Bay, al que dirigió hacia la prisión, donde era evidente que se desarrollaba la operación más importante de Sendero.⁹

Desde el cuartel de la Guardia Republicana, el comandante De la Cruz —según explicó después— había encomendado a un capitán que acudiera con refuerzos a la cárcel. Pero, añadió que este, hostigado, había permanecido parapetado hasta que terminó el ataque. Sin embargo, los ventanales amplios de las “Agallas de Oro” no habían sufrido vidrios rotos, ni tampoco había impactos visibles de bala sobre las paredes.¹⁰ En cuanto a la Policía de Investigaciones, solo se pudo ver un impacto de bala de fusil sobre una cornisa de su cuartel.¹¹

López Martínez, entre tanto, se comunicó nuevamente con el presidente Belaunde: “Me dijo que había hablado con Cisneros. Que en Los Cabitos le habían dicho que la policía no tuvo capacidad de respuesta, que se habían atrincherado, que él consideraba [Cisneros] que la salida de Los Cabitos podría ocasionar un caos mayor, ya que Sendero se estaba retirando”.¹² Sin intentar siquiera cerrar las carreteras de salida de Huamanga, el Comando del Ejército se abstuvo de actuar, cuando el hacerlo hubiera podido significar un cambio importante en el resultado de la operación senderista.

A esas alturas, la fuga del penal ya había terminado. Dueños del área, los senderistas habían liberado a todos sus prisioneros en la cárcel. Aparte de setenta y ocho presos inculcados y sentenciados por presunto terrorismo, otros ciento sesenta y nueve detenidos por delitos comunes fugaron también. Entonces, mientras los evadidos se organizaban y parte de ellos subía al camión, la lucha arreció de nuevo.

El capitán Linares Bay y su grupo de sinchis, luego de sostener un tiroteo y hacer retroceder a los senderistas que atacaban el primer sector de la Guardia Civil, habían proseguido avanzando, hasta llegar a las inmediaciones del penal. Entonces se vieron confrontados por el principal contingente senderista de contención. En el corto y furioso tiroteo, casi a quemarropa, fueron heridos Linares Bay y otros dos sinchis, y el resto del grupo fue obligado a retirarse. Los senderistas también sufrieron bajas importantes en el choque. Entre ellas, apretando una vieja metralleta Star, arrebatada a la policía en un asalto anterior, el médico Eduardo Mata Mendoza reveló, al morir, su filiación.

El tiroteo con el grupo de Linares Bay indicó a los senderistas que su situación era ya precaria. El efecto sorpresa, que había logrado resultados paralizantes hasta ese momento, empezaba a diluirse, y el operativo podía terminar en desastre. La inmediata evacuación de la ciudad fue tan apresurada que los cadáveres de los senderistas caídos en el enfrentamiento no fueron, contra todas sus costumbres, recogidos. Es más, varias armas, por cuya conservación Sendero hubiera hecho normalmente sacrificios mayo-res, fueron abandonadas.¹³

En el apuro por salir de la ciudad, los planes previstos para liberar a los senderistas internos en el hospital fueron desechados.

El grueso de los senderistas iba en el camión secuestrado a los Acosta. Al salir de la ciudad, pararon en una estación de gasolina y abastecieron el tanque. Luego, pasando frente a la garita de control policial en la Vía de los Libertadores, la cubrieron a balazos, sin encontrar oposición, y se perdieron en el camino hacia Huancavelica.

En el hospital, la inquietud había crecido desde que empezó la balacera. Situado cerca al

cuartel de la Guardia Republicana, los sonidos del combate se habían sentido próximos. Luego, a la medianoche, mientras la ciudad estaba aún tomada por Sendero, llegaron algunos carros particulares trayendo a policías heridos. El portero de noche, Jesús Huasasquiche, registró su ingreso con letra apresurada. Cuando la balacera cesó, alrededor de la 1 a. m., hubo un período de relativo silencio, que duró cerca de una hora. En algún momento corrió la voz que los senderistas se aproximaban, y ello provocó esperanza en algunos y miedo en la mayoría. Desde las 2 a. m., Huasasquiche anotó varios ingresos continuados:

2:00 Ingresa carro Guardia Civil emergencia.

2:02 Ingresa carro Guardia Republicana con teniente coronel, a informarse.

2:21 Ingresa carro Guardia Republicana con personal.

Alrededor de una docena de guardias republicanos, con el subteniente Rosemberg entre ellos, entraron al hospital. Venían “ebrios de derrota” y decididos a tomarse la revancha con los senderistas enfermos y heridos en el hospital. La turba armada, a la que también se había integrado algún guardia civil, se dividió por el pasillo principal y el de cirugía.

Disparando en los pasadizos, el grupo de policías obligó a gritos al personal del hospital a meterse en las habitaciones. Ingresando a los dos cuartos donde estaban los principales internos senderistas, sacaron a rastras y a golpes a Russel Wensjoe, Carlos Alcántara y Amílcar Urbay. Los guardias republicanos que los custodiaban, que en los minutos anteriores habían temido por sus propias vidas, permitieron que los prisioneros les fueran arrebatados.

Eucario Najarro, que había recibido varios balazos en el intento de fuga del día 28, y se encontraba esperando una tardía cirugía, estaba con la cara cubierta por una mascarilla de oxígeno, y conectado a una botella de suero por una sonda intravenosa. Varios policías lo golpearon, le arrancaron la mascarilla de oxígeno y la sonda. Uno de los guardias empezó a estrangularlo con las manos. Como Najarro no sucumbía, cogió la sonda, se la pasó por el cuello, y con otro guardia que tiraba del lado opuesto, lo estrangularon hasta que Najarro cesó de moverse.

Entre tanto, Urbay, Alcántara y Wensjoe eran sacados del hospital. El auxiliar de enfermería Víctor Melgar increpó a los guardias, pero fue amenazado con armas y obligado a entrar a un cuarto. En otro lado, algunas enfermeras y pacientes rescataron a Filipina Palomino, cuando otros guardias ya la llevaban. El custodio de un preso común lo salvó a duras penas, al explicar a los linchadores que no se trataba de un terrorista.

La enfermera Julia Huayhualla entró al cuarto de Najarro cuando los guardias y sus víctimas salían. Najarro estaba con el rostro cubierto por una frazada, e inmóvil. Huayhualla le puso de nuevo el oxígeno y el suero y Najarro respiró, recobró poco a poco los signos vitales. Casi al mismo tiempo, Wensjoe, Urbay y Alcántara eran asesinados a balazos en las afueras del hospital. Najarro iba a vivir aún otros cuatro años. El 18 de junio de 1986, cuando Sendero se amotinó en los penales de Lima, Najarro se encontraba en El Frontón, entre los alzados. Antes de la noche del 19 de junio, murió junto con las docenas de otros senderistas que cayeron en los dos días de motín, batalla y matanza.

Al amanecer del día siguiente, muchas cosas habían cambiado irreparablemente. Las más evidentes, por cierto, eran las celdas abiertas y vacías en la cárcel de Huamanga. Y, frente a los miedos y las histerias de la noche anterior, las fachadas relativamente intocadas de las comandancias policiales, especialmente de la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana, resaltaban en contraste casi obsceno. En diversos puntos de la ciudad, familiares o

funcionarios recogían cadáveres y los amontonaban, en el piso de la morgue, cubiertos por frazadas de lana algunos, desnudos otros.

Durante el miércoles, mientras se recibían los primeros informes gramaticalmente coherentes desde Ayacucho, se hacía evidente que la derrota se veía agravada por el crimen en el hospital. Gagliardi, cuya decisión de mandar refuerzos el día anterior había sido viciada por el comandante de la Guardia Republicana en Ayacucho, vacilaba entre indignarse y no comprender. Militar reglamentarista al fin, Gagliardi ordenó a los jefes policiales que llevara a juicio a quienes, por negligencia o ineptitud, habían permitido un desastre que pudo haberse evitado en su totalidad. “Entonces hubo una negligencia del jefe de la Guardia Republicana, el comandante De la Cruz, que no solo no hizo nada, sino ni siquiera se tomaron disposiciones especiales en la cárcel. La medida que tomé fue que los directores superiores hicieran las investigaciones del caso y sometieran a juicio”.¹⁴

Dada la orden, el ministro pensó que se cumpliría. Sin embargo, el comandante De la Cruz no solo sobrevivió institucionalmente a Gagliardi, sino también, el año siguiente, a las iras del general Noel. Transferido a Lima, fue despedido en el aeropuerto por sus oficiales con guitarras y abrazos lacrimosos. De la Cruz no era, obviamente, competente, pero sí popular entre los suyos. Sus superiores se esforzaron por ponerlo al abrigo de las miradas de Gagliardi hasta que las cosas fueran olvidadas. “Quizá nuestra mayor falta”, admite López Martínez, “fue el no haber controlado el manejo interior en las instituciones policiales, en ver que esa gente fuera a rigor. Se descargaba responsabilidades en los subordinados, lo que para Gagliardi era normal”.¹⁵

El jueves 4, en la mañana, ya había certidumbre sobre lo que había sucedido en el hospital. Pese a ello, el primer informe oficial sobre los sucesos, hecho por el general de la Guardia Civil, Walter Andrade, mencionaba a las víctimas del hospital dentro de “los diez civiles muertos, todos ellos terroristas [...] como consecuencia del atentado subversivo descrito anteriormente”.¹⁶ Solo se indicaba, sin explicarlo, a modo de salvar responsabilidades personales, su condición de hospitalizados.

Pero lo sucedido era ya evidente. Asqueado y abrumado, Gagliardi pidió a López Martínez que le preparara el texto de su renuncia al cargo. Este lo persuadió a no renunciar, sino preparar un comunicado y ordenar una investigación. Gagliardi aceptó.

El comunicado se hizo público un día después del Consejo de Ministros del 5 de marzo,¹⁷ donde se escucharon las sombrías novedades. Su redacción, entre cautelosa y confusa, informaba sobre la constitución de una comisión investigadora y prometía no omitir esfuerzos “para esclarecer debidamente la forma en que ocurrieron estas muertes, a fin de sancionar ejemplarmente, como señala la ley, a los responsables de las mismas”.¹⁸

La comisión del Ministerio del Interior, encabezada por el abogado Nicolás de Piérola y Balta, y la del Ministerio de Justicia, que dirigió el viceministro Federico Tovar, aclararon lo que restaba por aclarar. Algunos guardias republicanos, con el subteniente Herbert Rosenberg a la cabeza, fueron procesados por los asesinatos.

El viernes 5 de marzo, varios cortejos fúnebres convergieron al cementerio de Huamanga. Los más concurridos fueron los que acompañaron el cadáver de Carlos Alcántara, muerto a los veinte años, e importante cuadro operativo de Sendero, pese a su juventud. Un grupo numeroso coreó consignas senderistas al enterrarlo. Poco después, otro cortejo enterró en el mismo cementerio los restos del guardia republicano Florencio Aronés, apenas mayor que Alcántara, entre algunos discursos y mudo dolor.

En Lima, las reacciones al ataque cubrieron el espectro entre lo posible y lo surreal. El

diputado del Partido Popular Cristiano, Celso Sotomarino, afirmó de nuevo que el terrorismo era importado de Cuba y pidió que se rompieran relaciones con Fidel Castro. El presidente Belaunde ensayó el exorcismo. Se trataba, afirmó, de la alianza proterva entre terroristas y narcotraficantes, entre “el vicio y la violencia”.¹⁹ La semana siguiente, Lima quedó parcialmente a oscuras, por la voladura de una torre de la central del Mantaro y hubo varios atentados. Por primera vez se arrojaron explosivos contra un ala del Palacio de Gobierno. Eran explosivos de poca potencia, cuyos efectos fueron más simbólicos que reales. Sin embargo, en el Consejo de Ministros, se discutió formalmente sobre si debería intervenir ya las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero. Belaunde inclinó la decisión a favor de mantener la contrainsurgencia a nivel policial.

Dentro de la izquierda marxista, el efecto de la incursión senderista en Ayacucho fue de sorpresa y, en algunos casos, de galvanización. Organizaciones relativamente cercanas a Sendero, como Pukallacta, empezaron a desechar reservas respecto a comprometerse en el camino violento. El órgano central de esa facción declaró que los sucesos de Ayacucho, “el asalto al CRAS y la liberación de detenidos en las mazmorras”, había remecido a “la pseudoizquierda electorera [...] en sus cómodos sillones que les brinda la legalidad burguesa”.²⁰ Pero más importante que sus diatribas respecto a Izquierda Unida era la posición que asumían frente a Sendero. Reconocían que esta era “una organización revolucionaria, el aliado más cercano a nuestro partido”, que había asumido “con consecuencia, decisión y audacia” la lucha armada. Añadían que “apoyamos a SL y respaldamos sus acciones mediante acciones concretas de contenido político y militar”, y que “las discrepancias teóricas y políticas que tenemos con SL son de carácter secundario y que se irán contrastando y resolviendo en el terreno concreto de la práctica revolucionaria”.²¹

La incorporación de Pukallacta iba a robustecer considerablemente a Sendero, sobre todo en la sierra central.

Sendero celebró con exaltación la incursión a Ayacucho. En el principal documento publicado durante los primeros años de la insurrección, *Desarrollemos la guerra de guerrillas*, se describe hiperbólicamente el “asalto a la cárcel pública de Ayacucho [...] acción heroica, que marcando un hito histórico [...] arrancó a nuestros camaradas y combatientes de las mazmorras del reaccionario Estado del Perú. [...] Nuestra guerra de guerrillas, con la audacia, el esfuerzo y la sangre de los soldados del pueblo, se ha fortalecido y conquistado un gran salto en su desarrollo”.²² Al referirse a los asesinatos en el hospital de Ayacucho, reconocían como militantes senderistas a las tres víctimas, “nuestros aguerridos camaradas”, denunciando sus muertes como “execrable asesinato” y a los asesinos de haber procedido “cobarde, abyecta y miserablemente”. Y prometían venganza “por más años que pasen entre el crimen y la justa sanción que impondremos”.²³ Ocioso es indicar que los asesinatos senderistas, cometidos con el agravante de la sangre fría, eran descritos como “acciones contundentes que remecan las bases semif feudales del Estado”.²⁴

Al margen de la hipérbole, lo cierto es que la incursión de Sendero a la cárcel de Huamanga fue un rudo golpe para el Estado y la sociedad peruana. En ese momento, como en ningún otro anterior, hubo la conciencia plena de que Sendero había sido mal calibrado, combatido a ciegas y que su dimensión real, seguramente mayor que la supuesta, estaba aún por conocerse.

Para Sendero, el asalto a Huamanga y la fuga de la cárcel fue además el momento en que la “Primera Compañía” del embrionario ejército rebelde se constituyó, veintitrés meses después de haber decidido “forjarla en los hechos” en vísperas del “inicio de la lucha armada”.²⁵

A la vez la incursión era, en el esquema insurreccional de Sendero, la acción de “remate”

dentro del “segundo momento” (“Remover el campo”) del plan “Desplegar la guerra de guerrillas”. El siguiente paso, intensificar acciones y empezar a establecer formas de gobierno propias en las áreas controladas, mediante la formación de “comités populares”, debía seguir de inmediato.

Desde el punto de vista puramente militar, el ataque de Sendero fue un caso típico de los efectos abrumadores de la sorpresa sobre una tropa impreparada, mal dirigida y con pobre disciplina. A nivel táctico, el efecto aplastante que el uso inteligente de explosivos puede tener sobre la moral combativa de guarniciones encajonadas, fue una enseñanza evidente. Por desgracia, tanto esa como otras lecciones no fueron utilizadas para mejorar tácticas y procedimientos, y en los próximos meses volverían a aprenderse y a olvidarse en derrotas sucesivas.

-
- 1 *Caretas*, n. 688, 8 de marzo de 1982.
 - 2 Nelly Chávez fue recapturada en Cajamarca a fines de agosto de 1982. Al momento de ser aprehendida, vivía bajo el seudónimo de Sandra Mantilla. Era considerada la jefa política senderista de Cajamarca y había escapado seis veces de diferentes arrestos.
 - 3 Uno de los muertos, William Esquivel, estaba vinculado por lazos familiares a Sendero desde los días tempranos de la organización.
 - 4 Entrevista a José Gagliardi Schiaffino, el 1 de julio de 1987.
 - 5 Informe N° 01-9C-01-C, del general de la Guardia Civil Walter Andrade, jefe de operaciones policiales en la zona en emergencia, al director superior de la Guardia Civil. “Sobre acción subversiva en la ciudad de Ayacucho, la noche del 02 al 03 de marzo de 1982”.
 - 6 *Ibídem*.
 - 7 *Ibídem*.
 - 8 Entrevista con Héctor López Martínez, el 6 de mayo de 1987.
 - 9 Informe del general Andrade.
 - 10 *Caretas*, n. 689, 15 de marzo de 1982.
 - 11 *Ibídem*.
 - 12 Entrevista a Héctor López Martínez, el 6 de mayo de 1987.
 - 13 Entre ellas la metralleta Star que llevaba Mata, que había sido arrebatada en el asalto al puesto policial de Totos, el 31 de diciembre de 1981; un revólver 38, sustraído en el asalto a Tambo, el 11 de octubre de 1981; una carabina M-1, capturada en el asalto al puesto de Quinua, el 15 de agosto de 1981.
 - 14 Entrevista a José Gagliardi Schiaffino, el 1 de julio de 1987.
 - 15 Entrevista con Héctor López Martínez, el 6 de mayo de 1987.
 - 16 Informe del general Andrade.
 - 17 Entre tanto, Huamanga había sido declarada en emergencia por el Decreto Supremo 04-82-IN, del 3 de marzo.
 - 18 Comunicado 002. OCOMIN, 6 de marzo de 1982.
 - 19 *Caretas*, n. 689, 15 de marzo de 1982.
 - 20 *Pukallacta*, n. 30, abril de 1982.
 - 21 *Ibídem*.
 - 22 *Desarrollemos la guerra de guerrillas*, 1982, p. 5.
 - 23 *Ibídem*, pp. 5-6.
 - 24 *Ibídem*, p. 4.
 - 25 *A World to Win*, 1986/6, pp. 70-71.

XV. “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”

Desarrollemos la guerra de guerrillas fue redactado por Abimael Guzmán en la segunda quincena de marzo, e impreso y distribuido clandestinamente poco después. Fue la primera vez que el Partido Comunista - Sendero Luminoso, en cuanto tal, hacía pública su posición frente a la insurrección.

Desarrollemos la guerra de guerrillas es un folleto corto, de menos de treinta páginas, dividido en cuatro partes:

- 1) La lucha armada arde victoriosa.
- 2) La acción contrarrevolucionaria atiza nuestra lucha.
- 3) Se acentúa la crisis del orden reaccionario y el pueblo clama por la revolución armada.
- 4) Desarrollemos la guerra de guerrillas.

Aunque el documento es con frecuencia solo una proclama extensa, y una reiterada hipérbole: “Las invencibles y crecientes llamas de la lucha armada, [...] que en nuestro suelo, más pronto que tarde, se convertirá en rugiente huracán armado [...] no se agota meramente en la autoalabanza exaltada y la diatriba incondicional del gobierno”.

Desarrollemos la guerra de guerrillas proclamaba que Sendero había ejecutado dos mil novecientas acciones en veintiún meses de lucha. Reconocía la autoría de las acciones de sabotaje “que golpean y socavan el sistema económico y social de explotación imperante”; las tomas de fundos, y el asesinato de sus propietarios, “acciones contundentes, que remecan las bases semif feudales del Estado”; atentados contra “el imperialismo yanqui, principal dominador imperialista en nuestro suelo”; contra “la embajada china, siniestra guarida del revisionista Teng”; y, sobre todo, las acciones directas contra el Estado, “vitales y trascendentes” incluyendo los ataques a locales de Acción Popular, municipios, registros electorales. Los asesinatos se presentaban como “la escarmentadora acción contra connotados agentes represivos [...] y contra prepotentes gamonales y gamonalillos”; el robo de armamento de la Base Aeronaval del Callao, a través de un oficial de mar desertor, era “la importante incursión en la Base Aeronaval del Callao, que vanamente han pretendido ocultar”. La relación incluía la fuga de la cárcel de Ayacucho y los dinamitazos contra Palacio de Gobierno el 10 de marzo.

Según Guzmán, las acciones habían significado cuatro conquistas para Sendero: a) el temple

del Partido y sus cuadros, b) la formación de una fuerza armada a través de las acciones guerrilleras, c) el crecimiento de las acciones en calidad y cantidad, d) el surgimiento y desarrollo de zonas guerrilleras, ámbitos de las futuras bases de apoyo.²

La reacción del gobierno de Belaunde a la insurrección era calificada con un espeso racimo de invectivas. Al mencionar el Decreto Ley 46, el lenguaje guerrero, ebrio de alabanzas a la sangre y la destrucción, se transformaba momentáneamente en lenguaje abogadil: “Así, el denominado autónomo Poder Judicial [...] utilizando pruebas fraguadas, festinando trámites, torciendo leyes y vendiendo principios [...] muestra más a fondo su esencia contrarrevolucionaria poniendo más en evidencia las negras entrañas del sistema legal y del sacrosanto Poder Judicial”. La decisión de utilizar el papel sellado junto con la dinamita era clara desde el primer momento, aunque la Asociación de Abogados Democráticos no emergía aún como la institución especializada en el aprovechamiento eficiente de los márgenes legales.

En cuanto a las operaciones contrainsurgentes, *Desarrollemos la guerra de guerrillas* las calificaba de haber sido “el más rotundo fracaso”, en especial la declaratoria del estado de emergencia en octubre de 1981, y rechazaba la definición de “terroristas” que les daba el gobierno. A la vez, Guzmán repudiaba con indignación el que se afirmara ligazón alguna de Sendero con la Unión Soviética. La revolución, afirmaba, “no puede estar unida en modo alguno al más siniestro centro del revisionismo contemporáneo, que ha hecho de la patria de Lenin y Stalin la actual superpotencia hegemónica de hoy”.

Ello daba pie a una diatriba plural contra el Partido Comunista prosoviético, “viejos vendeobrereros al servicio de la colusión y pugna del social imperialismo con el imperialismo yanqui”; y contra el grupo prochino Patria Roja, “los ayer ‘enemigos’ de Teng Siao-ping y hoy sus adoradores, no pueden menos que atacarnos por combatir al socio imperialista yanqui de su nuevo amo y, más aun, por aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo que ellos ayer invocaron y hoy reniegan”. Ambos grupos y todos los otros partidos de la izquierda marxista legal eran definidos como “esa sucia y podrida nata que flota al vaivén de las olas, sirviendo de frágil sustento al burocratismo gremial y a falsos partidos proletarios”.

La descripción de la situación política y social no paraba mientes en contradicciones ocasionales. Las empresas estatales, por ejemplo, pasaban en una sola oración, de ser “una gran carga” puesta “sobre las espaldas del pueblo”, a convertirse, con apenas una coma de por medio, en una “suculenta ofrenda a las fauces insaciables del gran capital, especialmente norteamericano”.

En la evaluación del Estado enemigo, el gobierno de Belaunde era expresión clara de la “caducidad del orden demoburgués”, y los otros poderes del Estado democrático eran igualmente obsoletos e inservibles. El poder real, afirmaba *Desarrollemos la guerra de guerrillas*, descansaba en las Fuerzas Armadas, y a estas tampoco había que temerlas en exceso, “no olvidemos nunca que una fuerza armada en esencia, estratégicamente, solo tiene la fortaleza de la sociedad que defiende por más que tácticamente, se presente armado hasta los dientes”.

La situación actual, afirmaba Guzmán, solo tenía salida a través de la guerra, para la cual el pueblo peruano tenía la preparación de su larga historia de rebeliones campesinas. Con la prestidigitación conceptual tantas veces utilizada, él y su organización se transformaban en “nuestro heroico pueblo”, que lanzado a la violencia, comprendía que la lucha “tiempla, moviliza, organiza, politiza y arma y prepara para las grandes contiendas por venir”. Por eso, el Partido Comunista, “vanguardia organizada del proletariado” se había lanzado a la lucha, y desde enero de 1981, “por acuerdo del Comité Central”, a desarrollar la guerra de guerrillas, la parte

más ardua y prolongada de la “guerra popular”. Proclamándose autárquicos, “firmes practicantes del principio de apoyarnos en los propios esfuerzos”, Guzmán enfatizaba, no obstante, que ellos eran también “consecuentes seguidores del internacionalismo proletario”, bajo las banderas del “marxismo, leninismo, maoísmo [...] y pugnando por la revolución en nuestra patria servimos a la revolución mundial que combate y combatirá hasta que brille el comunismo sobre la faz de la tierra”.

El documento sufría de una redacción apresurada, abundante en adjetivos y redundancias, y pobre en argumentación. El último párrafo, en cambio, escrito con lenguaje bronco y sonoro, retrataba la emotiva beligerancia de Guzmán.

¡Pueblo peruano! Tu recia voz de trueno embravecido comienza a expresarse en el lenguaje vibrante y purificador de la violencia revolucionaria, de la lucha armada y en acciones guerrilleras, en guerra de guerrillas vas plasmando hitos de tu nueva historia, de tu historia definitiva. El gran camino está iniciado, será largo y difícil, pero el triunfo decisivo, pues, ¡salvo el poder, todo es ilusión!

Así, la seguridad de ir persiguiendo el fin último en la historia haría que en ese año, y los siguientes, decenas y centenares de jóvenes temblaran con las fiebres del milenio y acataran gozosamente la demanda de destrozarse sus carnes, pulverizar sus vidas, para hacer crecer el incendio.

La montaña y la Girona

Entre abril y mayo se reunió el VII Pleno del Comité Central de Sendero Luminoso, para preparar la más importante reunión del Partido desde 1979, la II Conferencia Nacional, que se realizó en mayo.

Culminada la II Conferencia Nacional, se llevó a cabo una reunión del Comité Central, para ejecutar sus acuerdos. Con el mismo propósito, se realizó una sucesión de reuniones en todos los comités regionales y zonales, que culminaron hacia agosto. El conjunto de eventos remeció a Sendero Luminoso desde sus cimientos.

Las primeras reuniones fueron previsiblemente autocongratulatorias. El asalto a la cárcel de Huamanga había sacudido al país. “Estamos en una situación muy favorable. Tenemos una brillante perspectiva”.³ Las marejadas internas que la acción había provocado en los otros partidos de la izquierda marxista fueron resaltadas. “El revolucionarismo⁴ ha renunciado a la violencia revolucionaria: esto ha creado problemas con sus bases”. A la vez, a nivel estratégico se había logrado que “las cuatro regiones actúen como una unidad”. Ello debería perfeccionarse, y en adelante, “como un solo campo de batalla concebir al país; un solo plan para el país”.

Con el escenario así preparado, se pasó al examen de la “acción principal” (el asalto a la cárcel de Ayacucho) y de las varias otras que habían sido planeadas coordinadamente. El cuadro que emergió era sorprendente.

El plan original de ataque al CRAS de Huamanga había sido hecho por el Comité Central de Sendero, con la intervención decisiva de Guzmán. En lo esencial, era la misma concepción ejecutada el 2 de marzo, especialmente en la parte inicial. “Plan sumamente audaz, maneja la sorpresa, potencia de nuestra acción. Idea brillante del plan; contener al enemigo en sus propios nidos; aniquilar”.

La versión original empero, suponía un asalto frontal a la cárcel. La guarnición del penal debía ser vencida y aniquilada, aunque se sufriera un alto número de bajas (“el Partido estaba dispuesto a pagar hasta treinta compañeros”), y todo el operativo no debía demorar más de cinco minutos. El objetivo era liberar cuadros para la “reorganización del Partido, aniquilamiento de las fuerzas del enemigo, y provocar la primera represión”.

El plan inicial había sido programado para ejecutarse el 28 de febrero. Las órdenes fueron transmitidas a los presos senderistas dentro del penal, y la hora del ataque, simultáneo con el motín, se fijó a las 10 p. m. En el resto del país se había instruido a todos los comités regionales para que prepararan escapes paralelos de los senderistas presos. En Arequipa, como se ha visto, se realizó una cruenta fuga el 1 de marzo. En Jaén, el plan para asaltar la cárcel había sido abortado por decisión del responsable del Comité Regional del Norte.⁵

En Ayacucho, el plan falló desde el inicio. Llegada la hora de la acción, “no había las armas y otros problemas. [...] Los compañeros de adentro a las 10.10 p. m. comienzan la acción”. Como se ha visto en el capítulo anterior, fracasó. Cuatro senderistas murieron y dos quedaron malamente heridos en el intento. El informe concluye ominosamente que “es una deuda de sangre de los compañeros responsables de la acción”.

¿Por qué había fallado el plan? Según el informe, por la tergiversación y mutilación del mismo por los responsables del Comité Regional Principal. “Se tergiversa que era muy ultra”. La oposición había provocado descoordinaciones. El jefe político de este comité, “César”, había asumido a último momento la dirección militar y contra él se enfilaron las críticas mayores. “El c. ‘César’ no se preocupa de la acción, solamente quería la gloria, gran general”. Y lo que era peor, a juicio del informe, luego de fracasado el intento del 28, cuando se replanteó la acción para el 2 de marzo, “por empuje de las masas”, la dirección del Regional elaboró un “Proyecto del plan”, lo que es visto como “oposición al plan del Comité Central [...] lo que querían era hacer ver que la acción se debía a ellos”.

El plan modificado dejó de lado el asalto al penal por la puerta principal reemplazándolo por la contención del retén policial, lo que fue duramente condenado por Guzmán: “No querían aniquilar la fuerza del enemigo, traición del principio básico de la guerra”. Y si bien era cierto que el resultado final había sido exitoso, la acción en sí había estado plagada de fallas. “La acción dura una hora dentro de la cárcel y los grupos de contención solamente tenían previsto para veinticinco o treinta minutos”. El responsable de todo esto era básicamente “César”, quien sin embargo, “cuando informa se ve que se presenta como el salvador, un caballero andante rescatando damiselas. El c. ‘Héctor’ da su informe totalmente distinto: un desfile de héroes montados en caballos de palo”.

Nadie reclamaba, en cambio, la paternidad del fracaso en el hospital; y aquí Guzmán descargó la artillería más gruesa contra el responsable del Comité Regional de Ayacucho. “‘César’ hace un plan paralelo para sacar a los compañeros del hospital. Se viste con las acciones del Partido, hace campaña pública de que el c. ‘Héctor’ era el responsable principal y los lauros para él”. Y esa actitud iba más allá del apropiarse de glorias ajenas: tenía un fondo conspirativo. “La cuestión es que quería bajar a Dirección, tirarse al secretario general y cambiar el rumbo del Partido. Se veía como un señor feudal, dueño del Comité Regional Principal [...] está por poder personal”.

Había llegado la hora de la decapitación. El héroe de una hora antes era ahora el paria moral. Solo restaba ver si esa primera manifestación de bonapartismo en Sendero había sido aislada o tenía un fondo conspirativo más extenso. Guzmán despejó pronto las dudas: “‘Héctor’ también

muestra disconformidad con el plan del secretario general, responsable de muertes en la retirada del pelotón. ‘Clara’ por conciliación tiene responsabilidad”. Las culpas no se circunscribían, empero, a Ayacucho. En el Comité Regional del Norte, había complicidad. “Los compañeros ‘Alberto’ e ‘Isabel’ también optan una posición de conciliación con los compañeros ‘César’, ‘Héctor’ y ‘Clara’”. Las denuncias contra los comandantes senderistas se hicieron entre el 5 y el 6 de mayo. El 10 de mayo, luego de que mensajes de las “bases” indicaran que dos tercios de Sendero estaban “por la defensa del Partido y sus principios”, Guzmán anunció que el debate había llegado al punto de crisis interna y que se hacía indispensable una toma de posición. No se trataba de algo personal, enfatizó, sino de un problema de línea: “O lucha en el seno del pueblo, o lucha antagonica”. El 15 de mayo se permitió que los dirigentes cuestionados expusieran su posición, luego de lo cual se realizó una sesión del Comité Central “sobre la lucha entre dos líneas, y [...] los problemas de cada camarada”. El 16 y 17 de mayo se prosiguió “destrozando los puntos de antagonización”, y luego de intensa “crítica y autocrítica”, se dio un respiro a los atribulados dirigentes ayacuchanos. Entre tanto, la presión se centró a fondo contra el responsable del Comité Regional del Norte, “Alberto” y su lugarteniente “Isabel”.

“Alberto” no tenía siquiera la gloria dudosa de una acción realizada. Tanto él como “Isabel” tenían “responsabilidades en la no fuga de los presos de Jaén, principalmente ‘Alberto’”. El ataque contra el responsable del Comité Regional del Norte, hecho por otro miembro del Comité Central, fue feroz: “Miente al Comité Central [...]. Se pone insolente con el Comité Central, [...] va a la reunión con presunciones, un individualista, petulante, especulador, habla con un lenguaje distinto del Partido, no tiene amplia sujeción al Comité Central [...] sus críticas son sin brillo, sin empuje [...]. Habla como patrón de hacienda [...]. Apuntó a pintar de negro al Regional Norte, que no habían condiciones para batir en el norte”.

El 21 y 22 de mayo, Guzmán tuvo la intervención decisiva. A estas alturas, la mayoría — incluyendo a las cinco víctimas— esperaban una demolición. Guzmán no defraudó a nadie.

“Son más de veinte días de reunión” —indicó— “y hay entramamiento. [...] Soy paciente por decisión, nadie va a dudar que hay una dirección que dirige la lucha armada [...]. Los reaccionarios despotrican contra el Partido y el ‘pensamiento-guía’, y cuatro estúpidos hacen lo mismo. El Partido no tiene miedo a antagonizar la lucha, hay que barrer el derechismo, la conciliación”.

Por lo contrario, era indispensable el reforzamiento de la disciplina y de la dirección centralizada. “Debemos imponer cueste lo que cueste la disciplina y con rigor; la menor debilidad implica muerte y hambre. Actuar con implacable severidad, quien no actúa así es un traidor [...]. Lenin preveía el costo de millones”.

Los cinco del Comité Central, agregó Guzmán, habían expresado resentimiento por haber sido tan ferozmente atacados. Ello indicaba claramente sus desviaciones: “Hay derecho, obligación y responsabilidad de combatir el error [...] la lucha armada tiene dos años, hay que entender que es el Partido el que la lleva adelante, tiene su cabeza, su dirección [...] el Partido no ha salido de la nada [...]. No podemos permitir que un complotista quiera destruir el Partido; o somos comunistas o somos complotistas”.

Los “complotadores” se sentían dolidos, añadió, lo que simplemente mostraba “adónde lleva el apartamiento de la línea general, de los principios [...] no se les ha pedido nada imposible, ellos lo han hecho imposible [...] piensan que no se reconocen sus aportes, [...] entran el batir, tienen gestos ridículos, hasta para servir una taza de café muestran descontento; quieren antagonizar porque quieren que se eleven otras alas [...] quieren hacer bulla para escindir, a más

no pueden llegar”.

Los de “la posición derechista” habían fracasado, “querían irse contra el secretario general, pero [...] la realidad es que aquí la mayoría es de izquierda, [...] estamos dispuestos a enfrentar la escisión. [...] Si algunos van a sus bases y escinden, son traidores”.

No existía el menor peligro de escisión. La abrumadora mayoría de delegados compitió en condenar en las formas más vivas y fulminantes al desventurado quinteto. Luego que los últimos vestigios de resistencia fueron aplastados, sepultados y vueltos a aplastar, Guzmán concluyó que se había alcanzado “una grandiosa victoria contra la derecha. [...] Lo único que queda es definir la posición de los compañeros”.

Derrotados y abrumados, los cinco dirigentes iniciaron el penoso proceso de la autocrítica: la admisión de haber errado, el señalar sus supuestos errores en los términos más duros, fustigándose implacablemente a sí mismos, agradeciendo a los demás por haberlos atacado, manifestando que su sometimiento al Partido, al “pensamiento-guía”, y su línea general, consignas, planes y programas, era completo, absoluto.

Cuatro autocríticas fueron aceptadas condicionalmente, con una fuerte llamada de atención, y la quinta fue rechazada, por “no romper ni deslindar” consigo mismo, persistiendo en una posición “taimada, artera”.

El orden, después de provocada la tormenta, había sido restablecido. Guzmán apuntó que “la lucha entre dos líneas ha sido la más intensa y profunda de todos los eventos”. Pero sus resultados habían sido óptimos, “Se ha unido el 90% del Partido [...] nunca se puede unir el 100% [...]. Así hemos sellado la gran unidad del Partido”.

La etapa festiva había terminado. Se había logrado también otra cosa: remachar la soberanía física y metafísica de Guzmán. Como lo dijo un dirigente: “El problema a fin de cuentas es un solo jefe [...] cada vez que el Partido se ha separado del ‘pensamiento-guía’ ha fracasado”. Y la única forma de tener un punto de referencia invariablemente certero en la inevitable lucha de contrarios, en la permanente lucha entre dos líneas, era “entronizando el ‘pensamiento-guía’ del camarada Gonzalo”. Esa perentoria necesidad dialéctica no había sido lo suficientemente entendida ni acatada por las desviaciones individualistas dentro del Partido, que por eso habían degenerado en un “complot derechista” contra la dirección. El aniquilamiento no había terminado del todo. Inmediatamente después de la II Conferencia, el Comité Central de Sendero se reunió en sesión plenaria para evaluar los acuerdos de aquella. En la primera reunión, visto que el criticado y autocriticado quinteto no había mostrado la necesaria mansedumbre, Guzmán arremetió contra ellos.

“Dejar de jugar con lloriqueos y lamentaciones en sus autocríticas [...]. El fondo es que quieren contrariar los acuerdos de la II Conferencia Nacional”. Y les advirtió: “No vayan a cuestionar su militancia [...] aquí no van a revocar acuerdos: se les expulsaría de inmediato. [...] Aquí el problema es que están disgustados con la sanción [...] lo ridículo es que pisan un lodazal individualista. [...] Debemos tener confianza y combatir el error, no hacerlo es traición. Algunos [...] lo que tienen es profunda personificación de pandilla [...] no tienen derecho de entrapar la lucha armada. [...] Siempre ha habido lucha entre dos líneas en el Partido, es una elemental norma de la línea comunista, quien concilia traiciona esa norma”.

El veredicto respecto al quinteto fue drástico: “Estos compañeros han sido puñales en la misión que les ha dado el Partido, la han traicionado. Tienen una obligación: ir a sus bases y deshacer los entuertos que han hecho. Deberán autocriticarse, viviseccionarse, tener una real actitud de cambio y no guardar los problemas”.

Era la degradación, el retorno a bases. Y suponía reorganizar, con la colaboración de los sancionados, la estructura del Partido clandestino. Se creó el Comité de Reorganización Nacional, para dirigir las purgas en medio de la acción.

En niveles inferiores de la organización senderista, una verdadera fiebre de críticas y autocríticas remeció los comités regionales y zonales, conforme fueron transmitidos los informes sobre los eventos de la II Conferencia. El ala radical de Sendero emprendió contra los más moderados. En el Comité Regional del Norte, por ejemplo, el auto sacramental fue efectuado con arreglo a las exigencias del género. Vale la pena reproducir parte de las críticas y autocríticas finales:

Arturo: Hemos podido observar que se ha llegado a acuerdos de suma importancia. [...] Manifiesto estar completamente de acuerdo con la Conferencia Nacional. [...] El “pensamiento-guía” está probado en la fragua de la lucha. [...] Las sanciones y medidas impuestas son justas. Condenar las posiciones derechistas, las maniobras de los compañeros responsables de la acción principal para torcer el plan señalado por el c. “Gonzalo” [...] repudio sus posiciones negras, apuntan a minar la unidad del Partido imputando de ultrismo al c. “Gonzalo”. [...] Quiero romper con quienes tienen esas ideas, repudiar, condenar. [...] Mi autocrítica por disconformidad con la campaña de Agiprop [...] he tenido aburrimiento estúpido, repudio esa actitud que he tenido.

Felipe: Asumo mis errores de dirigirme al c. “Gonzalo” no como jefe de nuestro Partido, de ser un irresoluto, condeno mi actitud negra; estoy por avanzar con unción lo que ha dicho el c. Gonzalo; estoy por barrer con eso, dispuesto a entregar mi vida.

Hernán: El c. “Gonzalo” ha dirigido magistralmente las contradicciones que se han dado [...] la magistral actitud del c. “Gonzalo” ha barrido esas posiciones. [...] Se acusa al c. “Gonzalo” de ultrista; han tergiversado plan de la acción principal. [...] Con todos los acuerdos de la II CN estoy de acuerdo. [...] Mi decisión de asumir lo que el c. “Gonzalo” sancione [...] pensemos a su imagen y semejanza. [...] Nadie más va a dirigir nuestra lucha que el c. “Gonzalo”.

Antonio: Cuando tengamos que tomar posición, hacerlo en forma firme y contundente. [...] El c. “Arturo” [...] solamente ha dado vueltas sin tomar lo fundamental. [...] Ha servido para desorientar a los demás compañeros. El c. “Misael” [...] tiene problemas con la violencia revolucionaria y no manifiesta si está dispuesto a entregar su vida.

Arturo: Asumo mi autocrítica; borro mi actitud [...] son lastres de la pequeña burguesía. [...] Quiero entronizar el “pensamiento-guía”.

Misael: Mi intervención [...] es una actitud del viejo mundo [...] asumo autocríticamente por romper y borrar [...] mi disposición por dar la cuota de sangre y por la entronización del “pensamiento-guía”.

Andrés: El c. “Arturo” no toma posición en lo medular [...] y el c. “Misael” acá no ha dicho nada [...]. Tiene problemas con la violencia revolucionaria, temor a la reacción.

Felipe: Considero que el c. “Arturo” debe expresar resueltamente su disposición [...] por el cumplimiento de este plan. [...] El c. “Misael” no asume lo que se le ha planteado.

Santos: Arturo y Misael no van a lo principal, siempre van por las ramas. [...] ¿Dónde está la sujeción? Deben autocriticarse clara y concretamente.

Arturo: La izquierda está alerta ante los problemas del derechismo que se expresan en mi persona. [...] Agradezco las críticas de los compañeros por ayudarme [...] manifiesto mi sujeción al “pensamiento-guía” y estoy por aprender del c. “Gonzalo”.

Misael: Los compañeros han señalado mis actitudes [...] que expresan miedo a la reacción, actitudes del viejo mundo. [...] Me autocrítico de todos esos errores y criterios podridos que no

ayudan. Estoy dispuesto a todo lo que se me señale. Estoy convencido que con la violencia revolucionaria conseguiremos todo.

Resulta interesante cotejar, en perspectiva, la suerte que corrieron los jefes de las fuerzas que libraron batalla en Ayacucho la noche del 2 de marzo. El comandante de la exitosa incursión guerrillera, “César”, fue degradado después de una sucesión implacable de ataques. El victorioso conductor de la operación en marzo, había sido pulverizado como dirigente a fines de mayo. La victoria, en su caso y el de sus lugartenientes, prologó su desgracia.

El jefe de la guarnición policial en Huamanga, en cambio, permaneció en su puesto. Ciertamente que el coronel Delgado Matallana cedió el comando por plazos breves a algunos de los generales policiales que llegaban y retornaban apresuradamente a Lima, pero al final volvió a tomar el mando de la plaza y del departamento, sosteniéndose con la amarga determinación del coraje sin fortuna, hasta las horas finales de la derrota policial.

Solo el comandante De la Cruz fue trasladado de Ayacucho, como se ha visto, por presión del ministro del Interior, y despedido en el aeropuerto entre brindis y rasgueos de guitarra por sus oficiales.

Que la victoria es la desgracia y que hay una cierta estabilidad en la derrota, fue la consecuencia para cada comandante en ambos lados del combate, una vez que la polvareda se hubo asentado. Guzmán decapitando a sus mejores dirigentes militares, y el gobierno aherrojado por la inercia y la incompetencia, dan por un momento la impresión de lograr el mismo resultado.

No fue así. La purga de los cinco miembros del Comité Central de Sendero estuvo estrechamente relacionada con una reorganización total del movimiento, que afectó todos sus ámbitos, desde lo doctrinario hasta lo táctico. Sus efectos se sintieron marcadamente hasta 1986 y por eso vale la pena detenerse algo más en los acuerdos de la II Conferencia, en sus motivos y sus consecuencias.

“Para hacer la guerra hay que ser filósofos”

La razón más importante tras la purga de dirigentes fue la necesidad de Guzmán de mantener control absoluto sobre el curso de la guerra. La inercia de éxitos modestos conspiraba contra su autoridad. El esquema de centralización estratégica y descentralización táctica era difícil de mantener en la práctica. Para los dirigentes de algunos comités regionales, como el principal, en Ayacucho, el control directo de la maquinaria del Partido, la participación en los riesgos y en la ingeniería de las victorias, hacía difícil la sumisión absoluta al jefe lejano.

Su relación con Guzmán tampoco era (en el caso de los veteranos) la de los fieles frente al profeta. Para ellos, Guzmán era sin duda el admirado *primus inter pares*, el conductor del Partido, pero aún era humano, todavía era falible.

Cuando Guzmán decretó acciones de fuga en todas las cárceles de la nación donde hubiera presos senderistas, teniendo como eje la acción en Ayacucho, es seguro que tenía en mente la inyección de cuadros que los liberados iban a significar como medio de contrapesar la sangría de

una purga futura.

Pero cuando envió un plan de acción detallado al Comité Regional de Ayacucho, y este lo desechó en parte, la decisión de llevar a cabo una verdadera revolución cultural en medio de la lucha parece haber sido tomada.

Para Guzmán, el evitar bajas propias a toda costa en ese punto de la guerra no era una demostración de eficiencia militar sino de estupidez política. Como se puntualizó, meses después, en un folleto explicatorio sobre el *Pensamiento militar del Partido*: “Para hacer la guerra hay que ser filósofos. El c. ‘Gonzalo’ se plantea políticamente las batallas, no técnicamente”.⁶

Una de las necesidades mayores de la insurrección en ese momento, para Guzmán, era multiplicar su efecto de conmoción. Ello se oponía tanto a la tendencia natural de todo comandante militar por conservar sus fuerzas, como al instinto de conservación personal y a la repugnancia por matar si era posible el evitarlo. De hecho, salvo excepciones, las acciones de Sendero no habían sido sistemáticamente sanguinarias hasta entonces.

Extraña situación, la del jefe del Partido en la posición más radical, fríamente feroz, mientras sus capitanes pugnan por seguir un curso más moderado y tratan de suavizar sus órdenes.

Definida la situación, Guzmán provocó la crisis en la II Conferencia. El objetivo era elevar exponencialmente el nivel de violencia de la guerra e imponer una autoridad absoluta sobre la organización. Tanatizar Sendero. Disponer literalmente de la vida y de la muerte de los suyos.

Encarnizar la guerra no era un fin en sí mismo, sino tenía definidos objetivos estratégicos y políticos. Antes de verlos, es mejor examinar los cambios radicales que supuso la II Conferencia para Sendero.

Simultáneamente con los “descabezamientos” y las purgas, la II Conferencia evaluó el estado de la insurrección, definió los planes de acción y expresó los nuevos alcances de la doctrina partidaria. Aquella fue una clara expresión del talento de Guzmán para el manejo partidario: cómo hacer una purga comprehensiva sin paralizar la organización, cómo ligar esa purga con el progreso de la guerra.

La evaluación de la insurrección fue optimista. “El Partido ha hecho más de tres mil quinientas acciones en dos años de lucha armada; más o menos, cinco acciones por día”. En enero de 1981 había empezado la larga etapa del “Desarrollo de la guerra de guerrillas”, que duraría hasta poco antes de lograr el equilibrio estratégico. Cada segmento de esa etapa debía ser organizado en planes jerarquizados, en forma que cada acto político o militar fuera parte del esfuerzo planificado y contribuyera a él. De otra manera, resultaría desperdiciado o, peor, sería contraproducente.

“El ‘Desarrollo...’ ha cumplido un gran papel”, anotó Guzmán en la II Conferencia. “Hoy el problema ya no es iniciar, es vencer, triunfar”, agregó. Para lograrlo, el Partido debía reajustar sus mecanismos, superar deficiencias.

El crecimiento del Partido y la insurrección era fruto de la aplicación disciplinada del método correcto, el “pensamiento-guía”. Para los efectos de la Conferencia —que no para los más exaltados de la apologética —el “‘pensamiento-guía’ es el marxismo-leninismo-maoísmo aplicado a nuestra realidad, [...] demostrado en la lucha entre dos líneas, línea militar y líneas específicas”.

Hasta ese momento el “pensamiento-guía” había sido la adaptación exhaustiva del “pensamiento Mao Tse-tung” a la realidad peruana; en la II Conferencia ya aparece como entidad conceptual propia, no como un instrumento del “pensamiento Mao”. Desde entonces, el “pensamiento-guía” pasaba a convertirse en lo que fue el “pensamiento Mao” durante la Revolución china: el joven árbol creciendo a la sombra de los dos robles venerables, Marx y Lenin, alcanzando eventualmente su altura.

Para que el “pensamiento-guía” empezara a tomar el lugar del “pensamiento Mao” histórico, era necesario canonizar a este, colocarlo al mismo nivel que Marx y Lenin. Si hasta 1981 Sendero había seguido refiriéndose al “pensamiento Mao Tse-tung”, como un desarrollo del marxismo-leninismo,⁷ en 1982, en “Desarrollemos la guerra de guerrillas”, se habla ya de “marxismo-leninismo-maoísmo”. Ello, por cierto, no pasó inadvertido ni en el Perú ni en los círculos maoístas internacionales.⁸ Al considerar al maoísmo como la tercera etapa del marxismo, Sendero lanzaba dos audaces afirmaciones simultáneas ante la escolástica marxista-leninista. La primera era explícita: el desarrollo maoísta se había concretado en parte fundamental del sistema. La segunda era implícita, si el maoísmo representaba ya un aporte redondo, acabado, el “pensamiento-guía” pasaba a seguir sus pasos jóvenes, llenar sus huellas, como el nuevo “desarrollo” del marxismo. En esas condiciones se llegó a la II Conferencia.⁹

La purga de los cinco dirigentes del Comité Central fue tanto más acerba cuanto que se los acusó no solo de haberse desviado del “pensamiento-guía”, sino de atacarlo. ¿Qué otra cosa era si no el haber desechado los planes del camarada Gonzalo, y el haberlo motejado de “ultrista”? Si Guzmán era ultrista, entonces el “pensamiento-guía”, creación suya, también lo era; y lo que esos dirigentes proponían era desecharlo. ¿Maoísmo contra Mao? ¿“Pensamiento-guía” contra Guzmán? ¡Solo a complotadores se les podía ocurrir semejante cosa!

La reacción contra los “complotadores” creó el ambiente propicio para la reafirmación exacerbada del “pensamiento-guía”. La II Conferencia “sancionó” la necesidad de “entronizar el ‘pensamiento-guía’ del c. Gonzalo”, y aprobó además la consigna partidaria de “aprender del c. Gonzalo [...] porque es sustento, es jefatura [...] porque es firme en los principios, mantiene el rumbo y lo materializa”.

De ahí en adelante, parte esencial del compromiso revolucionario iba a consistir en declarar la “sujeción absoluta al c. Gonzalo y al ‘pensamiento-guía’”, sin discusión ni crítica. Ya en la propia II Conferencia, el culto a la personalidad adquirió ribetes mesiánicos: “Debemos pensar de una sola manera, eso no es aherrojar el pensamiento de otras personas, el problema es que el ‘pensamiento-guía’ da sustento a toda nuestra acción [...] clave es entronizar el ‘pensamiento-guía’”.

La importancia dada a la ideología “correcta” adquirió un significado más específico. La ideología correcta era ahora el evangelio en construcción. “Nosotros tenemos la más alta ideología. [...] La clave es reunión en torno al ‘pensamiento-guía’ y a las políticas principales. Tenemos espíritu de doblegar todas las dificultades porque tenemos al ‘pensamiento-guía’ y eso es la clave”. Una de las conclusiones principales de la II Conferencia, sonaba como un credo: “Dos años de lucha armada nos dan una gran conquista: el ‘pensamiento-guía’, fusión del marxismo-leninismo, maoísmo con nuestra revolución; con él reconstituimos el Partido, con él iniciamos la lucha armada, con él conquistamos bases y con él triunfaremos”. Aquel fue uno de los triunfos más importantes de Guzmán dentro del Partido. En adelante, su voz sería decisiva; su voto, final. Y el trono en el que él y sus cogitaciones habían sido exaltados, no era un trono temporal sino el profético. Ya no podría ser derrotado por votaciones, solo por exorcismo. Y eso

no sería fácil.

Con las cabezas de los girondinos a sus pies, el profeta jacobino pasó de inmediato a delinear los principios estratégicos que se aplicarían desde entonces, y a definir los planes inmediatos.

La lucha era ahora por conquistar el poder. Y toda la lucha debería estar orientada por las siguientes “cuatro cuestiones sobre el poder”:

- 1) Luchar por un poder para el Partido y para el pueblo, y no por un poder para personas, individuos o caudillos. (Era para prevenir otros brotes de bonapartismo; en cuanto a Guzmán, quedaba implícita la paráfrasis, “el Partido soy yo”.)
- 2) El principio básico de la guerra: aniquilar las fuerzas básicas del enemigo y conservar nuestras fuerzas. No estamos por la preservación absoluta, va esto ligado al problema de la cuota.¹⁰
- 3) Batir: como eslabón inmediato para conquistar bases de apoyo.
- 4) Establecer bases de apoyo, que es [sic] médula de la guerra popular.

La segunda “cuestión” era el soplo helado de la montaña, cuyas consecuencias habrían de prolongarse hasta la matanza de los penales, en 1986. En resumen, Guzmán sostenía que no solo era necesario luchar por la revolución, sino morir por ella. La sangre era necesaria para atizar las llamas, el sacrificio para consolidar el odio.

“Nosotros somos gentes pletóricas de fe [...] en la IV Sesión Plenaria prometimos enfrentar el baño de sangre [...] no hay alguien que no sienta la sangre derramada de los hijos del pueblo [...] es necesaria la cuota; no han muerto, en nosotros viven y palpitan en nosotros”.

Al margen de la jerga partidaria, Guzmán había comprendido claramente, y desde el principio, que un factor común en todas las insurrecciones guerrilleras comunistas que habían alcanzado el éxito, había sido el alto costo social de la guerra. En Yugoslavia, China, Vietnam y la retaguardia soviética ocupada por los nazis, los guerrilleros comunistas habían confundido consistentemente los cálculos de sus enemigos, por su disposición a aceptar sacrificios enormes; provocando incluso represalias, a fin de polarizar irreversiblemente la guerra. La forma en que Guzmán entendía el principio de conservación de fuerzas nada tenía que ver con el cálculo numérico de un técnico militar, sino con la evaluación del efecto político y militar que tendría un sacrificio dado, en contraposición a la ventaja de la supervivencia para acciones futuras. Cálculo complejo, por decir lo menos, que Guzmán manejó con inalterable desapasionamiento.

Al comentar el costo de la guerra para Sendero, en diciembre de 1982, el documento sobre el *Pensamiento militar del Partido* menciona las ventajas del sacrificio: “Eso no es sino un buen comienzo, fructificante comienzo regado por buenas sangres. [...] eso no es sino el anticipo. [...] Si ayer, antes de ILA, no sabíamos lo que era perder vidas en acción armada en nuestro país, hoy lo sabemos. Esa sangre nos acera, [...] nos hace [...] más firmes para vadear cualquier río, para cruzar el infierno y asaltar los cielos [...] el costo, en último término, es pequeño”.¹¹

Poco después de la II Conferencia, una dirigente del Comité Regional del Norte entendió, en términos más simples, lo que se demandaba: “Nuestra lucha es una sola; entregar nuestra vida. [...] Tenemos que sacrificarnos y cumplir”.

Los escombros de El Frontón estaban aún a cuatro años de distancia.

¡Batir!

El mismo espíritu de radicalización de la guerra guio la elaboración del plan de “¡Batir para avanzar hacia las bases de apoyo!”. “¡Batir!” era la última etapa del plan de “Desplegar guerra de guerrillas”. Su función era la de actuar como eslabón con el futuro “Gran plan: conquistar bases”, que empezaría en enero de 1983 (y duraría hasta diciembre 1986). “¡Batir!” tenía importancia propia. Se trataba de presionar y consolidar la ofensiva en el campo, a fin de terminar con la presencia del Estado en las zonas guerrilleras, y montar los primeros “comités populares”, los órganos de gobierno senderista, embrión de las futuras bases de apoyo.

“¡Batir!” contemplaba dos campañas y un breve remate. Las consignas eran simples: el plan debía llevarse a cabo simultáneamente en todas las regiones, pero centrado en el Comité Regional Principal. En el campo, el lema era inequívoco: “arrasar”; en la ciudad, más condicionado: “movilizar, socavar, apoyar”. El campo era lo principal. El Comité Regional Principal actuaría como punta de lanza, con los otros comités en “emulación”. Había que “descoyuntar el poder de los gamonales, descompaginar el poder de las autoridades y golpear las fuerzas vivas del enemigo”, con un simple criterio territorial: “Limpiar la zona, dejar ‘pampa’”. En la ciudad, deberían centrarse acciones “principalmente contra la producción”, ingresando al “mismo sitio de la producción”. Además, deberían iniciarse acciones de fuerza mediante “terrorismo selectivo”.

Como lo expresó directamente el documento senderista: “En ‘Batir...’ la clave es arrasar. Y arrasar es no dejar nada”.

-
- 1 El mismo que formó en el contingente senderista que intentó invadir Sacsamarca en mayo de 1983.
 - 2 Según documentos diversos de Sendero, en ese período se abrieron siete zonas guerrilleras y ocho zonas de operaciones.
 - 3 Esta, y las citas siguientes, provienen de notas manuscritas tomadas durante las reuniones, y copiadas para la transmisión a bases. Las notas combinan la función de esquema previo y de acta de lo actuado. La similitud casi exacta entre manuscritos de diversos lugares indica que su forma final fue sometida a la aprobación de Guzmán antes de ser copiados y distribuidos a las bases de la organización.
 - 4 Patria Roja.
 - 5 En Cerro de Pasco, la acción de fuga se realizó con considerable retraso, pero con éxito. El 30 de junio, un contingente de veinticinco a cuarenta atacantes copó la cárcel de Cerro de Pasco matando a dos guardias republicanos y logrando la fuga de diez senderistas y tres presos comunes.
 - 6 *Pensamiento militar del Partido*, diciembre de 1982, p. 19.
 - 7 Por ejemplo, en *Nueva Democracia*, julio de 1981.
 - 8 El *Revolutionary Worker* del 21 de octubre de 1983, órgano del maoísta Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos, menciona “la insistencia” de Sendero en utilizar maoísmo en lugar de ‘pensamiento Mao’. Aun reconociendo que Mao representó un “avance cualitativo”, el *Revolutionary Worker* se permite disentir respetuosamente de sus camaradas peruanos, afirmando que aún se vive en la era del leninismo.
 - 9 De acuerdo a documentos posteriores de Sendero, la II Conferencia sancionó oficialmente el “maoísmo” como nueva etapa; aunque como se ve, Guzmán habla empleado la categoría anteriormente. Sobre eso, y la relación previa con el PCR de Estados Unidos, ver: “Bases de discusión, línea internacional”, *El Diario*, 3 de enero de 1988, p. VIII.
 - 10 Enero de 1981 en la Cuarta Sesión Plenaria, al Iniciar el cuarto hito.

11 *Pensamiento militar del Partido*, diciembre de 1982, p. 13.

XVI. La oferta de asilo a Guzmán

Entre mayo y junio de 1982, ocurrió uno de los episodios más extraños en esta extraña guerra. Por un momento breve el gobierno creyó tenerla ganada y actuó con la seguridad de quien negocia la victoria. Cuando se desvaneció el espejismo, el gobierno trató por embarazo antes que por razones de seguridad de mantener en reserva los detalles de ese capítulo.

El 28 de abril de 1982, el jefe de Seguridad del Estado, general Guillermo Rivarola, informó al viceministro López Martínez que sus agentes estaban tras una pista que podría cambiar el curso de la guerra: Abimael Guzmán parecía estar seriamente enfermo y agravándose en la clandestinidad. La situación era tan seria que, de acuerdo a la información que disponía Rivarola, algunos de sus más estrechos colaboradores y miembros de su familia política estaban tratando de entablar negociaciones con el gobierno para lograr su salida del país.

López Martínez pidió precisiones. Rivarola las traía. Ese día, en el snack bar “Marko”, se habría realizado una entrevista entre un confidente de Guzmán y un periodista. Aquel le habría pedido al periodista “interceder ante el presidente Belaunde para sacar a este fuera del país porque padecía una anemia aguda, y con ello el gobierno ya no tendría dolores de cabeza”. A la vez, según la misma nota informativa, el confidente de Guzmán le habría pedido al periodista entrevistar “al número dos de Sendero, Osmán Morote”.

Quizá las embriagadoras esperanzas que abría la información ayudaron a soslayar su aire postizo. La excitación de cacería mayor embargó la dirección del Ministerio del Interior. Rivarola recibió fervorosas instrucciones de proseguir a fondo la investigación.

El 5 de mayo, López Martínez recibió una nota informativa de Rivarola, según la cual un periodista de *Caretas* estaría entrevistando en ese momento a Guzmán. López Martínez ordenó ubicar al periodista de inmediato. Horas después, Rivarola indicó que sus agentes lo habían tratado de localizar infructuosamente. Los policías solo habían podido averiguar en la revista que había salido temprano, con un fotógrafo.

El periodista era yo. Pero no había estado entrevistando a Guzmán, sino haciendo todo el día un reportaje, acordado varias semanas atrás, en los centros académicos de la Guardia Civil. Por la misma razón, pocas veces habíamos estado rodeados por tantos policías al mismo tiempo. López Martínez supo de ello uno o dos días después¹ y probablemente avizoró la magnitud de la desorientación policial. Pero, ¿cómo renunciar al entusiasmo, sobre todo ante una perspectiva que parecía ofrecerse inmediata, al alcance de la mano?

Hacia fines de junio Rivarola llegó al Ministerio del Interior visiblemente excitado: la presa estaba avistada. Sus fuentes de información le habían hecho saber que Guzmán había llegado a

Lima, en muy mal estado de salud, y que se había alojado, junto con su esposa Augusta, en la casa de sus suegros, en la avenida Pershing 550 (Jesús María). La casa ya estaba rodeada por sus detectives. Se podía proceder al arresto en cualquier momento.

López Martínez, acompañado por Rivarola, pasó al despacho de Gagliardi y le informó sobre la aparente evolución final de los acontecimientos. En medio de la reunión, Rivarola recibió una llamada y fue a atenderla a la oficina del viceministro.

Cuando regresó, trajo otra noticia que electrizó a ministro y viceministro. Acababan de informar a Rivarola que la familia La Torre había establecido contactos con gente de su oficina de Seguridad del Estado para negociar la entrega de Guzmán. Pedían garantías de que no se le mataría y solicitaban que se le permitiera internarse en una clínica porque estaba sufriendo una etapa avanzada “de cáncer al riñón” y necesitaba una diálisis casi permanente.

Todo concordaba: la primera información, del 28 de abril, había indicado que Guzmán sufría de “anemia aguda”, causada, a lo que se veía, por el cáncer al riñón. No había tiempo que perder. Gagliardi y López Martínez advirtieron al presidente Belaunde que tenían que informarle algo de vital urgencia y salieron para Palacio.

Ministro y viceministro refirieron al presidente las últimas novedades. Era cierto que no se había visto a Guzmán entrar a la casa de su suegro, pero todas las informaciones indicaban que se encontraba ahí, casi agónico. ¿Estaba custodiado por su propia gente? Quizá. Era posible que se intentara resistir un arresto violento.

Belaunde no demostró gran entusiasmo por las noticias. Y luego de meditar un rato dijo que no quería que se capturara a Guzmán en esas condiciones. Pensaba que el jefe de Sendero quería morir como un kamikaze, convirtiendo su fallecimiento en una última agresión contra el gobierno. Si se lo arrestaba y moría en el proceso, o luego en manos de la policía, él y su gobierno serían acusados de haberlo asesinado, y les colgarían el sambenito encima. No quería un mártir, y menos uno cuya muerte le fuera imputada a su gobierno.

Gagliardi y López Martínez, aquella dialéctica pareja que suscitaba inevitables analogías literarias, quedaron sumidos por un rato bajo la misma perplejidad. Luego de haber volcado tantos esfuerzos en capturar a Guzmán y los líderes de Sendero, resultaba que no era conveniente hacerlo. La alta política, había que admitirlo, compartía el reino de la paradoja con el budismo zen.

¿Qué hacer, entonces? Después de un rato, se llegó a lo que pareció la mejor solución: si Guzmán tenía las horas contadas, que muriera libre, fuera de la custodia del gobierno. Que se le ofrecieran garantías que no se le iba a apresar si escogía internarse en una clínica, o que —y eso era lo mejor— se le daría un salvoconducto inmediato si decidía salir del país.

Para que la oferta surtiera efecto era necesario que Guzmán no dudara de su seriedad. Si la recibía a través de un intermediario policial, la consideraría una trampa. Era preciso que el ofrecimiento le llegara públicamente, a través de un vocero autorizado del gobierno.

Ese mismo día, el ministro Gagliardi salió a declarar sobre la situación de seguridad interna del país. El terrorismo, dijo, estaba prácticamente controlado. Y, en armonía con la línea tolerante y generosa de la democracia, quería hacerle saber al doctor Abimael Guzmán y a su familia —conociendo que el doctor Guzmán se encontraba “delicado de salud”— que el gobierno le daba todas las garantías para que procediera a internarse, sin temor de ser arrestado, en cualquier clínica u hospital del país; o, si así lo prefería, recibiría todas las facilidades para salir del país “con los familiares que quiera llevar consigo”.² Se trataba, recuerda López Martínez, “de ponerlo en un avión y mandarlo afuera”.³

Entre tanto, siguiendo el espíritu, si no la letra, de las instrucciones del presidente, se “desactivó la operación de búsqueda y vigilancia”,⁴ para quitarle todo viso de truco o trampa al ofrecimiento hecho. La policía apostada en los alrededores de la casa de Carlos La Torre, fue retirada. Y en el Ministerio del Interior empezó la espera ansiosa de la comunicación de Guzmán o de su familia.

No tuvieron que esperar mucho. La ofensiva de Sendero, que habría de crecer sin interrupciones hasta el ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho, se desató casi de inmediato. La difusión del folleto *Desarrollemos la guerra de guerrillas* fue el prólogo a la ola de ataques iniciada a principios de julio, donde las explosiones parecieron en algún momento retumbar con el sonido de una carcajada.

En las azarosas semanas siguientes, los acontecimientos apenas dejaron tiempo suficiente a Gagliardi y López Martínez para reflexionar sobre ese confuso episodio. Con la orden de retirar la vigilancia del domicilio de Carlos La Torre, la policía podía con justicia sostener que se le había atado las manos y se había permitido que Guzmán escapara. Eso era cierto, pero de otro lado, si estaba tan enfermo, ¿cómo iba a escapar? ¿Por qué no se había entregado? ¿Por qué no había aprovechado la oferta del gobierno? Las fuentes policiales tenían diferentes respuestas: según unos, Guzmán había muerto, y Osmán Morote había tomado la jefatura de Sendero; Según otros, seguía grave, como virtual prisionero de los dirigentes más duros de Sendero que consideraban cualquier negociación con el gobierno como una traición. “Así”, dice López Martínez, “que nunca se supo si se lo pudo haber capturado o no”.⁵

Todo indica, sin embargo, que las informaciones que Rivarola llevó a López Martínez fueron erróneas. Y la premisa fundamental sobre la que descansaban, la enfermedad de Guzmán, nunca fue verificada.

La anemia aguda y el cáncer al riñón que la información atribuyó al supuestamente agónico Guzmán, parecen haberse originado en un recuerdo difuso de las enfermedades que afectaron a este durante la década del 70. Entonces fue de conocimiento común en Ayacucho que Guzmán tenía una “enfermedad de la sangre” (e incluso eso se utilizó en algunos de los volantes más insultantes de los grupos contrarios). Pero los padecimientos sanguíneos de Guzmán fueron completamente diferentes a los que mencionó la información policial que provocara tan súbitas cuanto infundadas esperanzas y tan reveladoras decisiones.

Las enfermedades de Guzmán

Hasta 1972, Guzmán no parece haber tenido ningún problema significativo de salud. Una licencia médica, en setiembre de 1971, disponiendo una semana de descanso, fue aparentemente debida a una gripe. Pero el 5 de junio de 1972, Guzmán solicitó una licencia de la universidad para some-terse a un tratamiento médico en Lima. La licencia fue concedida el 20 del mismo mes. El 22 de junio, Guzmán remitió la documentación “probatoria del tratamiento recibido” y comunicó su reincorporación a la universidad.

El 19 de octubre, Guzmán solicitó una licencia de diez días, “por enfermedad, con cargo a regularizar mi petición mediante la documentación pertinente”. El 23, presentó un certificado médico, suscrito por Percy Cáceres Medina, quien dejaba constancia de haber tratado a Abimael

Guzmán de “artritis reumática” y “alteraciones hemáticas”.

El 24 de octubre, Guzmán presentó una solicitud al rector Ishikawa formalizando su pedido de licencia médica “por enfermedad (la misma que vengo padeciendo desde el mes de junio del presente año)”. Junto con el certificado médico, adjuntó una hoja de análisis del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la que le fue luego devuelta. No obstante, el hecho que Guzmán se hubiera tratado en Neoplásicas trascendió a los grupos enemigos: el FER antifascista, el CRT y el FUE, que en la habitual guerra de insultos volateados en ese período, dibujaron a Guzmán en grotescas caricaturas con una leyenda: “el canceroso”.

En noviembre, Guzmán tuvo que viajar “urgentemente a la ciudad de Lima [...] por razones personales de salud”, según indicó él mismo en una petición de pago de sueldo. Acompañó la solicitud con un certificado del médico de la universidad, Miguel Mariscal Llerena, donde este indicaba que Guzmán sufría de “un proceso hemático de altura” que requería “atención médica especializada”. Luego de un pedido formal, la universidad le concedió licencia para el tratamiento.

El 14 de diciembre de 1972, el médico Percy Cáceres Medina certificó estar practicando un “estudio integral” a Guzmán, “a fin de conocer los factores que determinan y desencadenan los síntomas de inadaptación temporal a la altura”. El 19 de diciembre, Guzmán retornó a Ayacucho y presentó los comprobantes de los exámenes médicos, que luego le fueron devueltos.

En abril de 1973, Guzmán solicitó vacaciones por un mes, “incluso para someterme a un chequeo médico”. Terminadas las vacaciones, Guzmán pidió, el 16 de mayo, una licencia “por enfermedad” de otro mes. “Como es de conocimiento de las Autoridades”, escribía Guzmán, “desde hace un año vengo padeciendo de policitemia sin que hasta hoy, pese al tratamiento seguido, me haya recuperado totalmente”. En el inevitable certificado médico adjunto, Percy Cáceres atestiguaba estar tratando a Guzmán desde “el mes de octubre de 1972 a la fecha, de policitemia (poliglobulina), producido por inadaptación a la altura”. Cáceres le prescribía “treinta días más de permanencia a nivel del mar, [...] salvo complicaciones”.

En junio, Guzmán pidió que la licencia médica le fuera extendida por otros treinta días. Finalmente, solo se reintegró a la universidad —donde, entre tanto, Sendero sufría inéditos contrastes— a principios de agosto de 1973, después de una ausencia de más de tres meses.

La documentación adjuntada entonces por Guzmán describe el estado y la evolución de su salud. Un análisis de sangre efectuado en el Centro de Salud Miraflores el 15 de mayo de 1973, arrojaba un dosaje de hemoglobina de 15.8 gm %, y la determinación de hematocrito era de 42.5%. El mismo tipo de análisis hecho el 16 de junio daba un dosaje de hemoglobina de 15.5 gm %, y una determinación de hematocrito de 38%. Un hemograma de Schilling hecho el 24 de abril, indicaba 5 200 000 hematíes y 9700 leucocitos. El mismo examen, efectuado el 20 de julio, arrojaba 4 200 000 hematíes y 5400 leucocitos. No era, a lo que se ve, un caso grave, y la habitual mejoría de los enfermos de policitemia cuando bajan al nivel del mar se dio en su caso.

Sin embargo, desde entonces quedaba descartado para Guzmán residir en forma definitiva en Ayacucho —o en cualquier parte de la sierra—. Cualquier temporada prolongada supondría un deterioro progresivo — con los desórdenes y los riesgos que la policitemia causa— que, no obstante, sería morigerado y revertido en cuanto se bajara al nivel del mar.

El 24 de setiembre de 1973, Guzmán fue ratificado como profesor asociado “por un nuevo período de ley”. Ese mismo día, empero, el Consejo Ejecutivo de la universidad acordó otorgarle una beca, “con el 75% de su haber” por un año, luego de la presentación de un plan de investigación académica.

El plan, “El pensamiento de Mariátegui”, fue suscrito el mes siguiente, desde Lima. Guzmán ya no volvería a permanecer por períodos prolongados en Ayacucho.

Un año después, cuando el período de la beca y la licencia habían vencido, Guzmán envió desde la oficina en Lima de la Universidad San Cristóbal, un memorando al rector indicando su imposibilidad de viajar a Ayacucho debido a que “recién el día de mañana debo volver a consultar con el médico que me está tratando, quien se encontraba en el extranjero”.⁶

El tratamiento fue, esta vez, con un dermatólogo en el Instituto de Medicina Tropical “Daniel Alcides Carrión” de la Universidad San Marcos. Es la primera vez que Guzmán aparece tratándose de la soriasis. La medicación, sin embargo, indica que el padecimiento no era intenso.

Guzmán se reincorporó a la Universidad San Cristóbal el 31 de octubre de 1974. Sin embargo, el 30 de diciembre del mismo año volvió a solicitar licencia por una semana, por estar “padeciendo de una enfermedad que requiere tratamiento especializado”.

En 1975, las licencias de enfermedad de Guzmán se convirtieron en un argumento más en la enconada pugna entre los catedráticos senderistas y la crecientemente fuerte oposición.

El 11 de julio de 1975, luego de que la universidad le abriera proceso disciplinario por el conflicto de Huamán Poma de Ayala,⁷ Guzmán escribió al rector desde Lima indicando que había tenido que salir de Ayacucho en forma urgente “por razones de salud”, por lo que “hasta hoy no me ha sido posible iniciar las tramitaciones pertinentes”. Solicitaba que “se tome nota de mi situación de salud así como que debo solicitar licencia por enfermedad” y pedía que “se me tramiten los cargos del proceso que se me ha iniciado, pues no me es posible constituirme en Ayacucho, por las razones expuestas”.⁸ El 15 de julio Guzmán envió una solicitud adicional al rector Ishikawa, puntualizando que su viaje urgente a Lima se había debido a que, “como se tiene conocimiento por peticiones anteriores, vengo padeciendo de policitemia desde hace un buen tiempo” y decía que no había podido explicar anteriormente su situación debido a “que por razones de reposo no me ha sido posible presentar antes la documentación correspondiente”.⁹

La petición de licencia por enfermedad, por treinta días, que Guzmán había presentado, fue acogida con hostilidad por las autoridades que controlaban la universidad, ya empeñadas en abierto enfrentamiento con Guzmán. El director de personal, Edilberto Lara, ordenó investigar la autenticidad del certificado médico y desmenuzarlo burocráticamente; ¿había sido correcto visarlo en un área de salud y no en otra? ¿Debió haberse presentado en una solicitud o en la anterior? ¿Por qué el certificado médico no iba acompañado con pruebas de laboratorio? El sentido implícito de estas disposiciones era suponer que Guzmán mentía; o más probablemente, que se podía afirmar burocráticamente que mentía.

El 15 de agosto de 1975 Guzmán se dirigió, en una extensa solicitud, al rector de la universidad, en la que, “en vía de dar elementos de juicio”, hizo una pormenorizada explicación de sus problemas de salud. Adjuntando treinta documentos, Guzmán indicaba que “en 1972 empecé a padecer alteraciones sanguíneas, de las que incluso conocen algunos colegas médicos de nuestra universidad [...] asimismo puede verse cómo he recurrido a diferentes centros médicos como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, al Centro de Investigación Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, a la Clínica Anglo Americana, al Centro de Salud Miraflores y a diversos médicos”.

De todo lo cual se deriva, [...] que se me produjo una inicial multiplicación de secinéfílos [?] de causa no determinada; posteriormente una policitemia, así mi cuerpo reacciona excesivamente a la altura; luego se me generó una psoriasis; y finalmente persiste e incluso se me ha acentuado la policitemia. Pido que se repare especialmente cómo con rapidez mi estadía en Ayacucho eleva peligrosamente, para mi salud, el porcentaje de

hematocrito y hemoglobina, lo que podría producir situaciones de repercusión futura o alteraciones sorpresivas y dañinas. Asimismo solicito se compare los porcentajes referidos en los diferentes años y se verá, evidentemente, que de noviembre del 74 a mayo del 75 han subido más que en años anteriores. Y que, además, se tenga presente que la reacción que mi cuerpo presenta a la altura no corresponde a la altitud de Ayacucho [sic]; más aun que pese a haber vivido en esa ciudad desde los años 1962, la policitemia solo se me ha comenzado a presentar desde el año 72.¹⁰

Guzmán añadía que “la policitemia exige, como es sabido, una estadía a nivel del mar y un control médico adecuado; lo que para mi salud hoy es más urgente que en ocasiones anteriores, a fin de poder recuperarme y normalizar mi fórmula sanguínea y definir [...] si me será posible o no, físicamente hablando, volver en lo inmediato a vivir a una altura como la de Ayacucho”. Luego de esa detallada, y aparentemente auténtica explicación, Guzmán solicitaba una licencia adicional, por enfermedad, de tres meses, “con goce de haber”.¹¹ La licencia le fue acordada, pero el sueldo le fue reducido progresivamente, en una cuarta parte, cada mes.

Guzmán no retornó más a Ayacucho como profesor de la universidad. El 26 de enero de 1976 renunció a su cargo.

Vistas en perspectiva, las enfermedades de Guzmán tuvieron un efecto importante sobre las luchas internas en la Universidad San Cristóbal; y sus forzadas ausencias coinciden con el declive que padeció allí la hegemonía senderista. La lejanía de Guzmán fue también factor importante de la audacia creciente con que las autoridades universitarias se le enfrentaron, intimidadas hasta entonces por la habilidad staliniana, la fría autoridad con que Guzmán manejaba el juego del poder.

En términos más generales, la enfermedad de Guzmán forzó reajustes organizativos dentro de Sendero. La conducción diaria del Partido en Ayacucho y sus diferentes aparatos tuvo que ser delegada por Guzmán en forma creciente desde 1973. A partir de entonces, y cada vez más, su residencia —y, en consecuencia, la dirección de Sendero— fue en Lima y La Cantuta, con viajes cortos a Ayacucho y otros puntos de la sierra solo para eventos específicos. El efecto que esta limitación tuvo en el carácter de Guzmán —la irascibilidad, las tensiones reprimidas con esfuerzo, el contenido crecientemente tajante e imperioso de sus decisiones— parece ser recíproco al que dicho carácter tuvo sobre su salud: las elevaciones rápidas de su densidad sanguínea en momentos de tensión o frustración particularmente rebeldes, que forzaban rápidos descensos a Lima y la casi inmovilidad hasta que la sangre “se le adelgazara” de nuevo.

Pero sería erróneo extraer conclusiones excesivas de lo anterior: Guzmán no era un inválido, y después de un período de adaptación a las limitaciones de su enfermedad, reajustó la organización y el control del Partido, así como su acción, a las nuevas condiciones. Si acaso, la policitemia debe haber jugado un papel importante en espolear a Guzmán para apurar la conversión organizativa hacia la transferencia de cuadros, la clandestinidad y la preparación de la insurrección.

Hay algo de paradoja cruel —o justicia poética quizá— en el hecho que Guzmán haya compartido una característica importante con aquel otro líder rebelde, tan menospreciado y vituperado por él: el Che Guevara. Guevara llevó consigo siempre la inminencia de las emboscadas súbitas del asma, la estrangulación sorpresiva de sus bronquios. Guzmán, las migrañas inevitables, el sentimiento de solidificación progresiva de la sangre de la policitemia, y los desagradables descascaramientos, las escamosidades de la soriasis. En ambos casos, la resignación obligada a la enfermedad fue el espoleo simultáneo a la acción, la movilización voluntarista de hombres y lealtades, cortando etapas, hacia la realización del proyecto propio. La

diferencia radica en que uno, Guzmán, planificó mejor y fue un estratega superior al otro.

¿Qué hubo, entonces, de cierto en la información que movilizara al general Rivarola en 1982? Todo indica que fue una conjetura deficiente de la historia médica de Guzmán, antes que un dato concreto. Obviamente, la “anemia aguda” que había afirmado la primera información era el último de los problemas que aquejaban a Guzmán; y el “cáncer al riñón” parece una interpretación deficiente de sus problemas sanguíneos y de los insultos de “canceroso” que aún flotaban en la memoria colectiva. Que Guzmán hubiera estado postrado es, sí, creíble; pero eso no señalaba ninguna agonía inminente, sino el retorno reciente luego de una permanencia excesivamente prolongada de la sierra. Pero es muy poco probable que una persona, con el cuidado meticuloso que ponía Guzmán en la clandestinidad, hubiera cometido la imprudencia de alojarse en casa de sus suegros —de donde había sido arrestado por última vez en 1979.

Hay otros factores adicionales que llevan a suponer que la información fue falsa: al poco tiempo de ese episodio, la familia La Torre salió voluntariamente del país y viajó al exilio a Suecia. Y pocos meses después, luego de la caída de Vilcashuamán, una cartera con los documentos personales de Guzmán fue encontrada en los alrededores de la destrozada jefatura de línea. Entonces también se le dieron las más diversas interpretaciones a ese hallazgo extraño. Pero, considerando las circunstancias que rodearon el ataque a la guarnición policial,¹² la invocación pública hecha por el ministro Gagliardi al supuestamente agonizante Guzmán, y la importancia que esa acción ha tomado dentro del santoral senderista, mi impresión es que Guzmán estuvo en ella, y que sus documentos fueron una suerte de tarjeta de visita dirigida a Belaunde y Gagliardi. Ese tipo de diálogo de símbolos obvios —los monosílabos retumbantes de las explosiones después de declaraciones de triunfo prematuro de algún ministro, la negrura de los “papagones” en respuesta a las exigencias de paz de Juan Pablo II— ha sido habitual en Sendero. Puedo equivocarme, pero no veo otra interpretación mejor.

Su presencia en las zonas andinas solo parece haber sido por lapsos relativamente cortos desde que empezó la guerra. Y, movida por la necesidad, el *incahuasi*¹³ senderista se ubicaba mucho más probablemente en las ciudades grandes del país, o en la ceja de selva, que en las sierras andinas.

1 Entrevista con Héctor López Martínez, el 25 de mayo de 1987.

2 *Caretas*, n. 705, 12 de agosto de 1982.

3 Entrevista con Héctor López Martínez, el 25 de mayo de 1987.

4 *Ibídem*.

5 *Ibídem*.

6 Memorándum de Abimael Guzmán al rector de la Universidad San Cristóbal, el 25 de setiembre de 1974.

7 El conflicto, sobre turnos de enseñanza y control de la escuela de aplicación Huamán Poma de Ayala (orgánicamente dependiente de Universidad San Cristóbal) fue una de las batallas centrales en la pugna entre Sendero y los grupos opositores por el control de la universidad y las organizaciones populares ayacuchanas.

8 Solicitud de Abimael Guzmán al rector de la Universidad San Cristóbal, 11 de julio de 1975.

9 *Ibídem*, 15 de julio de 1975.

10 Solicitud de Abimael Guzmán al rector de la Universidad San Cristóbal, 15 de agosto de 1975.

11 *Ibídem*.

12 Ver el capítulo: “La caída de Vilcashuamán”.

13 Literalmente, “la casa del inca” en quechua. Haya de la Torre usó la palabra para significar el lugar cambiante y secreto donde residía el jefe de un partido clandestino.

XVII. Coloquio de ciegos

LA GUERRA DE LA INTELIGENCIA

Después del embarazoso episodio de la oferta de asilo a Guzmán, y luego de la intensificación de la ofensiva senderista, la demanda de información confiable sobre Sendero Luminoso y su liderazgo alcanzó casi niveles de desesperación en el Ministerio del Interior.

En apariencia, la información debía sobrar. Existían tantos servicios de inteligencia que, por poca información que cada uno consiguiera, el conjunto debía ser suficiente como para conocer íntimamente a Sendero. Y se trataba de conseguirla. El viceministro López Martínez sostenía reuniones regulares con los jefes de cada uno de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Los jefes de inteligencia de las fuerzas policiales coordinaban a su vez el intercambio de información con aquellos, en reuniones periódicas en el ministerio, presididas por el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).¹

El SIN era, en teoría, la institución de más alta jerarquía dentro del “sistema de inteligencia”. En la distribución de funciones de una supuestamente armónica organización piramidal, el SIN —cuyas responsabilidades abarcaban el ámbito de la “inteligencia estratégica”— estaba encargado básicamente de analizar la información recolectada por los otros servicios, y distribuir sus conclusiones de acuerdo a la clase y el rango de la información. En la práctica, como sucede en casi todo el mundo, pero con un énfasis particular, los diversos organismos de inteligencia se retaceaban o negaban la información, empeñaban parte de sus energías en vigilarse mutuamente —o en vigilar personas incómodas a sus jefes— y en festejar los fracasos de los otros servicios. Desde ese punto de vista, los últimos años habían sido una fiesta interminable. A la vez, los diversos servicios compartían, a veces sin saberlo, confidentes, informantes y analistas. Así, el carácter incestuoso de la comunidad era uno de los problemas que incidían en su capacidad de conseguir e identificar información fresca y útil. No era el único. Durante parte de 1982 el SIN estuvo dirigido por el general del Ejército Ludwig Essenwanger. Pese al nombre, el general Essenwanger no solo era peruano, sino provinciano, de Cañete. El ministro Gagliardi, también cañetano, había pensado inicialmente que la presencia de Essenwanger iba a resultar en un intercambio fluido de información. “He conversado largo con mi paisano Essenwanger, de paisano a paisano. Le he pedido: ‘Óyeme, ayúdame en esto [...] pedí, por supuesto, ayuda a la FAP, pero no hubo nada definitivo’”.²

En su atribulada historia, el SIN había estado con mayor frecuencia en necesidad de ayuda que en posición de darla. Durante el gobierno de Velasco Alvarado la posición del SIN fue ambigua. De un lado, se dio definida preferencia al Servicio de Inteligencia del Ejército. Del otro, el SIN no fue un osario burocrático, sino un puesto de responsabilidad. Salvo las excepciones del general Eduardo Segura, cuya estrella se apagó en el tramo final de su carrera, y del general Rudecindo Zavaleta —que años después aparecería vinculado a la organización de Rodríguez López—, los otros jefes nombrados por Velasco fueron militares que tuvieron su confianza y ocuparon, entonces y después, cargos de importancia: los generales Pedro Richter, Enrique Gallegos, Rafael Hoyos Rubio.

Durante el gobierno de Morales Bermúdez, la decisión de dismantelar el SIN parece haber sido más definida. Su presupuesto, en una economía ya asolada, se mantuvo constante (lo que de hecho significó recortes proporcionales a la inflación); y como lo expresa un veterano empleado: “Se lo consideró el producto residual del Ejército. Se mandaba a los generales ahuesados y a los coroneles sin destino”.³ Con recursos ya críticamente insuficientes, el SIN tuvo que conformarse con tener oficiales destacados por sus institutos que difícilmente permanecían más de un año. Pero lo que más sufrió en esas condiciones fue su red de confidentes que, en cualquier servicio de inteligencia con proyección interna, es la columna vertebral en el proceso de adquirir informaciones.

Según fuentes de esa institución, el número de confidentes pagados que reportaba al SIN era de trescientos al inicio del gobierno de Morales Bermúdez. Una parte no desdeñable había sido “sembrada” en Andahuaylas y alrededores después de las tomas de tierras de 1973. En los años siguientes, se pasó a pagarles a destajo primero y a reducir su número después. Luego de algún tiempo, los confidentes se habían reducido a treinta. Al final del gobierno de Morales Bermúdez, su número era ínfimo.

Languideciendo, el SIN tuvo una recuperación parcial, entre 1976 y 1978, bajo la gestión del general Juan Schroth Carlin. Schroth era un militar serio, a quien algunos empleados del SIN consideran el mejor jefe de Inteligencia durante el gobierno militar: “El intentó seguir de cerca el proceso de inepción de la subversión [...]. Se siguió, en parte, la organización de Sendero y grupos afines”.⁴ En tanto que otros lo consideran trabajador, empeñoso y disciplinado, pero de corto alcance: “Estaba bien, pero era de alcances limitados”.⁵

De cualquier forma, Schroth tuvo dos limitaciones básicas: su relación con el presidente militar Morales Bermúdez no era buena y su propia posición política. Un anticomunismo ultravioleta lo cegó de los matices y no le permitió ver diferencias críticas entre los distintos grupos de la izquierda.

Durante la gestión de Schroth, además, ocurrió la parte final de la guerra sangrienta y brutal contra los movimientos guerrilleros y terroristas en el Cono Sur del continente. La atención de los servicios de inteligencia estuvo ocupada en gran medida en observar el desarrollo del conflicto, y los intercambios con los servicios homólogos de los países afectados fueron constantes e intensos. En el caso del Perú, la relación más fluida fue con los argentinos, pero no solamente con ellos: “Se pueden dar casos en los que las relaciones diplomáticas estén mal, pero que los convenios de inteligencia sí funcionan. Existen convenios con Ecuador, incluso con Chile”.⁶

La cooperación del SIN con la inteligencia argentina a lo largo de la guerra sucia difícilmente pudo haber sido mayor. En diversos casos documentados, argentinos vinculados al grupo Montoneros fueron arrestados en Lima, por grupos mixtos de policías argentinos y agentes del

SIN, interrogados bajo tortura en el Perú y entregados luego —generalmente en la frontera con Bolivia— a los argentinos. Un arresto, el de Noemí Giannotti de Molfino, terminó en forma extraña y siniestra: detenida en el Perú y entregada a la inteligencia argentina, Molfino apareció muerta en un apartamento en Madrid.⁷

Las consecuencias prácticas de esta cooperación fueron múltiples y, en casi todos los casos, desfavorables. El modelo de la era de Velasco Alvarado fue abandonado en bloque, sin conservar siquiera sus mejores lecciones. El nuevo norte de la eficacia era considerada la forma en que los militares brasileños, uruguayos y chilenos habían terminado con la insurrección armada y aun con la oposición militante en sus países. La guerra sucia en Argentina fue vista no solo con solidaridad respecto a los militares argentinos, sino con admirado respeto por la combinación de astucia, organización y brutalidad sistematizada con la que las Fuerzas Armadas de ese país pulverizaban a los Montoneros y al ERP en corto plazo.

En esa nueva posición, los servicios de inteligencia, y especialmente el SIN, se dedicaron a buscar en el Perú los equivalentes nacionales de Tupamaros, Montoneros o ERP; o sus síntomas precursores a través de la agitación social. Ciegos respecto a matices, esperando la repetición de la receta insurreccional del Cono Sur, para aplicar ellos la misma receta contrainsurgente, no repararon en las diferencias sustanciales de los procesos que se desarrollaban dentro del país con los del Cono Sur, y no recogieron en consecuencia los datos que la realidad les brindaba. La administración de Schroth, en la cual trabajaron muchos de los que dirigirían los esfuerzos de inteligencia en la guerra contra Sendero, tuvo esa limitación esencial que, en gran medida, fue también la limitación de las Fuerzas Armadas en general y de las estrategias contrainsurgentes que se llevarían a cabo en años posteriores.

Poco antes de la salida del gobierno militar y del retorno al gobierno civil, Morales Bermúdez sacó a Schroth del SIN y puso en su lugar al general Mario Villavicencio Alcázar. A Villavicencio le tocó en suerte ser el último jefe del SIN durante el gobierno militar y el primero bajo el régimen democrático. Su gestión fue muy pobre, aunque existen diferencias de opinión sobre por qué lo fue. Según una versión, Villavicencio dirigió el desmantelamiento del SIN siguiendo las instrucciones del gobierno de Morales Bermúdez, pero poniendo también iniciativa individual.⁸ Según otros, Villavicencio estuvo aprisionado en una misión ingrata: el mencionado desmantelamiento del SIN, y luego adicionalmente limitado por su falta de acceso a Belaunde. “Fueron seis meses de gestión difícil, Belaunde tenía un rechazo hasta físico al servicio de inteligencia. El acceso de Villavicencio era difícil. Lo hacían esperar hasta dos horas”. Aunque la misma persona reconoce que en cualquier caso, Villavicencio no llevaba información de buena calidad, “los temores estaban circunscritos a Patria Roja, a Hugo Blanco”.⁹

Cuando, a fines de 1980, Villavicencio fue cambiado de puesto, su reemplazo fue el general Essenwanger, quien se mantuvo al frente del SIN en 1981 y 1982. Existe consenso en calificar la gestión de Essenwanger como sumamente pobre. En 1982 el entonces diputado Alan García denunció en público que el hermano de Essenwanger, Walter, estaba preso por presunto terrorismo —lo cual era verdad. A juicio de García, eso invalidaba a Essenwanger como jefe del, teóricamente, más importante aparato de inteligencia del país. Walter Essenwanger fue liberado por orden judicial ese mismo año, pero Ludwig Essenwanger renunció a la dirección del SIN en setiembre de 1982.

Las relaciones familiares de Essenwanger fueron el menor de los problemas del SIN durante esos años de depresión profunda. Sin fuentes de información de valor, con los pocos recursos disponibles mal administrados, los analistas del SIN se dedicaron meramente a tratar de

sobrevivir. “Esos fueron años vegetativos. Se vivía solo de lo que daban otros servicios”.¹⁰

El desierto informativo contrapuesto a la necesidad de producir inteligencia creó formas de astucia burocrática: la información de segunda mano y el espejismo informativo. Fue un proceso que infectó todos los niveles de inteligencia, pero que alcanzó expresión artística en el SIN. Allí, los mejores analistas habían creado su propia trama de contactos con los otros servicios de inteligencia, especialmente con aquellos con mayor capacidad operativa. Era una relación informal de mutua conveniencia, en tanto los otros servicios buscaban prestarse la capacidad de análisis de los especialistas del SIN para interpretar o meramente “vestir” sus datos. Así, *Rogelio Ramírez* solía armar sus informes con “retazos de noticias aparecidas en periódicos y revistas, un par de visitas y el conocimiento de cómo funciona la izquierda. La redacción se hacía empleando la jerga de inteligencia, y listo el pastel. Cuatro o cinco horas de trabajo a la semana bastaban para presentar un informe que frecuentemente hacía que el jefe del SIN pidiera de inmediato el carro y saliera a Palacio a informarle al presidente de su último y urgente descubrimiento. El resto de la semana me podía dedicar a las cosas que me interesaban”.¹¹

En ese ambiente de desmoralización, era inevitable que los analistas experimentados, compartidos como se ha dicho por la mayoría de los servicios, acordaran informalmente cuánto debían alimentar a sus jefes y cómo dosificar la información o —más frecuentemente— la apariencia de información. No había en ello ningún propósito de sabotaje, sino meramente de supervivencia burocrática. Era la astucia de la desnutrición: cómo hacer durar el mayor tiempo posible el alimento; cómo engañar el hambre con especerías, cómo aumentar la apariencia con levaduras. Es quizá ocioso añadir que no se trataba de un juego esotérico, sino de algo percibido con mayor o menor claridad dentro de todos los niveles del gobierno. Pero mientras la apariencia del movimiento suplantara al movimiento en sí, se podían postergar indefinidamente las decapitaciones burocráticas, las carreras podían culminar en los acomodados retiros, para cuyo efecto y por un tiempo la oficina del Estado se convertía en propiedad privada de quien la dirigía.

Las incidencias de ese proceso eran, naturalmente, uno de los temas preferidos de la comunidad informal de analistas, en sus más o menos infrecuentes reuniones. Empleados civiles en un aparato controlado por militares, en una situación de inferioridad institucionalizada, “ninguneados”, al decir limeño, en algunos casos por jefes pedantes o incapaces; su secreta satisfacción residía en su superioridad intelectual, y en complacerse en saber más cosas sobre sus jefes de las que estos pudieran siquiera suponer incluyendo las relaciones entre el movimiento presupuestario y las cuentas personales de ciertos jefes.

Así y todo, algunos usos que se hacía del sistema de inteligencia escandalizaban hasta sus curtidas sensibilidades. El caso, por ejemplo, del hijo de uno de los directores del SIN, que era un corredor aficionado de autos. Mientras su padre fue director del SIN intervino en casi todos los rallies peruanos —manejando autos del SIN. “Lo peor es que encima era malo como piloto. No ganó ninguna competencia y destrozó, literalmente destrozó, lo que quedaba de la flota de automóviles del servicio [...] nuestros autos de vigilancia y seguimiento, en lugar ser utilizados en algo que siquiera pareciera vagamente un acto de servicio, se encontraban de coleros en algún punto de la carretera entre Chalhuanca y Cusco”.¹²

La angustiada demanda por informaciones, o acciones que ubicaran o pusieran fuera de combate al liderazgo senderista, especialmente a Abimael Guzmán, inspiró algunos operativos del SIN. El primero fue en 1982-83; el segundo en 1984. Este último bajo un nombre sugestivo, aunque poco original: Skorpio.

Ambos fueron costosos y tuvieron el mismo resultado: cero. “La única diferencia”, dice uno

de los analistas, “fue que luego de estos operativos algunos de los jefes se construyeron casas. Parece que los operativos especiales tienen una relación especial con la actividad de construcción civil”.

Si en la cúspide de la pirámide (donde por lo menos teóricamente se encontraba el SIN) la situación era desoladora, los servicios de inteligencia de cada institución tenían taras y limitaciones igualmente significativas. Los servicios de información policiales, cuya eficacia era literalmente cuestión de vida o muerte para los policías en el área en emergencia, estaban ciertamente entre los más atribulados.

El jefe del Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil durante 1981 y parte de 1982 fue el coronel Juan Zárate Gambini. Zárate era un oficial relativamente joven, de hábitos enérgicos y seguro de sí mismo, con preparación y talento en la esfera táctica. Sus responsabilidades, empero, solo tocaban incidentalmente esa esfera.

En las tortuosas y frecuentemente patéticas luchas por ascensos y la primacía dentro del grado, Zárate había jugado hasta entonces sus cartas con habilidad, pero no tanto como para evitar enemistades y rivalidades profundas dentro de su institución. En el caso de la insubordinación de Balaguer, Zárate había decidido casi desde el primer momento apoyar a Catter y el nuevo comando. Eso, por cierto, le había dado un tremendo impulso a su carrera, mientras que la de su sempiterno rival, el coronel de la Guardia Civil Félix Tumay, se paralizaba. A la vez, los “institucionalistas” allegados a Balaguer miraban a Zárate con hostilidad e implícitas promesas de futuras represalias.

Al comprometer su suerte con la del inepto comando Catter, Zárate había asumido un pesado lastre funcional. Mas era cierto, de otro lado, que un coronel joven y ambicioso —tal era su caso— no tenía alternativas.

Inteligencia de la Guardia Civil había sido uno de los servicios más acertados en cuanto a informar sobre Sendero en la etapa de preparación de la insurrección. Ello no era sorprendente, teniendo en cuenta la amplia distribución territorial de los puestos de la Guardia Civil. Tal había sido la causa de las movilizaciones masivas dirigidas por Sendero para expulsar los puestos de la Guardia Civil de sus áreas críticas.

Sin embargo, la claridad, y finalmente la calidad de la información guardaban relación directa con la preparación y perspicacia del elemento policial en los puestos provinciales, generalmente muy limitada. Los analistas en Lima, a quienes había llegado información en bruto, no lograron desbrozar lo sustancial de la hojarasca que la acompañaba; y cuando excepcionalmente lo consiguieron, no fueron escuchados por el gobierno militar.

En 1981, Zárate había tratado de aprovechar la información archivada y de explotar mejor la que llegaba, reuniendo un Estado Mayor de oficiales jóvenes, con alguna preparación previa en el área. Viéndolo en perspectiva, los resultados no fueron malos: un número nada desdeñable de dirigentes senderistas fue capturado entre 1981 y marzo de 1982, a tal punto que la empresa de liberarlos se hizo prioritaria para Sendero. Como indica Héctor López Martínez, aun la calamidad mostró algunas características redentoras: “La toma del CRAS de Ayacucho puede verse desde un punto de vista positivo [...] se había capturado a un número importante de elementos de Sendero. Algunos tuvieron participación destacada en los niveles más altos. Esas capturas se habían hecho básicamente el 81. Barreto logró muchas capturas”.¹³ La labor de inteligencia de la Guardia Civil en esas capturas fue importante.

Pero aun en sus mejores momentos, el Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil estuvo lejos de avizorar la profundidad y extensión de la organización senderista, así como de alcanzar

la rapidez y el ritmo de sus acciones. Sus relativos éxitos estaban dentro de los cálculos de pérdidas que la dirigencia senderista había estimado inevitables en la etapa de “Batir el campo” y “Desplegar la guerra de guerrillas”. Las limitaciones fueron varias y abarcan desde la erosión progresiva de fuentes de información, en la medida en que se perdían o cerraban puestos en los distritos amagados, hasta la incapacidad de los analistas policiales para comprender —mediante razonamientos mecánicos— el complejo sistema insurreccional senderista. Como se ha dicho, la habilidad especial de Zárate eran los operativos tácticos, y en ese nivel los resultados fueron buenos, sobre todo en la ciudad de Ayacucho. Más allá de eso, se ingresaba a un territorio ciego que —hay que decirlo— la Guardia Civil compartía con el resto del país.

Otros factores que tuvieron incidencia directa en los resultados fueron menos excusables. Los celos feroces entre los diversos servicios policiales, y de estos respecto a los militares, resultaron en un mínimo intercambio informativo (con la excepción, claro, de la basura rutinaria), la deficiente coordinación de las operaciones y la acentuación de los fracasos ajenos para atenuar los propios.

En ese triste juego, Zárate tenía ante sí —pese a la voluntad que puso en su función— limitaciones insuperables. A eso se añadió el incidente que precipitó su salida. En las reuniones de la “comunidad de inteligencia”, que se realizaban rutinariamente desde fines de 1981, el enérgico y alegoso coronel expresaba sus puntos de vista en forma tal que los otros directores, especialmente Essenwanger, encontraron crecientemente difícil tolerar. Al insulto se añadió la injuria cuando la Guardia Civil capturó al hermano de Essenwanger. Poco después, luego de algunas reuniones en las que Zárate estuvo más contestón que de costumbre, los directores de los servicios de inteligencia militar y el jefe del SIN declararon a aquel, con sublime snobismo, *persona non grata* a la “comunidad de inteligencia”, y comunicaron el solemne acuerdo a Gagliardi. Zárate tuvo que dejar el puesto de director de Inteligencia, habiendo ganado nuevos e importantes enemigos. El principal, Essenwanger, tuvo no obstante cosas más importantes en las que preocuparse poco después cuando el diputado Alan García recibió “de buena fuente” la información sobre su hermano Walter. Las guerras bizantinas, como se ve, ardían mientras se olvidaba la real.

En los años siguientes Zárate logró, contra todo pronóstico, sobrevivir a los cambios de comando y, sobre todo, al retorno de Balaguer a la jefatura de la Guardia Civil. Luego de haberse mantenido apenas fuera del alcance de la venganza de este en puestos que dependían directamente del ministro del Interior, fue nombrado en 1984 como segundo jefe de la Policía de Drogas de la Guardia Civil, y en 1985, luego del escándalo Rodríguez López, pasó a comandarla. Su eficacia táctica tuvo entonces la posibilidad de ejercicio casi ilimitado. Numerosos operativos, osados y astutos, llevaron el sello personal de Zárate, ya general y aparentemente superada la curva de vulnerabilidad. De hecho, en aquel nuevo frente se repetía lo mismo que caracterizó su acción en Inteligencia, en 1981 y 1982: los eventuales éxitos operativos servían para ilustrar, a través de su insuficiencia, la magnitud de la derrota estratégica.

En 1981 el Servicio de Inteligencia de la Policía de Investigaciones estuvo dirigido por el recientemente ascendido general PIP José Jorge Zárate. Como se ha visto, Jorge era la persona clave de la organización de narcotráfico encabezada por Reynaldo Rodríguez López a la que estaba conectado, desde 1975, en el comando de la Policía de Investigaciones. El agravamiento de la situación creaba condiciones ideales para camuflar las operaciones de la banda dentro de toda la gama de acciones encubiertas y encuestas secretas que se supone forman parte de la inteligencia contrainsurgente.¹⁴ Contando con el apoyo del comando institucional, la jefatura de

Inteligencia era un puesto estratégico para controlar a los jefes policiales que se sintieran asqueados por el aumento exponencial de la corrupción, y que estuvieran tentados en algún momento de lanzar una investigación por cuenta propia. La pugna entre Luque e Ipinze estaba aún demasiado cercana como para olvidarla. A partir del ejercicio de ese puesto, Jorge empezó a ser temido por sus pares, e incluso por aquellos que lo superaban en antigüedad y precedencia.

Jorge no era, ciertamente, un enemigo que debía tomarse a la ligera. Dentro de su institución era reputado como uno de los oficiales más inteligentes y con mayor habilidad para lograr relaciones sociales ventajosas (lo cual en la Policía de Investigaciones fue siempre un factor de gran importancia). Era espada de honor de su promoción —es decir, el número uno de su clase— y se lo suponía destinado al comando de su institución. Lo que a observadores ajenos hubiera parecido un defecto mayor en Jorge, el ser un jugador casi compulsivo, en la Policía de Investigaciones era frecuentemente considerado una virtud: jugar permitía establecer relaciones sociales ventajosas bajo las circunstancias intensas y complejas del azar. Deudas, créditos, obligaciones, secretos, desesperación, ¿no era ese el campo en el que los talentos policiales podían florecer? Pero sean cuales fueren los talentos de Jorge, ellos no fueron aplicados en forma alguna a la lucha contra Sendero. Si bien no es posible hacer aquí una descripción pormenorizada sobre la organización de narcotráfico de los Rodríguez López, baste ahora anotar, en lo que toca al funcionamiento de los servicios de inteligencia, que durante aquella etapa crítica la corrupción en la Policía de Investigaciones era ya de tal calibre que había paralizado funcionalmente a segmentos vitales de la institución.

Cuando Jorge dejó la Dirección de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, su puesto fue ocupado por el general PIP Teófilo Aliaga. Ya entonces se especulaba que la historia de la institución en los próximos años iba a ser la de la lucha por el comando de la institución entre Jorge y Aliaga. En buena medida lo fue; solo que ambos terminaron perdiendo. Algo mayor que Jorge, Aliaga era también espada de honor de su promoción y había destacado en la Policía de Investigaciones desde sus años de cadete, durante el segundo gobierno de Manuel Prado. Entonces era apabullante la discriminación hacia los futuros investigadores a manos de la Guardia Civil, institución dominante y de mayor prestigio social, que controlaba la escuela única de formación policial.

Durante una visita que hizo a la escuela el ministro de gobierno Ricardo Elías Aparicio (fue ministro entre 1960-62), el cadete Teófilo Aliaga, desafiando represalias, tomó la palabra para protestar ante el ministro por la discriminación y el maltrato que sufrían, y para solicitar su independización de la Guardia Civil. El ministro quedó impresionado, la independización se efectuó, y Aliaga fue por un tiempo un héroe institucional; pero eso no lo situó más allá de las leyes que gobernaban los apogeos y perigeos en las carreras policiales.

Durante la gestión de Schroth, en la segunda parte del gobierno militar, Aliaga fue destacado al SIN. Como a casi todos los oficiales que sirvieron entonces, el efecto distorsionador del prisma argentino afectó su comprensión de la insurrección senderista.

De todos modos, cuando Aliaga asumió la Dirección de Inteligencia de la Policía de Investigaciones era ya tal el descuido del comando de la institución respecto a ese servicio, que solo una performance que bordeara el milagro lo hubiera resucitado. Aliaga, de otro lado, a diferencia de Jorge, no contaba entonces con el favor de los mandos de la Policía de Investigaciones; y aunque en los años subsiguientes hizo lo posible por no antagonizarlos, su posición de *outsider* fue una desventaja para él.

En la Dirección de Inteligencia, Aliaga duró unos meses. Luego logró ser transferido a la

Dirección de Migraciones, donde su dependencia directa del ministro del Interior disminuía su vulnerabilidad ante los mandos de su instituto. Pese a ello, Aliaga no se desvinculó totalmente de ese campo. Meses después de haber dejado el servicio de inteligencia, él, junto con el entonces coronel de la Guardia Civil, Félix Tumay, y el director de Gobierno, José Terry, intentaron formar un grupo *ad hoc* de inteligencia que dependiera directamente del ministro del Interior (el COAMIN). El grupo llevó a cabo algunas reuniones antes de ser disuelto por el ministro Gagliardi. Durante los años del gobierno de Belaunde, Aliaga prosiguió en una línea de carrera cauta, tratando de mantener intactas sus posibilidades de acceder al comando de su institución. Cuando triunfó el APRA, en 1985, pareció que, al fin, las relaciones pacientemente cultivadas iban a rendir frutos definitivos; y cuando, con el desmoronamiento de la organización de Rodríguez López, llegó la hora de la caída de Jorge, parecía que todo obstáculo para su acceso a la jefatura de la Policía de Investigaciones había sido vencido. Sin embargo, los apristas que tomaron el Ministerio del Interior tuvieron otros planes, y Aliaga fue también “invitado” a pasar al retiro.

Ya desde 1982 un grupo operativo de la Policía de Investigaciones era el que obtenía los mejores resultados. La DICOTE (luego rebautizada como DIRCOTE: Dirección Contra el Terrorismo) había tenido un comienzo poco promisorio. Organizada como división operativa dentro de la Dirección de Seguridad del Estado, su creación era, aparentemente, una respuesta a las acciones continuadas de terrorismo y sabotaje de Sendero dentro de Lima. La razón burocrática, empero, había sido otra, y quizá más importante que la anterior. Seguridad del Estado había sido un motivo mayor de inquietud para Ipinze desde que el general PIP Edgar Luque Freyre había decidido, al decir de López Martínez, “enseñar sus cartas” y ofrecer al nuevo gobierno de Acción Popular su experiencia en el área de seguridad. Luego de la pobre gestión de otro jefe policial, Luque fue nombrado, en 1981, director de Seguridad del Estado ante la alarma de Ipinze; este, para neutralizarlo, logró que se creara la DICOTE, poniendo como jefe de la división a un oficial que le era particularmente adicto, el coronel PIP Héctor Agurto Cisneros.

Agurto no solo era compadre de Ipinze, sino que le debía su resurrección institucional. En efecto, Agurto había sido separado de la Policía de Investigaciones poco antes de que Ipinze asumiera el comando, por acusaciones relacionadas con su conducta privada. Normalmente, el retorno a la institución, una vez efectuada la separación, hubiera sido punto menos que imposible. El que hubiera vuelto, y pasara a dirigir una división de importancia vital, indicaba claramente cuánto le debía a Ipinze, y lo que este esperaba de él.¹⁵

Con un comienzo tan poco promisorio, la DICOTE hubiera parecido predestinada a no tener otro rol que entorpecer la labor de Seguridad del Estado. Funcionó inicialmente en la estación de la Policía de Investigaciones de la calle Porta, en Miraflores, en una casa vieja obviamente inadecuada para la función policial, sin ningún mantenimiento, que daba la impresión instantánea, apenas se llegaba a ella, de haber sufrido una súbita degradación.

En agosto de 1981 entrevisté ahí a Agurto. El coronel era persona de buen timbre de voz, y una estudiada, casi untuosa cortesía. Era obviamente astuto, y en el esfuerzo por parecer mundano las inconsistencias más llamativas quedaban frecuentemente ocultas. Pero era claro que junto con esa imagen —aquella con la cual, sin duda, él hubiera deseado ser recordado y presentarse ante Dios padre— había otra, mucho menos presentable, que se asomaba una y otra vez, que permitía interpretar mejor las muchas vicisitudes en su destino personal.

Aun así, la DICOTE logró algunas capturas de regular importancia en la última parte de 1981. El balance de su rendimiento ante los requerimientos de la situación, empero, fue

deficiente.

En 1982 Agurto fue “invitado” al retiro, y esta vez la salida fue definitiva. Seguridad del Estado tenía, entre tanto, un nuevo jefe, el general PIP Guillermo Rivarola. La DICOTE fue trasladada a las dependencias de seguridad, en la prefectura, y como nuevo jefe fue nombrado el coronel PIP Víctor Gastelú. Durante los meses siguientes (y en gran medida también en los años siguientes), Seguridad del Estado se convirtió, a través de la DICOTE, en la única unidad de defensa del Estado que logró resultados constantes y consistentes en la lucha contra Sendero. Hubo momentos en los que, desde el punto de vista policial, todos los casos importantes en Lima fueron resueltos. Ello, por supuesto, no fue suficiente para detener las acciones de Sendero en Lima —y menos en el resto del territorio nacional—, en tanto Sendero no comprometía en campañas definidas sino los elementos y las partes de la organización que podrían ser reemplazados en el caso probable de caer. No obstante, dentro de las limitaciones de la labor policial, la DICOTE frenó el avance de Sendero en Lima.

En los primeros meses de 1982, Rivarola mantuvo un control efectivo sobre Seguridad del Estado. Con una contextura predispuesta al sobrepeso y maneras afables que tendían a tornarse pomposas en situaciones formales, Rivarola no parecía a primera vista la persona adecuada para la jefatura de Seguridad del Estado. Los resultados que logró fueron, sin embargo, muy superiores a los de todos sus predecesores. Y tanto Gagliardi como López Martínez consideraron meritorio su desempeño: “Yo creo que el mejor [jefe de Seguridad del Estado] ha sido Rivarola. Por resultados e imagen ante sus subordinados”.¹⁶

Como la DICOTE hacía la mayor parte del trabajo, era natural entonces que las relaciones entre Rivarola y el jefe de la DICOTE, Víctor Gastelú, se fueran haciendo más tensas semana a semana, caso a caso. Había incompatibilidad de estilos y celos burocráticos. Adicionalmente, y esta era quizá la razón fundamental, Gastelú era un policía terco, tenaz, sumamente trabajador, que creía tener una noción clara de lo que debía hacerse en Lima respecto a Sendero, y estaba seguro de ser el más capacitado para dirigir las operaciones policiales.

En muchos aspectos, Gastelú era un policía atípico. Mientras la mayoría de los jefes se había formado en la Escuela de Oficiales, Gastelú había empezado su vida policial en los cuadros subalternos, como un auxiliar adscrito al entonces Cuerpo de Vigilancia e Investigación, en 1949. Solo luego de varios años de trabajo, y de repetidos intentos, había sido admitido a la Escuela de Oficiales. Como oficial, sus ascensos habían sido, por lo general, arduos y tardíos. Lo azaroso de su carrera se explicaba en parte por la filiación aprista de su familia. Gastelú era ahijado de Haya de la Torre, y su carrera policial había fluctuado en buena medida al compás de los vaivenes políticos del APRA. Desde 1980 hasta 1985, encontrándose ya en la parte crítica de su carrera, Gastelú usó solo su primer nombre: Víctor. En 1985, luego de la victoria de Alan García, su nombre compuesto: Víctor Raúl (que el tenerlo en el Perú era de por sí una declaración política) sería desplegado orgullosamente, quizá por primera vez. El problema entonces fue que había demasiados Víctor Raúles o equivalentes...

La mayor parte de la carrera de Gastelú había transcurrido en Seguridad del Estado. Por eso, pudo juntar en la DICOTE a varios de los mejores oficiales que habían servido con él anteriormente, o que habían sido sus alumnos en los cursos para oficiales. Algunos de ellos habían servido con Agurto y pudieron proporcionar cierta continuidad. Bajo la dirección de Gastelú la DICOTE empezó a trabajar casi a partir de cero. Las condiciones en que se trabajó, considerando la obvia gravedad que habían asumido ya entonces los atentados de Sendero Luminoso, son un elocuente testimonio de la ineptitud abrumadora con la que el Estado peruano

enfrentó la guerra senderista. Mientras que las oficinas de cualquiera de los numerosos generales de la Policía de Investigaciones, aun las de los más redundantes, eran espaciosas, por lo menos con una línea telefónica directa, y con abundancia aparatosa —no por *kitsch* menos real— de mobiliario, toda la DICOTE operó en 1982 solo en tres habitaciones ubicadas en la parte trasera de la prefectura. Durante varios meses tuvieron solo un anexo telefónico, ninguna radio y ni siquiera un vehículo. Tampoco, en las primeras semanas, un archivo propio. Además de depender de lo poco que tenía Seguridad del Estado, las carencias determinaron necesariamente el estilo de operaciones.

Sin inteligencia previa respecto a las acciones de Sendero, Gastelú persuadió a Rivarola de tener patrullas desperdigadas en los sitios donde con mayor probabilidad se producirían atentados. Los primeros arrestos fueron a ciegas, pero la DICOTE empezó a abrir tarjetas individuales a los sospechosos (eventualmente llegaron a tener más de cinco mil tarjetas). Luego de algunas semanas, la inteligencia se fue haciendo más precisa y los operativos policiales más específicos. No había seguimiento de sospechosos, tanto por carencia de personal como de comunicaciones. Los equipos operativos salían normalmente a misiones predeterminadas. La DICOTE llegó a tener siete grupos operativos, de cuatro hombres cada uno. Cualquier número ligeramente alto de estos hacía crujir las instalaciones de Seguridad del Estado. Los detenidos eran arracimados en dos de las tres habitaciones de la DICOTE. Para mantenerlos incomunicados, se asignaba un policía a cada detenido, y estos eran encapuchados. En esas condiciones, que ya en sí mismas eran un abuso, otros atropellos se hacían, si no inevitables, por lo menos difíciles de prevenir.

¿Fue la tortura la forma normal de interrogatorio en la DICOTE? Aunque la existencia de casos de tortura en los interrogatorios —pese a las negativas vehementes de Gastelú en las numerosas ocasiones que le pregunté al respecto— está al margen de toda duda razonable, y de hecho parecen haber sido relativamente frecuentes, creo que la intensidad de su uso durante los primeros tres años de la guerra fue inferior a la empleada en otras unidades de la Policía de Investigaciones. No tengo una explicación clara respecto a esa menor incidencia, pero es posible que si hay alguna, esté relacionada tanto con la mayor complejidad de las investigaciones como con la especialización de la mayor parte de los oficiales en la DICOTE.

Servir en el área de Seguridad del Estado fue uno de los destinos menos favorecidos en la Policía de Investigaciones desde el inicio de la insurrección de Sendero. La razón era simple: nadie se hacía rico en seguridad. Si tras cada nombramiento en la Dirección de Narcóticos o la Policía Fiscal, por ejemplo, había una competencia encarnizada, lo opuesto era el caso en seguridad, y para muchos policías el ser enviados ahí equivalía a ser exiliados de sus auténticos motivos profesionales. Por eso, los oficiales que permanecían en el área de seguridad año tras año debían sus destinos a tener enemigos muy poderosos o a una real vocación por su trabajo. Estos últimos, con pocas variaciones, estaban entre los oficiales más inteligentes de su institución, y uno de los aciertos de Gastelú fue rodearse de un buen número de ellos.

Resulta curioso ver, en perspectiva, cómo, en más de un sentido, las condiciones de trabajo en la DICOTE eran la imagen en negativo de las de Sendero. En ambos lados del frente, los contendientes libraban guerra de pobres. Si los senderistas habían, literalmente, convertido la necesidad en virtud, los detectives de la DICOTE, en 1982, no les iban muy a la zaga. Los pocos policías que hacían servicio de seguimiento, por ejemplo, y necesitaban comunicarse con su oficina, debían buscar un teléfono público donde lo hubiera, llamar a la central de la Policía de Investigaciones y pedir al siempre atareado operador que transmitiera la llamada al anexo,

usualmente ocupado, de su jefe. En la propia oficina, las condiciones eran a veces tan abrumadoramente congestionadas e inseguras, con los detenidos permaneciendo en ellas, que durante los frecuentes apagones cada detective tenía uno o más detenidos asignados bajo responsabilidad personal. En lo que duraba un apagón debía permanecer agarrándolos de los brazos, hasta que se restableciera la luz. Porque, y es casi ocioso decirlo, no tenían servicio eléctrico de emergencia ni nada similar.

En esas condiciones, el rendimiento de la unidad fue muy superior al de cualquier otra. Con sueldos realmente miserables, sobre todo considerando que se jugaban la vida cada día, los oficiales y parte del personal subalterno trabajaban con frecuencia jornadas sucesivas de diez o quince horas diarias. Oficiales como el entonces comandante Javier Palacios tenían simultáneamente a varios dibujantes haciendo diagramas de la organización y funcionamiento de Sendero, dirigían a los que leían y trataban de analizar los manuscritos capturados, tomaban exámenes a los oficiales sobre el significado preciso de la terminología senderista, y participaban en la planificación de nuevos operativos. Al margen de los vicios y excesos, comunes a la labor policial en el Perú, el desempeño de la DICOTE en esa época fue notable. Compararlo con el que tenían en ese momento otras unidades de la institución, apoltronadas y corruptas, resulta aleccionador. Parece afirmar una constante extraña y algo inquietante en nuestra historia institucional: los grupos pobres, pero con liderazgo capaz y motivado, son los que han logrado siempre los mejores rendimientos.¹⁷

Su éxito, en los términos relativos de la realidad peruana, claro está, creó nuevos problemas. Rivarola se había transformado en el único mensajero de buenas nuevas con que contaba el gobierno, y tanto Gagliardi como sobre todo López Martínez empezaron a tener contacto directo cada vez más frecuente con él, soslayando de hecho al jefe de la Policía de Investigaciones. Las nuevas alianzas eran inevitables, y apenas Rodolfo Ballesteros asumió el comando de la Policía de Investigaciones (su antecesor, Rómulo Alayza, salió el 17 de enero de 1983, meses después de ser públicamente censurado por el fiscal de la nación, debido a que le envió información falsa en el caso de narcotráfico entonces más importante, el de Carlos Langberg),¹⁸ empezó a maniobrar para separar a la DICOTE de Seguridad del Estado. Gastelú, que esperaba salir beneficiado de ello, colaboró entusiastamente en la iniciativa.

Mediante las usuales prestidigitaciones burocráticas, DICOTE pasó a tener categoría de dirección, al mismo nivel que Seguridad del Estado. Consecuentemente, cambió su nombre a DIRCOTE. En las semanas siguientes recibieron algunas camionetas y les dieron nuevas oficinas en la parte trasera de la prefectura. Para Gastelú, sin embargo, el cambio fue el inicio de una ópera bufa oficinesca, cuyo argumento central serían sus siempre contrastados intentos por asumir el comando de la DIRCOTE (y luego de la institución), los cuales se prolongarían, con esa combinación de esperanza casi culminada y súbito fracaso que tan bien conocen el gato Silvestre y Willie Coyote.

Apenas se creó la DIRCOTE, Ballesteros le hizo saber a Gastelú que un simple coronel no podía comandar una dirección, y ofreció hacerlo general en seis meses pidiéndole una paciencia equivalente. Entretanto, el general PIP Agurio Saldívar, que había prestado servicios en Ayacucho hasta poco antes, asumió el comando de la DIRCOTE. Pero Agurio no trajo los mejores portentos para Gastelú. Cuando llegó el momento de los ascensos, Gastelú fue postergado, y un compañero suyo de promoción, con quien lo uniría una comprehensiva rivalidad en los años siguientes, Fernando Reyes Roca, fue ascendido a general y, poco después, nombrado jefe de la DIRCOTE. Gastelú siguió tocando el segundo violín, logrando éxitos

operativos de regular calibre y perdiendo consistentemente los choques burocráticos. Y, al margen de lo involuntariamente cómico que parezcan las aventuras y desventuras generadas dentro de la dinámica propia del mundo policial, comprenderlas es importante para entender la marcha de la guerra en su conjunto. Puesto que las energías que se ponían en librar las tristes batallas por mantenerse a flote y hundir a los competidores, eran, sin ninguna exageración, superiores a las puestas en combatir a Sendero.

Los arrestos que la DICOTE conseguía efectuar eran, como se ha dicho, insuficientes respecto al progreso que Sendero alcanzó en 1982 en todo el país, e incluso en Lima. Parte de la razón es que la acción de la DICOTE estaba limitada a la respuesta policial al delito cometido.

Su carácter de unidad operativa le imponía limitaciones drásticas respecto a la calidad y profundidad de la inteligencia que podía reunir. Por eso, sus capturas difícilmente superaban los escalones intermedios de la organización, y mientras los intocados cuadros de Sendero estuvieran en condiciones de reclutar más militantes de base que aquellos que caían, siempre iba a permanecer uno o dos pasos por delante de la DICOTE, como en efecto sucedió.

La DICOTE no era, pues, la respuesta a la angustiosa demanda de inteligencia, de informaciones precisas que atribulaba al Ministerio del Interior. Cuando habían tratado de proporcionarla (en el caso de la supuesta enfermedad e inminente captura de Guzmán),¹⁹ el resultado había sido embarazoso. De otro lado, todas las medidas que Gagliardi y López Martínez habían tomado para mejorar la captación de inteligencia, no habían rendido, ni rendían, resultados.

El Ministerio del Interior había solicitado la información disponible al jefe de estación de la CIA en Lima, quien en 1982 era Peter Morton Palmer.²⁰ Ante los requerimientos continuados de López Martínez, Palmer le entregó lo que, según él, era toda la información que la CIA tenía sobre Guzmán hasta esa época.

La ficha de Guzmán ocupaba menos de dos hojas escritas en tipo de télex, y tenía errores considerables. “Un peruano llamado Abimael Guzmán-Reynoso, nació el 3 de diciembre de 1934 en Arequipa, Perú, de padres chilenos. [...] En octubre de 1966 realizó un viaje a Rusia, regresando el 11 de noviembre de 1966”. El párrafo final es una buena representación del estilo burocrático y la falta de claridad del documento: “De acuerdo a una revista peruana, Guzmán es miembro del Buró Político de Sendero Luminoso, considerado como la entidad más importante de la dirección de Sendero Luminoso, Guzmán es también miembro del Comité Central de Sendero Luminoso y actúa bajo los seudónimos de ‘Álvaro’, ‘Álvaro 1,’ ‘Álvaro II’ y ‘Gonzalo’”. La información también listaba el número de la libreta electoral y del pasaporte de Guzmán, las fechas exactas de su ingreso y salida del país, lo cual solo daba una idea de las fuentes posibles de información de la CIA²¹ dentro de las fuerzas de seguridad peruanas, pero nada de la inteligencia que tan desesperadamente necesitaba el Ministerio del Interior entonces.

Las relaciones con los enlaces de inteligencia de la embajada soviética eran menos fluidas que con la CIA, por lo menos al nivel de la dirección del Ministerio del Interior. Con las diversas fuerzas armadas y las policiales, el vínculo de la inteligencia soviética, sobre todo de la KGB, era variable. Entre todos los institutos armados, la Marina era la más recalcitrante a mantener relaciones de ninguna especie con los soviéticos. Pero tanto el Ejército como la Fuerza Aérea, que se habían aprovisionado masivamente de armamento soviético en la década del 70, tenían un vínculo constante derivado de la necesidad de mantenimiento del material y entrenamiento de oficiales y personal técnico.

En un determinado momento, la cooperación se hizo extensiva al ámbito de inteligencia y de

entrenamiento de las fuerzas policiales. Que los soviéticos le conferían importancia a esa relación, puede conjeturarse por la posición de quien dirigió el lado soviético en la primera renegociación de la deuda militar peruana: Yuri Andropov, quien ayudó decisivamente a refinanciar la deuda militar por diez años más. La renegociación fue considerada tan favorable al Perú que en 1978 el entonces jefe del SIN, Juan Schroth Carlín, condecoró en Moscú a Andropov, aún jefe de la KGB, con la medalla al mérito militar. La condecoración fue algo más que un reconocimiento formal del lado peruano. Incluso militares totalmente anticomunistas como Schroth no tuvieron ningún inconveniente en proseguir la relación de cooperación técnica con los soviéticos, por cuya habilidad en las artes combinadas de inteligencia y policía expresaron frecuentemente admiración.

Durante el gobierno militar, y hasta 1982, algunas decenas de oficiales del Ejército y la Policía recibieron becas del gobierno soviético para seguir cursos policiales y de inteligencia en la URSS. El SIN mantenía, a la vez, un contacto fluido con el responsable de inteligencia de la embajada soviética. Ello fue hasta la salida de Essenwanger en 1982. Luego, cuando dos oficiales navales asumieron en sucesión la dirección del SIN (los contralmirantes Edgardo Colunge y Javier Rocha, en 1983 y 1984 respectivamente), la relación se cortó para todo efecto práctico. No obstante, desde 1986, cuando el general Edwin Díaz tomó la jefatura del SIN, hubo un reaceramiento con los soviéticos.²² Desde fines de 1982, pero sobre todo a partir de 1983, Sendero Luminoso acusó a la Unión Soviética de colaborar activamente en el esfuerzo contrainsurgente de las Fuerzas Armadas y la Policía, “suministrando aproximadamente el 50% del material militar y policial y unos cientos de ‘consejeros militares’”.²³ En un documento, Sendero acusó a la URSS de proporcionar los helicópteros y el asesoramiento en operaciones helitransportadas de contrainsurgencia en Ayacucho. Como se verá, las acusaciones fueron seguidas por varios ataques, algunos de los cuales resultaron sangrientos. Si la mayor parte de las imputaciones senderistas eran exageradas (los helicópteros en Ayacucho, por ejemplo, no eran de manufactura soviética), es cierto en cambio que algunos de los jefes policiales y militares que prestaron servicio en la zona en emergencia habían recibido cursos de la KGB en la URSS durante el gobierno militar. El conocimiento recibido en dichos cursos no comportó cambio alguno en la guerra. En medio de la abundancia de instituciones dedicadas en teoría al acopio de inteligencia, con los funcionarios de servicios extranjeros poblando también, y complicando el cuadro, lo real es que en esos meses críticos ninguna luz real alumbró, pese a la desesperada urgencia con la que se la buscaba, la penumbra informativa. Y el diálogo de los gobernantes con su coro de espías siguió siendo un coloquio de ciegos.

1 El Comité de Asesoría del Ministerio del Interior se instaló el 6 de noviembre de 1981. Estuvo integrado inicialmente por el jefe del SIN, Ludwig Essenwanger; los jefes de los servicios de inteligencia militares, contralmirante Ortecho, mayor general Marchesi y coronel Portilla; y por jefes de inteligencia de la Policía de Investigaciones, general Teófilo Aliaga, y de la Guardia Civil, coronel (luego general) Juan Zárate.

2 Entrevista con José Gagliardi Schiaffino, el 1 de julio de 1987.

3 Entrevista a Rogelio Ramírez.

4 Entrevista con Sergio Escalante, el 15 de abril de 1987.

5 Entrevista a Salvador Otárola.

- 6 *Ibidem*. La cooperación entre servicios de inteligencia y seguridad latinoamericanos fue especialmente intensa y generalizada en la década del 70. La metodología estandarizada de “guerra sucia” produjo secuestros y asesinatos a escala internacional. Parlamentarios uruguayos como Zelmario Michelini y Héctor Gutiérrez fueron asesinados en Buenos Aires, como lo fue el expresidente de Bolivia, Juan José Torres. Decenas de refugiados chilenos fueron asesinados, entre ellos el general Prats. Vale la pena anotar que, pese a la tensión fronteriza entre Chile y Argentina, que los iba a colocar en pie de guerra al cabo de pocos años, había algunas decenas de agentes policiales chilenos en Buenos Aires cooperando estrechamente con sus colegas argentinos.
- 7 Sobre este punto y el anterior, ver: Gillespie, Richard. *Soldiers of Peron: Argentina’s Montoneros*. Oxford: Clarendon Press, 1982, p. 257.
- 8 Entrevista con *Sergio Escalante*, el 15 de abril de 1987.
- 9 Entrevista a *Rogelio Ramírez*.
- 10 *Ibidem*.
- 11 *Ibidem*.
- 12 *Ibidem*.
- 13 Entrevista con Héctor López Martínez, el 25 de mayo de 1987.
- 14 De hecho, Jorge hizo destruir toda la información básica sobre Rodríguez López que ya entonces existía en los archivos de inteligencia.
- 15 Cuando Ipinze asumió la dirección de la Policía de Investigaciones, el 4 de agosto de 1980, uno de sus primeros actos fue nombrar a Agurto jefe de su oficina de asesoramiento personal.
- 16 Entrevista con Héctor López Martínez, el 25 de mayo de 1987.
- 17 Desde abril de 1982 hubo detenciones importantes. Entre otros, de jóvenes pero ya veteranos militantes senderistas, como los hermanos Tullich Morales (por los atentados contra los ministerios de Energía, Educación, Trabajo y Fiat-Perú). También fueron capturados la mayoría de los autores de los atentados contra el Centro Comercial Arenales, el Centro de Convenciones Crillón, Hindú-Hogar, Scala Gigante, Banco de Crédito, Banco Continental, etc.
- 18 Lo que no se sabía entonces es que Alayza estaba implicado en lo que sería el caso Rodríguez López.
- 19 Ver el capítulo: “La oferta de asilo a Guzmán”.
- 20 Palmer había trabajado antes en la Estación CIA en Ecuador (ver el libro: Agee, Philip. *Inside the Company: A CIA Diary*. 1975).
- 21 Por ejemplo, la nota de información 15061 del SIN, fechada el 9 de diciembre de 1981 sobre los “Antecedentes de Abimael Guzmán” suscribe también la curiosa teoría del viaje de Guzmán a la Unión Soviética, más de dos años después del rompimiento con la facción prosoviética. El párrafo dice literalmente: “Parte N° 15 del 23 Mar 65, viajó del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con destino al Ecuador, presumiéndose que su objetivo haya sido viajar a Rusia para asistir a un congreso; es cuñado de Alejandro La Torre Carrasco, quien se encuentra desde 1960 en Rusia estudiando ingeniería”.
- 22 Entrevista a *Salvador Otárola*.
- 23 Boletín N°1. Madrid: Comité de Apoyo a la Revolución Peruana, diciembre de 1984, pp. 10-11. Más sobre lo mismo en: “La verdad sobre la guerra popular en el Perú”, Madrid: 1984.

XVIII. La caída de Vilcashuamán

Luego del asalto a la cárcel de Ayacucho, los contrastes continuaron. A la presión de Gagliardi y de López Martínez sobre las fuerzas policiales, exigiéndoles pasar a la ofensiva y obtener logros concretos, estas respondieron con medidas aisladas y erupciones efímeras de energía.

El 4 de marzo, el general de la Guardia Civil Walter Andrade asumió el comando de la zona en emergencia. En los días siguientes despachó patrullas de sinchis a diversos puntos, para tratar de recapturar a los prófugos de la cárcel de Ayacucho. Los resultados fueron poco satisfactorios. El 7 de marzo una patrulla sinchi capturó herido en Julcamarca a Jesús Luján González.¹ Llegó agonizante al hospital de Ayacucho, donde falleció tres días después. La única otra persona recapturada durante ese mes fue Félix Quispe Palomino, a quien aprehendieron herido el 21 de marzo en Ongoy, Andahuaylas. En la misma operación fue muerto otro de los prófugos: Carlos Flores Cerna.

El resto de los fugados se hizo invisible a la pesquisa policial.² Lo que ello significaba, en términos de la dimensión de una organización capaz de asimilar en la clandestinidad profunda a tanta gente a la vez, no fue calibrado entonces.

Al mismo tiempo, sin darse respiro, Sendero intensificó operaciones. El 9 de marzo, francotiradores hostigaron el puesto policial de La Quinua, y el día siguiente, la garita policial en la carretera Los Libertadores, situada en las afueras de Ayacucho, fue atacada.

En la madrugada del 18 de marzo, fue asaltado el puesto policial de minas Canarias, en la provincia de Víctor Fajardo. Rumores de un ataque inminente se habían hecho insistentes en los días anteriores.

El coronel de la Guardia Civil Carlos Delgado Matallana, quien había estado en el lugar poco antes, respondió a la ansiedad de los dueños de la mina destacando tres policías más. Sin embargo, el contingente policial era —aun teniendo en consideración los refuerzos— marcadamente inferior al existente durante la agitación laboral de 1980.³

La acción guerrillera⁴ se produjo en la madrugada. El destacamento policial, sorprendido cuando dormía, fue dominado sin presentar resistencia.⁵ El único herido de bala fue el jefe de seguridad de la mina, Adolfo Pickman, a quien luego se le perdonó la vida, cuando en “juicio popular”, una asamblea matutina —ante la cual Pickman fue presentado, amarrado y con los ojos vendados— decidió no fusilarlo. Considerando la tensión laboral que imperaba en el asiento minero desde hacía más de dos años, la conducta del grupo guerrillero en esa ocasión fue relativamente blanda. Pickman y los policías fueron llevados como prisioneros en un volquete de la mina, pero unos kilómetros después se los dejó en libertad.

El arsenal senderista se incrementó con las armas y explosivos capturados: cuatro metralletas Star y cuatro revólveres Smith & Wesson. Cosecha relativamente pobre, si no se incluyen cinco mil seiscientos cartuchos de dinamita, tomados del polvorín de la mina.⁶

El 19 de marzo, en la antesala de la reunión semanal del Consejo de Ministros, el tema dominante fue el nuevo contraste policial. Sin embargo, Belaunde no tocó el asunto durante ese consejo, ni tampoco en la reunión anterior del Consejo de Defensa. Silenciar el tema era un signo seguro de la creciente irritación e indignación de Belaunde. Él había aprendido el sistema del silencio ominoso, el ignorar estudiado del caudillo decimonónico Nicolás de Piérola. En contraste a otro presidente del siglo pasado, José Balta, cuyos legendarios arranques de ira provocaban huracanes efímeros en el gobierno limeño, Piérola escogió el método de ignorar deliberadamente los asuntos, y sobre todo a las personas irritantes u ofensivas. Para una cultura cortesana como la limeña, la interpretación de los favores o desagradados del “Califa” (así llamaban a Piérola sus seguidores) era parte importante de la formación en la alta política. Belaunde había copiado en eso casi literalmente a su maestro. El problema en 1982, como lo había sido en 1881 cuando Piérola dirigía el gobierno peruano desde la capital acosada por las tropas invasoras chilenas, era que la gente no quería, ni necesitaba, augustas esfinges que descifrar, sino líderes que interpretaran para ellos la situación, la explicaran con claridad y les señalaran formas concretas de resolverla.

El mismo día que el Consejo de Ministros reconocía la importancia de la violencia sediciosa abrumándola con su silencio, un grupo senderista asaltó el fundo Providencia, en la provincia de Andahuaylas, Apurímac. El propietario, Alfredo Echegaray Trelles, fue asesinado. En tanto el ataque evidenciaba que las acciones senderistas habían rebasado el área de emergencia en Ayacucho, el gobierno, a sugerencia de Gagliardi, declaró de inmediato igual situación especial para Andahuaylas.⁷

El 26 de marzo Sendero intensificó la campaña de “Batir” en el distrito de Vilcashuamán.

Quebrada abajo de los pueblos de Parcco y Pomatambo, ambos a cuatro años de distancia de su propia hora de tragedia, el fundo de Ayzarca había continuado funcionando después de la incursión del 24 de diciembre de 1980. Asesinado entonces el propietario, Benigno Medina Zea, la hija de este, Marina, había tomado la administración del fundo con su esposo, Andrés Gutiérrez, un expiloto civil. La sola permanencia en el lugar era un desafío a Sendero, y ellos lo sabían. Pese a eso, continuaron instalados en la casa-hacienda con sus dos hijos, de cuatro y dos años. Un contingente de ocho policías, conectados por radio con Huamanga, había sido destacado al fundo, y la propia familia había adquirido algún armamento. Poco antes de las 6 a. m. los centinelas dieron la voz de alarma. Alrededor de ochenta personas tomaban posiciones para atacar el fundo. Uno de los centinelas, el guardia civil Silvano Añanca intercambió disparos con la vanguardia, y fue muerto apenas se iniciaba el ataque.

El resto, policías y familia, se parapetó como mejor pudo en el segundo piso de la casa-hacienda, y dispararon a su vez. Los defensores estaban armados con cuatro metralletas, cinco revólveres del calibre 38, tres revólveres 22 y dos carabinas viejas. La munición era limitada (no más de dos cacerinas por metralleta), pero aun así, el grupo atacante tampoco parecía disponer de más armas de fuego o balas.

La diferencia, que una y otra vez inclinaría la suerte de los encuentros en forma súbita y terminante en los meses siguientes, estribaba en la dinamita. Acortando distancias con el punto atacado, parapetándose en lugares próximos, los granaderos senderistas lanzaban explosivos a un ritmo sostenido. Eran granadas rústicas, hechas sobre la base de cartuchos de dinamita, pero

eficaces; algunas con el poder explosivo de granadas defensivas. Si en los combates solo hubiera habido disparos, proyectiles en línea recta, probablemente la policía hubiera podido resistir muchos asedios. Pero no tenían cómo enfrentar el ataque parabólico de los explosivos. Lanzadas contra los techos generalmente débiles de las construcciones serranas, las granadas convertían el parapeto en una trampa. Normalmente, la sola concusión de las explosiones y el estrépito del techo viniéndose abajo terminaban la resistencia. En este caso, mientras se hacían llamados desesperados por radio a Ayacucho, la resistencia se prolongó más.

Los atacantes senderistas apretaron el asedio,⁸ arrojando dinamita desde una capilla que quedaba a treinta o cuarenta metros de la casa. Luego hicieron aprestos para incendiar esta. Entonces, los Gutiérrez y los policías decidieron rendirse, y desde la ya semiderruida construcción, sacaron sábanas a modo de banderas de rendición.

Marina Medina fue dejada en la casa con sus hijos, mientras su esposo y los policías eran llevados del lugar. Lo último que escuchó Marina Medina fueron los quejidos de su esposo al ser golpeado, alejándose del lugar.

A las 4:30 p. m. aparecieron los policías de regreso. Cansados, apenas vestidos, golpeados, vencidos. Pero vivos. Andrés Gutiérrez no regresó con ellos. Su esposa lo iba a esperar por varias semanas, antes de tener que mirar restos humanos descompuestos y reconstruir, a partir de detalles aún presentes en la materia degradada, la identidad de su esposo. Ese iba a ser pronto el destino de decenas de familiares en Ayacucho, a ambos lados del conflicto, o más frecuentemente, al medio. Marina Medina fue una de las primeras en vivirlo. A las 5:30 p. m. llegó un helicóptero, con una dotación de ocho sinchis. No lejos, en las márgenes del río Pampas, aún se divisaba a los atacantes. Los sobrevivientes, escoltados por los sinchis, se refugiaron en una ladera, hasta que fue posible la evacuación a Huamanga.

Esa noche oscureció en todo el país. En Lima, un apagón general fue seguido por ataques contra centros comerciales en los distritos de Lince y Miraflores. Grupos de senderistas con bombas molotov y con bolsas de plástico llenas de gasolina iniciaron varios incendios y estampidas. Algunos fueron capturados, especialmente en Lince. Un policía, el guardia civil Washington Falcón, sufrió quemaduras de primer grado durante el incendio del Centro Comercial Arenales, en Lince.

El 30 de marzo un grupo armado de Sendero Luminoso ingresó al distrito de Concepción, en la provincia de Cangallo. El empleado de la oficina de correos, Grimaldo Castillo, un militante de Acción Popular, fue capturado y sometido a un linchamiento apenas disfrazado de “juicio popular”. Acusado de proporcionar informaciones a la policía, Castillo fue golpeado y luego victimado de un disparo. Su cadáver fue colgado de un poste con carteles infamantes, el “así mueren los soplones” que se habría de colocar sobre tantos pechos aún calientes. Según versiones,⁹ fue mutilado después de muerto.

Hay una foto tomada a principios de abril de 1982, en el aeropuerto de Ayacucho, cuando llegaban los restos de Castillo en un helicóptero. Tres mujeres y una niña siguen a los sinchis que, a paso vivo, llevan el cadáver de Castillo en una manta. Lloran las tres mujeres con llanto abierto y desesperado y la niña llora entre aterrada y dolorida, agarrándose a una de las mujeres, como queriendo protegerla. Los sinchis caminan, impasibles. La pobre niña. Para Sendero, Castillo era un número más, en parte escogido al azar, del número de víctimas necesario para fracturar la estructura del gobierno en el área rural e imponer su propio control. Para la niña, Castillo era la mitad del universo.

Los ritos de muerte volvían a ser el centro de la vida ayacuchana. Los solemnes ritos

funerarios que iban a quedar en la memoria del lugar; las explosiones de dolor que iban a ser olvidadas.

Algunas semanas después, en abril, un grupo de militantes limeños de Acción Popular, del comité de Miraflores, hizo un gesto singular, que no creo se hubiera hecho antes o repetido después.

Viajaron por tierra desde Lima hasta el distrito de Concepción, en Ayacucho, para guardar un minuto de silencio en el lugar donde Castillo fue asesinado. Luego retornaron a Lima. El viaje tuvo mucho de común con lo que hacía el gobierno, y especialmente Belaunde en ese tiempo: gestos, sin otra consecuencia que la actitud simbólica.

El 31 de marzo, la guarnición policial de Vilcashuamán presintió un ataque inminente. Era una jefatura de línea, mandada por un oficial, a cargo de varias guarniciones o puestos menores, cuya dotación de policías se había incrementado a medida que los puestos periféricos eran abandonados. Había una veintena de policías, pero era un destacamento con moral combativa pobre, integrado por personal que había estado sujeto a la intimidación sistemática de Sendero en sus puestos anteriores. Tenían, además, poca munición y menos fe en la eficacia de su armamento: metralletas y revólveres, en los espacios amplios de la sierra. En las noches —con el pueblo totalmente a oscuras desde que la planta eléctrica fuera dinamitada por Sendero un año antes— toda la guarnición se replegaba en el puesto.

Esa noche, luego de un día de persistente rumores, se movieron luces en los cerros de pendiente suave que dominan Vilcashuamán. Gritos y amenazas llegaron a la guarnición, en medio de la noche helada. Las metralletas de la jefatura respondieron nerviosamente a la oscuridad, y los llama-dos por radio a Ayacucho se hicieron crecientemente desesperados. A las 7:30 p. m. un policía fue herido, aunque nunca quedó claro si había sido un accidente o no.

En la Novena Comandancia de Ayacucho, el general de la Guardia Civil Jorge Monge Llanos, jefe de la II Región Policial, que incluía Lima y Ayacucho, pedía calma por radio e información concreta. Monge acababa de llegar de Lima, presionado por Gagliardi y su exasperada exigencia de pasar a la ofensiva, de no abandonar el campo. En cuanto a valor personal, Monge no necesitaba que lo empujaran. Era un general de origen humilde, que había empezado como guardia y hecho luego un ascenso tesonero. Aunque había nacido en la costa, en Chíncha, le decían “el cholo”, y su pelo cortado al cepillo, los rasgos, correspondían al apodo. Era también uno de los pocos generales respetados por el personal subalterno, por cuyo bienestar expresaba un interés genuino. Y esa noche, al escuchar por la radio la angustia creciente del oficial al mando de la guarnición de Vilcashuamán, y temiendo un colapso inminente, no se le ocurrió otra cosa que colgarse una metralleta al hombro, llenar un camión, un Unimog con guardias, y emprender el viaje nocturno a Vilcashuamán. Casi cada curva del camino largo era apropiada para emboscar un camión solitario; y si la mitad de lo que se transmitía por radio desde Vilcashuamán era cierto, el Unimog iba a ser emboscado varias veces. Valiente, el cholo Monge no reparaba en riesgos, y esa era su mayor virtud.

El tráfico radial entre la Novena Comandancia de Ayacucho y la jefatura de línea de Vilcashuamán había sido seguido en el Ministerio del Interior, en Lima, con creciente ansiedad. A raíz de los continuos fracasos en Ayacucho a lo largo de marzo, empezaba a gestarse un sentimiento de desesperación en el ministerio; no tanto por percibir la fortaleza de Sendero, sino la debilidad de la Policía. Según Héctor López Martínez: “Esos fueron meses de contraste en contraste, y no había otro consuelo que lo que se hizo en Lima”.¹⁰

Cuando, alrededor de las 9 p. m., Gagliardi informó a Belaunde sobre la situación,

incluyendo la noticia del guardia herido, el viaje del general Monge, y la última información, que la comunicación radial se había cortado, el presidente indicó sorprendentemente a Gagliardi que él también iría a Vilcashuamán, con las primeras luces del día, a dar apoyo moral a la guarnición sitiada.

Tras su fracaso en disuadir al presidente de la República, el pundonoroso Gagliardi hizo los aprestos necesarios para el viaje. Rayando el alba, el avión presidencial despegó de la base aérea del Callao, llevando a Belaunde, Gagliardi, el comandante general del Ejército, Francisco Miranda Vargas, y el ministro de Aeronáutica, José García Calderón.

Cuarenta minutos después aterrizaban en Ayacucho, donde un helicóptero de la Fuerza Aérea ya calentaba motores. Las pocas horas entre la decisión y el viaje habían sido suficientes para agitar a las autoridades de la ciudad. Todas se encontraban alineadas en el aeropuerto cuando el avión presidencial carreteó hacia el estacionamiento.

Pero cuando Belaunde emergió del avión, la primera persona que corrió hacia él fue Marina Medina. La sobreviviente de Ayzarca se abrazó llorando al presidente y le rogó que la ayudara a encontrar a su esposo. Ya los terroristas la habían convertido en huérfana, le dijo, y ahora le iban a matar al esposo.

Quizá en ese momento, a lo mejor durante el resto del día, el destino le ofreció a Belaunde tentar la victoria. En la portada de *Caretas* esa semana, mientras Marina Medina llora sobre su pecho y él la abraza, su rostro está contraído en una expresión de severidad y energía, como aquella que resulta cuando se afrontan los grandes proyectos colectivos; sin la blandura habitual que iba a ser crecientemente el blanco de caricaturistas (dibujado sobre una nube, profiriendo su palabra favorita: “gallardo”). Fresco aún el recuerdo del presidente sosteniendo la bandera nacional en el puesto militar de Paquisha, luego de los choques fronterizos con Ecuador en 1981, todavía un alto porcentaje de la población veía en Belaunde al galvanizador de la energía colectiva, a la persona capaz de encauzarla.

En el instante siguiente, Belaunde, Miranda, Gagliardi y García Calderón habían abordado un helicóptero y cruzando Cangallo, volaban hacia Vilcashuamán. Marina Medina quedó en Huamanga, próxima a saber que además de huérfana era también viuda.

¿Qué había llevado a Belaunde a abandonar el silencio estudiado, del ignorar a Sendero a la acción compulsiva?

Vilcashuamán tocaba las cuerdas más sensibles en Belaunde. En su biografía personal y en su doctrina política, en aquello que había justificado su presencia política en la nación por cuatro décadas, Vilcashuamán, “el Halcón Sagrado”, era uno de los santuarios principales.

Vilcashuamán había sido el centro administrativo del Imperio inca primero, y luego el testimonio melancólico de su desaparición y olvido. Nada hablaba tanto de grandeza derrotada, de poderíos abatidos, como Vilcashuamán. De allí la intensa fascinación que había ejercido sobre los viajeros eruditos peruanos. En sus tiempos de candidato, Belaunde había llegado a Vilcashuamán llevando consigo libros tales como *Paisajes peruanos* de Riva Agüero¹¹ y *Costa, sierra y montaña* de Aurelio Miró Quesada.¹²

Riva Agüero —escritor e historiador excepcional; político que, en el curso de una trayectoria intelectual demasiado larga, descendió del ardor positivista de su juventud, al fascismo patético y amargo de sus años crepusculares— había llegado a Vilcashuamán, a la mitad de su peregrinaje gentil por la sierra peruana, en 1912, buscando signos de aquella ciudad que los cronistas habían descrito como el principal centro administrativo imperial, y lugar sagrado a la vez, poblada por más de cuarenta mil habitantes. Los caminos principales del imperio convergían hacia

Vilcashuamán, considerado por los incas el centro geográfico preciso entre las fronteras septentrional y meridional del Tahuantinsuyo. Aliado de los adoratorios pocras primitivos, el inca Pachacútec edificó el Templo al Sol, guardado por cincuenta porteros y vecino a un *acjllahuasi* donde, al decir de los cronistas, quinientas vírgenes y quinientas mujeres del inca se alojaban. Sobre los templos, mirando al sol y la luna, tronos de piedra dominaban el horizonte de montañas.

La dominación española, y específicamente la fundación de Ayacucho, habían significado la rápida decadencia de Vilcashuamán. Ella no cesó en la República; y Riva Agüero vio a “la postrada Vilcas, olvidada en todos los mapas, se reducía a la caduca y miserable aldea que contemplé afligido en la luminosa tristeza de una tarde de junio”.¹³ La descripción de Vilcashuamán por Riva Agüero es un doloroso canto fúnebre que Belaunde tuvo muy presente al llegar años después a ella:

Nunca he sentido más punzante y desgarradora la sensación de la decadencia. El silencio del caserío era profundo, porque casi todos sus habitantes se hallaban aún en los campos. Algún trino de pájaros, los humildes ruidos de corral, el cacarear de las gallinas, el paso de una recua, turbaban la soledad que oyó un tiempo los cantos de adoración al sol y las frenéticas aclamaciones al inca [...]. Restos de un gran naufragio histórico bajo la luz del poniente, dijérase que las ruinas de Vilcas entonaban un cantar desesperado, más desvalido y angustioso que la música de las quenás. Opulencia extinta y plañidera, tristeza leyendaria, dos notas que resumen el alma de la sierra en el Perú.¹⁴

La elegía de Riva Agüero a la gloria desfallecida de los incas se hacía más dolorosa al contrastarla con la imagen de cómo debió haber sido el lugar cuando el esplendor pasado:

La calzada limpia de guijarros y regada de flores, el ejército de los treinta mil guerreros indios con lanzas, hachas, *macanas*, patenas y armaduras de metal [...] los champis de cobre, las adargas y las camisetas de hilo de oro de la privilegiada milicia incaica, “que relucían extrañamente” según la frase de Pedro Pizarro; las andas de los ídolos; las hamacas de los mayores caciques; y en el hoy desmoronado torreón, el inca con los collares de perlas y esmeraldas y la recamada *yacolla* o manto regio, ceñida la frente por la suelta y sangrienta *mascapaycha*, dorada y bermeja, y el listado turbante.¹⁵

¿Hubiera podido acaso Belaunde, el proponente del retorno a las fuentes imperiales para recobrar en el futuro las grandezas pasadas, haber evitado llegar a Vilcashuamán como peregrino cuando candidato? Ciertamente su mente pragmática de arquitecto tuvo percepciones diferentes a las de Riva Agüero; y donde este recordaba haber transitado por caminos de vértigo: “Luego el camino tuerce, apegándose a los cerros de la derecha y descendiendo por revueltas espantables, que parecen balcones sobre el abismo”.¹⁶ Belaunde había visto en ellos otro mensaje monumental de la sabiduría pasada: “No existiendo la rueda (entre los incas) pudieron recurrir a interminables escalinatas para alcanzar la línea de cumbres, donde no se producen derrumbes que obstruyen el tránsito. Cerca de Vilcashuamán estos escalones se cuentan por miles, en la escalera más grande del mundo”.¹⁷

Tal era la relación de Belaunde con Vilcashuamán, y con lo que simbolizaba. Tal la razón del vuelo matutino a la villa amagada. Aún temprano en la mañana, cuando ya el sol había limpiado el aire de fantasmas, bajó el helicóptero en Vilcashuamán. Belaunde salió primero y avanzó hacia la plaza, seguido de cerca por Gagliardi, Miranda y García Calderón. Su llegada fue tan inesperada que nadie fue a recibirlos, concentrados como estaban los policías en escuchar al general Monge, quien había arribado poco antes.

Minutos después, el pabellón nacional se izaba en la plaza de armas, la guarnición policial,

enérgica ya y alerta, formaba en fila en el perímetro. Belaunde, acompañado por el oficial al mando, revistó al contingente, cuyo aplomo marcial parecía recuperado. Luego de la revista, Belaunde se reunió brevemente con algunos pobladores de Vilcashuamán, a la entrada de las ruinas del Templo del Sol, levantando un vaso de chicha, el presidente brindó con la gente que lo rodeaba.

Me dijeron anoche que había alarma en Vilcashuamán. Que el pueblo a oscuras —volada por los terroristas su planta eléctrica hace un año— amparándose estos en la penumbra, era atacado, de nuevo, por francotiradores, arteros en los disparos, veloces en la fuga. No pude resistir el impulso de venir a verlos sin tardanza para decirles que estoy con ustedes y con los defensores del orden.¹⁸

Luego, hecho el gesto, o, en el lenguaje taurino que tan certeramente lo expresaba, el “desplante”, volvió al helicóptero y retornó a Ayacucho. Ahí visitó el mercado —donde lo aplaudieron— y los locales de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Al dirigirse a ellos, Belaunde les reclamó una actitud más decidida contra “los enemigos de la Constitución y la paz”; y a la Guardia Republicana, le pidió, con énfasis, “serenidad”. En su lenguaje, eso era una referencia y un reproche a los asesinatos en el hospital de Ayacucho.

Al terminar el día, el presidente se encontraba de nuevo en Palacio de Gobierno y el crepúsculo descendía sobre la sierra de Vilcashuamán. El gesto había sido hecho. Y para Belaunde, especialmente para el Belaunde tardío, el gesto, la forma, era casi todo el contenido. Por eso las alusiones taurinas (donde la forma es la esencia, y el fondo, la muerte del toro, un accidente que el arrastre glosa con rapidez) se presentaban con frecuencia creciente en su conversación y su discurso.

Cierto que antaño el gesto le había servido cuando candidato, y en momentos definidos durante sus presidencias. Ellos correspondían a Belaunde, el luchador político, en cuanto diferente de Belaunde el constructor. Aquel afrontaba la lucha como torero y no como guerrero. Ya Bourricaud lo había notado al describir otro incidente —cuyo drama parece calcado de la tauromaquia—ocurrido en Cusco, el 21 de mayo de 1962:

De ese grupo partió una piedra, o más bien varias piedras, y una de ellas alcanzó a Belaunde en medio de la frente. Con el rostro ensangrentado, el orador vuelve a subir a la tribuna y declara: “¡Qué importa que una gota de mi sangre se derrame en esta plaza central de Cusco, donde se dio muerte al prócer de nuestra independencia, Túpac Amaru! ¡En cuanto a mí, quiero que el pueblo sepa no solo que estoy dispuesto a derramar algunas gotas de sangre de una herida sin importancia, sino a dar mi vida por hacer relucir la mentira de los apristas y de los comunistas de Cusco!”. La partida está ganada. Sus fieles alzan en andas al candidato y lo conducen a su hotel. Lo que hay que retener de esta crónica es la actitud del arquitecto para transformar cualquier episodio de su existencia en un momento histórico o, si se prefiere, en una imagen de Epinal. El general Odría, al que un percance similar le había ocurrido en Huancayo, quedó demudado. Por su parte, el arquitecto invoca a Túpac Amaru. [...] En el episodio del Cusco, el reto sale victorioso; esta vez el arquitecto ha derrotado a sus adversarios por la belleza de su gesto. Pero, ¿puede una política remitirse a la eficacia simbólica del gesto?¹⁹

En el caso de Vilcashuamán, el reto fue tomado. El guante que Belaunde lanzara al pie del Templo del Sol fue recogido por manos silenciosas en la noche; y la respuesta fue ponderada por gente que no tenía las compulsiones de un toro bravío.

El 3 de abril, un grupo guerrillero batió el distrito de Ocros. Primero asaltaron y arrasaron las instalaciones de la hacienda La Colpa, apresaron a un comunero llamado Arcadio Pillaca, lo

acusaron de colaborar con el dueño del fundo y le dieron muerte. Dos días después, un grupo de periodistas llegó a la misérrima casa donde los comuneros “tristes y embriagados” velaban el cadáver de Pillaca, tendido sobre una mesa, con la cabeza agujereada por “un disparo en la sien que le habría reventado los ojos”.

Saliendo de La Colpa, el grupo guerrillero entró en Chumbes. Ahí saquearon la tienda de Pastor García y se llevaron a este “a empujones y golpes para afuera”. Otro grupo entró a la fonda de Leoncio Kajatt, a quien acusaron de colaborar con la policía, por haberla atendido en su restaurante. García y Kajatt fueron conducidos fuera del poblado, y ejecutados a balazos al pie de un despeñadero. García sobrevivió. Malherido, regresó arrastrándose hasta su casa. Solo dos días después, uno de sus hijos lo llevó al hospital de Ayacucho. Historias tales de supervivencia serían frecuentes en los años inmediatos. Pueblo duro, acostumbrado a privaciones extremas y largos dolores.

Sobre la casa de Leoncio Kajatt, en cambio, seguía ondeando la bandera roja con la hoz y el martillo una semana después de su asesinato. Ninguno de sus familiares se había atrevido a moverla y la policía no había llegado todavía.

El 4 de abril, el general Walter Andrade retornó a Lima. Luego de las batallas burocráticas en la capital, regresó a Ayacucho cuatro días después, pero esta vez solo como jefe de Estado Mayor del nuevo jefe de operaciones: el general de la Guardia Civil Héctor Rivera Hurtado, un policía especializado en el control de desórdenes callejeros. Andrade iba a durar en Ayacucho hasta comienzos de mayo, cuando viajó a Huancayo a encargarse del comando de la subregión. Vuelve a aparecer en esta historia en 1985, con relación al caso Rodríguez López. Rivera permaneció en Ayacucho hasta el 14 de junio. Problemas médicos fueron la causa aparente de su regreso a Lima, donde —bajo un clima más benigno— recuperó la salud y asumió la dirección de instrucción de la Guardia Civil. Desde entonces, el coronel de la Guardia Civil Carlos Delgado Matallana volvió a tomar el comando de la zona en emergencia, mientras decenas de generales en Lima se disputaban el espacio en torno a escritorios pequeños, trabajos redundantes.

La visita de Belaunde provocó por lo menos un acceso de actividad gubernamental. En tres días llegaron tres ministros a Ayacucho —entre los cuales el de Guerra, el general Luis Cisneros. Luego, la calma, el abandono. En pocas semanas más Delgado Matallana se iba a encontrar de nuevo solo, tratando desesperadamente de apuntalar diques que se desintegraban.

Hubo, sin embargo, acción policial durante las semanas que permaneció Rivera Hurtado en Ayacucho. Desde mediados de abril se empezó a pro-veer a la policía de una pequeña cantidad de fusiles H&K y de ropa de faena. Algunos refuerzos policiales llegaron también.

Entonces se inició una operación de rastrillaje, con el nombre grandilocuente de “Halcón II”. Alrededor de doscientos policías batieron los distritos de Ocros y Vilcashuamán por varios días. No hubo ningún choque. En la ciudad de Ayacucho, en cambio, se efectuaron diversas detenciones, entre ellas la del viejo líder del Frente de Defensa, Máximo Cárdenas, y también fue recapturado otro prófugo de la cárcel de Ayacucho.

La violencia se había intensificado entre tanto en otros lugares del país, especialmente en Lima. El 24 de abril, el empresario minero Luis Jäger fue emboscado y asesinado, camino a las sierras de Huarochirí, en las afueras de Lima.²⁰ Su mina había sido tomada y saqueada pocas horas antes. El 15 de mayo, Sendero atacó de nuevo y tomó por varias horas la ciudad de Tambo. No encontró ninguna oposición, puesto que pocos días antes la dotación policial se había retirado a la capital de la provincia. Lo mismo sucedía en todo Ayacucho: tratando de incrementar su capacidad de defensa, la policía proseguía abandonando puestos y jefaturas de línea para

concentrarse en pocas plazas fuertes. La toma de Tambo fue relativamente prolongada y obviamente provechosa para Sendero.

Entonces, cuando ya el equilibrio empezaba a romperse, uno de los tres helicópteros de la Fuerza Aérea destacados en Huamanga fue retirado. La Fuerza Aérea exigía al Ministerio del Interior el pago al contado por las horas de vuelo; y las leyes férreas del comercio no se doblegaron ni siquiera por el hecho de que el general Gagliardi fuera el ministro del Interior.

En Ayacucho, el fundo Ayrabamba fue atacado e incendiado, y varias máquinas fueron dinamitadas. En la provincia vecina de Andahuaylas, el puesto policial de Occobamba fue asaltado. El guardia civil Augusto Buleje murió en la corta refriega. A comienzos de julio se intensificaron las acciones senderistas.

El 5 de julio, el puesto de la Guardia Civil en Naña, en las afueras de Lima, fue atacado por un grupo de diez senderistas. El ataque al frágil local policial fue totalmente sorpresivo, y segundos después de iniciado dos de los cuatro policías yacían muertos. Los otros dos, no obstante, no se rindieron, y en la feroz balacera, a quemarropa, durante los instantes siguientes otro policía fue malamente herido y dos atacantes cayeron. El policía sobreviviente, Gerardo Lozada, cuya costumbre de dormir con el revólver debajo de la almohada le salvó la vida, hirió a otros atacantes más y los hizo retirarse. Dos senderistas, Roberto Herrera y Luis Torres Cherres, quedaron tendidos en el piso, al lado de los tres policías. Gracias a su identificación, la DIRCOTE iba a golpear duramente a los grupos senderistas de la zona este de Lima.

La intensificación de las acciones de Sendero Luminoso proseguía en todo el país a la vez. En la sierra norte del Perú, el pueblo de Angasmarca en el departamento de La Libertad fue atacado el 11 de julio. El cabo de la Guardia Civil José Goñaz, fue abatido en combate y el puesto, al igual que el pueblo, fueron tomados por Sendero.

En esa misma semana, los contingentes armados de Sendero continuaron despoblando de autoridades el campo ayacuchano. Zenón Palomino, gobernador de Cayara, y Hermenegildo Retamozo, exalcalde de Huancaraylla y dirigente local del partido de gobierno, fueron asesinados en sus pueblos.

El 20 de julio, Tambo fue atacado una vez más por Sendero. Esta vez sí había una guarnición policial, reforzada por un pequeño contingente de sinchis. El comando de la Guardia Civil los había hecho regresar ahí luego de la indignación que siguió a la toma de la ciudad el 15 de mayo. En un tiroteo intenso, librado principalmente durante la noche, el ataque fue rechazado. Dos policías fueron heridos y un senderista muerto.

Casi al mismo tiempo tuvo lugar una acción alucinada. El fundo de Allpachaka, centro experimental y de capacitación campesina de la Universidad San Cristóbal, fue ocupado por grupos armados de Sendero. Allpachaka era, todavía, uno de los justificados timbres de orgullo de la universidad. El fundo conducía experimentos en selección de cultivos andinos, en agroindustria y en mejoramiento de ganado. Aún en esos tiempos de tormenta, Allpachaka continuaba representando los esfuerzos primeros de la universidad en constituirse en foco piloto del progreso local. Cuando el grupo armado se retiró, la escena era la siguiente: “Veinticinco vacas de raza *brown swiss* muertas. Cuatro sementales *holstein*, degollados. Veinticinco cabezas de ganado, robadas. Dinamitamiento del centro de capacitación, semillero, dormitorios, depósito de herramientas, comedor, planta de elaboración de quesos, planta lechera. Destrucción del depósito de germoplasmas, depósito de vinos, medicamentos para animales, archivos, documentos administrativos. Incendio del depósito de heno”.²¹

La incursión conmocionó en Ayacucho a la universidad, incluso a simpatizantes de Sendero.

Diversas personas, entre ellas el exrector Efraín Morote, sugirieron o afirmaron que el ataque habría sido realizado por grupos paramilitares, vinculados al gobierno, cuyo odio a la universidad no se detenía ante nada. La imagen de un guerrillero degollando sementales parecía sinceramente, a muchos, una distorsión pornográfica del concepto mismo del luchador armado por una sociedad mejor. En lapso breve, las teorías conspirativas de toda laya florecieron entre la izquierda, por cálculo político o, más frecuentemente, por convicción.

Pero el choque con la realidad no tardó en llegar. Poco después de la incursión, profesores y alumnos de la universidad viajaron hacia Allpachaka en dos ómnibus, para ayudar en la escasamente posible reconstrucción del fundo. En las afueras de Ayacucho, ambos autobuses fueron tomados por senderistas armados, que reivindicaron la acción, calificando el programa de Allpachaka como un foco de penetración imperialista y de ilusiones reformistas, y prohibieron el trabajo de reconstrucción. Ya los tiempos, claro está, de discusión abierta y aun de enfrentamiento en los patios, habían pasado. Los voluntarios regresaron, deprimidos, a Ayacucho.

El incidente de Allpachaka contribuyó más que ningún otro evento —entre los múltiples ese año— a dar a Sendero la imagen polpotiana que luego iba a encontrar tan difícil de contrarrestar. Resulta claro, en perspectiva, que desde 1982 los sectores más violentos y radicales habían tomado, guiados por Guzmán, el control operativo de Sendero. En Ayacucho, los jacobinos ya controlaban las acciones, y sentaron sobre el departamento la mano pesada y feroz que, en meses subsiguientes, iba a provocar tragedias mucho mayores que la de Allpachaka. Si se trataba de expandir la guerra, remecer el campo, reemplazar un gobierno por otro a nivel local, los dirigentes senderistas en Ayacucho lo estaban logrando a plenitud. Solo en los años siguientes, cuando los excesos de jaquería se combinaron con formas de opresión y tiranía sobre las poblaciones sometidas, y estas causaron derrotas dramáticas a Sendero, los grupos más moderados volvieron a ser escuchados. Pero a mediados de 1982, aún se estaba lejos de ese momento.

Simultáneamente, acciones de sabotaje mayor se hacían por todo Ayacucho. El puente de Cangallo fue seriamente dañado. El grupo electrógeno de Tambo quedó fuera de acción. Y lo que en retrospectiva sería más importante, el puente que lleva a Vilcashuamán, al pie de Vischongo, fue destruido.

Poco después, las acciones en el campo ayacuchano siguieron incrementándose. El pueblo de San José de Secce fue atacado otra vez más. La guerra continuó expandiéndose a Andahuaylas, hendiendo el tejido social e institucional. En Ongoy, la comunidad que había jugado un papel tan importante en las tomas de tierras en 1973, el comunero Félix Laura fue asesinado por un grupo senderista, y el presidente de la comunidad, Guillermo Olarte, tuvo que huir para salvar la vida. Fue, hasta donde sé, la primera vez que dirigentes marxistas fueron asesinados. No sería la última; y la disposición de Sendero a matar a diestra y siniestra del espectro político, le habría de rendir diversos resultados. En Ayacucho y Apurímac, en esos años, les ayudó a barrer cualquier oposición a su control de gobiernos locales. En Puno, en 1987, el asesinato de Zenobio Huarsaya, alcalde marxista de San Juan de Salinas, sería extremadamente perjudicial para Sendero a mediano plazo.

En esos días, en Ayacucho, las renunciadas de gobernadores, tenientes gobernadores y alcaldes se hicieron masivas. ¿Qué otra cosa se podía esperar?

Solo en Lima las investigaciones policiales conducían a resultados palpables. A partir de los indicios encontrados en los senderistas caídos en Ñaña, la policía efectuó numerosas capturas.

Aunque las diferencias de criterio entre el jefe de Seguridad del Estado, general Guillermo Rivarola y el jefe de la Dirección contra el Terrorismo, Víctor Gastelú, se hacían más pronunciadas, las investigaciones seguían avanzando. Hacia fines de la semana, la mayoría de los sobrevivientes del asalto a Ñaña y los asesinos de Luis Jäger habían sido apresados. El jefe de la Policía de Investigaciones, Rómulo Alayza,²² declaró entonces que el 100% de los atentados en Lima habían sido resueltos.

La semana siguiente, en la noche del 19 de agosto, Sendero dinamitó varias torres y provocó un apagón general en Lima. Simultáneamente, grupos de saboteadores arrojaron bombas incendiarias contra varias tiendas en diversas partes de Lima. En un caso, en La Victoria, se produjo un incendio que ardió fuera de control por varias horas. El Parlamento suspendió sus sesiones por un argumento definitivo: quedó a oscuras. En el centro de la ciudad, un integrante de los grupos de sabotaje quedó envuelto en llamas al reventarle en la mano la bomba molotov que se aprestaba a lanzar. Salió de la tienda que quiso incendiar a la calle que estaba a oscuras y avanzó entre el gentío, tea viva, apartándolo y tratando de huir: “Corría sin parar —hacia la avenida Tacna— pero en silencio, sin pedir ayuda. En la oscuridad y con los reflejos del incendio, parecía un fuego fantasma que disminuyó poco a poco en la distancia”.²³

Era el estudiante José Túpac Yupanqui, sobrino de un periodista que entonces trabajaba como funcionario de la Presidencia. Solo pudo correr hasta la avenida Tacna. Ahí se desplomó. Fue conducido a un hospital, donde falleció poco después. Tenía diecisiete años.

El 20 de agosto, el gobierno declaró el estado de emergencia para Lima y Callao. El primer ministro Manuel Ulloa anunció la medida, y opinó que “el gobierno cree estar en condiciones de asestar un golpe importante a la organización terrorista que está desafiando al país”.²⁴ El general de la Guardia Civil, Jorge Monge, fue nombrado jefe del comando policial de la zona en emergencia.

El 22 de agosto cayó Vilcashuamán

En la madrugada, un destacamento senderista de entre sesenta y ochenta efectivos ingresó silenciosamente al pueblo y tomó posiciones de combate, rodeando la jefatura de línea policial, acantonada en el local del Concejo Provincial, en la plaza de armas. Poco antes del alba rompieron el fuego, y liquidaron casi de inmediato a dos centinelas apostados en los portales. El resto de la guarnición, despertada en medio de disparos, explosiones y gritos exigiendo rendición, corrió a sus apostaderos y contestó los disparos.

Después de la visita de Belaunde, la guarnición policial de Vilcashuamán se había reforzado con varios efectivos adicionales, algunos de ellos sinchis. La calidad del armamento había sido mejorada con fusiles H&K y algunas granadas de mano. También disponían de una radio Thompson. La guarnición policial en la vecina Vischongo había sido igualmente reforzada, y eso suponía apoyo mutuo en la eventualidad de algún ataque. De hecho, la suma de ambas guarniciones cercanas buscaba crear un punto de fuerza policial en la provincia. La guarnición de Vilcashuamán se encontraba bajo el mando de un teniente apellidado Pereyra y su segundo era el alférez Alberto Molero.

Sin embargo, era obvia la confianza del contingente senderista en la victoria, teniendo en

cuenta el momento escogido para el ataque: la última hora de la madrugada. Era evidente que parte del combate se iba a realizar a la luz del día, que se renunciaba a la ventaja del combate nocturno.

A los pocos minutos, el tiroteo se había hecho intenso. Desde ventanas protegidas por sacos de arena, los policías trataban de mantener a distancia a los senderistas. Pero el acoso apretó rápidamente. Ahorrando balas, los guerrilleros senderistas concentraron su ataque en abrumar al adversario con explosivos.

Como lo describió el ministro del Interior Gagliardi ante un Congreso silencioso y consternado pocos días después, los senderistas habían hecho granadas arrojadizas moldeando el material explosivo de tres o cuatro cartuchos de dinamita alrededor de una piedra mediana: “Haciendo con todo eso una masa ya compacta, cubierta por una media a la cual se le da varias vueltas sucesivas hasta formar una bola realmente consistente y fuerte; y esta viene unida a unas tiras con las cuales se hace lo que se llama la guaraca o el lanzamiento de la honda. Boleándola de esta forma pueden alcanzar distancias de cincuenta y sesenta metros, y esto es lo que hicieron”.²⁵

Las explosiones fueron tan fuertes que trozos de pared del puesto empezaron a caer. Los guardias Alcio Maraví y Juan Compite ya habían caído, y entre el fuego y las explosiones también murieron los policías Abraham Santillán y Oscar Morales.

Mientras la plaza se oscurecía por la polvareda, pasó, alto sobre la ciudad, el único helicóptero que la Fuerza Aérea había dejado en Ayacucho. Pese a los destrozos obvios del combate, el polvo, la tripulación no vio nada y siguió vuelo. En cuanto a la radio, esta no llegó a funcionar en momento alguno: las baterías se habían descargado, y desde el sabotaje al grupo eléctrico no habían sido recargadas. La guarnición de Vischongo tuvo un motivo explicable para no intervenir en la refriega.

El cerco senderista apretó rápidamente, y los primeros explosivos cayeron sobre el techo de la guarnición y lo perforaron. Entonces sobrevino el descalabro.

Varias granadas cayeron dentro del concejo y destrozaron paredes y voluntades. Según una versión, parte de las granadas de la policía explotaron por simpatía. El alférez Molero y el guardia Miguel Cárdenas cayeron muertos entonces. Aparentemente, el oficial trataba de cambiar de posición de tiro cuando fue abatido.

El teniente Pereyra y algunos sinchis escaparon por la parte trasera del concejo y, pegados a las paredes, corriendo fuerte, lograron huir.

El resto, cinco policías, se rindieron. Antes de las ocho de la mañana, Vilcashuamán había caído. En la misma plaza donde Riva Agüero recordara el abandono presente y el esplendor pasado, y donde pocas semanas atrás Belaunde había llegado para proferir el gesto y lanzar el desafío, cinco policías con las polacas destrozadas y el equilibrio aún incierto por la sacudida de las explosiones, estaban parados, con las manos en alto, rodeados por los senderistas triunfantes.

La ocupación de Vilcashuamán fue corta. Dos tiendas fueron saqueadas y los víveres repartidos entre los pobladores. Hubo un mitin forzado en la plaza de armas, y después, incautando dos camiones, los senderistas se retiraron con sus prisioneros. Al bajarse, kilómetros después, liberaron a los guardias.

Gagliardi llegó a Vilcashuamán al día siguiente. Había viajado desde Lima acompañado por Catter, y en Ayacucho se les sumó el coronel Delgado Matallana. Al sobrevolar Vilcashuamán: “Desde el aire vimos el puesto de la Guardia Civil aún humeando. Ya me fui imaginando lo que había pasado la noche anterior. El puesto estaba en ruinas”.²⁶

Ya en el pueblo —donde fue recibido por una escolta de seis hombres apresuradamente movilizados desde Vischongo— Gagliardi constató de cerca los destrozos. “Vimos que el espectáculo del puesto era realmente dantesco [...] aún humeaban los cuartos del local, y dentro hemos podido observar la manera feroz en que fue atacado”.²⁷ Pocas horas después, el ministro retornó a Lima, y su exposición ante el Parlamento tuvo el drama acentuado del testimonio personal.

El 27 de agosto, en la reunión del Consejo de Ministros se debatió intensamente sobre la posibilidad de decretar la intervención militar en Ayacucho. El voto de la mayoría de los ministros, absteniéndose los de las Fuerzas Armadas, era a favor que se interviniera de inmediato. Gagliardi, pese a ser militar, se opuso. Y en esta ocasión, Belaunde inclinó la balanza a su favor. Pero desde ese momento, no quedó duda respecto a lo inevitable del ingreso militar a la guerra, y el Ejército empezó a trazar planes y a readecuar su entrenamiento para ello.

La caída de Vilcashuamán fue un golpe duro para el presidente Belaunde. “Cuando lo de Vilcashuamán, Belaunde, acusó el impacto. Pero, hombre de gestos, no quiso concederle ese mérito al enemigo. El silencio, en este caso, resultaba muy significativo”.²⁸ Pero era un silencio que atronaba. En ese año, y particularmente durante aquellos meses ominosos, las noticias de nuevos asesinatos o —lo que para él, constructor al fin y al cabo, era más grave— las acciones de sabotaje mayor, le hicieron perder la calma repetidamente: “En sus accesos de violencia, pegaba manotazos a la mesa y carajeaba. Eran escasos y muy fugaces. Luego, ‘componía la figura’ utilizando sus giros taurinos. Nunca tenía accesos de violencia contra las personas, sino respecto a situaciones”.²⁹

En los meses siguientes, Sendero Luminoso no hizo propaganda intensiva sobre la toma de Vilcashuamán dentro de sus cuadros. Cuando estuve en El Frontón en octubre, la acción apenas fue mencionada, en tanto que otras sí lo eran. Pero en años posteriores, las referencias a Vilcashuamán crecieron en número e importancia en la literatura senderista. En 1985, la revista del Movimiento Revolucionario Internacionalista (la organización internacional que respalda a Sendero Luminoso), *A World to Win*, publicó una serie de pinturas hechas en prisión por militantes senderistas. Casi todos los dibujos conmemoraban, en los caracteres grandilocuentes del social realismo, la toma de Vilcashuamán. La leyenda calificaba la acción como: “Una batalla clave en un período en el cual los tiranos feudales locales fueron primero expulsados y los primeros comités populares fueron establecidos”.³⁰ Las pinturas fueron hechas en Lurigancho y fechadas el 7 de octubre de 1984, aniversario de la fundación del Partido Comunista del Perú.

El silencio previo y la propaganda posterior pueden haber tenido relación con un hecho poco conocido. Después del ataque, en las inmediaciones del puesto asolado en Vilcashuamán, fue encontrada una cartera con los documentos personales de Abimael Guzmán: su carnet de profesor universitario expedido por la Universidad San Cristóbal, dos copias de su título de abogado y un certificado de libertad condicional, extendido por la II Zona Judicial de la Policía.³¹

El hallazgo suscitó en su momento más preguntas que respuestas. Pero los indicios apuntan a que Guzmán presenció el ataque. El desafío del presidente de la República había sido devuelto por quien al cabo de poco tiempo dejaría de ser llamado el camarada “Gonzalo”, para convertirse en el “Presidente Gonzalo”. Pero si los resultados del encuentro tuvieron significado específico para quienes libraron un duelo de gestos y símbolos, hubo otras escenas, congeladas de la batalla o de sus momentos posteriores, que comunicaron un mensaje sobre el giro de la guerra y la previsión de días peores. Como escribió *Caretas*: “¿Qué cosa pinta mejor esta increíble situación que el helicóptero —el único helicóptero— pasando alto y arriba, mientras abajo despedazan el

puesto policial?”.³²

Y qué cosa pintaba mejor aquel desenlace violento en medio de una decadencia de siglos que ver aquella plaza que Riva Agüero había imaginado bella, luminosa y colmada por miles adorando al inca, el de la frente ceñida por la “suelta y sangrienta mascapaycha, dorada y bermeja”, hundida en sombras aun en medio de la luz, solitaria y apenas cubierta por miedos privados y miradas furtivas. Y el color bermejo no era el de la exaltación, sino, en el puesto humeante, la sangre de los guardias muertos, humilde, doliente, vencida.

-
- 1 Luján González había sido acusado por la policía de participar, entre otros, en el asalto al puesto de la Guardia Civil en La Quinua.
 - 2 Ante la posibilidad de otras fugas en los diversos penales del país, el gobierno decidió reabrir apresuradamente la isla penal de El Frontón, la cárcel por la que varias generaciones de presos políticos habían pasado anteriormente, y trasladar ahí a los presos senderistas de todo el país. Entre fines de abril y mediados de mayo, el traslado había sido culminado.
 - 3 Pareja Pflücker, Piedad. *Terrorismo y sindicalismo en Ayacucho*. Lima: Empresa Editora Ital Perú, 1981, p. 119. El contingente policial en minas Canarias tuvo, desde julio de 1980, variaciones sustantivas en número de efectivos. En agosto de 1980 solo hubo dos policías por unos días. Luego, el número subió paulatinamente hasta treinta policías el 2 de setiembre, Y descendió a diez el 11 del mismo mes. Ese fue aproximadamente el número de policías atacado en marzo de 1982.
 - 4 El ataque era, en realidad, la segunda acción contra el puesto de minas Canarias. El 12 de enero de 1981 se produjo un atentado con dinamita.
 - 5 *Caretas*, n. 690, 22 de marzo de 1982.
 - 6 En esa época, un funcionario de la mina calculaba que, solo en Canarias, el robo sistemático de cartuchos de dinamita desde 1980 era del orden de veintidós mil cartuchos por año.
 - 7 Decreto Supremo, sector Interior del 26 de marzo de 1982. El propio decreto hacia extensivo el estado de emergencia a la provincia de Angaraes, en Huancavelica.
 - 8 *Caretas*, n. 693, 12 de abril de 1982.
 - 9 *Ibidem*.
 - 10 Entrevista a Héctor López Martínez, el 25 de mayo de 1987.
 - 11 De la Riva Agüero, José. *Paisajes peruanos*. Lima: Imprenta Santa María, 1955.
 - 12 Miró Quesada, Aurelio. *Costa, sierra y montaña*. Lima: 1940.
 - 13 Riva Agüero, *op. cit.*, p. 70.
 - 14 *Ibidem*, pp. 71-72.
 - 15 *Ibidem*, pp. 72-73.
 - 16 *Ibidem*, p. 74.
 - 17 Belaunde, Fernando. *La conquista del Perú por los peruanos*. Lima: Tawantinsuyu, 1959, p. 23.
 - 18 *Caretas*, n. 692, 5 de abril de 1982.
 - 19 Bourricaud, François. *Poder y sociedad en el Perú contemporáneo*. Buenos Aires: Editorial Sur, 1967, pp. 258-259.
 - 20 Según las estadísticas de la Dirección de Inteligencia de la Guardia Civil, a comienzos de abril de 1982 Lima habrá sufrido mayor número de atentados que Ayacucho: seiscientos cincuenta respecto a trescientos noventa y siete. La diferencia es engañosa, claro está: los números en Lima están inflados por doscientas doce amenazas telefónicas anónimas denunciadas, contra once en Ayacucho. Pero los atentados dinamiteros en Ayacucho habrán sido ciento noventa y cuatro contra ciento sesenta en Lima. Y los asaltos a locales policiales, atentados individuales y otras acciones mayores sumaban setenta y dos en Ayacucho y veinticuatro,

generalmente de menor entidad, en Lima. Los atentados mayores habían alcanzado también números considerables en otras zonas del país: en los departamentos de la costa norte del Perú sumaban ciento nueve. En la sierra norte y centro (desde Cajamarca hasta Junín), trescientos dieciséis. En el sur, los números eran menores, y los departamentos menos afectados eran los de la selva.

- 21 Despacho del corresponsal de *Caretas* en Ayacucho.
- 22 *Expreso*, 15 de agosto de 1982.
- 23 *Caretas*, n. 711, 23 de agosto de 1982.
- 24 *Ibídem*.
- 25 *Caretas*, n. 712, 31 de agosto de 1982.
- 26 Entrevista con Gagliardi, el 1 de julio de 1987.
- 27 *Ibídem*; *Caretas*, n. 712, 30 de agosto de 1982.
- 28 Entrevista a *Juan Carlos Arenas*, el 22 de mayo de 1987.
- 29 *Ibídem*.
- 30 *A World to Win*, London. 1985/4, pp. 16-19.
- 31 Entrevista con Héctor López Martínez, el 25 de mayo de 1987.
- 32 *Caretas*, n. 712, 30 de agosto de 1982.

XIX. El pensamiento militar del partido

En diciembre, cuando el plan de “¡Batir!” terminaba, y en vísperas de iniciar el “Gran plan: conquistar bases”, Sendero repartió, para uso interno, un documento de alrededor de treinta y siete páginas mecanografiadas que intentaba delinear y sistematizar el pensamiento militar del partido. La preparación y difusión del texto fue decidida después de los remezones de la II Conferencia, con el fin de impartir a los cuadros intermedios de Sendero el basamento doctrinario de sus acciones militares, describir en detalle la articulación dialéctica entre táctica, estrategia, doctrina e ideología; y definir la singularidad de su pensamiento militar como un desarrollo cualitativo del marxismo-leninismo-maoísmo.

El documento resume la filosofía militar de Sendero, y en ello radica su principal interés. Pero además, en la circunstancia en que fue formulado, después de las purgas de la II Conferencia y la decisión de entronizar el “pensamiento-guía”, en medio de una brusca radicalización, el documento *Pensamiento militar del Partido* expresó la esencia doctrinaria de la organización en aquellos años en los que la guerra adquirió valor supremo para Sendero.

Según este escrito, entender el pensamiento militar del Partido es unirse “en torno a una sola idea y una sola acción”. Lo cual, afirma, “nos hará invencibles”, llevará “con pasos firmes y seguros a la victoria”.

El pensamiento militar es, indica, parte importante del “pensamiento-guía”, que es a su vez —según se dice enfáticamente ya— “un desarrollo del maoísmo”. Como es natural, el texto añade que el creador del “pensamiento-guía” tiene un rol vital en el pensamiento militar de Sendero, “El c. Gonzalo es el alma, el torrente de la línea militar proletaria [...] el alma misma de ese desarrollo es el pensamiento militar del c. Gonzalo”. Su principal forma de distribución fue la manuscrita. Para el presente análisis, me he guiado por una versión mecanografiada. La numeración de las páginas corresponde a dicha versión.

“Hay que aprender del c. Gonzalo”. A la vez, el pensamiento militar batalla contra la seudociencia, las “posiciones derechistas que llevan en su seno una línea militar burguesa”.

El pensamiento militar de Sendero tiene, según el documento, dos partes: antes y después del inicio de la lucha armada.

La primera parte comienza con el “señalamiento y esbozo del camino” hecho por José Carlos Mariátegui, “que luego es desarrollado a un nivel más alto por el camarada Gonzalo”. Según afirma el documento, con citas entresacadas de la obra de Mariátegui, este planteó que la revolución socialista en el Perú sería:

- Violenta, “el poder se toma por la violencia y se mantiene por la dictadura”.

- Del campo a la ciudad, “antiimperialista y antifeudal”.
- Guerra prolongada, masiva, total.
- Conflicto de masas, de naciones, y no de ejércitos. Con ejércitos proletarios de “nuevo tipo”.

El texto aclara, no obstante, que “las tesis de Mariátegui están implícitas y la jefatura las ha sistematizado [...] es por el c. Gonzalo que conocemos el pensamiento militar de Mariátegui, pues lo sistematizó a la luz del marxismo-leninismo-maoísmo”.² Por la misma razón, “no cabe hablar de mariateguismo [...]. Solo cabe interpretar a Mariátegui bajo el marxismo-leninismo-maoísmo. El camarada Gonzalo lo hace y, al hacerlo, lo desarrolla”.³

Muerto Mariátegui, la nueva dirigencia del Partido según Sendero, “declama la insurrección para oponerse a la revolución”,⁴ y así se “desperdicia” la década del 30, “en que hubo situación revolucionaria y por tanto condiciones para iniciar la lucha armada”.⁵

Luego de varios años de perigeo partidario y revolucionario, se inicia el período de la “Reconstitución del Partido”, que durará entre 1962 y 1979, dividida en tres períodos: La “Determinación” (1962-69), la “Aplicación” (1969-75) y la “Culminación” (1976-79). Durante ese período, el pensamiento militar de Sendero define sus características fundamentales:

- La adopción de la “línea política general” del Partido, que se fija como “línea única”.
- La definición del “camino de cercar las ciudades desde el campo”.
- La construcción de las “Fuerzas Armadas” del Partido, desde 1964, cuando “se concreta el trabajo especial en Ayacucho y se desarrolla trabajo militar”.⁶
- Se reorganiza el Partido, se adopta la “Jefatura del Partido” y se “culmina la reconstitución y sientan bases para el inicio de la lucha armada”.

El documento reitera la tesis senderista de que en el Perú hubo una segunda situación revolucionaria al inicio de la década del 60. “Si en el Partido, a la muerte de Mariátegui, se hubiera procedido con la línea roja, nos hubiéramos puesto a la cabeza del movimiento. Pero el revisionismo tenía la dirección”.⁷ A la vez, afirma enfáticamente que solo la providencial existencia de Guzmán hizo posible la insurrección: “El marxismo-leninismo-maoísmo existe en América Latina y solo en nuestro Partido se ha aplicado, porque tenemos la jefatura del c. Gonzalo. [...] El Partido que fundó Mariátegui no cuajó. El revisionismo usurpó la dirección. Y es el c. Gonzalo quien nos ha dado el Partido que hoy tenemos: una máquina de combate que desarrolla exitosamente la guerra de guerrillas”.⁸

La etapa de la insurrección armada se inicia cuando, a tenor del documento, Sendero decide “romper el conjuro de cincuenta años”, y apresta la maquinaria del Partido para convertirla en una organización guerrera, “seguros que nuestra acción sería el comienzo de la transformación de nuestro pueblo”.⁹

A partir de ese momento, Sendero inicia un largo proceso de “militarización del Partido”. Considerando que la presente es una era de guerras, que se intensificará paulatinamente hasta alcanzar las grandes decisiones bélicas a nivel mundial, afirman que “todos los partidos comunistas del mundo deben militarizarse [...]. Este es el gran aporte del c. Gonzalo a la revolución mundial”.¹⁰

La militarización de Sendero no significaba —pese a las acusaciones hechas a Guzmán en los eventos previos a la decisión de iniciar la insurrección— que el Partido dejaba de ser una organización política para convertirse en un embrión de ejército. A diferencia de las organizaciones castristas, que se despojaron de su función política, excepto en el gran objetivo de tomar el poder, y que terminaron subordinando la función política a la militar, en Sendero la

subordinación de lo militar a lo político se mantuvo, enfatizó y acrecentó a lo largo de la insurrección. La fuerza armada senderista fue, desde su estado germinal, solo un instrumento de la política del Partido, y esta a su vez la correa de transmisión entre la ideología y la acción.

Para Guzmán, militarizar Sendero no significaba convertirlo en ejército, sino centrar su acción política en la insurrección armada y reformar su estructura orgánica para estar en condiciones de dirigirla. La política se concentraba en la guerra, pero sin subordinarse a la organización militar encargada de llevarla a cabo, sino manteniéndola bajo estricto control a todo nivel. La fuerza armada, pequeña o grande, nunca debía pasar de ser el brazo ejecutor de la política del Partido, y este a su turno el intérprete y plasmador de la ideología. Las estrategias, los planes y campañas insurreccionales se hacían en función de los objetivos políticos del Partido, y en consecuencia eran acciones políticas con expresión militar.

En la concepción militar de Sendero, las acciones bélicas solo poseen sentido si sirven al objetivo de conquistar paulatinamente poder para el Partido. Y el Partido solo sirve si interpreta fielmente la ideología a cada nivel. Para Guzmán, siguiendo y extremando la concepción leninista y maoísta, la guerra es un ejercicio político donde los medios militares son controlados instrumentalmente por lo político. Esa es una característica sustancial, que en los hechos significó y significa acciones concretas distintas de las convencionalmente militares, y una diferente evaluación del éxito o fracaso de las mismas. No dejaba de tener justificación aquella apreciación de que “para hacer la guerra hay que ser filósofos. El c. Gonzalo se plantea políticamente las batallas, no técnicamente”.¹¹

Por eso, Sendero define la lucha armada a través de “políticas principales” centradas en lo militar. Estas políticas cubrirán todo el proceso insurreccional, que transitará eventualmente a través de las etapas convencionales de: defensiva estratégica, equilibrio estratégico y ofensiva estratégica. el documento enfatiza que la etapa de “defensiva estratégica”, la “más prolongada y compleja” era la que se estaba transitando, y que ello duraría aún largos años. Comparativamente, las etapas de paridad y ofensiva estratégicas, resultarían mucho más cortas.

El proceso de desarrollo dentro de la etapa de defensa estratégica está, según lo explica el documento, jalonado por hitos; y cada uno de estos normado por políticas principales de diferente tipo y categoría, siendo las más importantes las siguientes:

- Política principal estratégica: Los objetivos de largo alcance.
- Política principal fundamental: Los objetivos asequibles mediante un conjunto de planes específicos, en plazos mediatos.
- Política principal básica: El objetivo eje, que en toda la primera etapa de la insurrección fue “conquistar bases de apoyo”.

El *Pensamiento militar del Partido* explica la relación entre los diversos hitos y fases de la guerra, con sus políticas principales.

Definición: La “política principal” en esta etapa es el “inicio de la lucha armada”, que es a su vez una “estrategia política” porque “es sobre todo un problema político”.¹²

Preparación: “Es tomar la ‘línea militar’ como centro”, lo cual es también una política estratégica.

Inicio: Tiene dos etapas, definidas por sus políticas principales, iniciar la lucha armada e iniciar la guerra de guerrillas.

Ambas etapas unidas a través del “Plan de inicio”, que Guzmán proclama como otra contribución original al arte revolucionario.

Desarrollo de la guerra de guerrillas

Es una “política principal estratégica” en la clasificación de Sendero, y a la vez un hito. Comprende un período que Sendero estima en varios años. Cada una de sus políticas principales representa una etapa progresiva dentro del plan general. Hasta diciembre de 1982, ellas eran:

- **Abrir zonas guerrilleras en función de las bases de apoyo:** Entre enero y abril de 1981.
- **Desplegar la guerra de guerrillas:** La que es definida como una “política principal fundamental”, cubriendo todas las acciones entre mayo de 1981 y diciembre de 1982, cuyas políticas principales fueron:

Conquistar armas y medios.

Remover el campo impulsando acciones guerrilleras: Dividida en dos planes y un remate, con una “acción principal”: el asalto al CRAS de Ayacucho.

Batir para avanzar hacia las bases de apoyo: Dividida en dos campañas, la segunda de las cuales debió haber culminado en enero de 1983.

Desde 1983, y hasta fines de 1986, se ejecutaría la “política principal básica” o el “gran plan” de “conquistar las bases de apoyo”.

Lo que es importante retener es la forma que toma la acción política en Sendero cuando esta organización decide militarizarse. Aunque se tiñe de medios y métodos militares, sus objetivos mediatos e inmediatos siguen siendo claramente políticos. Y esa fue la forma, compleja y aparentemente enrevesada, mediante la cual Guzmán buscó resolver la contradicción aparente de militarizar el Partido sin convertirlo en ejército, de poner el Partido en guerra sin que la guerra controlara al Partido.

En la etapa de “desplegar la guerra de guerrillas”, el crecimiento de Sendero se expresó en niveles de acción superiores. Algunos de ellos, por su naturaleza, y por el desconocimiento virtualmente total de la estrategia senderista, no fueron detectados. Lo principal en ese campo fue la organización de los “comités populares”, los organismos semiclandestinos de gobierno senderista en pueblos y comunidades que reemplazaban a las autoridades gubernamentales puestas en fuga o asesinadas. El énfasis principal de Sendero en lo que restó de 1982 fue fracturar en forma extensiva la autoridad estatal en los distritos aún no sometidos. Es casi ocioso añadir que el propósito de los comités populares, sobre todo los de las etapas primarias, era esencialmente organizar voluntaria o coercivamente a las poblaciones para expandir la guerra.

El control de zonas en rápida expansión y la necesidad de montar operaciones de creciente envergadura apresuraron el temprano objetivo senderista de organizar las bases de una fuerza armada permanente, orgánicamente diferente de la red territorial. Luego del asalto a la prisión de Ayacucho, la “primera compañía” permanentemente movilizada quedó constituida. Ahora ya tenían cómo armar a grupos relativamente grandes. Desde el comienzo virtualmente desarmado de la insurrección, Sendero se había apropiado, en acciones violentas, de una cantidad no desdeñable de armamento militar, y había confiscado sistemáticamente el armamento civil en sus zonas de control. A mediados de diciembre de 1982, según la cuenta del Ministerio del Interior, Sendero poseía dos ametralladoras ligeras, un fusil de asalto, cincuenta y cuatro metralletas, cincuenta y dos revólveres y una cantidad indeterminada de carabinas y escopetas. No mucho, pero lo suficiente como para causar un impacto considerable, gracias al activo aparato logístico que movía las armas de un punto a otro del país, de acuerdo a la necesidad operativa.

Lo que no escaseaba en el arsenal senderista era la dinamita. Luego de una confiscación

sistemática en multitud de asientos mineros, Sendero disponía en 1982 de decenas de miles de cartuchos. Y como se ha visto, estos no fueron utilizados solamente en acciones de sabotaje, sino también como granadas ofensivas y defensivas en asaltos, refriegas y emboscadas.

Desde octubre-noviembre de 1981, Sendero consideró probable el ingreso del Ejército a Ayacucho. En esa circunstancia, Guzmán juzgó que era conveniente evitarlo: “El c. Gonzalo plantea: nos conviene un cerco policial y no del Ejército. Se dice que no es conveniente hacer acciones altas en un plan complementario porque puede generar problemas. [...] Si ingresa el Ejército, dar vueltas y apuntar contra las fuerzas policiales, que son el punto débil del enemigo”.¹³ De hecho, tuvieron un año más para concentrarse en el “punto débil”.

Al terminar 1982, Sendero había logrado avanzar sustancialmente. En Ayacucho el progreso había sido en todos los frentes. El documento *Pensamiento militar del Partido* refleja la sensación de éxito dentro de la organización insurrecta, pero no pierde tiempo en enfatizar la necesidad de extremar esfuerzos para pasar a la “conquista de las bases de apoyo”, que es “la médula del camino de cercar las ciudades desde el campo. Es la clave de la guerra popular”.¹⁴

En aquel momento excepcional para Sendero, de éxitos sin contrastes, que no se repetiría más en el futuro, resulta reveladora la forma en que Guzmán manejó el crecimiento brusco y exitoso: con la rienda corta y apretando el control. La clave del éxito de la etapa de “Batir”, se reitera, es haber definido el “centro del ‘pensamiento-guía’: el pensamiento militar del c. Gonzalo” y haberlo “entronizado”. Y “entronizar” el pensamiento del monarca rojo era, al fin, el objetivo supremo y la llave maestra del éxito: “Entronizar el ‘pensamiento-guía’ va a ser una lucha dura y decisiva. Es una batalla crucial entre dos clases, dos caminos y dos líneas. En la lucha de dos líneas se plantea entronizar el ‘pensamiento-guía’ y la línea militar. Y el centro de la lucha de dos líneas es la línea militar: proletaria y burguesa. El problema militar solo puede desenvolverse de acuerdo al ‘pensamiento-guía’. El pensamiento militar del Partido es el ‘pensamiento-guía’ del c. Gonzalo”.¹⁵ Orwell hubiera apreciado el complejo tramado conceptual que terminaba convirtiendo a Guzmán en emperador de los espíritus y, en consecuencia, de las vidas. Pero hubiera tenido que reconocer la eficacia del fanatismo, unificando y focalizando voluntades tras planes cuidadosamente diseñados, pero que precisaban de gente que les consagrara la vida primero y la sacrificara después.

Por esa razón, la literatura senderista del período es de franca alabanza a la guerra. No se la enfoca solamente como una deplorable necesidad histórica, sino como una forma superior de vida, que depura, fortifica y escoge a los mejores. En diciembre de 1981, Sendero publicó un folleto de veinticuatro páginas, *Sobre la guerra: proverbios y citas*, repleto de máximas glorificadoras de la guerra. El folleto debe haber tenido éxito, pues fue reimpresso en enero de 1982. Junto con las citas y proverbios de los clásicos figuran las de militaristas extremos, los cultores de carnicerías multitudinarias.

La guerra es santa, su institución es divina y una de las sagradas leyes del mundo. Mantiene en los hombres todos los grandes sentimientos, como el honor, el desinterés, la virtud y el valor, y en una palabra les impide caer en el más repugnante materialismo. (Moltke)¹⁶

La guerra es la más tonificante cura de hierro de la humanidad. (J.P. Richter)¹⁷

¿Qué hacía un marxista tomando como ejemplo el militarismo desbocado de los imperialistas prusianos? En realidad, ambas citas traducen cabalmente la actitud de Guzmán hacia la guerra en ese período, y en alguna forma lo expresan a él mismo.

La “tonificante cura de hierro” estaba a la vuelta de algunos meses. El 30 de diciembre de

1982 Sendero declaró culminado el plan de “Batir”. En una circular distribuida a sus cuadros, considera los logros del plan como “un gran éxito [...] principalmente en el Comité Regional Principal: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica”. Las Fuerzas Armadas habían ingresado hacía menos de una semana, como resultado de dicho “éxito” y en la evaluación previa a los primeros choques, Sendero emitió las primeras instrucciones a sus tropas.

El ingreso de las Fuerzas Armadas debía considerarse como “un cambio cualitativo” en la situación política. No obstante que el Partido estaba “preparado para desenvolverse en esta situación”, recomendaba, ateniéndose a los consejos del presidente Mao, despreciar en lo estratégico al Ejército, y “tenerlo en cuenta en lo táctico”.

La consigna fue evitar enfrentamientos directos. “Hostigamiento, dar vueltas, buscar los puntos débiles”. Sin embargo, se preveía el paso a conflictos mucho más cruentos. “En el fondo, hay un siniestro plan de las Fuerzas Armadas para entrar a masacrar [...] declarar una guerra sin cuartel. Nosotros también les daremos una guerra sin cuartel”.

Conscientes de la renuencia de Belaunde a entregar la responsabilidad contrainsurgente al Ejército, el documento interpreta los cambios últimos como una derrota del presidente frente a las Fuerzas Armadas. El documento finaliza proclamando la invencibilidad de la “guerra popular” y la determinación de “seguir en el combate”. Y así se ingresó a los dos años más sangrientos de la guerra.

1 Su principal forma de distribución fue la manuscrita. Para el presente análisis, me he guiado por una versión mecanografiada. La numeración de las páginas corresponde a dicha versión.

2 *Pensamiento militar del Partido*, pp. 4-5.

3 *Ibidem*, p. 11.

4 *Ibidem*, p. 5.

5 *Ibidem*, p. 2.

6 *Ibidem*, p. 8.

7 *Ibidem*, pp. 5, 11-12.

8 *Ibidem*, p. 12.

9 *Ibidem*, p. 13.

10 *Ibidem*, p. 25.

11 *Ibidem*, p. 19.

12 *Ibidem*, p. 17.

13 *Ibidem*, p. 33.

14 *Ibidem*, p. 35.

15 *Ibidem*, p. 34.

16 *Sobre la guerra: proverbios y citas*. Ediciones Voz Popular, diciembre de 1981, p. 19.

17 *Ibidem*, p. 13.

XX. El cerco de Ayacucho

Paralelamente a la ofensiva en Ayacucho, los otros comités regionales de Sendero, especialmente el recién purgado Regional del Norte, hicieron esfuerzos por intensificar sus acciones. Con una organización más pequeña, la posibilidad de sufrir contrastes era más alta que en Ayacucho.

El 24 de agosto, un grupo senderista que acababa de asaltar el fundo Santa Clara, en Cutervo (Cajamarca), chocó con un contingente de la Guardia Civil en el paraje de Socota, y fue descalabrado en el encuentro. Su jefe, Isidro Chonlón Gasco, cayó herido con cuatro balazos antes que la mayor parte del grupo se rindiera. El armamento recapturado incluía dos revólveres, una carabina y una metralleta que habían sido arrebatados en asaltos anteriores a puestos policiales.

Chonlón sobrevivió a sus heridas. “En todo combate hay heridos y muertos”, dijo horas después de capturado, cuando ignoraba si sobreviviría o no, a un fotógrafo de *Caretas*. En El Frontón, Chonlón se haría luego conocido como uno de los delegados más rígidos y vehementes entre los presos. Murió en la matanza de los penales en 1986.

En la misma escaramuza fue capturada una mujer de continente desafiante. Sus papeles de identificación estaban a nombre de Sandra Mantilla. Era Nelly Chávez, la que fugara junto con Isabel Sánchez Cobarrubias de la cárcel de Arequipa, el 1 de marzo, matando al policía que las custodiaba. Durante esos meses, el número de dirigentes senderistas mujeres que cayó o resultó capturado fue inusualmente alto. A comienzos de abril, Catalina Adrianzén había sido apresada en el Cusco, luego que su organización embrionaria fuera desbaratada después de un patético atentado: incendiar el tractor de una cooperativa agraria. Dos militantes fueron capturados por los furiosos campesinos y entregados a la policía. El resto cayó poco después.

Un mes después de su captura, logré entrevistarla. La veterana dirigente senderista, esposa del entonces fugitivo Antonio Díaz Martínez, se encontraba en mal estado. Tenía llagas y escoriaciones en las muñecas, causadas por el tiempo que había permanecido esposada, pero los daños mayores parecían los psíquicos. Sufría, según dijo, de “lagunas mentales y amnesia”. Era verdad; poco después de ingresar a la cárcel, hubo de ser trasladada a una clínica psiquiátrica, donde aún permanecía en 1987.

En Tacna, la dirigente militar senderista Rosa Soldevilla fue capturada en el mes de agosto. Sendero le había ordenado trasladarse desde Huancavelica en octubre de 1980. Los atentados en el departamento habían sido relativamente menores, pero eran testimonio del empeño senderista de no dejar área tranquila en el país.

En Andahuaylas, a última hora de la tarde del 3 de setiembre, un grupo de guardias

republicanos vestidos de paisano que había salido en una camioneta a intentar recapturar un preso fugado de la cárcel local, fue interceptado por una pareja. Los dos, hombre y mujer, estaban junto con otra camioneta cruzada sobre la carretera, bordeada por cerro y barranco, en el paraje de Umaca, entre Andahuaylas y Talavera. Ambos empuñaban revólveres, y debieron haber supuesto que los aparentes civiles del otro vehículo estaban desarmados. Antes que la camioneta que llevaba a los republicanos hubiera parado del todo, uno de estos abrió fuego con una metralleta. La mujer cayó, y su acompañante se arrojó barranca abajo, entre los arbustos y la penumbra creciente. Los republicanos, creyendo que podrían tener que enfrentar a un contingente mayor, regresaron de inmediato a Andahuaylas. Al retornar, horas más tarde, con una patrulla reforzada, no encontraron el cadáver donde este había caído. Buscando en los alrededores, lo encontraron en una choza, parcialmente cubierto con paja.

Al día siguiente, el ministro Gagliardi llegó a Andahuaylas con el ministro de Guerra, Luis Cisneros Vizquerra. El viaje había sido programado previamente, a fin de coordinar los detalles del alojamiento del grupo de fuerzas especiales de la Guardia Republicana, los llapan atic, en el cuartel local del Ejército, y la cooperación operativa de este con aquel. En Andahuaylas, le informaron a Gagliardi del choque del día anterior y le indicaron que el cadáver de la guerrillera abatida estaba en la morgue. Alguno había creído reconocerla.

Gagliardi fue a la morgue. “Vi a una mujer echada sobre una mesa de concreto, con blue jeans, una chompa, y debajo del blue jeans, un pantalón de lana. Tenía varios impactos de bala. Uno de ellos había sido desde atrás... la miré y me pareció Edith Lagos”.¹ El ministro ordenó que se sacaran huellas digitales, para cotejarse en Lima. En la noche del sábado, poco después de regresar de Lima, la identificación despejó dudas: el cadáver era el de la pequeña y ya entonces legendaria guerrillera.

El ministro del Interior comunicó personalmente la noticia al presidente Belaunde. La sensación general en el ministerio fue que, aun cuando solo por obra del azar, Sendero había recibido un golpe grave, quizá determinante. Con la visión aún velada por la experiencia y el modelo de las insurrecciones procastristas, se interpretaba la organización senderista en términos análogos. El efecto de la muerte de un comandante, cuya importancia se acrecentaba en la leyenda, se suponía similar al que hubiera tenido en una guerrilla foquista: devastador. Para Belaunde, empero, no había motivo alguno de alegría. Aquella era solo otra de las tragedias irracionales e incomprensibles que, además de segar vidas, cometían lo que para el arquitecto era el equivalente nacional del suicidio: volar redes de energía eléctrica, destrozar carreteras. Sin mostrar reacción alguna, el presidente indicó a Gagliardi que “se le dé cristiana sepultura”.²

El ministro Gagliardi ordenó a la policía que se notificara a los parientes de Edith Lagos de su muerte, y se les diera sin demora, en caso de pedirlo, el permiso para exhumar el cadáver y trasladarlo a Ayacucho. Poco después, el padre de Edith Lagos viajó a Andahuaylas, donde identificó el cuerpo de su hija, e indicó el retorno a Ayacucho.

Lo acompañaba el periodista Ilpidio Vargas, una de las expresiones más originales de la profesión en las provincias andinas. La invención de la grabadora había liberado a Ilpidio para siempre de la enojosa necesidad de las notas escritas. Sus notas eran sonoras, mezclando la formalidad provinciana con el hablar apresurado, sostenido en infinidad de muletillas que adoptan muchos locutores. Su producción de audiocasetes era prodigiosa; la comedia humana en envíos semanales. Para tensos editores, recibir a último momento un paquete de Ilpidio, cuya apertura desparramaba por el escritorio los sonidos plásticos de los audiocasetes, era un importante ejercicio espiritual. El gran mérito de Ilpidio y su grabadora perpetua, no obstante,

consistía en proporcionar sin interpretaciones el testimonio sonoro de la vida.

En esta ocasión, sin embargo, el testimonio fue de naturaleza diferente, parco en sonidos, pero extraño. A lo largo del camino polvoriento, grupos de personas paraban el cortejo, velaban brevemente a la finada, la veían partir.

Desde antes de morir, Edith Lagos había pulsado, en ciertos sectores populares, las fibras que crean el mito. La figura del rebelde gentil, del ban-dido romántico que surge en casi cualquier conflicto civil, era en este caso una mujer. Nada había de romántico en Guzmán o en su guardia vieja, y quizá por eso parte del anhelo colectivo de encontrar la figura trágica en la rebelión se había focalizado en Edith Lagos.

La menuda y vehemente senderista, que apenas alcanzó a vivir diecinueve años, tenía otras de las características que despiertan en Latinoamérica la imaginación colectiva y son a veces la semilla de la que surgen cultos y devociones singulares. En contraste con su padre, un comerciante relativamente enriquecido en poco tiempo, Edith Lagos era una persona que exudaba la entrega intensa y total a la rebelión senderista, por las razones que llevan a tantos jóvenes idealistas a unir sus destinos a epopeyas luctuosas: la visión de una sociedad de justicia trascendente y perdurable, más allá de las llamas y de los sacrificios que el tránsito a ella imponga. Por acusar tan marcadamente esos rasgos y por hacerlo en contraposición a su ambiente original, Edith Lagos simbolizó a esa generación de jóvenes ayacuchanos, la arcilla formada para el sacrificio.

Meses antes de que ella muriera, en la feria de Huancayo, modelo central de tantas otras ferias pueblerinas, se vendían estatuillas de madera, con su imagen idealizada de guerrillera, parada junto a un árbol en temprano retoño. Casi una Diana cazadora andina, acabada ambigüedad de fertilidad y de guerra.

La visión de Edith Lagos llevaba impresa la certeza de una vida breve, y que así fuera era casi una condición para que el joven mito creciera. Por eso, cuando su cadáver llegó a Ayacucho y se prepararon los ritos finales de velorio y entierro, la ciudad entera se conmovió. Otra vez los augurios se habían cumplido, y los solemnes ritos luctuosos la llamaban.

Cuando el ataúd salió a la calle, en procesión hacia el camposanto, miles de personas esperaban para acompañar el entierro. Hay quienes calculan la masa en treinta mil personas; y aunque es probable que el estimado exagere, es indudable que se trató de una de las concentraciones de la década. El propio arzobispo de Huamanga, Federico Richter Prada, acérrimo anticomunista si acaso hay alguno, ofició una misa de cuerpo presente, mientras el gentío desbordaba los atrios y colmaba las calles.

Cuando, apenas fuera de la iglesia, el ataúd fue cubierto por la bandera roja con la hoz y el martillo, el ánimo colectivo no vio nada contradictorio en ambas cosas y quizá lo sintió más como una liturgia extendida que como una confrontación de fe.

Hay quienes aseguran que Abimael Guzmán acompañó el entierro.³ Si fue así, estuvo completamente seguro mientras este duró. El coronel Delgado Matallana hizo replegar toda la policía a sus cuarteles, para prevenir confrontaciones con la masa. La bandera senderista paseó abiertamente, logrando incluso que algunas de sus víctimas, y muchos de quienes lo iban a ser en el futuro cercano, la aplaudieran.

Hasta las victorias casuales del gobierno terminaban en derrota. La maquinaria organizativa de Sendero, pero sobre todo la del mito que aquel utilizó muy bien, lograron que la muerte de Edith Lagos se transformara para ellos de contraste en victoria.

¿Qué circunstancias llevaron a Edith Lagos al desventurado atraco en Umaca? La versión

más consistente, respaldada por otras parecidas, es la que un cura relató al periodista Nicholas Shakespeare.

El conviviente de Edith Lagos le estaba enseñando a manejar. Necesitando un vehículo para eso, se apropiaron de uno, que se malogró a media lección. En eso vieron una camioneta que doblaba la curva y marchaba hacia ellos. Ambos pensaron que era la adecuada para finalizar la lección. [...] [la policía] abrió fuego y Lagos fue muerta. Su acompañante arrastró el cuerpo y lo escondió. Un niño que lo vio, informó a la policía cuando esta retornó, y el cadáver fue llevado a Andahuaylas.⁴

El mito de Edith Lagos murió también en la infancia, pocos meses después del entierro. De un lado la propia guerra, en la espiral creciente de violencia y crueldad, lo asfixió; nada hubo de redentor o romántico en la forma en que la gente perdió la vida después. Del otro, la estrategia senderista, dura, esquemática, sobreorganizada, tenía lugar solo para un culto individual, el de Guzmán, que la encarnaba. La breve apoteosis de Edith Lagos sirvió para galvanizar la organización, atraer a jóvenes admiradores, imprimir en los demás una sensación de finalidad y poderío. No se la necesitaba para más.

No todo Sendero asistió a los funerales. Ese mismo día, un contingente de veinte senderistas tomó el caserío de Matará, en el distrito de Acocro, no lejos de Ayacucho. Había feria en Matará, la feria semanal. Los guerrilleros traían un prisionero. Era Fortunato Nieto, capturado un par de horas antes en la casa de su fundo cercano. La casa ahora ardía, y el ganado —setenta cabezas *brown swiss* y sesenta ovejas finas— era arreado, para ser distribuido o, más probablemente, sacrificado. El hermano de Nieto, Filomeno, acababa de ser apresado en Matará. Otro hermano, Aurelio Nieto, había logrado escapar a uña de caballo.

Fortunato Nieto había ido a su fundo, pese a los pedidos en contrario de su esposa, inquieta por la violencia en el área, confiando en el hecho de que no tenía enemigos personales. Apresado en su casa, conducido en ropa interior hasta Matará, cubierto apenas por una sábana, vio arder su casa, robar sus bienes y, en el pueblo, ya sujeto y amarrado, vio a su hermano Filomeno. Y vio también a los concurrentes a la feria, que lo miraban con el aire entre fascinado y temeroso con que se mira a quien va a morir. La última lección que Nieto tuvo de la vida fue, escribí entonces en *Caretas*, “que en estos tiempos en Ayacucho, si alguien es considerado ‘enemigo de clase’ no necesita tenerlos personales, pues su destino estará igualmente sellado”. Nieto fue asesinado en la plaza, luego de un simulacro de “juicio popular”, poco después de ver morir a su hermano.

Los cadáveres, al lado de un letrero que decía: “Así mueren los explotadores y los soplones que están en contra del pueblo”, de otro que vivaba a Sendero y la guerra de guerrillas, y de una bandera similar a la que en ese momento cubría el ataúd de Edith Lagos, permanecieron tirados en la plaza por más de veinticuatro horas, sin que nadie osara moverlos. Solo cuando llegó el juez desde Ayacucho, se levantaron los cuerpos.

El campo y el miedo eran “batidos” a la vez.

El Frontón

Luego del asalto a la prisión de Ayacucho, en el mes de marzo, y la fuga de los detenidos senderistas, la inmediata preocupación del gobierno fue que se produjeran otros escapes. El Ministerio de Justicia, a cargo de la administración penitenciaria, decidió rehabilitar

provisionalmente la isla prisión de El Frontón, para instalar en ella a todos los presos senderistas. En corto tiempo fueron construidos dos pabellones grandes, así como uno más pequeño, y los detenidos por participación presunta en acciones sediciosas fueron concentrados allí desde casi todos los puntos del país.

A comienzos de octubre visité El Frontón con el fotógrafo Óscar Medrano. Fuimos los primeros periodistas en hacerlo, y el permiso que logramos fue para entrevistar a uno de los prisioneros no senderistas, Pastor Anaya, quien había sido adoptado poco antes como preso de conciencia por Amnistía Internacional.

La reapertura de El Frontón era también resucitar una parte del pasado entre fascinante y siniestro de la historia peruana, para tratar de encerrar en él a estos nuevos e inéditos rebeldes.

Alguien había visto antaño en El Frontón, relativamente suavizado en unas cosas, más duro en otras, el equivalente limeño de la Isla del Diablo. La comparación era solo parcialmente correcta. Visible desde el Callao en un día claro, la figura vaga de la isla emergiendo entre la distorsión de la resolana o la bruma sugería cabalmente las historias de crueldad, sadismo y violencia que varias generaciones de detenidos habían protagonizado o más frecuentemente sufrido. Pero no había en ella la sensación de ominosa finalidad del presidio francés, la certeza virtual de marchar al entumbamiento en vida. Por lo contrario, el paso por El Frontón fue para muchos políticos peruanos parte del camino que los llevaría al poder. El presidente Belaunde había sido prisionero de corta estancia durante sus años de fogoso candidato. También Pedro Beltrán, una de las figuras más controvertidas e importantes de la política peruana en la posguerra. Pero el derrotado candidato aprista a la Presidencia de la República en 1980, Armando Villanueva, y de hecho gran parte de la representación parlamentaria aprista, como también la comunista, habían pasado términos mucho más largos y duros en la isla.

Había lugares en El Frontón cuya sola mención despertaba emociones intensas. La Lobera, por ejemplo, esa especie de celda de castigo invadida por el mar apenas subía la marea, acarreando en oleadas crecientes la certeza de una noche larga de agonía. Otros lugares resaltaban especialmente en el folklore de los presos comunes. Playas donde duelos legendarios a navajazos habían dirimido primacías, donde habían empezado intentos de fuga que solían abortar, junto con la vida, en los roquedales y remolinos del Camotal.

En el malecón que enfrentaba la costa lejana estaba el poste, amarrados al cual muchos sentenciados a muerte vieron su última mañana. No lejos, otra celda de castigo, seca esta, parecida a tantas otras en las prisiones innumerables del mundo, pero peor que la mayoría. Tan baja y estrecha que era imposible pararse, imposible sentarse y menos echarse; y apenas posible respirar. Según la leyenda, era frecuente ingresar cuerdo y salir loco, especialmente si se compartía la celda con algún animal pequeño, viscoso, trepador o hambriento. Lo que sí era cierto es que nadie había salido caminando de ahí.

Con tantas historias de horror y de humillación asociadas a cada edificio, cada celda y cada cueva, cerrar El Frontón había sido visto como la ruptura con algunos de los aspectos más sórdidos del pasado reciente. Y se lo abandonó.⁵ Por un tiempo, la isla había permanecido desierta. Algunos pabellones se derrumbaron solos, las puertas habían caído, o habían sido arrancadas, y miserias y crueldades se trasladaron a nuevos escenarios.

Pero la insurrección de Sendero removió los buenos propósitos. Ante la posibilidad de otros escapes como el de Ayacucho, el gobierno decidió rehabilitar de inmediato la isla y encerrar ahí a los presos senderistas. Las nuevas construcciones tomaron el nombre, en un caso, del color azul que ribeteaba las paredes blancas. En el segundo simplemente se la llamó Playa 1.

Los presos senderistas, y también otros que no lo eran, fueron rápidamente trasladados a El Frontón. Como sucede invariablemente con las prisiones en el Perú, los pabellones se superpoblaron de inmediato, y su estructura apenas adecuada se vio pronto rebasada. Los motores estacionarios se descompusieron por deficiente instalación; y las viejas áreas, vetustas y abandonadas de la zona del Chaparral fueron puestas en funcionamiento de nuevo.

Los veteranos empleados de la historia vieja de El Frontón retornaron a hacerse cargo de las nuevas generaciones de prisioneros. Regresaron como soldados viejos, que ni se apresuran ni se excitan por las clarinadas familiares, pero que confían en que su larga experiencia les hará dominar la jornada. Funcionarios como el entonces director de El Frontón, Brígido Carbajal, que nos acompañaba al llegar a la isla, que suponían haber visto casi todo lo que hombres y grupos confinados pueden hacer y resistir; y que, guardia vieja enfrentada a armas y tácticas nuevas, encuentran que la experiencia se ha transformado en un peso muerto sobre cuerpos y pareceres envejecidos. Las necesidades expeditivas resucitaron El Frontón. La nueva vida de la isla duró cuatro años, y tomó desde el principio características totalmente diferentes a las que los resucitadores burocráticos habían previsto. Uno o dos años después de su reapertura, los mismos funcionarios que lo habían abierto no sabían cómo cerrarlo. Sendero en El Frontón se convirtió para el gobierno en el fantasma que concentraba y exageraba las características de la insurrección en la nación, atacando puntos ciegos, creciendo sin que se supiera cómo pararlo.

Y ello porque Sendero, que se opuso al principio a los traslados, se adaptó rápidamente a las nuevas condiciones y las utilizó al máximo. Si al comienzo no quiso llegar, al final no quiso irse. Luego de descubrir la conveniencia de la “luminosa trinchera de combate” principal, ganó control de la prisión pulgada a pulgada, hasta convertirla en un centro de capacitación, selección interna, planificación, adoctrinamiento.

La conquista de la prisión, desde adentro, como en forma menos absoluta sucedió también en otras prisiones posteriormente, fue un ensayo encapsulado de lo que la insurrección senderista trataba de lograr en el país todo. No solo era una realidad incómoda, que mostraba las diferencias inquietantes entre los planes burocráticos apresurados y sus consecuencias, sino que llegó a ser percibido por funcionarios de inteligencia como el lugar donde operaba el verdadero Estado Mayor de Sendero, controlando los hilos de la insurrección desde la isla.

Lo más inquietante del dominio de Sendero en El Frontón fue que se trataba de una premonición calamitosa actuada en la realidad. Así, los elementos que suelen estar presentes en el desanudamiento violento de un conflicto: ansiedad, desesperación, confusión mental, motivos de venganza, se hincharon hasta la explosión inevitable. Y la dirección de Sendero siguió y catalizó el proceso con los ojos abiertos.

Aun así, su fin fue inesperado para los otros actores. El Frontón de Sendero no se derrumbó de a pocos a lo largo del tiempo por el abandono, sino entre explosiones, gritos de guerra y de muerte. Cuando se derrumbó el Pabellón Azul, la enormidad de lo ocurrido sepultó las historias, las leyendas, los fantasmas pasados. El Frontón pasó a ser el lugar de esa lucha, esa demolición, esa matanza; y las loberas, los duelos a navaja, las epopeyas privadas de prisioneros estoicos y guardias sádicos, quedaron borradas en el atropello de esa lucha sangrienta.

Y nuevamente, el mensaje de ese soplo trágico, fue que su intensidad barría comparaciones y memorias, y al hacerlo creaba una nueva historia.

Llegados a El Frontón, caminamos con Brígido Carbajal hacia la zona del Pabellón Azul. Era casi mediodía, y recién se les iba a dar desayuno a los presos. Estos se encontraban formados en cuadro en el patio, haciendo turno para la paila. Dos delegados senderistas abrumaban a

reproches a un empleado de penales por la tardanza.

Los doscientos cincuenta restantes mantenían la formación con obvia disciplina militar. El grupo podía haber sido una muestra demográfica del país en su conjunto. Ningún tipo predominaba en forma especial. Y mientras los delegados aún discutían, los presos empezaron a corear consignas. El contraste con las otras organizaciones marxistas resaltaba desde el primer momento. A diferencia de los coros más bien espontáneos y desorganizados de estas, las consignas senderistas eran gritadas con el énfasis preciso y cortante de un grupo disciplinado y entrenado.

En cada lado del cuadrado, una voz gritaba la consigna, sin confusión ni atropello, e inmediatamente el resto de la masa respondía. Tres veces cada consigna, antes de pasar a la siguiente. Había una excepción: cada viva al “marxismo-leninismo-maoísmo” (ya nadie se confundía mencionando al “pensamiento Mao Tse-tung”), era seguido por tres al “‘pensamiento-guía’ del camarada Gonzalo”. Los recientes remezones internos en Sendero habían sido abundantemente remachados en El Frontón. Aparte de “Gonzalo”, la única otra persona nombrada en las consignas fue Edith Lagos (la voz singular llamaba: “Compañera Edith Lagos”, “presente en la lucha armada”, contestaba el coro. “¿Quién la mató?”, “el perro Belaunde”, “¿quién la vengará?”, “el pueblo combatiente”, “¿cómo la vengará?”, “¡con las armas en la mano!”). En un momento breve de silencio, Medrano y yo ingresamos al interior de la formación. El silencio continuó. Mientras Medrano fotografiaba, yo pregunté a nadie en particular, y sosteniendo en forma evidente la grabadora, si además de consignas habían compuesto alguna canción. Cantaron cerca de una hora, un coro preciso y solemne. Si las melodías eran prestadas del acervo comunista, de España, Italia y la Unión Soviética, las letras eran todas originales, y la pluma, el montaje o por lo menos la supervisión del líder, eran evidentes. “Salvo el poder, todo es ilusión, ¡Asaltar los cielos con la fuerza del fusil!”.

Partido Comunista, conduce a nueva vida,
esfuma como el humo la duda, el temor;
tenemos la fuerza, es nuestro el futuro,
comunismo es meta, será realidad.

Luego, en inesperado allegro, la canción adoratoria:

Y el pueblo que escucha atento,
al volver a su jornada,
¡Es Gonzalo!, canta el fuego,
Gonzalo es lucha armada.

¡Gonzalo!, las masas rugen,
y los Andes se estremecen,
expresan pasión ardiente,
fe segura y acerada.

En algún momento, un fastidiado centinela en la torre cercana que dominaba el patio disparó al aire. La formación no se alteró, ni se modificó el vigor de las canciones. Meses después, luego de una intentona de motín en el área, la Guardia Republicana abandonó la torre y dejó el control del patio a Sendero.

Poco después, entrando al Pabellón Azul, que ya entonces era área totalmente controlada por Sendero, y a donde no ingresaban más los empleados de penales, hice una larga entrevista a varios delegados, que se turnaron para hablar de acuerdo al tema. Lo primero que llamaba la

atención dentro del pabellón eran la disciplina y el orden internos. Pese a la superpoblación, los pabellones estaban limpios (decoradas las paredes con la iconografía senderista) y los baños también. A lo largo de la entrevista, muchos de los presos quisieron acercarse para escucharla, pero otros presos, cuya función disciplinaria era evidente, les ordenaron retroceder.

Les pregunté qué pensaban de los otros partidos marxistas. Contestaron que los otros grupos no eran marxistas, que se habían “uncido al carro de la reacción”. ¿Qué opinaban de grupos próximos a ellos, como Pukallacta? Respondieron que “había que entender bien la política de frente único” y que si los integrantes de esos partidos o grupos querían “dejar sus posiciones erróneas”, debían autocriticarse, disolverse y solicitar su ingreso individualmente. Esa era la forma en que Sendero entendía que debía operar el “frente único”.

¿Cómo justificaban los asesinatos de gobernadores, alcaldes, pequeños comerciantes? “Los matamos porque traicionan la causa del pueblo [...]. A esos individuos no les queda otro camino que ser ejecutados”.

Pocas semanas antes, un destacamento de Sendero Luminoso había tratado de matar al presidente de la comunidad de Ongoy, Félix Olarte, miembro de la UDP, en Andahuaylas, y al no poder capturarlo, habían azotado y rapado el pelo a su esposa. Les pregunté si consideraban esa acción como justa. “Es justo”, me contestaron, “porque ellos estaban creando ilusiones, estaban sirviendo al enemigo. Eso es justicia, pues, la justicia tiene un sentido de clase. Por eso ajusticiamos a esa gente. Es justo, es correcto, es necesario. Además, esto es una revolución; y todo el que se oponga a esta revolución, sencillamente será aplastado como un insecto más”.

¿Cuáles eran las contribuciones del “pensamiento-guía al marxismo? Un cuadro fue designado específicamente para responder. El “pensamiento-guía”, me dijo, era un desarrollo del marxismo-leninismo-maoísmo, era una nueva etapa que tenía no solo validez para el Perú, sino universal. A continuación, mencionó varias “contribuciones magistrales” de “Gonzalo” al marxismo: la síntesis de las leyes de la dialéctica en una sola, la ley de la contradicción; la unidad dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo; la tipificación de las cinco fases de la lucha armada (explicadas en detalle en otra parte del texto); el descubrimiento de las leyes del desarrollo del capitalismo burocrático sobre la base feudal; haber señalado las medidas necesarias para evitar la regeneración del capitalismo una vez que la revolución triunfara (“formarnos como triple mando, como cuadros del Partido, mandos militares y estadistas. Y armar a las masas. Que si nos desviamos, ellas nos aplasten”).

Otro aporte era la generalización de las leyes de la guerra popular a nivel mundial. La producción escrita de “Gonzalo” de otro lado, era, según reconoció el cuadro, exigua. Sin embargo, se apresuró a añadir que *Desarrollemos la guerra de guerrillas* era “expresión pura del camarada Gonzalo”. Sin considerar la consistencia intelectual de las “contribuciones” de “Gonzalo”, lo que importa es que para los creyentes organizados, disciplinados y fanáticos que nos respondían, ellas eran no solo artículo de fe, sino palpable certeza.

Poco después, pasamos al sector de Playa 1, donde estaba detenido Pastor Anaya (quien salió en libertad poco después de la publicación del reportaje). Ahí las celdas eran individuales, se suponía que para los prisioneros que habían pedido ser aislados. Sin embargo, aparte de Anaya, el resto de los presos era senderista, aunque predominaba entre ellos el tipo urbano. Hubo también una manifestación, si acaso más rígida que en el Pabellón Azul.

A través de Anaya, y luego de otros presos pertenecientes a Izquierda Unida, tuvimos el testimonio de lo extremadamente difícil que era, para los no senderistas, convivir con estos. Presiones constantes, insultos rutinarios, hostilidad permanente. Salvo Anaya, la mayor parte de

los presos había pasado a la zona vieja de El Frontón, el Chaparral, obligándose a trabajar gratuitamente para la administración penal a cambio de no ser mandados al Pabellón Azul.

El Chaparral fue la última parte de nuestro recorrido. Supe que Luis Kawata se encontraba allí e intenté entrevistarlo. Fue imposible. Entre los vericuetos de los pabellones semiderruidos, las respuestas evasivas a nuestras preguntas y las fugaces miradas de inteligencia y composición de gestos que pude ver en algunos prisioneros, fue evidente que Kawata nos rehuía. Al percatarnos de ello, pretendimos haber perdido interés en la entrevista y proseguimos visitando las celdas ruinosas. Bruscamente, regresamos al lugar donde habíamos visto una parrilla improvisada en la que se estaba friendo pescado. Ahí estaba, en efecto, Kawata, friendo en medio de un grupo heterogéneo de presos. Me acerqué y le dije que quería hacerle una entrevista. Kawata balbuceó una negativa, y se retiró acompañado por otro preso, mientras un tercero se interponía en el camino.

No todos los presos del Chaparral eran militantes de otros grupos marxistas. Una parte eran personas capturadas como senderistas, que habían tenido problemas con la organización, y que habían tratado de salvarse de la hostilización, de los ritos interminables de humillación, a través del traslado al Chaparral.

¿Y eran senderistas confirmados y sólidos todos los internos del Pabellón Azul? Según un oficial de la Guardia Republicana con quien conversé mientras esperábamos embarcarnos de regreso, el porcentaje de senderistas recalcitrantes era relativamente pequeño, pero estos dominaban, por presión y coerción, al resto. “Llegan acá sin formación, y salen formados”, me dijo. La dirigencia real de Sendero era desconocida por la mayoría; las reuniones eran de noche, con los pasamontañas puestos, para evitar ser reconocidos. Centinelas senderistas observaban a los republicanos durante las veinticuatro horas del día, anotando cada movimiento de estos. Parecía un ejercicio inútil. No lo fue.

Zarpamos cuando ya anochecía. Un grupo heterogéneo (familiares y abogados de los presos, guardias republicanos, funcionarios de penales), confinado en la lancha pequeña. Al alejarnos del muelle, solo se podía ver al comienzo parte del Chaparral y a grupos pequeños de presos caminando sin propósito ni concierto particular alrededor de la zona de fritanga de pescado. Al remontar un promontorio, navegamos frente al Pabellón Azul, donde otra actividad común movía coordinadamente a la colmena, y un cartel recién extendido desde las ventanas del pabellón, proclamaba: “¡Viva el desarrollo de la guerra de guerrillas!”. Un abogado de los detenidos senderistas, hasta entonces desapercibido, dio la cara al Pabellón Azul y a los presos que veían partir la lancha, y saludó largo rato con el puño en alto. Volteó luego hacia el resto de los pasajeros y tripulantes de la lancha oscurecida, con una mirada desafiante que poco a poco se apagó en la inexpresiva introversión anterior.

En el futuro, recordé muchas veces aquel largo momento, cuando el Pabellón Azul se perdía en la distancia y la oscuridad, sobre todo luego de su fin. Pero fue horas antes, parado en medio de la formación en cuadro, escuchando las canciones luctuosas de guerra y de fe, cuando llegué a la convicción de que en Sendero Luminoso el país enfrentaba un movimiento cuya disciplina, intensidad y fanatismo no tenía paralelo en nuestra historia, ni quizá en la de Latinoamérica. En aquel pabellón, ya desaparecido en la noche, se nutrían parte de los vientos de tormenta que batirían el Perú con mucha mayor fuerza en el futuro que aquella con la que ya entonces lo golpeaba.

La plaza sitiada

Desde mediados de octubre arreció la ofensiva senderista en Ayacucho. Asestados ya los golpes más importantes a las guarniciones policiales medianas (la última acción había sido el arrasamiento de la guarnición de Mayoc, en el límite de Ayacucho con Huancavelica; granadas, fusiles y algunas ametralladoras ligeras cayeron en poder de los senderistas), barridos los puestos pueblerinos, la campaña del “Batir” continuó cerrando sistemáticamente el cerco en torno a la capital del departamento. El sitio se aplicaba en dos dimensiones simultáneas. Una era la física, y consistía en la palpable erradicación de la autoridad del gobierno en el campo, y su reemplazo por los semiclandestinos “comités populares”. La segunda era sicológica, la amplificación y multiplicación del efecto de las acciones militares por el miedo. Acciones aparentemente atrabiliarias coadyuvaban al propósito de las más funcionales: cerrar los vacíos del cerco, imponer brutalmente la sumisión en las áreas controladas y erosionar las ciudades desde adentro.

El 4 de noviembre fue asesinada Yori Luz Sáenz. Su cadáver permaneció varios días en la morgue ayacuchana sin ser reclamado. Sus dos hermanas, acostumbradas a seguir a Yori Luz durante las ausencias de su madre, permanecían dando vueltas junto a la morgue dos días después del asesinato. Su imagen permanece, para mí, como la expresión viva de quienes tuvieron la desventura de ser niños en Ayacucho durante aquellos años. No hubo *gavroches* entre los niños de la guerra. Solo una generación brutalizada desde la primera luz.

El 10 de noviembre un grupo senderista atacó el otro fundo experimental de la Universidad San Cristóbal, Wayllapampa. Fue una incursión de saqueo y destrucción. Aparte de lechones de raza sacrificados, e implementos destrozados, las principales víctimas de la jornada fueron ciento ochenta y dos pavos de doble pechuga. Los atacantes habían salido de la ciudad de Ayacucho y vuelto a retornar a ella luego del ataque. La ruta entre ambos lugares quedó jalonada con plumas blancas y cadáveres de pavos.

Entre tanto, Sendero prohibió a los campesinos de las zonas controladas por ellos sembrar más allá de lo necesario para la supervivencia. La asistencia a ferias y mercados que pudieran abastecer a Ayacucho quedaba prohibida. Dando ya disposiciones de gobierno a nivel regional, Sendero actuaba como conquistador.

En Huancaraylla, donde habían matado a un exalcalde en junio, la profesora Aurea Quispe de Huamán fue secuestrada y asesinada por un grupo senderista el 5 de noviembre. En Cangallo, el mismo día, fue liquidado un comerciante.

En Ayacucho, entre tanto, un estudiante, Alberto Rottier, fue muerto por un guardia republicano borracho; y el dueño de una de las discotecas que brotaban en todas partes para satisfacer la demanda policial fue victimado a balazos. La moral de la guarnición policial, nunca alta, no solo reflejaba ahora la descomposición institucional generalizada, sino expresaba las desventuras bélicas en Ayacucho, el creciente sentimiento de impotencia ante el visible deterioro de la situación.

Si la derrota y la descomposición tienden a nutrirse mutuamente, en Ayacucho ambas iban de la mano. La situación había llegado a tales niveles que ya en octubre el fiscal superior decano en Ayacucho se había sentido forzado a dirigir una comunicación enfática al coronel Delgado Matallana, donde le indicaba que, pese a confrontar “un enemigo peligroso como son los terroristas”, los policías “vienen dedicándose a las bebidas alcohólicas y actitudes de amoríos con las chicas”. El irrefragable fiscal proseguía, diagnosticando y recomendando:

El 1 de octubre, donde policías sinchis en estado de embriaguez se pusieron al desafío de la ruleta a la rusa [sic], muriendo uno de ellos en este lance de borrachos; luego del día de ayer domingo 3 de los corrientes en que un policía de la Guardia Civil embriagado [...] ha sido abaleado por miembros de la Policía de Investigaciones también embriagados. [...] En tercer lugar, se proceda a la inmediata clausura de todas las discotecas de la ciudad [...] para evitar el plan operación-sexo-terrorista, ya que a dichos lugares frecuentan muchos miembros policiales [sic].⁶

El 14 de noviembre, el fundo de Allpachaka fue atacado de nuevo por Sendero, que terminó así de destruir lo que se había salvado del primer arrasamiento. El mismo grupo senderista entró a un fundo contiguo, Nuñuhuayco, mató a dos trabajadores y se llevó todo el ganado: cuatrocientos carneros y setenta vacas.

El 16 de noviembre el pueblo de Pacaycasa, apenas a veinte kilómetros de Ayacucho, fue tomado por un contingente senderista. El edificio del concejo distrital, la oficina de correos, la posta médica, las tiendas y el restaurante locales, fueron destrozados a fuego y dinamita. En Huanta, una persona que había acudido desde Lima a los funerales de una pariente, fue capturada y asesinada por Sendero.

En los días siguientes de noviembre, los asesinatos se intensificaron. Todas las víctimas eran gente modesta: un empleado de correos en Huancapi y su hija, el guardián de minas Canarias, una cocinera, un agricultor. En algunos casos, varios miembros de una misma familia: los Chuchón o los Palomino, por ejemplo, fueron muertos a la vez o en corta sucesión. En el caserío de Chajo, un grupo senderista torturó y asesinó a Cipriano Palomino y a su hijo Filomeno (aunque aparentemente habían llegado en busca de otra persona), y al irse dejaron una lista con los nombres de las próximas víctimas en el distrito. Eran once. Seis se apellidaban Palomino.

En Lima, entre tanto, el ambiente de confusión y pesimismo no se morigeró ni siquiera luego de que Seguridad del Estado arrestara a Haydeé Cáceres Hidalgo. Para Gagliardi, la sensación de deterioro de la situación se mezclaba con un sentimiento de fracaso personal que este honesto militar no hizo esfuerzo por disimular: “Entré optimista, en la idea que las cosas no estaban tan mal. [...] salí con una sensación de fracaso. [...] Me siento satisfecho con lo que hice en Aeronáutica. Pero en el Interior no he logrado lo que pensé que podría lograrse: disminuir terrorismo, narcotráfico y delincuencia. No logré disminuir ninguno de ellos. Eso es motivo de la grave sensación que me deja el Ministerio del Interior”.⁷

Durante los últimos meses, Gagliardi había ejercitado a fondo sus facultades, tratando de contener el continuo deterioro de la situación. Opuesto todavía al ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha contrainsurgente, temía el costo social que causaría su ingreso, su desgaste, y los otros peligros que su experiencia ministerial de algunas horas, antes del golpe del 69, le recordaba bien. En lugar de ello, creía que la alternativa consistía en mejorar sustancialmente el rendimiento de los servicios de inteligencia y en equipar convenientemente a las fuerzas policiales.

Había ensayado otras soluciones también. Luego de las ceremonias de celebración de la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas, había ofrecido públicamente dialogar con los dirigentes de Sendero, para encontrar vías de paz, ofreciéndoles todas las garantías en cuanto a su seguridad, incluso si eso suponía hablar con interlocutores enmascarados.

El primer ministro Manuel Ulloa lo desautorizó públicamente casi de inmediato, declarando que el gobierno no dialogaba con terroristas. Gagliardi no respondió, pero fue al día siguiente a Palacio de Gobierno y presentó a Belaunde su renuncia al cargo.

El presidente no la aceptó, y expresó en público su aprecio por Gagliardi, aunque sin

respaldar la iniciativa del diálogo. Pero como consecuencia de ese jaloneo en el gabinete se acordó que Gagliardi seguiría como ministro del Interior solamente hasta fines de diciembre. Imponer un sucesor allegado se convirtió en las semanas siguientes en uno de los motivos de enfrentamiento enconado entre las facciones de Acción Popular.

El primero en intentar asegurar el cargo para sí fue el propio premier Ulloa. Consciente de su desgaste en la cartera de Economía, y tratando de pasar a un sector donde se pudiera lograr resultados tangibles, y quizá espectaculares, Ulloa deseaba pasar al Ministerio del Interior reteniendo la jefatura del gabinete. Considerando inevitable el ingreso de las Fuerzas Armadas, y teniendo como ministro de Guerra a su primo, el general Luis Cisneros Vizquerra, Ulloa confiaba en una cooperación estrecha, que él dirigiría ejecutivamente como ministro del Interior y coordinaría como premier.

Ulloa estaba convencido (en gran parte por su primo Cisneros) de que, con la intervención militar y una policía bien equipada, la insurrección senderista sería aplastada en breve tiempo. Por eso, los fondos y las autorizaciones de endeudamiento por los que De la Jara y Gagliardi habían luchado infructuosamente a lo largo de sus gestiones fueron concedidos en la última parte del año. Ascendían a sesenta y ocho millones de dólares, además de un crédito especial de seis mil millones de dólares para los sinchis. La suma mayor entraría en el complejo mecanismo de licitaciones desde el año siguiente, cuando el nuevo ministro del Interior ocupara el cargo.

Seguro del nombramiento, Ulloa comprometió la participación de algunas personas en su inminente gestión. Héctor López Martínez, entre otros, seguiría como viceministro.

Una vez definido el esquema de acción, Ulloa solicitó formalmente (y por primera vez), en diciembre, su nombramiento como el siguiente ministro del Interior al presidente Belaunde. La entrevista duró algo más de tres horas y, en palabras de un testigo de antesala, Ulloa “entró triunfador y salió cariacontecido”.

La irritación de Belaunde con Ulloa había ido creciendo a lo largo de 1982. Desde cosas aparentemente poco importantes como la poca disciplina personal y la impuntualidad del premier, el alejamiento había tomado cuerpo gradualmente. Luego, cuando en su viaje por Asia, Ulloa había sido recibido en China con honores de jefe de Estado, la satisfacción del premier tuvo su precisa contrapartida en el pierolino desagrado del verdadero y no poco celoso jefe de Estado. Informado de antemano sobre los planes ministeriales de Ulloa, Belaunde, que tenía tan claro como aquel el ejemplo exitoso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, pero que indudablemente no pensaba imitar a Rómulo Betancourt en este caso, esperó que el premier se ofreciera formalmente para rechazarlo, en forma no por cortés menos contundente. Dado que el presidente tenía en mente un nuevo primer ministro, la continuación de Ulloa en el gabinete quedaba fuera de consideración. Como dijo el mismo testigo: “¡Es que cuando Belaunde le pone la cruz a alguien...!”.

En retrospectiva, Ulloa tuvo suerte en ser rechazado. Guiado por la impronta de Cisneros — quien “daba la impresión que lo de la sedición no tenía importancia, que para las Fuerzas Armadas era como jugar en segunda división”⁸ —, Ulloa, como todos antes que él y muchos después, tenía el optimismo nacido de la cabal ignorancia respecto a la fuerza y dimensión del enemigo que se proponía combatir. Sin quererlo, por supuesto, Belaunde le ahorró una derrota.

Desde inicios de diciembre, Sendero intensificó sustancialmente la ofensiva. Había entrado ya a la última campaña del “Batir”, y la resistencia policial en Ayacucho crujía, empezaba a dar signos de desplomarse. El 3 de diciembre Sendero celebró el cumpleaños del enaltecido Guzmán. El pro-feta rojo fue homenajeado con los sacrificios más propiciatorios. Un apagón

simultáneo oscureció Lima y Ayacucho, mientras en el cerro San Cristóbal, que domina la Lima antigua, y en el cerro La Picota sobre Ayacucho, centenares de latas encendidas a la vez dibujaban la hoz y el martillo en llamas.

Un día antes, en Ayacucho, un paro regional había detenido la vida en el departamento. El Frente de Defensa aparecía como la organización que ordenaba el paro, aunque varias otras lo respaldaban, entre ellas la Cámara de Comercio de Ayacucho. La lista de motivos del paro no mencionaba ni una sola vez a Sendero, pero exigía en cambio la salida de los cuerpos especiales de la policía y el levantamiento del estado de emergencia. Quienes no apoyaban a Sendero ideológicamente, lo hacían ahora para mostrar la metáfora de una bandera blanca.

La sensación colectiva de derrota fue expresada en esos días en un oficio confidencial del fiscal superior de Ayacucho, Guillermo Arce Ramírez, al fiscal de la nación, Gonzalo Ortiz de Zevallos, en donde el pintoresco pero atinado fiscal, cuya “sinceridad y fuerza moral que caracterizan al suscrito, llevado por su mística de cumplir fielmente con los altos fines de su Ley Orgánica DL N° 52” lo movían a comunicar “sobre los graves sucesos del terrorismo [...] del progreso diario que vienen obteniendo dichos terroristas del Partido Comunista Sendero Luminoso”.

Las fuerzas policiales [...] no quieren enfrentarse con la decisión y valentía que deben observar, habiendo optado estos policías a concentrarse únicamente en sus cuarteles, abandonando muchos puestos [...] dando lugar a que los terroristas se hayan hecho dueños de todas las zonas rurales de las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo. [...] En dichas provincias, los terroristas han entrado prácticamente a gobernar.

Esta labor de proselitización de Sendero Luminoso vienen operando [...] en todos los centros educativos [...] de ahí que, en las muchísimas incursiones que han hecho a los colegios, siempre se ha notado la presencia de niños de quince a dieciséis años de edad [...] sin que algún alumno o algún profesor por lo menos haya enfrentado con un diálogo esclarecedor, se entiende por miedo de ser victimados al instante. [...] En el Colegio Nacional Mariscal Cáceres [...] hace dos meses, [...] todos los alumnos al estar empezando a entonar nuestro himno nacional, cambiaron la nota empezando a cantar a viva voz las canciones e himnos de la guerrilla, ante cuya situación el director del plantel [...] trató de llamar a la cordura, diciéndoles que esto era peligroso para su vida, habiéndose enfrentado un alumno diciéndole: “No tenga miedo, señor director, no le pasará nada si viene a formar parte en nuestras filas”. [...] Como consecuencia de este adoctrinamiento, en las zonas rurales los pobladores [...] están bajo el gobierno de los senderistas y que hasta para viajar de pueblo a pueblo tienen que solicitar una especie de “visa” o “permiso” del jefe de los terroristas.

Ante la ineficacia de las fuerzas policiales [...] que más se dedican a la embriaguez y actividades amorosas con las muchachas [...] sin hacer frente a Sendero, pues en cada incursión senderista no ofrecen resistencia, sino que se rinden y entregan mansamente sus armas y todos sus pertrechos a los senderistas [...] quienes incursionan a los pueblos casi seguros de su victoria y sin sufrir baja alguna, salvo raras excepciones; [...] la población urbana de Ayacucho está librada a su suerte [...] lo que está dando por resultado de que los comerciantes, pequeños industriales y muchos ciudadanos, están en plan de emigrar hacia la costa [...] lo que a la larga dejará como consecuencia de que Ayacucho se convierta en una ciudad desolada, [...] cuadro doloroso que no debe consumarse en este jirón de la patria por su historia libertaria y tradición social bien mentada.⁹

“¡Les regalo mi puesto a Rommel y a Montgomery!”

El 3 de diciembre un grupo de periodistas llegamos a Ayacucho. Tres de *Caretas* (el director Enrique Zileri, el fotógrafo Víctor Chacón Vargas y yo) y William Montalbano, quien trabajaba entonces para el *Miami Herald*. Nos recibieron la ciudad paralizada y el vehemente coronel Carlos Delgado Matallana. Fundador y uno de los primeros oficiales de los sinchis, el valor

personal de Delgado Matallana estaba fuera de duda, pero ello por desgracia no conjuraba la fortuna en el teatro de la guerra.

Delgado Matallana, dolido por un reciente artículo mío que calificaba su gestión como incompetente, nos invitó a su comandancia para explicarnos cuál era, desde su punto de vista, la situación.

“Lo primero que tienen que comprender”, dijo, “es que estas no son las guerrillas del 65. ¿La de Jaén? ¡También una guerrilla pequeña! Estos se han incubado catorce años. Y son la mayoría ayacuchanos”. Súbitamente, quizá espoleado por el poco sueño, la obvia tensión, prorrumpió en un discurso apasionado: “Después de lo que se ha visto, ¡qué cosas son capaces de hacer! [...] ¡Esta gente son asesinos, son unos miserables, son unos desalmados!”.

Señalando el mapa departamental que cubría una de las paredes de la ofi-cina del Estado Mayor, indicó que tenía bajo su cargo diecisiete mil kilómetros cuadrados, “de una geografía endiablada, con más de quinientos mil habitantes repartidos por todo lado” y menos de mil hombres para cuidarlos. El único medio que disponía para vencer las distancias abruptas, los caminos escarpados, era apenas un helicóptero “que solo sale de día y si hay buen tiempo”.

“¿Qué harían ustedes?”, nos preguntó, “porque yo, con estos medios, con este apoyo, le regalo mi puesto a Rommel y a Montgomery juntos, ¡a ver qué hacen!”.

Poco después, logramos entrevistar a Máximo Cárdenas Sullca, quien, como presidente del Frente de Defensa, dirigía nominalmente el paro; sin duda consciente de que en el nuevo orden de jerarquías, tanto él como su frente solo tenían la escasa autonomía que Sendero quisiera concederles.

Pequeño y enjuto, Cárdenas seguía dando la impresión, antaño tan engañosa, de fragilidad, pero que entonces posiblemente se alejaba menos de la realidad. Luego de agradecer, protocolar y educadamente, nuestra presencia, expresó la esperanza de que el paro sirviera para atender “las demandas del pueblo, terminar con la postergación secular que sufre”. El viejo revolucionario enumeró la lista de obras y reformas que el frente solicitaba para Ayacucho, todas ellas sensatas y razonables, factibles de realizarse a corto plazo. Si eso era todo... “¿Cree que si se hicieran esas obras —le preguntamos— cesaría la violencia, Sendero depondría las armas?”.

Era una pregunta que quizá Cárdenas hubiera deseado responder, pero que obviamente no podía. Con una sonrisa entre tímida y evasiva, bajo la cual aún se percibía algo del viejo temple férreo, nos dijo que “la violencia es una de las manifestaciones que el pueblo toma por su pobreza”. Y dio a entender que el tema no era apropiado para una discusión adicional.

Al mediodía salimos hacia Huanta, en una Land Rover de la Guardia Civil, única forma de movilizarse en medio del paro. Íbamos en busca de un agricultor alemán que, en los términos trágicos de Ayacucho, se había convertido en la metáfora periodística proverbial del hombre que muerde al perro.

El 26 de noviembre, en la noche, un contingente senderista atacó el fundo El Carmen, de Eduardo Spatz y su esposa, la huantina Adriana Cárdenas. Había sido una de las acciones más anunciadas de la guerra, percibida en Huanta como ejecución de sentencia, antes que como acción militar. Pero Spatz y su esposa resistieron el ataque, y luego de un furioso intercambio de disparos, los atacantes se retiraron, dejando en el campo una gorra estilo Yenán, “con tres estrellas”, y una bandera roja “de tela fina”, quizá el presente final de la sobrina de Adriana Cárdenas, Augusta La Torre, la primera en condenar a muerte a Spatz, cinco años antes del ataque.

Dos días antes de nuestra llegada, una estación de radio en Ayacucho informó que Spatz

había muerto, alcanzado finalmente por el brazo inexorable. En Ayacucho nadie sabía nada sobre su suerte, incluyendo la policía.

Cuando llegamos a la entrada del fundo, dos horas después, el escenario hubiera sido bucólico de no haber estado el cartel a la entrada prohibiendo el ingreso, advirtiendo de la presencia de perros fieros. Una calavera remataba el cartel, una bala lo agujeraba, y varios otros cráneos, producto de huaqueo según nos dijeron, coronaban el muro exterior, que encerraba el gallinero, la chanchería, la perrera y la casa de los Spatz.

Los esposos estaban vivos, aunque para el resto de Huanta fueran poco más que espectros pertinaces. Cuando llegamos, ambos se preparaban para otra noche interminable de vigilia sobre las armas.

Eran una pareja incongruente para el rol que las circunstancias y su decisión los habían lanzado. Adriana Cárdenas, empuñando un viejo fusil Mauser de cerrojo, parecía frágil, aunque luego evidenciara una bravura modesta pero inalterable. Tanto ella como su esposo, ambos en la última madurez (cincuenta y cinco años él, cuarenta y tantos ella), se veían intoxicados de fatiga, de insomnio ininterrumpido, sosteniéndose con esa quebradiza energía nerviosa que apuntala los esfuerzos extremos.

Spatz estaba armado con una escopeta semiautomática de calibre 12, una pistola Luger, un revólver y un puñal. Bajo, panzón, hablando con un acento alemán tan pronunciado que en otra circunstancia hubiera sido casi caricaturesco, la primera impresión que producía, rodeado de calaveras, y de tosca escenografía tanática, era involuntariamente desagradable. (El *Diario Marka* había escrito que Spatz era un “excombatiente nazi”, lo cual, considerando su edad y examinando su biografía parecía improbable.)

De otro lado, la desafortunada escenografía era un detalle secundario, aliado de lo que la lucha solitaria de los Spatz representaba. El enfrentamiento de los pocos contra los muchos, la resistencia singular contra la tiranía del miedo. Se trataba de luchadores renuentes pero bravos, rodeados por la marea senderista, y peleando aun cuando la gente en Huanta los consideraba cadáveres, y la propia policía temía ayudarlos.

La historia había empezado cinco años atrás. Augusta La Torre había llegado al fundo a proponerles la compra de las armas de Spatz, cazador viejo. Este se negó, y luego de una discusión tensa, Augusta le gritó al rotundo alemán: “¡Tú eres uno de los primeros a quienes vamos a quemar!”

Desde marzo de 1982 empezaron a percibir movimiento de gente armada cerca del fundo. Parientes y amigos de Adriana les advirtieron que, en efecto, “los iban a quemar”. Cuando llegó la advertencia general, en el sentido de que nadie en la zona debía sembrar más de dos hectáreas, Spatz no sembró nada. En cambio encementó varias ventanas, trasladó enseres de valor, puso alambre de púas sobre el muro exterior y juntó munición.

Dos meses antes del ataque, les llegó un ultimátum senderista. Largarse, solo con lo que llevaban puesto. Un mes después les hicieron saber que serían aniquilados.

El ataque empezó antes de las 9 p. m. del 26 de noviembre, en medio de una lluvia torrencial y los ladridos furiosos de los perros. Luego de los gritos de “¡viva la lucha armada!” empezaron los dinamitazos y los balazos. Los Spatz, ya en posición de tiro, devolvieron el fuego. Spatz disparaba mientras su esposa recargaba. En los veinte minutos que duró el encuentro, disparó más de trescientos tiros con todas sus armas.

Los senderistas se retiraron. Un día después, dejaron saber que volverían. Era cosa de salvar la cara y, para los Spatz, la sola idea de dormir en las noches se convirtió en un sueño despierto.

Pidieron ayuda a la policía. El jefe de Huanta envió dos policías lugareños al fundo. Pero inmediatamente, la madre y la esposa de uno de ellos fueron allá y armaron tal escándalo que al día siguiente tuvieron que ser retirados. No llegaron reemplazos, y el jefe de la plaza les comunicó que no podía garantizar su seguridad. Les aconsejó que se mudaran a Huanta, lo más cerca que pudieran de la comandancia policial.

Los Spatz trataron de mudarse. Nadie se atrevió a alquilarles casa. Fueron informados, además, que Sendero había dado la orden de que nadie les vendiera ni comprara nada. Amigos y parientes siguieron comerciando con ellos, pero a escondidas.

Cuando Adriana Cárdenas fue a Ayacucho a pedir auxilio al jefe de la zona en emergencia, un oficial le dijo que no podían distraer hombres en protegerlos, pero le sugirió que comprara “un par de *walkie-talkies* en Sears” para solicitar ayuda cuando volvieran a ser atacados.

Cuando salíamos del fundo, iniciando el retorno a Ayacucho, los Spatz esperaban esa noche con mayor aprensión que las anteriores.

Era la víspera del cumpleaños de Guzmán. Sin demasiada esperanza, Spatz nos encargó que pidiéramos a la jefatura de línea que le enviaran dos guardias, por esos días. “Casi seguro que atacan esta noche, o mañana... Estoy cansado, mi esposa no puede más”.

A diferencia de tantos otros, este relato no termina mal. Los Spatz tuvieron que abandonar el fundo El Carmen, pero salvaron la vida. La historia de su guerra solitaria fue portada de *Caretas* y primera plana en el *Miami Herald*. La embajada alemana intervino, y sacó del país a Spatz. Su familia esperó en Huanta a que este consiguiera trabajo en Alemania para reunirse con él. Las relaciones familiares hicieron lo suyo, y Adriana Cárdenas pudo aguardar en paz en Huanta. Finalmente emigró a Alemania, cuando su esposo consiguió empleo como guardia de seguridad en una compañía.

En la ciudad de Ayacucho, el socavamiento de la resistencia policial no era material, sino moral. Excepto incursiones ocasionales en Ayacucho y la periferia, ejecutadas generalmente por los sinchis, la policía se preocupaba fundamentalmente de su propia protección. El temor a un ataque como el de marzo era intenso. Centinelas y patrullas nocturnas se concentraban en el centro de la ciudad. Pocos oficiales se atrevían a rondar a pie en la noche, incluso en el centro del área urbana, por temor a los temblorosos gatillos de sus tropas. Sin embargo, en paradoja no del todo incomprensible, las discotecas funcionaban a capacidad plena. La ebriedad armada y el erotismo semipúblico —asociados indistintamente a victoria o derrota, pero nunca al esfuerzo previo— ofendía repetidamente la sensibilidad y el respeto propio de una ciudad pacata y tradicionalista. No era aquella “operación sexo-terrorista” sobre la que el buen fiscal ayacuchano previniera a su superior en Lima, pero sus efectos eran apenas diferentes. Parejas de policías enseñando el plumaje, y muchachas más o menos avergonzadas, observadas con censura por ayacuchanos viejos, con rabia por ayacuchanos jóvenes, eran una escena constante. Y lo más conflictivo, en la performance de estos ritos etológicos, era que el macho dominante no era el macho victorioso, sino lo contrario. No me atrevo a conjeturar cuántas simpatías ganó Sendero como resultado de estas relaciones viciadas, pero no dudo que muchos encontraron una satisfacción íntima en las acciones de aquellos, sintiéndolas en alguna forma como una venganza contra la impudicia que los ofendía en público, en privado o en ambas dimensiones a la vez.

El gobierno de Belaunde, entre tanto, seguía manteniendo a las Fuerzas Armadas fuera de la conducción de la lucha contrainsurgente. En la reunión del Consejo de Defensa Nacional que siguió al apagón y atentados del 3 de diciembre, se aprobaron medidas para fortalecer la acción policial. El entonces recién ascendido general Octavio Herrera Polo fue nombrado nuevo

comandante de la zona en emergencia y tanto el dinero como las autorizaciones de endeudamiento que el premier Ulloa había liberado poco antes, pusieron en movimiento la maquinaria de adquisiciones logísticas y las implacables guerras internas entre diversos grupos policiales para controlarlas. El próximo primer ministro, Fernando Schwalb, declaró que las Fuerzas Armadas darían solamente mayor apoyo en medios a la Policía, sin intervenir directamente en las operaciones. La semana siguiente, cuando la situación se deterioró aun más, el gobierno decidió adelantar en quince días el cambio de comando en Ayacucho, persistiendo en la decisión de mantener alejadas de la lucha a las Fuerzas Armadas.

En otro nivel, la frívola ignorancia sobre Sendero y la insurrección, que existía aún entonces en la mayoría de la élite dirigente del país, siguió exhibiéndose en tanto se agravaba la situación. A comienzos de diciembre, por ejemplo, el jefe del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, y el dirigente Richard Amiel aconsejaron investigar a los pocos refugiados chilenos de la época de Allende que aún permanecían en el país. Ahí estaba, sugirieron, el hilo secreto de la insurrección...

El 9 de diciembre fue dinamitado uno de los puentes más importantes en la sierra, el del río Pampas, en la carretera que une Ayacucho con Andahuaylas y Cusco. Dos puentes menores, el de Ocros y el de Pajonal, fueron saboteados simultáneamente.

El puente sobre el Pampas no llegó a caer, pero quedó tan dañado que debió ser demolido. El presidente Belaunde, golpeado en lo más vivo por lo que para él era expresión pura de demencia destructiva, despachó el día siguiente al ministro de Transportes, Fernando Chávez Belaunde, a dirigir y coordinar la instalación de un puente provisional.

Dos días después, el alcalde provincial de Ayacucho, y presidente de la Corporación Departamental de Desarrollo, Víctor Jáuregui Mejía, fue abaleado luego de inaugurar una posta médica, en las afueras de Ayacucho. Dos personas montadas en una motocicleta se acercaron a Jáuregui cuando este salía de la posta, rodeado de amigos pero sin escolta, y el pasajero en el asiento de atrás le disparó varias veces, a quemarropa. Baleado en el rostro y la sien, Jáuregui se desplomó. Los atacantes aceleraron y se perdieron de vista.

Los acompañantes de Jáuregui quedaron tan consternados, o asustados (las celebraciones anteriores habían hecho lo suyo en nublar la ecuanimidad y la capacidad de reacción), que durante diez minutos permanecieron parados alrededor del cuerpo inmóvil, sin acertar a hacer nada. Pero cuando uno de ellos vio que el alcalde aún respiraba, con estertores bruscos de agonía, lo levantaron y llevaron al hospital regional. Entre tanto, la noticia se había esparcido por todo Ayacucho.

Los familiares de Jáuregui llegaron al hospital casi al mismo tiempo que él y pidieron que el médico Germán Medina se hiciera cargo del herido. Medina, quien había enfrentado a Jáuregui en las elecciones municipales de 1980 como candidato de Izquierda Unida, se aprestó de inmediato, pero varios de los amigos de Jáuregui se opusieron a que lo tocara. Uno de ellos gritó: “Este médico es rojo. No hay que confiarse de él. Lo va a completar”. La familia, sin embargo, insistió y prevaleció. En medio de una tensión tremenda, Medina hizo cuanto pudo por estabilizar los débiles signos vitales de un hombre con dos balas en la cabeza. Horas más tarde, cuando el peligro inmediato había sido conjurado, el extenuado Medina abrió la puerta de su automóvil. En el asiento encontró un papel escrito: “El pueblo tiene mil ojos, mil oídos. Las

mejores atenciones para los miserables y al pueblo solamente para enriquecerse”.¹²

Mientras Jáuregui era atendido en el hospital de Ayacucho, la noticia del atentado fue comunicada a Belaunde. Este dispuso que el avión presidencial volara de inmediato a Ayacucho, con un equipo quirúrgico de emergencia a bordo, para trasladar de inmediato a Jáuregui hasta Lima. El Parlamento, consternado, suspendió la sesión.

Operado en Lima el día siguiente por los mejores neurocirujanos del país, Jáuregui sobrevivió y logró, al cabo de varios meses, una recuperación relativa. Luego retornó a Ayacucho, donde permaneció retirado de toda actividad pública. Nadie lo volvió a molestar.

Entre tanto, la ciudad de Huamanguilla era tomada temporalmente por un contingente senderista. El alcalde, Artemio Palomino, y el secretario del concejo, Juan Huamán, fueron asesinados en la plaza. Un campesino baleado murió tres días después.

Entonces circularon con fuerza creciente rumores de un ataque sangriento a la ciudad de Ayacucho en la Navidad. La emigración por vía aérea, ya acentuada antes del ataque a Jáuregui, desbordó la capacidad normal de transporte.

Mientras el apremio por salir amenazaba convertirse en pánico, los servicios de información militares y policiales dieron crédito a las informaciones sobre la inminencia de un ataque senderista a Ayacucho. Y pese a que habían llegado refuerzos policiales en los días anteriores, poca gente atribuía alguna posibilidad a los policías de poder enfrentar un ataque a fondo de Sendero.

Las dudas se definieron al cabo de dos días. El 20 de diciembre, el subprefecto de Huamanga, César del Solar, fue herido con cuatro balazos a apenas doscientos metros del Cuartel General de la Policía. Al día siguiente, dos senderistas entraron a la oficina del director regional del Instituto Nacional de Cultura, Walter Wong, y lo acribillaron a balazos. Luego, salieron caminando despacio, con el rostro descubierto, entre los empleados del instituto paralizados por el miedo.

Wong murió en el aeropuerto de Ayacucho, cuando se trataba de evacuarlo a Lima. Horas después, en el curso de una ceremonia en la Escuela Naval, el presidente Belaunde fue informado de ello, y tomó la decisión inmediata de encargar a las Fuerzas Armadas la pacificación de la zona en emergencia.

A mediodía, Héctor López Martínez recibió una llamada del presidente, para encargarle que redactara el proyecto de Decreto Supremo sancionando el ingreso de la Fuerza Armada a la guerra, y lo llevara a Palacio sin esperar a Gagliardi. El ministro estaba en el balneario de San Bartolo, asistiendo a la clausura del curso de la Guardia Civil femenina. Probablemente Belaunde quiso evitar a su ministro del Interior el momento ingrato de asistir a la firma del decreto que rubricaba el fracaso policial y cedía el control de la lucha a las Fuerzas Armadas.

Cuando López Martínez llegó a Palacio, encontró allí a los ministros militares, los jefes del comando conjunto y el canciller Arias Stella. Luego de leer el proyecto de Decreto Supremo, Belaunde ordenó modificarlo quitando la expresión “sabo-terrorismo” que fascinaba a López Martínez. En el corto lapso que empleó para redactar en limpio el documento, el ministro de Guerra, Cisneros Vizquerra, hizo una exposición sobre la situación. Él, como el resto de los militares, “estaban como era de presumir, pensando que ellos tenían en las manos la solución. [...] En ese momento, la impresión que recogí era la sonrisa de seguridad de quienes pensaban que el asunto era fácil. Mucha seguridad”.¹³

Belaunde, en cambio, mantuvo una expresión grave y preocupada a lo largo de la tarde.

El decreto supremo disponía que las Fuerzas Armadas asumieran el control del orden interno

en la zona en emergencia.¹⁴ Ninguno de los presentes en esa reunión pensó que la campaña militar duraría más allá de algunas semanas. Los más pesimistas pensaban en pocos meses.

Dos días después, adelantando el ingreso militar una semana para impedir el presunto ataque navideño de Sendero, efectivos militares de la II División de Infantería, con sede en Huancayo, y de la División Aerotransportada de Lima, llegaron a Ayacucho. Camiones cargados de tropas, en ruta al cuartel Los Cabitos, se cruzaron con el cortejo fúnebre que llevaba los restos de Walter Wong al camposanto. Fue el primero de muchos encuentros similares.

Una larga etapa de la insurrección llegaba a su fin. El gobierno democrático había fracasado en sofocarla a través de los medios normales de control que dispone un régimen civil. Al encargar la guerra a las Fuerzas Armadas, en un país donde las limitaciones del control civil sobre el aparato militar eran y son evidentes, pocos dudaron que la región convulsa quedaría sujeta a un régimen diferente al del resto de la nación. Y que, durante un tiempo breve y violento, iba a correr mucha sangre. Salvo en lo del tiempo, en esto último nadie se equivocó.

1 Entrevista con José Gagliardi Schiaffino, el 1 de julio de 1987.

2 *Ibidem*.

3 Shakespeare, Nicholas. "In Pursuit of Guzmán", *Granta Magazine*, n. 23, 1988, p. 181.

4 *Ibidem*, p. 183.

5 En noviembre de 1976.

6 Oficio N° 61-82-MP de la Fiscalía Superior Departamental de Ayacucho, 4 de octubre de 1982.

7 Entrevista a Gagliardi, el 1 de julio de 1987.

8 Entrevista con Álvaro Ramírez, el 22 de mayo de 1987.

9 Oficio N° 190-82-MP de la Fiscalía Superior Departamental de Ayacucho, 19 de noviembre de 1982.

10 Para dar una idea adicional del complejo entramado de afiliaciones políticas y filiaciones parentales en Ayacucho, cabe mencionar que un hermano de Adriana fue arrestado en 1981 como presunto dirigente senderista. Fue dejado libre. Pero a la vez, Adriana era tía de Augusta La Torre y sobrina del exprimer ministro del gobierno militar, Pedro Richter Prada. "Pueblo chico...".

11 "Los sentenciados de El Carmen", *Caretas*, n. 726, 6 de diciembre de 1988.

12 Entrevista con Germán Medina, el 30 de julio de 1987.

13 Entrevista con Héctor López Martínez, el 25 de mayo de 1987.

14 Las provincias de Cangallo, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo y Huamanga, en Ayacucho, y la provincia de Andahuaylas, en Apurímac.

Este libro se terminó de imprimir
en los talleres gráficos de:

.....

en el mes de junio del 2017
Lima - Perú



Gustavo Gorriti

Nací en 1948, me crié en el campo y descubrí temprano mi vocación, pero solo pude empezar a ejercerla en la madurez, desde 1981, cuando entré a trabajar en la revista Caretas. Desde ese año cubrí como periodista la guerra interna iniciada por Sendero Luminoso. Fue una misión muy exigente, intensa, algunas veces peligrosa. Todo el esfuerzo por informar e interpretar un conflicto letal pero desconocido, en el que un gran número de gente mataba y moría sin saber porqué, me hizo comprender la necesidad imperiosa de ir más allá de la cobertura semanal y convertir la crónica en historia. Empecé a escribir este libro en 1987, lo terminé en 1989 y publiqué la primera edición en 1990. El hecho que se siga leyendo hasta hoy me recuerda con insistencia la necesidad de continuarla y hasta de terminarla, lo que me he prometido hacer si me da el tiempo de la vida.

Otros títulos publicados por Planeta

El caso García

Pedro Cateriano B.

Caiga quien caiga

José Ugaz

La calavera en negro

Gustavo Gorriti

Secretos del túnel

Umberto Jara

MEMORIA PERÚ

Gustavo Gorriti

Sendero

Ningún conflicto armado ha estremecido al Perú tanto como el que provocó Sendero Luminoso: casi setenta mil peruanos muertos en la peor década de violencia interna de la que el país tiene registro. *Sendero* es un libro extraordinario, que revela y esclarece cómo se gestó una de las insurrecciones a la vez más letales y misteriosas en América Latina.

Con un brillante trabajo que combina el periodismo de investigación y la historiografía de guerra, Gorriti descubre los orígenes de la violencia senderista y escribe esta historia imprescindible para entender el Perú, durante el período mismo de la guerra. Publicado por primera vez en 1990, *Sendero* alumbró mediante la profusión de documentos y la precisión al detalle, lograda a través de años de cobertura y centenares de entrevistas, a los personajes, los guiones y los hechos de una lucha interna que destruía desde las sombras.

En la historia de las insurrecciones armadas, pocos libros han descrito con tanta precisión su complejo inicio: Cuando una organización violenta, en apariencia extraña y ajena al continente y al momento histórico, fuerza su presencia sobre una sociedad renuente, una democracia precaria y un Estado contradictorio.

Años después de su primera edición, este libro se ha convertido en la referencia fundamental para entender la génesis de la violencia en un país de América latina que, como muchos otros, aún padece de una inmensa fractura social.